

onsabilidad, veracidad, Ética



I Edición

MÓDULO III

Docente:

Msc. Manuel Torres Cerdá



UCA



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

POSGRADOS

Y FORMACIÓN CONTINUA

070.4
P-445

Ética, respo



Comunicando lo Humano
Investigación
Transparencia
responsabilidad, veracidad

@@@



MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

1ª Edición

MÓDULO III PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Docente:
Msc. Manuel Torres Cerda



UCA
Universidad
Centroamericana



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

POSGRADOS
Y FORMACIÓN CONTINUA

ÍNDICE

I. PLAN DE CLASES

MARCO CONCEPTUAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

II. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.....5

Gerardo Reyes

1- El trazado de la cancha

2- Obstáculos y estrategias

3- La prueba de olfato

4- Prueba de fuego

III. EL DERECHO DE LA PERSONA A ACCEDER A LA INFORMACIÓN EN PODER DEL GOBIERNO.....123

Roberto Saba

IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LATINOAMÉRICA.....143

Ernesto Villanueva

V. INTERSTICIOS DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN.....160

Gerardo Reyes

VI. DIFERENCIAS EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA.....170

Gerardo Albarrán de Alba

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN

VII. DALE VUELTA A LA COBERTURA.....175

Diana Sugg

VIII. REPORTEANDO SOBRE GOBIERNO Y ESTADÍSTICAS.....186

Carole Rich

IX.	CÓMO MENTIR CON ESTADÍSTICAS	196
	<i>Darrell Huff</i>	
X.	CUIDADO CON LAS ENCUESTAS	206
	<i>International Center for journalists, ICFJ</i>	
XI.	ESTRATEGIAS PARA UNA BUENA ENTREVISTA.....	207
	<i>International Center for journalists, ICFJ</i>	
XII.	LOS SITIOS WEB GUBERNAMENTALES COMO HERRAMIENTAS DEL CONTROL SOCIAL Y DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN	209
	<i>Sandra Crucianelli</i>	

ANÁLISIS DE CASOS

XIII.	DESIDIA DETRÁS DE LA EXPLOSIÓN EN PUERTO RICO	218
	<i>Pascual Omayá Sosa y Mc Nelly Torres</i>	
XIV.	CHOQUECITO PUSO A DEMMA EN RUTA HACIA UN VOLCÓN.....	222
	<i>Manuel Torres/ The Times Picayune</i>	
XV.	REFORMA AL SISTEMA DE FIANZAS SE QUEDA CORTA.....	226
	<i>Manuel Torres/ The Times Picayune</i>	

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

1. Datos Generales

Nombre de la asignatura: Periodismo de Investigación

Total de horas: 30 horas presenciales

Docente: Msc. Manuel Torres

Email: mtorres@timespicayune.com

Tel.: 1 (504) 826-3434

Celular: 1 (504) 352-2543

Síntesis de temas propuestos. Introducción al periodismo de investigación. Panorama histórico del periodismo de investigación. Marco teórico y legal del periodismo de investigación y del acceso a la información en Latinoamérica. Ética y responsabilidad social del periodista de investigación. Conceptualización de proyectos de investigación. Estrategias y técnicas prácticas para planear y ejecutar proyectos de investigación periodística.

2. Objetivo General

Partiendo de un entendimiento del marco social e histórico del periodismo de investigación abordar su significado en la sociedad moderna, los conceptos y estrategias prácticas necesarias para la investigación efectiva y el análisis crítico de proyectos de investigación.

3. Objetivos Específicos

Reconocer el papel histórico y el marco legal del periodismo de investigación, con énfasis en su significado en sociedades democráticas emergentes en Latinoamérica.

Abordar críticamente las responsabilidades éticas y sociales del periodismo de investigación, así como sus retos y límites.

Desarrollar habilidades para identificar y conceptualizar proyectos de investigación, preparar propuestas específicas de investigación y completar un proyecto de investigación.

Apropiarse de las herramientas para el análisis crítico de propuestas de investigación y de proyectos de investigación realizados, con la habilidad de adaptar temas a áreas de interés específico.

Adquirir estrategias y técnicas necesarias para la búsqueda de información, el cultivo de las fuentes de información, la organización y el análisis de la información y la presentación de lo descubierto en un formato claro y de impacto.

4. Distribución y desarrollo de los temas

Horario: *Lunes, 30 de noviembre. 5 a 9 pm. (4 horas)*

Temas: Introducción. Surgimiento del periodismo de investigación. Marco legal de la investigación y del acceso a la información pública en Latinoamérica.

Abordaje: 1. Presentación del panorama del curso, discusión de expectativas comunes y métodos de evaluación. 2. Conceptos generales sobre el periodismo de investigación, su historia y significado. 3. Debate de lecturas: Gerardo Reyes, Periodismo de Investigación, Capítulo 1, El trazado de la cancha.

Horario: *Martes, 1 de diciembre. 5 a 9 pm. (4 horas)*

Temas: Manejando proyectos de investigación. Planeando la investigación. Diseño de proyectos de investigación.

Abordaje: 1. Debate de lecturas: Diana Sugg, Dale vuelta a la cobertura. Gerardo Reyes, Intersticios del periodismo de investigación. 2. Presentación. Cómo planear y evaluar proyectos de investigación.

Horario: *Miércoles, 2 de diciembre. 5 a 9 pm. (4 horas)*

Temas: Técnicas de la investigación periodística. Uso de las nuevas tecnologías. Investigación en Internet. Manejo de bases de datos y su utilidad.

Abordaje: 1. Presentación. Desarrollando fuentes y mejorando técnicas de acceso a la información. 2. Debate de lectura: Sandra Crucianelli, Los sitios web gubernamentales como herramientas del control social y del periodismo investigativo. 3. Presentación y ejercicio. Búsquedas en Internet y manejo de bases de datos.

Horario: *Jueves, 3 de diciembre. 5 a 9 pm. (4 horas)*

Temas: Análisis de caso: Investigando al gobierno.

Abordaje: 1. Presentación: Investigando a entidades gubernamentales. 2. Debate de lectura: Carole Rich, Reporteando sobre gobierno y estadísticas. 3. Historia de caso: Caribbean Petroleum. 4. Trabajo en grupos: Estudio de caso. 5. Plenario.

Horario: *Viernes, 4 de diciembre. 3 a 9 pm. (6 horas)*

Temas: Preparando una propuesta de investigación. Análisis de casos. Investigaciones judiciales y de personalidades públicas y privadas.

Abordaje: 1. Presentación. 2. Historia de caso: Corrupción en la corte. 3. Trabajo en grupos: Estudio de caso y preparación de proyectos de investigación en grupo. 3. Presentaciones y plenario.

Horario: *Sábado, 5 de diciembre. 8 am a 12 pm y 1 a 5 pm. (8 horas)*

Temas: La producción de artículos de investigación. Análisis de casos. Investigando al gobierno a través del uso de estadísticas. Aplicando lo aprendido.

Abordaje: 1. Presentación. Cómo presentar los resultados de una forma impactante. 2. Debate de lectura: Darrell Huff, Cómo mentir con estadísticas. 3. Historia de caso: Valor Dudoso. 2. Trabajo en grupos: Estudio de caso. 3. Plenario. 4. Taller. Preparando propuestas de investigación. 5. Presentación de propuestas individuales de investigación. Debate crítico. 6. Clausura.

5. Evaluación

Objetivo: Comprensión de lecturas y análisis crítico de sus contenidos.

Forma de evaluación: Reseña de lecturas

Calificación: 25%

Objetivo: Aporte a la discusión de clase, considerando su pertinencia y penetración

Forma de evaluación: Participación en el debate

Calificación: 20%

Objetivo: Identificar el manejo de conceptos y sus aplicaciones en casos de estudio específicos

Forma de evaluación: Exposiciones

Calificación: 25%

Objetivo: Aplicación de estrategias y técnicas en una propuesta de investigación original

Forma de evaluación: Presentación de propuesta formal de investigación y ejecución de la misma.

Calificación: 30%

6. Bibliografía

MARCO CONCEPTUAL

Reyes, Gerardo. **Periodismo de Investigación.** (Selecciones.) Editorial Trillas, México, 1996.

Reyes, Gerardo. **Intersticios del periodismo de investigación.** Sala de Prensa, Año II, Vol. I, 1998. Versión virtual en www.saladeprensa.org/art12.htm

Albarrán de Alba, Gerardo. **Diferencias en el periodismo de investigación en Estados Unidos y Latinoamérica.** Sala de Prensa, Año III. Vol. 2, junio 2001. Versión virtual en www.saladeprensa.org/art229.htm

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Sugg, Diana. **Dale vuelta a la cobertura.** Poynter.org, 1 de octubre, 2001, www.poynter.org/content/content_view.asp?id=85367

Rich, Carole. Reporteando sobre gobierno y estadísticas. En: **Writing and Reporting**

News, editora Carole Rich, 2da edición, Wadsworth Publishing Company, Universidad de Kansas, 1997.

Huff, Darrell. **Cómo mentir con estadísticas**. Sala de Prensa, Año X, Vol. 4, diciembre 2008. Versión virtual en www.saladeprensa.org/art794.htm

ICFJ. **Cuidado con las encuestas**. ICFJ Media Tips, Vol. I, 2a edición, 1996.

ICFJ. **Estrategias para una buena entrevista**. ICFJ Media Tips, Vol. I, 2a edición, 1996.

Crucianelli, Sandra. **Los sitios web gubernamentales como herramientas del control social y del periodismo investigativo**. Sala de Prensa, Año X, Vol. 4, octubre 2008. Versión virtual en www.saladeprensa.org.

ANÁLISIS DE CASOS

Pascual, Omayra Sosa y Mc Nelly Torres. **Desidia detrás del explosión en Puerto Rico**. El Nuevo Herald, 11 de noviembre del 2009, Versión virtual en www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/v-fullstory/story/583355.html.

Russell, Gordon. **Valor Dudoso: Cómo los impuestos de propiedad en Nueva Orleans son injustos**. The Times-Picayune, abril 2 al 4 del 2004. Version virtual en www.nola.com/speced/dubiousvalue

Torres, Manuel. **Choquecito puso a Demma en ruta hacia un volcán**. The Times-Picayune, 11 mayo, 2003, p. A1.

Torres, Manuel. **Reforma al sistema de fianzas se queda corta**. The Times-Picayune, 20 junio, 2003, p. A1.

El trazado de la cancha

1

¿QUÉ ES EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN?

Hay muchas personas que creen que el periodismo de investigación es un invento cinematográfico estadounidense lanzado hace veinte años con motivo del estreno de una película que muestra a dos intrépidos periodistas trabajando día y noche para deponer a un presidente. Hablar de periodismo investigativo es un pleonismo pues todo buen periodista es un buen investigador, sostienen quienes no conciben esta disciplina como una especialización del trabajo del reportero.

“La investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo tiene que ser investigativo por definición”, sostiene el Premio Nobel Gabriel García Márquez.¹

En teoría, el argumento tiene sentido, y se cumple en algunas circunstancias. En la práctica, la realidad es otra. El producto del trabajo de un periodista investigador es diferente del que publica un reportero que se dedica a buscar noticias del día o escribe crónicas y análisis de determinados acontecimientos bajo la presión de una hora de cierre.

El mérito del reportero diario consiste en tener olfato para buscar un ángulo novedoso de la noticia; poner en contexto los hechos; contar con un buen directorio de fuentes; permanecer bien informado y actuar con prontitud. Por su parte, el reportero inves-

¹ *El Tiempo*, “Periodismo, el mejor oficio del mundo”, Bogotá, diciembre 3 de 1995.

tigador trabaja en asuntos controvertidos, que no necesariamente tienen actualidad noticiosa y que casi siempre alguien no quiere que se ventilen.

Sin la premura de la hora de cierre, el periodista investigador intenta llegar hasta el final del camino, pero no siempre tiene absoluta certeza de que su trabajo terminará publicado. Cuando lo logra, después de pasar por un lento y tedioso proceso de comprobación, la información es más amplia y detallada que las noticias que se han publicado sobre el tema. Así, la diferencia entre ambos productos está determinada por dos factores: tiempo y profundidad.

Durante muchos años, los reporteros estadounidenses discutieron sobre estas características y después de numerosos foros y debates, los interesados demarcaron las líneas de su campo de acción para fines puramente académicos.

Uno de ellos fue el periodista Robert W. Greene, fundador del *Investigative Reporters and Editors* (IRE), una organización que hoy agrupa a 3700 periodistas de todo el mundo. En palabras de Greene, el periodismo de investigación “es la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Los tres elementos básicos son: que la investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una investigación hecha por alguien más; que el tema de la información trate de algo de razonable importancia para el lector o el televidente, y que haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos del público”.²

La frontera trazada por Greene es bastante estricta en la medida que excluye las investigaciones que surgen de otras no periodísticas (como las preparadas por procuradurías, fiscalías, superintendencias, etc.), así como aquellos trabajos en los que el reportero no encuentra obstáculos para obtener la información.

Una caracterización más amplia del periodismo de investigación concibe al reportero investigador como un experto armador de rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo alguien trata de mantener ocultas. Su misión es poner las cosas juntas con el fin de mostrar cómo funcionan y cómo se comportan las perso-

² Robert Greene, prólogo a la primera edición de *The Reporter's Handbook: An Investigator's Guide to Documents and Techniques*, bajo la edición de John Ullmann y Jan Colbert, Investigative Reporters and Editors, INC (IRE), Saint Martin's Press, Nueva York, 1991, pág. VII.

nas en una sociedad en crisis. Algunas veces todas las piezas son obtenidas por el periodista y otras llegan a sus manos porque alguien se entera de que las está buscando, pero en ambos casos, su perseverancia, el hecho de estar siempre ahí escuchando quejas y rumores, mirando documentos y siguiendo pistas, es la clave para obtener una información que quedaría oculta si no fuera por su olfato inquisitivo.

Más que para una discusión académica, los tres elementos señalados por Greene sirven como criterios para seleccionar los proyectos de investigación, evaluar su viabilidad y discutir sus implicaciones éticas. De allí la importancia de analizarlos a fondo.

LA RELEVANCIA SOCIAL

La gente busca información para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Una de ellas es la de conocer las acciones y omisiones de sus gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los comerciantes e industriales que dominan el sector económico de la nación, de los banqueros que tienen en sus manos el dinero de miles de familias y empresas y, en general, de las personas que participan de alguna manera en el manejo de los destinos de su ciudad o su país.

El público quiere saber qué pasa con sus impuestos, a dónde va a parar el dinero de las privatizaciones y de las bonanzas, y cómo está cuidando el Estado los recursos naturales; quiere enterarse sobre la integridad moral de sus gobernantes, si tienen relaciones con narcotraficantes o mafias del juego y el contrabando y, sobre todo, quiere saber quién lo engaña. Al mismo tiempo, el lector busca chismes en el periódico para satisfacer su curiosidad personal sobre la vida privada de artistas, comediantes, grandes empresarios, deportistas y delincuentes famosos.

En su correspondencia, y a través del contacto diario con el mundo que lo rodea, usted se encuentra con una mezcla de denuncias que se relacionan con estas dos grandes expectativas de los lectores. Si se trata de una pista sobre un presunto desfalco que ha ocurrido en una empresa pública, no hay duda de que es un tema importante que sus lectores quieren conocer. Pero hay otros casos que obligan a reflexionar sobre la legitimidad del interés público, son casos que generalmente surgen:

- cuando la conducta que se pone bajo escrutinio es parte de la vida privada de la persona, o
- cuando la falla descubierta no quebranta ningún ordenamiento jurídico, sino que desafía la moral o las buenas costumbres.

¿Sería para usted motivo de indagación la homosexualidad de un ministro o la promiscuidad de una gobernadora? ¿Se dedicaría usted varias semanas a seguir un candidato presidencial para saber si es fiel o infiel, como lo hizo *The Miami Herald* con Gary Hart en 1987? ¿Escarbaría usted en el recipiente de la basura de la persona que investiga?

La búsqueda de respuestas a estas interrogantes conduce a una larga controversia limítrofe entre la noción de privacidad y vida pública. Es un debate que trata de resolver qué actividades de la gente pública y los ciudadanos comunes pueden ser objeto de investigación por parte de los periodistas. A juzgar por el abundante material que se ha publicado sobre el tema, se trata de un atolladero profesional donde nadie tiene la última palabra. Cada teoría tiene su crítico y cada crítico, su rival.

En busca de una justificación

Durante muchos años los periodistas estadounidenses resolvieron el dilema que creaban los proyectos de investigación ubicados en la zona de discusión, a la luz del “derecho a saber” de la gente. Cada vez que tenían un problema de esta índole, los editores justificaban la publicación evocando el derecho que el público tiene a saber. Pero el argumento perdió popularidad a principio de la década de los setenta, cuando empezó a cobrar fuerza el debate sobre el origen del socorrido derecho en los foros de ética periodística.

Uno de los promotores de la discusión, John C. Merrill, profesor de las escuelas de periodismo en Missouri, Maryland y Louisiana, experto en temas de ética, sostuvo que el “derecho del público a saber” era uno de los mitos del periodismo estadounidense, pues los defensores de ese derecho lo infieren en forma equivocada de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

“Pero por supuesto tal inferencia se encuentra en el área de la opinión, de la conjetura, de la presunción. Pues la Constitución de

Estados Unidos no dice una palabra respecto de cualquier derecho de la persona a saber.”³ Merrill argumenta que lo que ocurre es que la “necesidad” de saber fue elevada al rango de “derecho”, y aun así, suponiendo que tal derecho exista, los periodistas son los primeros en no respetarlo cuando ocultan los nombres de algunas fuentes y se abstienen de publicar ciertos reportajes o datos que el público también tiene derecho a conocer.

Reevaluada la teoría del derecho a saber, el periodismo en Estados Unidos asumió una posición más realista al admitir que el público recibe las informaciones que han sido seleccionadas por los editores a partir de un criterio que se esmera por ser equilibrado y objetivo, pero que no garantiza que tales informaciones sean necesariamente todas las que el lector quiere saber o que ellos creen que tiene derecho a saber.

Esta prerrogativa de los editores, que se conoce en la jerga ética del periodismo estadounidense como la *autodeterminación editorial*, tampoco se ha salvado de las críticas de los centinelas de la prensa, que la han atacado vigorosamente con argumentos que varían según la época y los críticos. Hoy día, entre los analistas de los medios de comunicación, hay una percepción generalizada de que los periodistas estadounidenses se han convertido en portadores de un irremediable cinismo que se manifiesta en la desconfianza visceral hacia los políticos y los empresarios.

“Hemos llegado a un punto en el que creemos que todo es un fraude, que todo el mundo está tratando de favorecer sus intereses y el trabajo del reportero es revelar el fraude”, sostiene Thomas E. Mann, director de estudios sobre el gobierno de la Brookings Institution.⁴ A este punto se llegó, según los críticos, porque los periodistas abandonaron el sano escepticismo que debe caracterizar su trabajo y dieron paso a una actitud de despiadada suspicacia. En esta versión del periodismo, todos los políticos son manipuladores, toda la gente en el mundo de los negocios es venal y todas las iniciativas tienen motivos recónditos.

“En la cultura post Watergate, y post todo-gate, ningún reportero desea aparecer insuficientemente inquisitorial”, sostiene Gene

³ Tomas P., Mac Hale (ed.), *Libertad de Expresión, ética periodística y desinformación*, Centro de Estudios de la Prensa, Santiago, 1988, pág. 176.

⁴ Citado por William Glaberson, en “*The New Press Criticism: News as the Enemy of Hope*”, *The New York Times*, 9 de octubre de 1994, secc. 4, pág. 2E.

Lyons, columnista de *The Arkansas Democrat-Gazette*.⁵ Kathleen Hall Jamieson, decana de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Pensilvania, concluye que esta actitud está creando las condiciones para que el periodismo caiga en su propia destrucción.

LOS RASTRILLADORES

Estas oleadas de ofuscamiento con los supuestos excesos de fiscalización de la prensa coinciden generalmente con temporadas altas de corrupción, y se producen en la historia de Estados Unidos de América desde que un grupo de periodistas conocido como los *muckrakers* (rastrilladores) sacó a relucir, a principios del siglo, la podredumbre del capitalismo sin controles.

En una cena anual de periodistas, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, comparó a estos reporteros con el personaje de una novela del predicador puritano John Bunyan, que se niega a recibir una corona celestial porque prefiere rastrillar el suelo en busca de inmundicias. Roosevelt dijo que los periodistas imitaban a este “rastrillador de estiércol” que se rehúsa a ver todo lo que es elevado en la vida y centra la atención sólo en lo que es vil y degradante.

“Hay inmundicia en el suelo –dijo el presidente en su intervención ante los periodistas el 14 de abril de 1906– y ésta debe ser raspada con el rastrillo; existen tiempos y lugares donde este trabajo es el más importante de todos los que se pueden realizar. Pero el hombre que nunca hace otra cosa, que nunca piensa, habla o escribe, salvo acerca de sus hazañas con el rastrillo, rápidamente se convierte no en una ayuda a la sociedad, no en una incitación hacia el bien, sino en una de las más potentes fuerzas del mal.”⁶

En las palabras de Roosevelt se agazapaba el temor de que periodistas rastrilladores estuvieran conduciendo al país por los caminos del socialismo, como en efecto lo querían algunos de ellos que simpatizaban con tal rumbo.

La popularidad que adquirió el ingenioso peyorativo entusiasmo al presidente para volver a usarlo meses después en Washington, durante la colocación de la primera piedra del edificio de la

⁵ *The New York Times*, 9 de octubre de 1994, secc. 4, pág. 2E.

⁶ David Mark Chalmers, *The Muckraker Years*, Littion Educational Publishing, 1980, pág. 126.

Cámara de Representantes. Desde entonces, el mote y los periodistas que lo llevaron, no como un lastre sino como una decorosa advertencia oficial, pasaron a la historia en calidad de ilustres denunciantes de todas las modalidades de la fraudulencia que produjo el capitalismo desbocado de principios de este siglo.

Convencidos de que la opinión pública debía enterarse de las trampas de sus gobernantes, de la anarquía de las finanzas públicas y de las artimañas de los nacientes monopolios, los rastrilladores escarbaron a fondo y sin compromisos.

A la hora de seleccionar los temas de investigación, su principal motivación era educar a la gente y en medio de la confusión nacional dibujaron un cuadro balanceado que tenía en su fondo un mensaje optimista compartido por la mayoría de ellos: todo puede mejorar si la gente se educa y se entera de lo que está ocurriendo.

“Creían que la democracia y el progreso iban de la mano. La gente era buena. Con guía e información sería capaz de elegir los principios y los líderes apropiados”, escribió David Chalmers, profesor de historia de la Universidad de la Florida.⁷

Ellos son los gestores del periodismo investigativo moderno, y como puede verse, desde un comienzo su labor fue cuestionada con los mismos argumentos que hoy se esgrimen contra el periodismo investigativo.

“Es que quieren echarle la culpa al comienzo de las cosas”, decía Lincoln Steffens, uno de los más talentosos exponentes de este movimiento periodístico. “Tal vez se pueda. La mayoría de la gente dice, usted sabe, que fue Adán. Pero como usted recordará, Adán dijo que fue Eva, la mujer, que ella lo había hecho. Y Eva dijo que no, que no había sido ella, que había sido la serpiente. Y de allí se han pegado ustedes los clérigos desde entonces. Culpan a la serpiente, a Satanás. Ahora vengo yo, y estoy tratando de mostrarles que fue, que es la manzana.”⁸

EL DILEMA EN LATINOAMÉRICA

¿Qué hacer entonces? ¿Qué temas escoger en el reino gris que forman las sombras de la privacidad y el brillo de la vida pública?

⁷ Chalmers, pág. 66.

⁸ Justin Kaplan, *Lincoln Steffens, a Biography*, Simon and Schuster, Nueva York, 1988.

Un primer paso para tomar decisiones éticas apropiadas es tener una partitura antes de sentarse a tocar, un código de ética gremial o de empresa que fije pautas para resolver los conflictos que surgen en torno al contenido del tema que se investiga y al método para investigarlo.

Cuanto menos asuntos se toquen de oído o se dejen al arbitrio de la “relatividad”, el periodismo de investigación podrá mostrar más altos niveles de coherencia. Combinadas estas pautas con una evaluación de casos similares afrontados por otros periodistas, es posible encontrar una salida decorosa.

“El tomar buenas decisiones éticas en periodismo es una destreza y un arte comparable al escribir bien, a las buenas fotografías y a la buena edición. . . y debe ser aprendido y desarrollado”, sostiene el manual de los profesores Jay Black, Bob Steele y Ralph Barney,⁹ autores que consagran una vez más el derecho de la gente a saber como el principio general que rige la actividad periodística, analizan numerosos casos concretos en el periodismo estadounidense relacionados con conflictos por falta de precisión, inhabilidades del reportero, engaños, reportería gráfica, plagio y privacidad.

En su capítulo sobre privacidad, los profesores recomiendan responder al siguiente cuestionario:

- “1. ¿Qué tan importante es la información que busco? ¿Tiene el público el derecho a saberlo, la necesidad de saberlo? ¿Simplemente un deseo de saberlo?
2. ¿Qué nivel de protección merecen las personas relacionadas con el artículo? ¿Qué daño les causará la publicación? ¿Resultaron comprometidos en la noticia por casualidad o circunstancia fortuita?
3. ¿Cómo me sentiría si yo fuera el sujeto de un escrutinio similar?
4. ¿Conozco lo suficientemente bien los hechos? ¿Qué otras cosas necesito saber?
5. ¿Qué puedo hacer para reducir la invasión de privacidad y el daño? ¿Puedo ampliar el foco del reportaje incluyendo más ‘víctimas’?

⁹Jay Black, Bob Steele y Ralph Barney, *Doing Ethics in Journalism, A handbook with Case Studies*, Ebsco Media, Greencastle, Indiana, 1993, pág. 1.

6. ¿Puedo incluir más personas en la decisión para tener una perspectiva más amplia?
7. ¿Debo centrarme más en la falla del sistema o en el panorama general, en lugar de concentrarme intensamente en los individuos?
8. ¿Puedo justificar clara e íntegramente mi pensamiento y decisión ante quienes aparecen directamente afectados y ante el público?"¹⁰

En Chile, uno de los países latinoamericanos que ha mostrado más interés en el tema, ya se ha dado un primer paso aunque con algunas salidas en falso. En un dictamen de julio de 1993, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile se pronunció sobre los requisitos que, debe cumplir el periodismo de investigación desde el punto de vista ético.

Sostiene la entidad que el periodista investigador respetará la vida privada de las personas, entendiendo por vida privada "el espacio y los objetos así como las conductas que cada persona necesita y desea mantener alejados de los ojos y oídos extraños. Se trata del núcleo de la vida personal, del recinto de expansión y verdadera libertad del sujeto, que éste no acepta compartir con nadie o que comparte con sus íntimos".

Los ámbitos que constituyen la vida privada son, según el dictamen, "el hogar, el vehículo personal, las reuniones, conversaciones y comunicaciones privadas, los archivos de correspondencia y documentos, las reuniones íntimas, las conductas que desarrolla en reserva, su vida afectiva y sexual, los defectos físicos o morales que mantiene en reserva y otros aspectos privados semejantes".

El periodista puede publicar aspectos de la vida privada, sin consentimiento del afectado, según el Consejo, "cuando sean constitutivos de delito y se relacionen con la autoría, complicidad y encubrimiento del mismo". También es admisible desde el punto de vista ético publicar aspectos de la vida privada "en la medida que el conocimiento público de esas materias pueda modificar el juicio que la ciudadanía requiere tener acerca de personas que ejercen autoridad política, administrativa o judicial o que ostentan responsabilidades en la formación de la juventud o en los medios de comunicación social".

¹⁰ Black, Steele, Barney, pág. 168.

En su esfuerzo por no dejar materia sin analizar, el Consejo se pronunció sobre un tema que en América Latina ha servido como reiterado pretexto para negar el acceso a la información. Sostienen los autores del estudio, que la investigación periodística no debe afectar “al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional”, pero que el periodista investigador “deberá esforzarse por evitar que esos grandes valores se invoquen de manera impropia por los interesados en cobijarse en ellos para eludir las consecuencias de la verdad de una investigación de la que pueda resultar un bien para la sociedad”.

Vano esfuerzo este último, pues ya está demostrado que la definición de conceptos como el orden público y la seguridad nacional no está al alcance de los periodistas y siempre quedará a merced de legisladores, funcionarios públicos y militares, más interesados en ampliar su aplicación que en restringirla.

Por respeto a la seguridad nacional, el diario *The New York Times* no publicó un artículo que hubiera evitado el gran fiasco de la invasión a Bahía Cochinos. En la edición del 7 de abril de 1961, el legendario principio del diario que advierte que todas las noticias son publicables, parecía una broma. Ese día, el periódico publicó en la primera página una información deliberadamente incompleta que escondía una inminente invasión de Estados Unidos de América a Cuba.

La versión original de la noticia había sido mutilada antes de llegar a las rotativas por órdenes de los directivos del periódico, que decidieron restarle notoriedad y suprimir las expresiones que revelaban la inminencia de la invasión, tomando en cuenta una solicitud del gobierno de John F. Kennedy basada en la seguridad nacional.

En la decisión de los directivos pesaba también el temor de poner en riesgo la vida de las personas que participarían en la invasión. La que había sido planeada como la noticia del día a cuatro columnas, quedó convertida en una escueta nota de una columna situada en un espacio secundario de la primera página bajo el despistado título de “Unidades anticastristas entrenadas en la Florida para combatir”.

Diez días después de la publicación, el fallido intento de invasión a Bahía Cochinos por una brigada de exiliados cubanos adiestrados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) se convirtió en el más penoso fracaso de la historia militar de Estados Unidos, y en

UNA TENUE FRONTERA

un episodio que en poco tiempo pondría al mundo al borde de una guerra mundial.

Sin embargo, el fiasco sirvió, al menos, para sacudir las relaciones del gobierno con la prensa en épocas de crisis. Los editores del *Times* admitieron que habían cometido una equivocación al no publicar la noticia completa y resolvieron que en adelante, por encima de la seguridad nacional y de cualquier consideración de conveniencia oficial, se atendería el derecho de los lectores de informarse de lo que ocurre a su alrededor. Todas las noticias debían ser publicables.

El propio presidente Kennedy reconoció más tarde que la historia habría sido más benigna con él si el periódico hubiera publicado la noticia completa.

“Tal vez si ustedes hubieran publicado más acerca de la operación, nos habrían salvado de un error colosal”, le confesó el presidente a Turner Catledge, director ejecutivo del *Times*, dos semanas después del gran fracaso. Un año más tarde se lo reiteró al director del diario, Orvil Dryfoos: “Cuánto habría querido que ustedes hubieran publicado todo acerca de Cuba. . . lamento que no lo hubieran dicho en su momento.”

Los presidentes que siguieron a Kennedy no tuvieron que lamentarse más por esa clase de omisiones, pues la prensa aprendió a practicar un respetuoso desdén hacia la versión oficial, cuando en aras de la seguridad nacional o de argumentos afines, el gobierno intenta tragarse a solas sus crisis.

UNA TENUE FRONTERA

En un interesante análisis de los factores, Greene, a la luz de la ética profesional, Silvia Pellegrini, decana de la Facultad de Letras y Periodismo de la Universidad Católica de Chile, señala que el problema de definir lo que en un análisis ético de la definición dada por Greene, Silvia Pellegrini qué tiene “razonable importancia para el lector” es especialmente complejo debido a que en nuestra cultura “hay una creciente tendencia a convertir en público lo que tradicionalmente se considera privado y viceversa”.¹¹

¹¹ Silvia Pellegrini, *Ética y periodismo de investigación*, Seminario de Periodismo de Investigación en América Latina, Santiago, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1993.

Pellegrini sostiene que lo que es público o lo que es privado no es fácil de definir genéricamente porque es un concepto que está ligado a la cultura propia de cada sociedad, y que “ni la globalización de las comunicaciones ha podido alterar”.

Hay, sin embargo, en Latinoamérica tendencias generales que marcan una tenue frontera entre lo público y lo privado en ciertos temas que despiertan dudas. A diferencia de Estados Unidos de América, donde ciertas conductas de los servidores públicos como el adulterio y el homosexualismo son consideradas *per se* materia de investigación periodística, en Latinoamérica la tradición parece indicar que la vida personal está sujeta al escrutinio público sólo si ésta interfiere en el desarrollo normal de actividades del Estado.

Ejemplo claro de este comportamiento es Venezuela. Los medios de comunicación en general no criticaron a los presidentes Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi por mantener relaciones estables con mujeres que no eran sus esposas. Al fin y al cabo ésa es una práctica más o menos generalizada en Venezuela.

La señora Blanca Ibáñez, entonces secretaria privada y hoy esposa del ex presidente Lusinchi, gozaba “de su inmenso poder y nadie se atrevía a desafiarla y menos aún escribir algo en contra de ella”, afirma el historiador Carlos Capriles Ayala. “La prensa coincidía unánimemente en publicar sus fotografías con grandes elogios a su labor social.”¹²

Bastó que surgieran claros indicios de la intromisión de la señora Ibáñez en asuntos del Estado y que ella anunciara que participaría en política, para que la prensa prestara atención a una serie de denuncias de desviación de fondos públicos que se sometieron a investigación en los tribunales venezolanos.

CUANDO LA FALLA ES MORAL

Si el objetivo de su investigación es poner en evidencia una conducta que no es ilegal pero que riñe con preceptos éticos o morales, no espere unanimidad en el debate que provocará su reportaje.

¹²Carlos Capriles, *Sexo y poder: concubinas reales y presidenciales en Venezuela desde Manuelita Sáenz hasta Cecilia Matos*, Ediciones Capriles, Caracas, 1988.

Las cosas inmorales las perdona con mayor facilidad la gente en sociedades donde las ilegales son pan de cada día. Y como en todo el mundo, en nuestros países hay muchos que profesan una silenciosa y a veces pública admiración por las personas que caminan en esa cuerda floja entre el imperio de la ley y la barbarie.

En nuestro equipo de investigación de *El Tiempo* teníamos que lidiar con frecuencia con ese tipo de conducta inmoral en que incurren las personas a sabiendas de que si son descubiertas, lo máximo que reciben es una reprimenda social. Es el caso, por ejemplo, de un empresario que era miembro de la junta directiva de un instituto agrícola del gobierno y al mismo tiempo socio de una empresa que contrataba con el instituto. Cuando la junta de la entidad estatal se reunía para adjudicar una licitación en la cual participaba su firma, el empresario se retiraba. Aun así, su compañía salía casi siempre favorecida. El empresario argumentaba que su comportamiento no era ilegal puesto que no participaba en la votación final. A la luz de las normas de contratación administrativa sus argumentos eran discutibles, pero no totalmente descabellados.

Aunque ninguno de los contratos fue rescindido, para el común de la gente quedó en evidencia la rampante inmoralidad del empresario que luego se vio involucrado en un escándalo financiero. Algunos lectores y funcionarios del instituto salieron, sin embargo, en su defensa con el conocido argumento de que todo aquello que no está expresamente prohibido es permitido.

Así que si usted se atreve a cuestionar conductas que quedan en ese hemisferio gris de la moral y la ley, debe estar preparado para escuchar, por un lado, voces de aliento y por el otro, la arremetida de aquellos que creen que usted es un moralista inútil, un “Llanero Solitario” o un “sicario moral”, que fue la expresión utilizada por un asesor del presidente colombiano Virgilio Barco para referirse al jefe de la Unidad Investigativa de *El Tiempo*, Daniel Samper.

La furia del asesor tenía origen en otro caso de inmoralidad publicado por la Unidad Investigativa. Un familiar del asesor presidencial era directivo de una empresa que había obtenido un costoso estudio de factibilidad preparado por la compañía estatal colombiana de petróleo, Ecopetrol, para construir una lucrativa planta de procesamiento de plásticos. En principio la planta sería construida por la empresa estatal, pero al asumir Barco la presidencia, el proyecto fue cedido al sector privado en medio de pro-

testas del propio presidente de Ecopetrol, que sostenía que debía continuar en manos del gobierno y no de los particulares.

Por fortuna, el periodista latinoamericano no tiene que preocuparse por estar a la caza de conductas moralmente reprochables, porque hay otras que, además de ser condenables desde el punto de vista moral, están claramente tipificadas en los códigos penales. A propósito de esta variedad, Enrique Zileri, director de la revista *Caretas* del Perú, reclamaba para su país el título de "Paraíso para el periodismo de investigación". "Tenemos tal cantidad de temas en Perú, dijo, que realmente nadie se puede aburrir, ni nadie puede dejar de inspirarse semana a semana, en algún tema que realmente merece ser investigado."¹³

ALGUIEN ESCONDE LO QUE USTED BUSCA

Tarde o temprano el reportero investigador tropieza con alguien que quiere ocultar lo que está buscando o desviarlo de su camino. Es otro de los elementos característicos del periodismo de investigación señalado por Greene. Afirman los manuales estadounidenses de periodismo que éste es motivo suficiente para continuar con la investigación. No podría decirse lo mismo en Latinoamérica, donde las señales del ocultismo se producen en casi todos los casos, pero no siempre como una indicación de que hay alguien particularmente interesado en esconder la información. Lo que ocurre es, que los gobiernos latinoamericanos han sido muy efectivos en inculcar a sus servidores de todos los niveles la idea de que cualquier acción del Estado es secreta.

Desde la portería hasta el despacho del ministro profesa un férreo culto al enigma oficial que lleva a los funcionarios a rechazar de plano y sin discusión cualquier petición de los ciudadanos de conocer documentos, aun si éstos no comprometen en lo más mínimo su gestión, el orden público o la seguridad nacional. Aprovechándose de que muchos periodistas ignoran las normas que protegen su derecho de petición y acceso a la información, y a sabiendas de que son pocos los que están dispuestos a dar la batalla

¹³ Enrique Zileri, Seminario de Periodismo de Investigación en América Latina, Santiago, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1993.

legal para hacer respetar sus solicitudes, las entidades del gobierno no se empeñan en volver confidencial lo que por ley no lo es.

En Colombia, los periodistas lograron grandes conquistas después de desempolvar una ley de 1913, que dispone que todos los documentos son públicos a menos que una ley indique expresamente lo contrario. La manera como fue utilizada esta ley y otras batallas legales dadas por la Unidad Investigativa de *El Tiempo* serán temas de análisis en los próximos capítulos.

TRABAJO DEL PERIODISTA

Bob Greene afirma que un artículo de periodismo investigativo debe ser el fruto de la labor del reportero y no de trabajos hechos por otros. El periodista cita como ejemplo de lo que no es periodismo de investigación la serie "Los Papeles del Pentágono", que publicó *The New York Times* en 1971, sobre los fracasos históricos del gobierno de Estados Unidos en el conflicto vietnamita, desde el mandato de Harry Truman hasta el de John F. Kennedy.

El artículo estaba basado en el estudio "Historia del proceso de toma de decisiones de Estados Unidos en la política hacia Vietnam, 1945-1967", que fue preparado por el Departamento de Estado bajo estrictas normas de confidencialidad. De alguna manera el estudio, de unas 7000 páginas, llegó a manos de los periodistas del diario que contrataron una habitación del Hotel Hilton de Nueva York, donde se dedicaron durante varios días a clasificar y analizar el material cuya publicación causó un gran revuelo.

"La revelación de los papeles del Pentágono fue, desde todo punto de vista, un gran acontecimiento en el periodismo. Era un estudio compilado por el propio gobierno y que llegó a manos de la prensa, seguramente a través de una falla de seguridad sin precedentes, un estudio que sacó a la luz más de 20 años de decisiones políticas y que reveló al pueblo estadounidense que había sido engañado sistemáticamente por sus dirigentes electos y nombrados", escribió Sanford J. Ungar, entonces reportero de *The Washington Post*.¹⁴

¹⁴ Sanford J. Ungar, *The Papers and The Papers, An account of the Legal and Political Battle over the Pentagon Papers*, E. P. Dutton, Nueva York, 1972, pág. 14.

Este tipo de artículos es muy provechoso y debe darse a conocer, sostiene Greene, pero no se pueden considerar periodismo investigativo porque son el producto del trabajo de otros. El mérito de los periodistas en esta labor, agrega Greene, consiste en tener una magnífica fuente y una gran paciencia para clasificar los documentos y ponerlos en un lenguaje comprensible.

El factor de la originalidad es cada vez más escaso en los trabajos de investigación tanto en Estados Unidos como en América Latina. Veamos por qué.

En Estados Unidos

Agobiados por la recesión económica y la competencia de la televisión, muchos periódicos de Estados Unidos ya no pueden darse el lujo de tener a un grupo de periodistas dedicado exclusivamente, durante varios meses, a recolectar información para una investigación de su propia cosecha. A falta de reporteros, la prensa descarga cada vez más su labor fiscalizadora de otros tiempos en los organismos investigativos del gobierno, y lo hace a riesgo de amplificar informaciones manipuladas políticamente.

Un ejemplo del alto precio que se paga por tomar estos riesgos, lo dieron varios periódicos del país al publicar sin confirmar versiones de la CIA, que señalaban que el entonces depuesto presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, había estado bajo tratamiento psiquiátrico en un hospital canadiense. Las acusaciones salieron a la luz en octubre de 1993, en momentos en que el gobierno de Estados Unidos iniciaba una fuerte campaña por el regreso de Aristide al poder, que rindió frutos a finales de 1994.

Pese a que los cargos se podrían haber verificado tras una breve y elemental averiguación —que se hizo más tarde—, el desmentido se produjo dos meses después, cuando el daño ya había causado estragos. Las acusaciones de la CIA resultaron falsas. El periodista Christopher Marquis, del diario *The Miami Herald*, logró que Aristide autorizara su acceso a los archivos del hospital donde supuestamente había recibido tratamiento. Los directivos del hospital negaron la versión de la CIA y los periódicos, que la habían publicado intacta se vieron obligados a rectificar y a buscar responsables en otras latitudes.

Howard Kurtz, crítico de prensa de *The Washington Post*, señala en su libro *Media Circus* (El circo de los medios) otros hábitos que han mermado la iniciativa reporteril en proyectos de investigación. Kurtz sostiene que por andar galanteando con personajes y temas triviales; por estar poniendo micrófonos en boca de afamados expertos, por buscar noticias desde el teléfono y por el temor de aburrir a los lectores con temas muy técnicos, la prensa ha llegado tarde a donde debía haber estado primero, y se ha perdido los grandes escándalos de corrupción de los últimos años.

“Hay un cáncer que se está tragando el negocio del periodismo, es el cáncer del tedio, de la superficialidad y la irrelevancia y se necesita una cirugía radical”, escribió Kurtz.¹⁵ Uno de los ejemplos citados por el periodista para ilustrar cómo la prensa se deja deslumbrar por estrellas fugaces, mientras en sus narices se fermentan los fraudes, es el fenómeno Donald Trump, el ostentoso y egocéntrico urbanizador cuya fama de millonario precoz terminó sepultada por una avalancha de deudas y líos financieros.

Por lo menos durante 15 años, Trump gozó de una prensa lisonjera, dice Kurtz, que prefería averiguar los nombres de las modelos con quienes salía en lugar de buscar el origen de su fortuna. *The New York Times* y otros grandes periódicos del país se embelesaron con las aventuras del joven que a los 30 años alardeaba de tener más de 200 millones de dólares.

“Trump se convirtió en nuestro playboy nacional”, dice Kurtz. “Un hombre que era famoso por ser famoso, y los reporteros y editores fueron los confabuladores que pusieron su nombre a la luz. Si la prensa falló en descubrir que el reino mágico de Trump estaba construido en una montaña movediza de deudas, fue en gran parte porque nadie intentó averiguar lo que ocurría.”¹⁶

Mientras las luces alumbraban a Trump, grandes fraudes se cocinaban en el gobierno. El saqueo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), “la dependencia que nadie cubrió”; el colapso de los bancos de ahorro y préstamo (Saving and Loans o S & V); la red del Irán-Contras, descubierta por un semanario libanés en 1986, fueron algunas de las estrepitosas defraudaciones públicas que la prensa estadounidense llegó a cubrir cuando casi todos los platos estaban rotos.

¹⁵ Howard Kurtz, *Media Circus: The Trouble with America's Newspapers*, Random House, Nueva York, 1993, pág. 8.

¹⁶ Kurtz, pág. 15.

El efecto escalofriante

El terror que causaron al mundo de la prensa, a principios de los años ochenta, las condenas por difamación, contribuyó también a calmar el ímpetu del periodismo de investigación que se vivió en los años setenta, cuando los reporteros jóvenes salían de las universidades soñando con deponer a un presidente. El efecto escalofriante (*The Chilling Effect*), nombre con el cual los periodistas bautizaron el entumecedor ambiente que en la década de los ochenta produjo en las salas de redacción una ola de demandas por difamación —entabladas en muchos casos por asuntos insignificantes— forzó a los periódicos a contratar abogados especializados para revisar los artículos investigativos. Para muchos, el resultado de la exagerada precaución legal, aplicada no sólo por los abogados sino por los editores, que no querían ver su nombre enredado en una demanda por calumnia, convirtieron el periodismo investigativo en un negocio muy cauteloso.

“El efecto de la afluencia de demandas por difamación, en lugar de producir más precisión en los medios de comunicación, lo que ha hecho es aumentar la timidez”, escribió en 1985 Martin Garbus, ex subdirector de *American Civil Liberties*. “Veo cada vez más y más adjetivos irreverentes removidos, incisivos análisis de gente, sucesos a los que se les baja el tono y proyectos arriesgados que se dejan de un lado.”¹⁷

Aunque el clima mejoró un poco en la década de los noventa, los abogados continuaron en las salas de redacción. Guiados por un complicado repertorio de decisiones jurisprudenciales, estos editores de ley no pueden ocultar que duermen mejor si los artículos se basan en investigaciones oficiales que en hallazgos del reportero. Cuando el reportaje es iniciativa del periodista, hacen lo posible para que la información tome la apariencia de una pesquisa del gobierno y no del reportero. Es común que incluso recomienden al redactor, antes de la publicación, obtener *on the record* la declaración de un funcionario que anuncie la apertura de una investigación por los hechos que el periódico descubrió.

De esa manera, la denuncia inicial del artículo se transforma en una noticia sobre la apertura de una investigación oficial y la

¹⁷ Citado por Michael Massin en “The Libel Chill: How Cold is it out here”, *Columbia Journalism Review*, mayo-junio, 1986.

carga de la prueba recae prácticamente en las espaldas del gobierno y no del periódico. El trabajo del periodista queda completamente eclipsado por la noticia.

En América Latina

La condición ideal señalada por Greene, de que el trabajo sea del periodista y no de otros, es más difícil de encontrar en los informes que se publican en Latinoamérica bajo el rótulo de investigaciones periodísticas.

Por falta de tiempo y de recursos para hacer el trabajo por su cuenta y riesgo, los reporteros dependen principalmente de fuentes oficiales que ofrecen información represada en las oficinas públicas. Los grandes escándalos de corrupción que provocaron la dimisión de los presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Fernando Collor de Mello, del Brasil, surgieron a partir de testimonios y confidencias de funcionarios y allegados a los mandatarios, pero no puede decirse que fueron íntegramente el resultado de una pesquisa periodística.

Carmen Alicia Fernández, corresponsal en Caracas de *Inter Press Service*, sostiene que “casi todas las denuncias sobre hechos de corrupción [en Venezuela] han sido motorizadas por el propio gobierno, que destapa casos del periodo anterior, o por sectores de oposición”.¹⁸

Las alianzas

Para muchos periodistas de la región, en ciertos casos, la única alternativa para conseguir información es trabajar en equipo con jueces y funcionarios del gobierno, que se ven presionados a investigar, o arriesgan su empleo por dar a conocer los secretos que están a su alcance. Esta práctica se ha extendido particularmente en los trabajos periodísticos sobre desapariciones y masacres en Perú, Chile, Argentina y Colombia.

Un caso ejemplar de la labor en “equipo forzado” es la campaña periodística en torno a la matanza de La Cantuta, en la que un gru-

¹⁸ Carmen Alicia, Fernández, “Corrupción y denuncia periodística”, Revista Chasquis, núm. 45, abril de 1993.

po de reporteros peruanos llevó casi de la nariz a la justicia para que descorriera el velo que el gobierno había tendido en torno a la desaparición de ocho estudiantes y un profesor universitario el 18 de julio de 1992.

Sin las indicaciones de los periodistas del semanario peruano *SI*, la fiscalía no hubiera descubierto la fosa común en que fueron sepultados los restos calcinados de los estudiantes y el profesor. El hallazgo en una quebrada del pueblo de Cieneguilla, 25 kilómetros al este de Lima, desencadenó el más vergonzoso escándalo del gobierno del presidente Alberto Fujimori. Tras comprobar el sitio donde una persona había indicado que yacían los cadáveres, los periodistas citaron a decenas de corresponsales nacionales y extranjeros y grupos de derechos humanos para que fueran testigos del hallazgo.

Esto de trabajar en equipo o de ejercer presión sobre la justicia es una práctica que produce malestar en ciertos sectores. El abogado penalista colombiano Lisandro Martínez, un feroz crítico de los medios de comunicación, fallecido hace más de cinco años, consideraba un contrasentido que existieran procesos judiciales que a la vez lo fueran de opinión.

Según Martínez, en estos procesos “es más lo que se escribe, dice, opina y prevé o juzga fuera del proceso que dentro de él”. Este alud de “informaciones extrañas, supuestas o reales, arrasa, cubre y aplasta la verdad procesal, confunde la mente de los jueces, los presiona. Malheridas quedan la justicia y la verdad por galantear con la opinión pública”.¹⁹

PERIODISMO DE PROFUNDIDAD

Se conoce como periodismo de profundidad una modalidad de la reportería de investigación que trata de abordar un tema con una perspectiva menos detectivesca, donde las conductas impropias son sólo una parte del paisaje, y el paisaje en sí es el objetivo del reportaje. La reportería de profundidad parte del principio de que cada equivocación y cada acierto tienen una larga historia, que hay crisis sociales que merecen un diagnóstico sosegado donde el lector pueda

¹⁹ “La justicia y el cuarto poder”, apuntes de una conferencia dictada por el penalista Lisandro Martínez en el X Congreso de Abogados Javeriano, Cali, Colombia, 13 de septiembre de 1985.

encontrar una explicación a las expresiones actuales de esa crisis. Si el periodismo investigativo se concentra en responder a la pregunta sobre quién y cuándo lo hizo, el de profundidad busca el porqué.

Lo que hace el reportero en este proceso, dice el periodista y escritor estadounidense Nicholas Lemann, es “organizar algunos aspectos de la confusa magnitud de la experiencia humana en una serie ordenada por pasos, cada uno de los cuales lleva inexorablemente al otro”.²⁰

Cuando el periodista sigue esta línea de trabajo, agrega Lemann, autor de un libro sobre los efectos de la inmigración negra en Estados Unidos de América, ingresa en el reino de la sociología y de la historia, un reino donde no hay corrillos de reporteros al acecho de personalidades y donde tal vez los entrevistados nunca han concedido una entrevista en su vida. Pero no por eso es menos interesante, sostiene. No es un mundo de informaciones explosivas sino de primicias sociológicas que han estado a la vista de todos por muchos años, y a nadie se le ocurre estudiarlas. “En un momento dado”, dice Lemann, “el 99 % de los periodistas están cubriendo el 1 % de lo que pasa en el mundo, y yo soy parte del 1 % que está cubriendo el otro 99 %”.

En las largas colas de los pensionados, en las cárceles hacinadas, en los barrios de invasión, entre los colonos de las selvas, los indígenas y campesinos marginados, hay vetas inexploradas de información que muchos periodistas creen que producen temas manidos sin potencial de lectura ni de premios. Germán Castro Caycedo, un periodista colombiano que prefiere llamar al periodismo de denuncia “un periodismo de angustia”, demostró que esas vetas no se extinguen y guardan sien pre amargas y gratas sorpresas para los lectores y expertos que daban por agotado el tema. Numerosas crónicas de ese mundo olvidado convirtieron a Castro en el autor más vendido de su país después del premio Nobel Gabriel García Márquez.

Castro Caycedo sacó el periodismo de las apoltronadas salas de redacción y lo llevó a regiones de Colombia donde la gente sufre y goza en silencio, y a falta de autoridad, arregla los problemas a su manera. En diez reportajes, publicados en el libro *Colombia*

²⁰ Intervención de Nicholas Lemann en la conferencia nacional de Investigative Reporters and Editors en Chicago, 6-9 de junio de 1991. Lemann es el autor del libro *The Promised Land: the great Black Migration and how it changed America* (La Tierra Prometida: La Gran Inmigración negra y cómo cambió a Estados Unidos).

Amarga,²¹ el periodista ofrece un ejemplo práctico de cómo se puede escribir, con nombres propios y sitios exactos, una denuncia de carácter social.

Los rezagos de la violencia política en Caicedonia, un pueblo que produce el café más suave del mundo; las penurias del éxodo de millares de colombianos hacia Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y el Caribe, el drama de los niños que viven en las calles, son temas que a primera vista parecen trillados. La diferencia está en la profundidad: Castro Caycedo va a Caicedonia y entrevista al notario del pueblo, sigue los detalles de la muerte de Nuri Iza Quintero, un joven dirigente liberal asesinado por su color político en 1972, y a partir de la jovial imagen de Juan Valdez, el sonriente campesino símbolo publicitario del país en el plano mundial, relata la verdadera situación de los trabajadores de la región cafetera, a quienes no les llega más del 5 % del precio total del grano.

Los más recientes escritos de Caycedo, dedicados a las aventuras de varios capos colombianos del narcotráfico, a quienes conoció personalmente, dejaron un sabor amargo en algunos de sus colegas, que percibieron en ellos un tono complaciente y de solapada admiración.

En Latinoamérica hay periódicos que han abierto sus páginas al periodismo de profundidad. Uno de ellos es *El Mercurio* de Santiago, Chile, donde cada domingo el lector encuentra los informes de la Unidad de Temas Especiales.

“La idea era que el diario llevara un valor agregado en la primera página”, explica Mario Valle, director de la unidad, “es decir, que el lector encontrara algo nuevo, distinto. Obviamente las noticias importantes, tanto nacionales como internacionales, pero en la medida de lo posible, también queríamos hacer algo de denuncia, lo que se llama un gran reportaje, y plantear algunos temas que estaban dando vuelta en la sociedad, pero que no habían tenido una cabida suficiente”.²²

Con esta idea, los periodistas del grupo publicaron informes sobre las condiciones de las clínicas psiquiátricas; el resurgimiento de los grupos neonazis; el desinterés juvenil hacia la política; el

²¹ Germán Castro Caycedo, *Colombia amarga*, Círculo de Lectores, Bogotá, 1978.

²² Conferencia de Mario Valle en el Seminario “Periodismo de Investigación en América Latina”, Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación, Santiago, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1992.

desamparo social de los artistas nacionales; la problemática del regreso de los exiliados durante el régimen militar y varios reportajes ecológicos.

Valle sostiene que aunque los temas de “índole social” no son “contingentes”, tienen más proyección y preocupan a la ciudadanía. La prueba es que el buzón de la sección se llenó de cartas de ciudadanos que proponían nuevos temas, y las páginas de opiniones del periódico citan con frecuencia sus informes.

PERFILES DE PROFUNDIDAD

No siempre el tema de un informe de profundidad es un “fenómeno social” o una institución del Estado. También lo es la vida de aquellos individuos que están detrás de los acontecimientos, moviendo los hilos del poder. Escribir sus biografías ha sido tradicionalmente una labor de historiadores que siguen el estricto método de las ciencias sociales. En los últimos veinte años, sin embargo, los periodistas han incursionado en este campo, tal vez con menos profundidad que los historiadores, pero con más irreverencia. A esta clase de informaciones cuyo centro de gravedad es la vida de un personaje se le conoce en el argot del periodismo como *perfil*.

La biografía investigativa es una semblanza que expone virtudes y desaciertos de un personaje del pasado o del presente. En estos artículos el lector descubre las circunstancias, casi siempre complejas y colmadas de matices, en las que ese personaje, llámese presidente, dictador, magnate o científico, tomó decisiones que cambiaron la vida de miles de personas o la suya propia. Para algunos egos ilustres que han pasado a la historia como modelos de civilidad y altruismo, a expensas de la ignorancia de sus admiradores sobre oscuros aspectos de su conducta, esta modalidad del periodismo puede resultar incómoda. Pero al mismo tiempo es un instrumento para rescatar los valores de otros que han sido relegados. En ambos casos, el espíritu del trabajo periodístico consiste en buscar hechos y testimonios que sirvan para explicar las contingencias del factor humano, esos momentos definitivos en la vida de una persona que nunca aparecen en la versión oficial ni en los textos escolares de historia.

Concebido así, el perfil de profundidad no ha tenido mayor desarrollo en Latinoamérica. Por falta de tiempo, unas veces, y excesos de compromisos en otras, las semblanzas que se publican en nuestros periódicos caen en la adulación y a menudo se escriben en un tono reverencial y con la intención de perpetuar mitos que dejan al lector con la falsa idea de que el personaje es un santo.

LA ESCUELA DE CARO

Robert Caro es un periodista estadounidense que abandonó las salas de redacción para dedicarse a la investigación histórica, con el espíritu y el estilo del periodismo de investigación. A mediados de los años sesenta se retiró del periódico *Newsday*, cansado de la “mediocridad inducida” por las horas de cierre del periodismo tradicional, y se dedicó al análisis exhaustivo de la vida de personajes con poder político ilimitado.

“Lo que quería era tomarme el tiempo para encontrar lo que ocurrió, y el tiempo es igual a la verdad. Es decir, no hay una verdad acerca de todo, pero hay muchos hechos objetivos. Cuanto más hechos usted pueda obtener, más cerca está usted de la verdad, y entonces es cuando usted se sienta para interpretarlos. En los periódicos nunca tuve tiempo suficiente para encontrar suficientes hechos. Juré, cuando empecé a escribir libros, que nunca escribiría hasta que no hubiera explorado todas las vías.”²³

La renuncia al periódico le produjo a Caro una recompensa tardía pero valiosa. Hoy es uno de los más prestigiosos biógrafos de Estados Unidos de América. Sus libros son testimonios del cumplimiento de la promesa de no dejar camino sin recorrer para encontrar las indicios que más lo acerquen a la verdad. El periodista se dedicó a estudiar durante veinte años, primero la vida del urbanista Robert Moses, el poderoso zar de planeación municipal de Estados Unidos que cambió la faz de Nueva York sin ser funcionario electo, y después la carrera política de Lyndon B. Johnson.

Caro ganó en 1975 el premio Pulitzer por la biografía de Moses, que publicó en un libro de 1280 páginas. Para financiar su trabajo el periodista debió vender su casa y depender por varios años de

²³ Citado por Steve Weinberg en *Telling the Untold Story: How Investigative Reporters Are Changing the Craft of Biography*, University of Missouri Press, Columbia, 1992, pág. 36.

los ingresos de su esposa. Moses, el protagonista principal de su primera biografía, fue el cerebro de la construcción de 35 autopistas, 12 puentes, decenas de parques y el *Lincoln Center for the Performing Arts*, en Estados Unidos.

Durante siete años, Caro reunió la mayor cantidad de información sobre el urbanista para demostrar cómo los caprichos y las ambiciones de una persona con poder y sagacidad, pero que logró inculcar una imagen al público de hombre antipolítico, terminan por transformar la vida cotidiana de una gran ciudad. La vida de Moses, sostuvo Caro “ha sido un drama de interrelación del poder y la personalidad. . . Lo que Robert Moses construyó fue una mentira. La mentira tiene que ver con el hombre y la autoridad pública. Moses dijo que él era la antítesis del político. . . Estas declaraciones fueron creídas casi implícitamente durante casi 40 años por el público para quien fueron hechas. . . Moses repitió sus argumentos miles de veces y por cuatro décadas fueron repetidos, amplificados y embellecidos por una prensa que los creía también”.²⁴

Dice Weinberg, que a diferencia de la mayoría de biografías que tienen una vida útil de un año, la de *The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York*, ha perdurado. “Todavía se imprime y se usa como texto en muchos cursos de universidad, es leída regularmente por periodistas y biógrafos que quieren estudiar uno de los libros de no ficción mejor investigados y escritos.” La obra “ayudó a muchos periodistas a comprender las conexiones vitales y no reveladas, entre el carácter del individuo y la política”. Su éxito en las librerías, “motivó a los reporteros a arriesgar sus carreras para intentar escribir biografías y a los editores, a ofrecer contratos a esos periodistas”, dice Weinberg.²⁵

¿Por qué escribir biografías? Caro sostiene que la biografía es una forma de sacar a la luz las grandes fuerzas que moldean una época, y entre esas fuerzas la del poder político. ¿Y por qué está interesado en el poder político? Porque en una democracia, “el poder político moldea nuestras vidas”. . . “Eso usted lo puede ver en las cosas simples y relativamente pequeñas.”²⁶

Una de esas cosas simples, explica, ocurre cada vez que un conductor de Nueva York tiene que desviarse 29 cuadras para llegar al puente Triborough. El desvío no lo tendría que hacer si no fuera

²⁴ *Op. cit.*, pág. 42.

²⁵ *Op. cit.*, pág. 41.

²⁶ *Op. cit.*, pág. 43.

por una maquinación política insospechada. En principio, el puente estaba diseñado para terminar en la calle 96, pero su extremo fue construido en la 125 porque William Randolph Hearst, el magnate de la prensa estadounidense, tenía propiedades en esta calle y quería que la obra pasara por allí para obtener una indemnización del Estado.

Una vez terminada la biografía de Moses, Caro se embarcó en un nuevo proyecto que abordaba el mismo fenómeno de la interrelación del poder y la personalidad, pero en el ámbito nacional. El personaje escogido fue Lyndon B. Johnson (LBJ), considerado por los historiadores como el hombre más poderoso del siglo xx en Estados Unidos. Durante cinco años, Caro se dedicó a buscar, en los más recónditos archivos y a través de testigos directos, los hechos que le ayudaran a explicar cómo Johnson se convirtió en el único dirigente político en la historia de Estados Unidos que ha controlado y dominado el Senado de ese país.

“Así que me pareció que si yo podía mostrar eso”, explica Caro, “estaría exhibiendo la esencia, el corazón, del poder político nacional”.²⁷

La nueva biografía, publicada en dos volúmenes, dejó sin pedestal gran parte de la leyenda de LBJ y consagró a Caro como el gran reportero-historiador.

DENUNCIOLOGÍA

“El peor enemigo del periodismo de investigación”, dice Greene, “no es el director del periódico amedrentado o el presidente represivo o el ultrajado anunciante, ni siquiera el juez parcializado. Es el mal periodismo de investigación”.²⁸

Es el caso de muchos reporteros que viven exclusivamente de las denuncias ajenas y posan como periodistas investigadores; su trabajo se limita a poner la grabadora en boca de quien más grita y más acusa, no importa lo que grite y a quien acuse. Lo importante es el hacer el eco. Pero esto no puede llamarse periodismo investigativo. En Venezuela se le conoce como *denunciología*, que es el

²⁷ *Op. cit.*, pág. 44.

²⁸ Robert Greene, prólogo a la primera edición de *The Reporter's Handbook: An Investigator's Guide to Documents and Techniques*, John Ullmann y Jan Colbert, (ed.), Investigative Reporters and Editors, St. Martin's Press, Nueva York, 1991, pág. X.

APÉNDICE 1

hábito de publicar denuncias que casi siempre tienen su origen en acusaciones apresuradas de sectores de la sociedad en pugna.

Al publicarlas sin confirmación alguna, los periódicos se convierten en cuadriláteros clandestinos donde los políticos o empresarios rivales se sacan los trapos al sol en medio de una andanada de acusaciones, algunas ciertas y otras difamatorias. Por su espectacularidad y estridencia, la gresca es seguida con atención, pero a la hora de reflexionar, el lector no tiene la más mínima certeza de lo que ha ocurrido, pues el periodista ni siquiera se preocupa por explicar los hechos que son objeto de disputa.

Un editor de un periódico de ese país decía que la denunciología es un mal necesario que los periódicos se ven obligados a mantener para que el público se informe de temas que quedarían sin debate si no fueran amplificadas por la prensa. Lo que reporteros y editores no han medido es hasta qué punto los lectores resistirán semejantes dosis de confusión y ambigüedad.

Al respecto Héctor Mujica, periodista venezolano, dice que “Los medios que se han lanzado como adoradores de la denunciología caerán como ídolos de pies de barro”, porque si bien su papel es defender la verdad por encima de todo fanatismo, incluso del fanatismo por la democracia, la verdad que publican debe ser “una verdad sustentada”.²⁹

APÉNDICE 1

Ida M. Tarbell: ¿Cómo explorar una compañía de petróleos?

Ida Minerva Tarbell siempre había guardado en su memoria, como demonios para una novela, los recuerdos de una época gris de su infancia y parte de su juventud en la región petrolera de Pensilvania. Grúas estridentes, torres de extracción y oleoductos de engrasados campamentos y pueblos que se fundaron a mediados del siglo pasado en charcos de petróleo del noroeste de Pensilvania, serían el escenario de su obra.

Para la trama no tendría más que evocar las historias de apogeo y ruina de su familia y vecinos en Titusville, el pueblo donde

²⁹ Revista *Chasquis*, núm. 45, abril de 1993.

nació en 1857, a pocas millas del primer pozo de petróleo descubierto en Estados Unidos. Su infancia transcurrió en medio del bullicioso epicentro de la bonanza petrolera, una estampida social que arrasó los valores provinciales de la zona para sacar el combustible que puso en marcha la máquina del capitalismo industrial de principios de siglo.

La niña inquisitiva y curiosa por los secretos de la biología, vio surgir en su pueblo la prostitución y otros negocios propios de estas bonanzas. Era una época de frenesí en la que los hombres “pensaban en petróleo, hablaban de petróleo y soñaban con petróleo; su olor y sabor predominaba en todo lo que comían y bebían. . . Algunos tomaban dos o tres vasos al día para prevenir escalofríos y catarros”, escribió Tarbell.

En principio el dinero fluía al ritmo del crudo. Los productores se enorgullecían de haber construido de la nada una industria que producía 6 millones de barriles al año con un capital de 200 millones de dólares, y de la cual dependían más de 60 000 personas. Cada mes se perforaban 100 nuevos pozos; Estados Unidos era el cuarto país exportador de petróleo en el mundo.

Franklin Tarbell, padre de Ida, participó en la bonanza. Con su ingeniosa habilidad manual perfeccionó el diseño de un tanque de madera que almacenaba cien o más barriles del crudo. Era además un boyante empresario que competía, como otros cientos de independientes, con la firma que tenía el virtual monopolio de la industria: la South Improvement Company.

Pero los días de prosperidad se enturbiaron en 1872. En ese año, la empresa privada que controlaba los ferrocarriles comenzó a incrementar injustificadamente sus tarifas de transporte del crudo a los productores independientes. Al mismo tiempo empezó a conceder, a hurtadillas, vitales descuentos a South Improvement. Estas operaciones provocaron la ira de los productores independientes.

“De repente (dice Tarbell), en el pleno auge de su confianza, una larga mano cayó de quién sabe donde, para robar lo que habían conquistado y estrangular su futuro. Lo sorpresivo y oscuro del asalto agitaron lo más profundo de su humanidad y su sentido del juego limpio, y la región entera se levantó en una revuelta que difícilmente tiene paralelo en la historia comercial de Estados Unidos.”

Era la Guerra del Petróleo. Los productores independientes se enfrentaron a la South Improvement Company y exigieron al

gobierno su intervención. Los descuentos de los ferroviarios estaban expresamente prohibidos por la ley.

“Fue mi primera experiencia con la revolución”, afirma Ida Tarbell en su autobiografía. “El instante en que la palabra se volvió para mí sagrada. Era su privilegio y deber, luchar contra la injusticia.”

Bajo el camuflaje de la Southern Improvement se escondía la Standard Oil Company, un consorcio fundado por el ya poderoso magnate de la industria John D. Rockefeller, que a fuerza de operaciones, como el acuerdo con los ferroviarios, había obtenido el control de la zona petrolera. La ausencia de una firme determinación del gobierno federal para supervisar y castigar las prácticas desleales, y la perseverancia de la compañía en las mismas, dieron al traste con las pretensiones de los petroleros independientes.

Asfixiados por las deudas y enterados de que la mayoría de los cargamentos no llegaban a su destino, casi todos debieron abandonar el negocio. Otros, que se plegaron a la gran compañía buscando protección, pronto fueron esquilados. El drama de la derrota se asomó al hogar de los Tarbell. Un pariente cercano del padre de Ida, arruinado y vencido por la difícil situación, se suicidó, y dejó deudas que obligaron a Frank Tarbell a hipotecar su casa para pagarlas. Dos décadas después del colapso, cuando no existía ni rastro de algunos pueblos levantados por los productores independientes, y la Standard Oil Company se consolidaba como el monopolio más avaricioso del capitalismo americano, Ida Tarbell encontró la oportunidad de desfogar sus angustiosas memorias.

En la revista *McClure's Magazine*, cantera de los rastrilladores de Nueva York, donde Tarbell trabajaba como redactora, se debatía la necesidad de investigar el proceso de una industria que estuviera controlada por pocos, luego de que había sido poseída por muchos. Para ella, el trabajo no debía ser la simple descripción del descubrimiento y la apertura de fuentes de energía como el petróleo.

“Debemos encontrar un nuevo plan de ataque. Algo que no sólo muestre la magnitud del desarrollo industrial y comercial y los cambios que esto ha traído a varias partes del país, sino algo que aclare los principios que guían a los industriales para combinar y controlar estos recursos.”

En pocos meses la propuesta tuvo nombre propio. Escéptica de sus habilidades literarias, Ida Tarbell renunció a la idea de una

novela y a mediados de 1901 presentó a Sam McClure, director de la revista, el esquema general de lo que se convertiría en uno de los trabajos más completos del periodismo de rastrillaje: la "Historia de la Standard Oil Company".

Tarbell viajó a Suiza para entrevistarse con McClure y regresó a las pocas semanas con la autorización de seguir adelante con su proyecto.

"McClure tiene coraje'. ¡Cuántas veces fue hecho este comentario después de que nuestras propuestas se ponían en marcha! Pero el coraje implica una dosis de peligro. Nadie pensaba en semejante cosa en nuestra oficina. Estábamos comprometiéndonos con lo que considerábamos una legítima obra de trabajo histórico. No éramos apologistas ni críticos, sólo periodistas intentando descubrir qué había sucedido en la formación del más perfecto de todos los monopolios."

Tarbell pronto descubrió que si bien no había razones para tener miedo, en su proyecto tenía que lidiar con trabajadores de la industria petrolera que se sentían perseguidos por el "ojo que todo lo ve y la mano que todo lo alcanza".

El primer paso de su investigación fue buscar documentos dispersos por todo el país, que formaban parte de investigaciones oficiales en las que había estado involucrada la empresa desde su fundación en 1870. Y el primer obstáculo lo encontró al descubrir que algunos de los testimonios clave rendidos en estas investigaciones, y en particular los que no estaban impresos, habían desaparecido de los archivos de la justicia.

Tarbell se había enterado de que uno de esos documentos contenía la prueba definitiva de que la Standard Oil Company había nacido de las cenizas de la South Improvement Company, con su mismo esquema depredatorio. Con la ayuda de un asistente en Cleveland, sede de las operaciones de la Standard, y de una bibliógrafa de la biblioteca de Nueva York, la periodista obtuvo copia de casi todos los esquivos papeles.

Los cargos más comunes en las indagaciones, dirigidas en su mayoría por el Congreso de Estados Unidos y las legislaturas estatales, comprometían al consorcio en pactos ilegales con los ferrocarriles y las refinerías, y en operaciones de espionaje de la competencia. Durante el año que tardó Tarbell en recolectar estos documentos, había intentado, sin éxito, entrevistar al personal de la compañía.

“Me había encontrado con el concebido discurso usado por quienes han aceptado un credo, una situación, un sistema, para deslumbrar al investigador que quiere saber lo que ha ocurrido.”

Las puertas finalmente se abrieron desde adentro. McClure le contó a Tarbell que el escritor Mark Twain le había comentado que su amigo Henry Rogers, uno de los más altos directivos de la Standard, quería saber qué clase de informe estaba preparando la revista. McClure le pidió al escritor que consultara con la periodista. Entonces Twain preguntó si Tarbell estaría dispuesta a entrevistarse con Rogers.

La regla de Tarbell era no hacerlo sin antes haber terminado sus averiguaciones, pero esta vez puso en práctica lo que en alguna oportunidad había explicado a un reportero:

“Alguien alguna vez me preguntó por qué no me dirigía a los jefes de la compañía para obtener información. Creo que esta persona no conocía muy bien la humanidad. . . , la Standard Oil cerraría las puertas de su closet para ocultar el vergonzoso secreto. Pero después de que uno ha descubierto el secreto y lo ha escudriñado muy de cerca, ¿por qué cerrar la puerta?”

La entrevista con Rogers fue extensa y sincera. El influyente ejecutivo ofreció toda su colaboración y autorizó a la reportera para que fuera a su oficina a consultar documentos y estadísticas. Tarbell invirtió dos años en esta tarea. Fue un fructífero periodo de documentación en el que, además, conoció las reglas de juego no escritas del monopolio petrolero. De las más importantes se enteró durante una de sus charlas con Rogers. La periodista comentó que la compañía podría operar con éxito sin necesidad de poner a los competidores fuera de circulación. Rogers respondió que entre los competidores siempre había alguien sin escrúpulos y que, por más pequeño que fuese, podía crecer.

“Ahí estaba el meollo, escribió Tarbell, la obsesión de la Standard Oil Company de que el peligro acecha tanto en las pequeñas como en las grandes cosas; que nada, por insignificante que sea, puede vivir fuera de su control.”

La reportera también pudo captar el grado de aversión que inspiraba Rockefeller a los altos funcionarios de la compañía. En una ocasión Rogers le confesó que debido a la estricta confidencialidad de las operaciones de la firma, si él muriese, sus herederos no podrían reclamar acciones que tenía en las 70 empresas adquiridas por la Standard antes de 1888.

El primer artículo de la serie “Historia de la Standard Oil Company” se publicó en noviembre de 1902 en medio de una agitada situación laboral de Estados Unidos. “La nación”, dice la biógrafa de Tarbell, Kathleen Brady, “presentaba un deplorable ejemplo de cómo los negocios millonarios pueden afectar las vidas de los individuos. Una huelga de los carboneros afligía al país. La Guardia Nacional de Pensilvania había sido enviada para apaciguar los disturbios, los operadores de las minas rechazaban una petición del presidente. . .”.

En el segundo informe, publicado en diciembre de 1902, Tarbell reveló el origen de la Standard, los nombres de sus socios fundadores, su capital de creación, y señaló a Rockefeller como la fuerza oculta tras la South Improvement y el cerebro de los descuentos ferroviarios que arruinaron a los independientes. No era estrategia de la revista *McClure's* anunciar al comienzo de una serie el número de informes que se publicarían, en espera de la respuesta del público.

“Una vez lanzada una idea, crecía hasta acomodarse en alguien y una vez iniciada, continuaba creciendo de acuerdo con la respuesta de los lectores. Si no había respuesta, no más entregas. A una saludable reacción se respondía con tantos capítulos como lo justificara el material.” Así que la *Historia de la Standard Oil Company*, planeada para publicarse en tres entregas, se convirtió en una serie de 19 informes que fueron compilados en un libro con el mismo título. La necesidad de comprobar con abogados y economistas las informaciones delicadas de la denuncia, hicieron dispendioso el trabajo periodístico. Afirma Brady que los editores de Tarbell eran tan escrupulosos como ella en la revisión del material. “Todo artículo de *McClure's* era reescrito tres veces bajo la dirección de los editores, un rutinario proceso que disgustaba a muchos escritores pero no a Tarbell.”

La estrategia de la revista de no agotar el tema si la audiencia lo demandaba, no sólo duplicó el tiraje de la publicación, sino que le dio tiempo a los afectados con las operaciones de la Standard para aportar nuevas y definitivas evidencias. Un joven que trabajaba en la planta de la Standard tenía, entre otras labores, la de incinerar una gran cantidad de documentos del archivo. Había realizado este trabajo durante meses sin reparar en su contenido. Una noche descubrió desprevenidamente en uno de los cientos de papeles el nombre de un amigo de su infancia, refinador independiente en

la zona petrolera y, por ende, competidor de la Standard. El muchacho comenzó a fijarse más en los documentos y muy pronto entendió que su trabajo no era otro que el de destruir información secreta suministrada por los ferrocarriles a la Standard sobre los cargamentos de la competencia. Después de pasar varias noches en vela sin saber qué hacer, reunió una buena muestra de los comprometedores documentos y se los llevó a su amigo que había seguido atentamente las denuncias de *McClure's Magazine*. Éste se entrevistó con Tarbell y le entregó los papeles.

Con las pruebas en la mano, la periodista se presentó en la oficina de Rogers y sin disimular su indignación lo apabulló con preguntas: "Vengo con repetidos cargos de que la práctica continúa. ¿Qué hay sobre eso? ¿Ustedes siguen los cargamentos de los independientes? ¿Los detienen? ¿Ustedes tienen la colaboración de los ferroviarios en la operación?" Rogers respondió que su compañía empleaba todas aquellas prácticas que la ley permitía, pero "ninguno de esos sistemas de rastreo que usted sugiere. Eso no tiene sentido. ¿Cómo lo podríamos hacer, aun en el caso de que pudiéramos?"

La pregunta la contestó el siguiente artículo de Tarbell con el que se terminaron sus visitas a las tranquilas oficinas de Rogers en el número 26 de Broadway, Nueva York. La publicación de la serie periodística y el libro enfrentaron a Tarbell a la fama y a la controversia. Su nombre y fotografía aparecieron en casi todos los periódicos del país, mientras ella recorría varios estados invitada por organizaciones de reformistas y sindicatos. Publicaciones simpatizantes de Rockefeller la atacaron con vehemencia, pero sólo prestó atención a la crítica de la independiente y prestigiosa revista *The Nation*. El semanario afirmó que el libro de Tarbell parecía escrito "con el propósito de intensificar el odio popular" y que ella tenía "un vago concepto de la naturaleza de la prueba" o estaba intentando arruinar la personalidad de Rockefeller "por insinuación o infamia".

La crítica alentó a la periodista a preparar una nueva serie en torno a la figura del fundador de la Standard y la personalidad de los hombres que lo rodeaban, basada en apuntes anecdóticos que había tomado durante su larga investigación. El resultado fue un trabajo emocional con referencias injuriosas que la pusieron a las puertas de un juicio difamatorio. Su biógrafa atribuye esta reacción a la angustia de la escritora por el estado de su padre agonizante en Titusville, víctima de un cáncer en el estómago. Rocke-

feller mantuvo silencio durante la investigación periodística, lo mismo que a lo largo de la publicación, una conducta que encajaba perfectamente en su enigmática personalidad. Rogers nunca cumplió su promesa de concertar una entrevista del magnate con la reportera. De la opinión de Rockefeller sobre el trabajo de Tarbell sólo se conoce un comentario que en alguna oportunidad le confió a un amigo, y que para muchos de los periodistas investigadores de Latinoamérica debe resultar muy familiar.

“El mundo –dijo Rockefeller– está lleno de socialistas y anarquistas. Donde quiera que un hombre triunfa notablemente, en cualquier tipo de negocios, ellos saltan encima y lo desprecian.” No fue exactamente el anarquismo lo que provocó las denuncias de Tarbell. En 1911, la Standard Oil fue disuelta por orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, esto dio origen a la creación de subdivisiones como Exxon, Mobil y Amocco. Este fallo despertó desconfianza en la periodista, que pensaba que “aunque el pulpo había sido rebanado en 38 pedazos, el grupo continuaba funcionando en concierto”. Las medidas más efectivas se produjeron en los años siguientes cuando se reforzó la Comisión Interestatal de Comercio y fueron aprobadas en 1914 la Ley Federal de Negocios y la Ley Clayton para controlar y castigar la competencia desleal.

Luego de su intensa carrera como periodista escarbadora, Tarbell escribió una biografía de Abraham Lincoln, y en 1916 publicó un libro sobre los nuevos ideales en los negocios, que sus críticos consideraron como la evidencia de un repentino ablandamiento. Pero el trabajo de Tarbell ya había logrado lo que ella se había propuesto, primero como una inquietud literaria y después como un compromiso histórico: desenmascarar un gigantesco monopolio que había arrasado con el pueblo de su infancia y con una generación de empresarios independientes. La periodista cierra su libro biográfico de la Standard Oil Company con una breve terapia para la avaricia:

“Cuando el hombre de negocios que lucha por asegurar privilegios especiales para sacar del camino a sus competidores por métodos que no son justos, reciba un tratamiento sumario de desdeñoso ostracismo de sus seguidores, similar al que se le da al médico o el abogado que no es profesional o al atleta que no respeta las reglas, habremos ganado un camino para hacer del comercio un digno negocio para nuestros jóvenes.”

Obstáculos y estrategias

2

OBSTÁCULOS

Hace 15 años, en varios países latinoamericanos era imposible siquiera pensar en la publicación de informaciones que pusieran en duda la reputación de los gobiernos autocráticos de turno. Si sacar a la luz un diario con escuetas noticias de actualidad era de por sí una labor temeraria, denunciar a altos funcionarios o militares no dejaba de ser una misión suicida.

El panorama político de América Latina cambió en forma gradual, y una vez que se sintieron los nuevos vientos democráticos los periodistas utilizaron la denuncia para orear décadas enteras de silencio forzado. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, el periodismo recuperó un papel vigilante de la moral pública en una atmósfera de mayor libertad. Aunque el progreso fue enorme, muy pronto los periodistas se tropezaron en el camino con los mismos obstáculos que venían desafiando sus colegas en otros países que, como Colombia, Venezuela y Costa Rica, habían tenido una trayectoria política más estable. En cierta forma puede decirse que el periodismo investigativo latinoamericano se emparejó frente a la adversidad, y actualmente los reporteros dedicados a esta disciplina deben afrontar limitaciones que tienen los mismos efectos de la censura rampante, sufrida por los medios de comunicación durante las dictaduras militares de la región.

En una encuesta informal que hice en Chile en 1993, durante un seminario de periodismo de investigación entre 63 participantes de ese país, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uru-

guay, México, Venezuela, Panamá y Puerto Rico, los periodistas señalaron los siguientes obstáculos que afronta el periodismo de investigación en sus países y la forma como influyen en su trabajo:

- 20 respondieron que el principal obstáculo para el periodismo de investigación son “las negativas de las oficinas públicas de entregar documentos o información”. Diecisiete señalaron este obstáculo como el segundo en importancia
- 18 respondieron que su medio “no tiene suficientes redactores para poder asignar a uno o un grupo la investigación de un caso”. Cinco señalaron este obstáculo como el segundo en importancia
- 15 respondieron que lo que más desalienta la reportería investigativa son las “advertencias de los jefes o propietarios del medio de no investigar temas que puedan perjudicar a anunciantes, familiares, amigos personales o dirigentes políticos”. Uno señaló este obstáculo como el segundo en importancia
- 11 respondieron que son las amenazas de muerte, represalias, intimidaciones. Siete señalaron este obstáculo como el segundo en importancia.

La siguiente es una descripción más amplia de las dificultades mencionadas por los periodistas en ese seminario y en diversas entrevistas que he sostenido con muchos de ellos.

El alto grado de compromiso de los medios de comunicación con grupos económicos o políticos dificulta el ejercicio del periodismo de investigación. Son muy pocos los periodistas latinoamericanos que no han experimentado la desagradable decepción de regresar de la oficina de su editor con la orden de suspender una investigación porque sus resultados podrían afectar los intereses de un político o de un gran anunciante. Por diversas razones, la prensa depende cada vez más de créditos de instituciones financieras y de concesiones económicas o tributarias de los gobiernos. La situación no representaría mayor riesgo si no fuera porque, en una buena cantidad de casos, el compromiso asumido por los medios con sus acreedores, no es sólo el de pagar a tiempo sino el de guardar silencio en caso de un desliz de aquéllos.

Paradójicamente, la solvencia económica tampoco garantiza una mayor independencia, pues se ha visto que al ampliar y diver-

sificar sus inversiones, las grandes empresas periodísticas adquieren mayores compromisos. En México, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, por ejemplo, los medios de comunicación están controlados por grandes conglomerados económicos que tienen intereses en asuntos tan disímiles como la banca, la aviación, la ganadería, la construcción y la telefonía celular. Estos compromisos crean zonas de ingreso prohibido que comienzan a figurar en los radares de la sala de redacción a la hora de seleccionar las noticias, los comentarios y las investigaciones.

Los conflictos de intereses que surgen cuando las empresas de comunicación se lanzan a la conquista de negocios que no tienen relación con las noticias, no son exclusivos de Latinoamérica. En Estados Unidos también ocurren y cada vez con más frecuencia. La diferencia es que en este país, donde la competencia es más despiadada, esos conflictos son ventilados públicamente por los demás diarios o publicaciones universitarias dedicadas a la vigilancia de los medios de comunicación.

A finales de 1994, por ejemplo, *The Washington Post* tuvo que explicar a sus lectores, en un artículo de primera página, “la profunda vergüenza” que sus directivos sentían por haber editorializado en favor de la aprobación del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) por parte del Congreso, sin advertir que la empresa propietaria del diario resultaría beneficiada con el acuerdo. En la época en que se publicó el editorial, *The Washington Post Company* tenía planes de entrar en el negocio de los teléfonos inalámbricos. De acuerdo con las normas del GATT, la firma adquiriría una preferencia para la obtención de licencias de comunicación por varios millones de dólares y esto la colocaba en ventaja frente a otras firmas que no obtuvieron ese estatus.

“La intrincada manera como el Post se tropezó con el embrollo del GATT, ilustra lo complicado que el negocio de las noticias se ha vuelto, en una era en que prácticamente todas las grandes organizaciones noticiosas de Estados Unidos tienen intereses corporativos distanciados significativamente de la tarea de reportar noticias y editorializar”, escribió el reportero de medios de comunicación de *The New York Times*, William Glaberson.¹

La situación económica de muchos periódicos no les permite darse el lujo de dedicar a un periodista, y menos a un

¹ *The New York Times*, 5 de diciembre de 1994, pág. C8.

grupo, a la tarea exclusiva de investigar para publicar sólo un artículo una o dos veces al mes. La falta de personal y el exceso de fuentes en manos de un reportero son las quejas más comunes de los editores. De allí que cuando un reportero se presenta con un proyecto de investigación que requiere varios días de dedicación exclusiva, son muy bajas sus probabilidades de obtener el visto bueno para seguir adelante. Para separar temporalmente al redactor de sus tareas diarias, la compañía tiene una de tres opciones, todas ellas problemáticas: nombrar un sustituto, generalmente con menos experiencia; descuidar por un tiempo el campo que cubre el reportero o duplicar el trabajo de otros.

Obtener acceso legalmente a los archivos del gobierno es casi siempre imposible. Una de las principales causas de este problema es que muchos gobiernos han desconocido la reglamentación del derecho de petición, consagrado en casi todas las constituciones de América Latina. El de petición es un derecho que tienen los ciudadanos de solicitar respetuosamente información y explicaciones a sus gobernantes, y que contempla la obligación de los funcionarios de responder en un periodo determinado.

Algunos periodistas latinoamericanos trabajan para la prensa y al mismo tiempo reciben honorarios o estipendios de una entidad del gobierno. En Colombia le dicen “sobre”, en Nicaragua “venado”, en Perú “coima”, en Venezuela “palangres” y en México “chayotes”...

Con algunas variantes, todas son denominaciones de una misma trampa: la de periodistas que aceptan dinero, cargos o contratos especiales del sector público o de sus propias fuentes. Por lo general, la práctica es justificada con el argumento de que la escala de salarios, especialmente de los trabajadores de los medios impresos, es miserable. Algunos no la ocultan, como es el caso muy común de redactores de provincias que trabajan por la mañana en el diario de la ciudad y por la tarde en la oficina de prensa de la gobernación. Pero hay otros que reciben el pago por debajo de la mesa a cambio de publicar información positiva sobre la gestión de una dependencia del Estado, y de guardar silencio en los tiempos de crisis.

En México, la costumbre es tan generalizada y notoria que a finales de 1992 el gobierno ordenó a sus dependencias que en lugar de pagar los chayotes en efectivo, fueran distribuidos en cheques para tener un mayor control del gasto y su destinación. Los chayotes son un instrumento generalizado de control de los medios de

comunicación por parte del Partido Revolucionario Institucional, que ha estado en el poder desde hace 65 años.

Esta práctica, sostiene el periodista del diario *The Miami Herald*, Andrés Oppenheimer, ha hecho que México “a pesar de contar con periodistas valientes que desafían las reglas” sea probablemente el país con “una de las prensas más sumisas del hemisferio, después de la de Cuba”.²

El compromiso entre el gobierno y los periodistas opera de diferentes maneras:

- *El periodista recibe un pago mensual.* Sostiene Oppenheimer que la cantidad de dinero varía desde 120 dólares al mes para los periodistas que cubren el Senado, a más de 3000 dólares mensuales para un periodista destacado que cubra las actividades de la Presidencia. En comparación, el salario mensual de la mayoría de los reporteros es inferior a los 1000 dólares mensuales.
- *El periódico publica noticias y fotografías pagadas por el gobierno sin explicar que se trata de anuncios.* Un gran titular en un periódico matutino importante, agrega Oppenheimer, vale unos 200 000 dólares, según una fuente que ha participado en uno de esos contratos. Un titular más pequeño en un diario importante puede valer 30 000 dólares, afirmó la fuente.
- *El redactor recibe comisiones por la venta de publicidad al gobierno.* En su libro *La prensa vendida*, Rafael Rodríguez Castañeda, uno de los editores de la revista *Proceso*, de México, describe así la situación general de la corrupción del gremio:

“Desde el funcionario de más bajo nivel hasta el Presidente de la República, las instancias gubernamentales han asumido la tarea de cortejar, corromper y aun reprimir en la búsqueda de una prensa sumisa. En contraparte, muchos periódicos y periodistas –desde los reporteros de nota roja hasta directores y gerentes– han hecho suyo el hábito de cortejar y dejarse cortejar, adular, corromperse, chantajear, someterse,

²Chequera del PRI Mantiene Control Gubernamental de Prensa Mexicana, *El Nuevo Herald*, 31 de julio de 1992, pág. 1A.

ponerse al servicio del gobierno en su conjunto o del funcionario en lo personal, con las excepciones de quienes están dispuestos a enfrentar los riesgos de romper las reglas del juego.”³

Esta “trama de relaciones equívocas”, como llama el autor a los lazos de la prensa y el gobierno, quedó históricamente rubricada desde el 7 de junio de 1951, día en que los empresarios de la prensa nacional rindieron homenaje al entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, “en agradecimiento por hacer posible el ejercicio de la libertad de prensa”. Un año después, se instituyó el Día de la Libertad de Prensa y desde entonces no ha dejado de celebrarse como si fuera una generosa concesión del gobierno.

ESTRATEGIAS

Aunque las condiciones descritas no son alentadoras, el periodismo de investigación ha cobrado fuerza en los últimos años. Algunos editores se han convencido de que sus publicaciones pueden servir de muro de contención de la corrupción y otros se han dado cuenta de que es una de las pocas alternativas de la prensa para competir con la televisión y la radio.

En esta carrera de obstáculos, los periodistas parecen resueltos a lidiar con las circunstancias y tratar de colar sus trabajos en cualquier rincón del periódico. Ellos saben que hay ciertas zonas prohibidas donde no pierden el tiempo husmeando, y esquivan proyectos que requieren una gran inversión de tiempo y dinero. Hartos de las limitaciones, algunos renuncian a su empleo y logran autofinanciarse para escribir libros sobre asuntos que sus medios no publicarían. Otros se quedan y desarrollan sus propias estrategias. Esto es lo que explica que la reportería de investigación en nuestros países sea un oficio de periodistas solitarios que trabajan por cuenta propia, en horas extras y no remuneradas.

Fernando Martí, ex reportero de la publicación mexicana *Unomásuno*, sostiene que en México el que quiera abrirse paso en el periodismo de investigación tiene que trabajar por su propia ini-

³ Rafael Rodríguez Castañeda, *Prensa vendida, los periodistas y los presidentes: 40 años de relaciones*, Grijalbo, México, 1993, pág. 13.

ciativa, pues la estructura de las salas de redacción en el país conspira contra esta disciplina.⁴ En México, agrega el reportero, los periódicos están concebidos para cubrir acontecimientos del día, reciclar comunicados de prensa y amplificar las declaraciones oficiales, pero no hay espacio para el análisis y la profundidad. Si después de su silencioso esfuerzo, el periodista logra publicar un material que causa alguna agitación en la opinión pública, entonces, dice Martí, tiene probabilidades de ganarse la confianza de sus jefes y tal vez de obtener su respaldo para proyectos futuros. De lo contrario, se quedará esperando a que un día el editor de turno se le ocurra darle una oportunidad.

La situación descrita por Martí se repite en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, los periodistas se las ingenian para publicar grandes y pequeños reportajes de investigación tras adaptarse forzosamente a las limitaciones de la empresa y aprovechar al máximo sus concesiones. Especialmente las de aquellos editores que quieren que sus publicaciones saquen casos originales y dejen de depender exclusivamente de las investigaciones oficiales.

Pero con todo y los buenos propósitos, los problemas logísticos y económicos prevalecen: ¿Cómo puede un periódico cumplir con la cobertura diaria de noticias y al mismo tiempo publicar con cierta frecuencia informes investigativos? ¿Es necesario contratar a reporteros dedicados a la investigación o se puede trabajar con los redactores que ya existen librándolos temporalmente de sus responsabilidades diarias?

CON DOS SOMBREROS

En la década de los ochenta, cuando el periodismo de investigación estaba en pleno furor en Colombia, varias publicaciones encontraron una solución intermedia al problema de cómo combinar el trabajo diario con el de investigación.

El Espectador de Bogotá, un periódico que se ha caracterizado por su espíritu fiscalizador, ha demostrado en varias oportunidades que no se requiere un equipo preconstituido de reporteros investigadores para trabajar en proyectos especiales. Los directivos del diario prefieren que todos sus reporteros tengan la oportu-

⁴Fernando Martí, *Charla con periodistas de la cadena de periódicos Novedades*, Cancún, México, 9 de febrero de 1994.

nidad de investigar, y rechazan la idea de canalizar las denuncias que llegan a la sala de redacción, hacia a un grupo de periodistas especializados.

“Cualquier caso, cualquier situación, cualquier información, puede conllevar a cualquier periodista a una investigación exitosa”, sostenía Héctor Giraldo, abogado del periódico, asesinado por miembros del cartel de Medellín. “Todo está en el periodista mismo y no en unidades investigativas ni en aparatos montados especialmente, porque a mi juicio esas unidades lo que hacen es formar una especie de privilegiados dentro del periódico, a donde no tienen acceso los demás, los que se supone que sólo deben cargar ladrillos.”⁵

Desde 1983, *El Espectador* manejó colectivamente el destape de una crisis financiera que comprometió al banquero más poderoso de la época, Jaime Michelsen, y a los directivos del Grupo Grancolombiano, en la desviación del dinero de ahorradores para beneficio personal y de la corporación. Las denuncias del periódico y otros hallazgos de la Superintendencia Bancaria precipitaron la intervención y posterior nacionalización del Banco de Colombia, el centro de operaciones del poderoso grupo financiero conocido como “El Águila” por el logotipo del banco.

Redactores de diferentes secciones se unieron a la campaña periodística con material novedoso que habían encontrado en su área de trabajo, ya fuera económica, judicial o departamental. Sólo cuando el caso se puso lo suficientemente caliente, el diario nombró a una persona que coordinó el trabajo de todos los periodistas que habían estado más o menos cerca de la noticia.

El Espectador ha mantenido esta línea de trabajo bajo la coordinación de Fabio Castillo e Ignacio Gómez, veteranos reporteros investigativos expertos sobre narcotráfico, paramilitarismo y delitos financieros. La estrategia de *El Espectador* tal vez sea la más común en Latinoamérica. De la misma forma trabajan publicaciones como *Página 12* de Argentina, *Proceso* de México, *Caretas* de Perú y en algunos casos, *Semana y Cambio 16* de Colombia.

Estas dos últimas combinan ambas modalidades. Algunos reportajes de profundidad o investigación son responsabilidad de un grupo investigativo, o de una persona, como es el caso de María

⁵ Héctor Giraldo, *Ponencia presentada al Seminario de Periodismo Investigativo*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, septiembre de 1985.

¿CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO?

Cristina Caballero en *Cambio 16*, o Jorge Lesmes en *Semana*. Otros artículos son elaborados por el reportero que obtuvo los primeros indicios.

A excepción de periódicos como *El Tiempo* de Bogotá, *La Nación* de Costa Rica, *Reforma* de México, *El Expreso* de Ecuador, *El Comercio* de Lima y *El Mercurio* de Chile, que cuentan con un grupo de reporteros dedicados casi exclusivamente a la investigación, la mayoría de los grandes diarios de la región distribuyen las cargas según la disponibilidad de personal o la experiencia del reportero en el tema.

Cuando el problema es falta de personal, hay una salida que tiene grandes ventajas: es la vinculación a los proyectos de investigación de estudiantes de periodismo en periodo de prácticas. El periodismo de investigación genera una dispendiosa actividad de consulta de archivos y documentos que puede confiarse a los estudiantes previamente instruidos sobre cómo clasificar la información y la necesidad de mantener bajo la máxima discreción el contenido del proyecto. Con una buena dirección y orientación los practicantes ahorran tiempo y trabajo al periódico, a la vez que aprenden las técnicas elementales de una de las asignaciones más “glamorasas” en el medio académico como es el periodismo de investigación.

En la Unidad Investigativa de *El Tiempo* tuvimos una muy buena experiencia en este sentido con estudiantes de derecho que fueron comisionados para un proyecto de evaluación de la Procuraduría General de la Nación. Su labor consistía en revisar el movimiento de los procesos disciplinarios en las principales delegaciones de esta oficina.

En el desarrollo de este trabajo descubrimos un expediente que contenía las quejas de las condiciones inhumanas en que vivían los internos de un frenocomio de Bogotá.

¿CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO?

He tenido la oportunidad de trabajar en las dos modalidades en que se practica el periodismo investigativo: como integrante de un grupo dedicado exclusivamente a la investigación y como “bombero voluntario” que combina la reportería diaria con la publicación esporádica de artículos más profundos, en un periódico en español

de Estados Unidos de América. Ciertamente, la experiencia en un equipo especializado como el de la Unidad Investigativa de *El Tiempo*, donde trabajé durante más de ocho años, tiene mejores resultados que el trabajo que hago en horas extras en *El Nuevo Herald* de Miami. Con todo y el fastidioso riesgo de ser vistos como cuerpos elites de la redacción, estoy convencido de que los grupos de trabajo dedicados exclusivamente a la investigación, sin la premura de las horas de cierre, desarrollan su labor más profesionalmente que quienes trabajan en forma individual y bajo la presión de la entrega del material.

Las ventajas saltan a la vista:

- **Tiempo.** Con tiempo se puede planear, ampliar y verificar un plan de trabajo. Por falta de tiempo, un reportero se ve obligado ya sea a sacrificar primicias en su frente cotidiano, o profundidad en sus investigaciones.
- **Especialidad.** El periodista investigador adquiere un dominio más profundo y variado de la información que el de sus colegas de la sala de redacción, gracias a su inmersión en el tema que investiga.
- **Orientación.** A fuerza de buscar constantemente vías de acceso a la información, los periodistas investigadores desarrollan un sentido práctico y ágil de orientación en los laberintos de los sectores público y privado. El periodista investigador sabe automáticamente dónde buscar un documento, y conoce los instrumentos jurídicos para obtenerlo.
- **Autocontrol.** Los periodistas que trabajan en equipo tienden a ejercer un amistoso pero rígido control de calidad del trabajo de sus compañeros, para garantizar que el material que llega al editor esté libre de imprecisiones y riesgos legales.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE EL TIEMPO

Organizar un equipo de investigación sólo requiere la voluntad de hacerlo. No se necesita, como piensan algunos periodistas, una “cultura de periodismo investigativo”. Lo demás viene por añadidura.

La Unidad Investigativa de *El Tiempo* es para mí el más cercano y útil ejemplo de cómo trabajar en equipo. Empecé a trabajar en esta sección a finales de 1980 en calidad de “datero”, un cargo con el que se conoce en Colombia al reportero principiante que debe cumplir con el trabajo anónimo de salir a la calle a buscar datos y documentos.

Nuestro equipo nació en 1977, sin acta de fundación y terminó a finales de los ochenta, sin extemaunción. Contagiado por la fiebre que había despertado el escándalo de Watergate, el periodista colombiano Daniel Samper regresó de Estados Unidos con la idea de que en Colombia caería muy bien una prensa como la estadounidense, independiente, crítica e investigativa.

“La mayoría de colombianos están buscando a alguien para contarle la corrupción que se ve a diario”, dijo el periodista en 1975 tras culminar una especialización de periodismo en la Universidad de Kansas. Samper había podido palpar esta necesidad del público a través de la abundante correspondencia que recibía como testimonio de lectura de una columna de opinión que publicaba diariamente en *El Tiempo*, con el nombre de *Reloj*.

Escrita en tonos para toda ocasión, la columna combinaba política, fútbol, cuentos, poesía y sainetes familiares con sobrias denuncias de favoritismo, malversación de fondos públicos, nepotismo, actos de mal gusto de los funcionarios públicos y abusos contra los consumidores. Cualquier persona que quería “dar a conocer algo que merezca publicarse por singular o curioso, o por su interés social”, tenía “su puesto en el mundo complejo de los escritos de Samper”, escribió el periodista Germán Manga.⁶ Entre los más asiduos colaboradores de la columna estaba Alberto Donadío, un estudiante de derecho de Medellín, experto en legislación de recursos naturales y derecho de acceso a documentos. Donadío enviaba con frecuencia comentarios e información sobre temas que servían a Samper para sus columnas. Después de una larga amistad epistolar, Samper invitó a trabajar a Donadío, quien aceptó, y terminó sus estudios de abogacía en la Universidad de los Andes de Bogotá. En 1977, los periodistas inauguraron la Unidad Investigativa, con la publicación de una serie de artículos sobre el saqueo al exterior de fauna colombiana. Pero tal vez el informe

⁶ Daniel Samper Pizano y José Salgar enseñan periodismo, Oveja Negra, Bogotá, 1986, pág. 10.

que dio a conocer al equipo fue el que involucró al entonces ministro de Obras Públicas, Humberto Salcedo Collantes, en prácticas de favoritismo en la adjudicación de contratos a un amigo cercano.

A raíz de las publicaciones, Samper y Donadío fueron citados al Congreso a fin de exponer los hechos que sirvieron para abrir una investigación contra el funcionario. Con el respaldo del Presidente, Salcedo hizo caso omiso de un insistente clamor de que renunciara a su cargo y alegó que las informaciones no contenían suficientes pruebas para sustentar las denuncias de compadrazgo en la adjudicación de los contratos. Años después, la Comisión de Acusaciones de la Cámara absolvió al ministro con el mismo argumento que el funcionario había esgrimido ante la opinión pública.

En un país donde la justicia y el gobierno son poderes ancestralmente distanciados de la gente común, la Unidad Investigativa se transformó poco a poco en un muro de lamentaciones. El buzón de la oficina se llenó de quejas de ciudadanos decepcionados con la impunidad y la lentitud de la justicia; de empleados maltratados que acusaban a sus jefes; de amas de casa indignadas por los servicios públicos, y de políticos que querían torpedear la carrera de sus adversarios (con denuncias de pecados ocultos). Las cartas y los rumores los distribuíamos de acuerdo con la afinidad y experiencia que tuviéramos con el tema. Samper, director del equipo, se encargaba de publicar en su columna aquellos casos que por su trasfondo moral necesitaban un refuerzo de opinión o una dosis de sarcasmo. Era además el responsable de la ingrata tarea de discutir los proyectos con el editor. Donadío respondía por los asuntos ecológicos y financieros, y seguía muy atento la legislación relacionada con el derecho de petición y acceso a documentos. Cada vez que a un funcionario se le ocurría interpretar a su antojo las normas de la legislación que protegían esos derechos, Donadío respondía con una artillería legal que incluía cartas a los superiores del burócrata, quejas a la procuraduría y en última instancia, demandas ante el Consejo de Estado y los tribunales de lo contencioso administrativo.

Mi responsabilidad inicial fue el Congreso, el sector de la salud, los casos de corrupción regional y, a falta de Donadío, el medio ambiente. Después estuve como director del equipo por un año, cuando Samper tuvo que abandonar el país por amenazas y Donadío renunció para dedicarse a escribir libros históricos al estilo de la obra de Robert Caro.

Procurábamos leer todas las cartas y atender todas las llamadas. Esta última labor se facilitaba gracias a que contábamos con la valiosa ayuda de una secretaria de tiempo completo. Nuestra oficina funcionaba en un área separada de la redacción del diario. Donadío y yo no teníamos obligación de cubrir fuentes fijas ni de producir material diariamente. Varios criterios definían las prioridades en nuestras largas listas de proyectos de investigación. En principio, evaluábamos la gravedad de las irregularidades y los factores económicos y logísticos que conllevaba probarlas. Nunca consideramos conveniente hablar con nuestros colegas de la redacción sobre los temas que estábamos investigando. Samper informaba a los editores de los proyectos sólo cuando teníamos indicios suficientemente sólidos.

De todas las labores, la de convencer al editor era la más frustrante. Como ya se ha dicho al principio de este capítulo, para nadie en Latinoamérica es un misterio que antes de discutir aspectos meramente periodísticos de un proyecto de investigación, muchos editores están preocupados por saber en qué medida la publicación afectará amistades de él, de otros editores o de los dueños del medio de comunicación; si se corre el riesgo de un retiro de publicidad; si perjudicará las alianzas políticas de la empresa o sus compromisos con el gobierno, y finalmente si el país está en condiciones de orden público para asimilar la denuncia.

Como puede observarse, no es un examen propiamente periodístico ni fácil de aprobar, y aunque las inquietudes varían en cada empresa, no hay duda de que éstas han desalentado el desarrollo del periodismo de investigación en la región. La Unidad Investigativa no era un oasis latinoamericano en ese sentido. Teníamos que lidiar con varios de los obstáculos mencionados con una imprevisible frecuencia. Aprovechábamos la ausencia del editor general, la solidaridad de algunos de sus hijos y sobrinos con nuestra labor, y la neutralidad de los directivos hacia algunos temas.

“Inventar recursos y estrategias para garantizar la publicación se convirtió en parte del trabajo”, escribió Donadío en una columna del diario bogotano *El Espectador*, en la que señalaba que estas trabas terminaron por cansarnos y produjeron nuestro retiro.

A pesar de las limitaciones, la Unidad Investigativa publicó durante unos 12 años y en forma ininterrumpida, más de 300 artículos con una periodicidad de uno cada 15 días. Esto sin contar las centenas de columnas de Samper. Tuvimos libertad para denunciar

congresistas, jueces, banqueros, funcionarios del sector de las telecomunicaciones que recibieron sobornos de una compañía de teléfonos, empresas que querían burlar impuestos, un procurador general que alteró su currículum para favorecer su pensión, un empresario que desangró una compañía automotriz del Estado, desfalcos en obras públicas, favoritismos y múltiples casos de inseguridad aérea. De hecho, varios de estos artículos fueron publicados con el visto bueno de los editores y a sabiendas de que en los días siguientes tendrían que encontrarse con los acusados, cara a cara, en los clubes sociales que frecuentaban.

Aunque los sueldos que recibíamos no eran buenos, el periódico no escatimó recursos para viajes, fotocopias y llamadas telefónicas. Creo que la experiencia valió la pena. Y mi recomendación para quienes afrontan problemas similares es que traten de publicar lo que se pueda, y lo que no, lo guarden para escribir libros.

Conscientes de que a las quejas de los consumidores no se les daba la importancia que merecían en el diario, a mediados de 1980 se creó un grupo de trabajo bajo la coordinación de la Unidad Investigativa, que se encargó de investigar los abusos cometidos por el comercio y la industria contra sus clientes. La Unidad del Consumidor, que estuvo a cargo en diferentes periodos de las periodistas Liliana Tafur, María Dolores García, María Luisa Mejía y del reportero Carlos Gustavo Álvarez, tuvo mucho éxito entre los lectores. Uno de los reportajes que quedó grabado en la memoria de varios de ellos, es un ejemplo de cómo publicar informaciones útiles en corto tiempo y con un presupuesto mínimo.

El objetivo del artículo era mostrar el imprevisible mundo de las tarifas de los talleres de reparación de automóviles. Para esto, el editor de la revista *Motor de El Tiempo*, José Clopatofski, alteró el funcionamiento de una bujía de un automóvil Renault 4 en el que María Luisa visitó varios talleres para que le hicieran un diagnóstico y avalúo de la falla. Después de un largo recorrido, la reportera, que actuó con la espontánea candidez de un ama de casa que no tiene idea de mecánica, regresó al periódico con una interesante muestra de los abusos de unos mecánicos y de la honestidad de otros. Un simple daño cuya reparación sólo consistía en cambiar o reparar la bujía, fue evaluado en algunos sitios en varios miles de pesos y en otros fue arreglado gratuitamente. El artículo dio los nombres de los talleres que jugaban limpio y aquellos donde recomendaron costosas reparaciones.

A raíz de la creación de la Unidad Investigativa de *El Tiempo*, surgieron en otros departamentos del país nuevas unidades de investigación que muy pronto se dieron a conocer entre sus lectores con magníficos trabajos donde salieron a relucir, por primera vez, los grandes vicios de las administraciones regionales.

Cabe destacar los esfuerzos de la Unidad de Investigaciones del diario *Vanguardia Liberal* de Bucaramanga, departamento de Santander, que bajo la dirección de Silvia Galvis se convirtió en un ejemplo de cómo el periodismo regional puede hacerse sentir por sí solo sin esperar refuerzos del encopetado, y muchas veces despistado periodismo de la capital.

Después de la salida de Donadío y de Samper y de mi viaje a Estados Unidos en 1988, la Unidad Investigativa quedó a cargo de un grupo de jóvenes reporteros. Entre ellos se encontraba Luis Cañón, autor de *El Patrón*, una interesante biografía del narcotraficante Pablo Escobar, que en pocos meses se convirtió en el libro más vendido y pirateado de los últimos años. El equipo se disolvió un año después y su nombre de combate sólo apareció esporádicamente en la primera mitad de los noventa, en artículos preparados por María Cristina Caballero y Alejandro Santos.

EL LUGAR DE TRABAJO

Una oficina independiente, ojalá con puerta y seguro, y por lo menos con dos líneas telefónicas, es el lugar ideal de trabajo de un equipo de investigaciones. En la Unidad Investigativa compartíamos archivadores para las carpetas que abríamos a cada denuncia, ya fuera por tema o bajo un rótulo personal. Acostumbrábamos guardar memorandos con los datos obtenidos en la entrevista inicial, indicando la fecha y la forma como los recibíamos y el nombre de quien los tomó. Llevábamos además un archivo consecutivo de correspondencia despachada, para tener una idea de cuándo se vencían los términos a los funcionarios públicos para responder nuestras solicitudes.

Si el tema en investigación estaba en las noticias del día, abríamos una carpeta con recortes de prensa. Puesto que en esa época el periódico no había comenzado su etapa de tecnificación, el sistema de archivo era totalmente físico. Esta labor se hace mucho más fácil y rápida en la actualidad gracias a los programas de bases de

datos que cruzan la información, y sistemas de lectura (*scanner*) que trasladan documentos, en cuestión de segundos, a un archivo electrónico. Los archivos físicos continúan siendo indispensables para el periodismo de investigación.

La oficina de un periodista investigador debe contar con una biblioteca básica con las siguientes publicaciones:

- *Legislación*: Constitución Política, código sustantivo y de procedimiento civil, penal, laboral y comercial; legislación sobre contratación pública (licitaciones, concesiones, subastas, etc.); decretos de reglamentación de los actos de los funcionarios públicos, sus inhabilidades e impedimentos; fallos de la Corte y los tribunales administrativos, memorandos y circulares relacionados con la función pública; leyes sobre injuria y calumnia.
- *Directorios*: además de las listas telefónicas comunes, es conveniente tener a mano directorios de despachos públicos y otros especializados por profesiones y ocupaciones. Si es posible, una buena colección de manuales de “¿Quién es quién?” en la política, en la industria, en el comercio o en el deporte. Conserve los directorios viejos, porque resultan de gran ayuda.
- *Diccionarios*: especialmente los de términos jurídicos y técnicos.
- *Suscripciones*: diarios regionales, diarios oficiales, publicaciones periódicas del congreso, las fuerzas armadas y el poder judicial; publicaciones especializadas de gremios, asociaciones y fundaciones; libros y boletines de estadísticas.

REGALOS E INVITACIONES

Para evitar compromisos y suspicacias es recomendable que los periodistas no acepten invitaciones ni regalos de sus fuentes y mucho menos de entidades públicas.

En la Unidad Investigativa resolvimos poner en práctica una política que rechazaba los obsequios de valor comercial, no importaba que su origen fuese del sector público o del privado. Cuando recibíamos regalos, los devolvíamos con una nota muy cortés en la que explicábamos nuestra política.

CUALIDADES DE UN PERIODISTA INVESTIGADOR

Sostiene Clark Mollenhoff, un veterano periodista investigador, autor de un manual de periodismo de investigación, que algunas personas “nacen con el instinto para ser reporteros investigativos” y muchos adquieren algunas de las cualidades a través del ensayo y el error.

Con el perdón de los académicos que han librado una dura batalla por excluir de la profesión a quienes no tengan título de periodistas, agregaría que para ser reportero investigador no es absolutamente necesario estudiar comunicación social o periodismo. Si ése es el caso, es muy importante que la carrera sea complementada con estudios de derecho, economía o administración pública.

Cualquiera que sea su situación, es muy importante que tenga muy en cuenta los siguientes aspectos de su preparación profesional:

- Usted debe estar familiarizado con la estructura del Estado y conocer la naturaleza jurídica de las diversas entidades del gobierno nacional, provincial o regional, así como la jerarquía de los actos de la administración (resoluciones, decretos, ordenanzas, etc.).

En este sentido, es de gran utilidad conocer la dinámica interna de organismos de vigilancia del Estado tales como contralorías, superintendencias (bancarias, de seguros, de protección al consumidor), procuradurías y veedurías.

- Debe tener un conocimiento general de las normas que regulan los conflictos de intereses de los empleados públicos; los impedimentos legales, incompatibilidades e inhabilidades para ejercer sus cargos y para contratar con el Estado. Familiarizarse con el marco legal del tema que usted está trabajando toma su tiempo, pues existen muchas leyes que continuamente son reformadas o derogadas sin que trasciendan a la opinión pública. Para complicar más el asunto, las leyes tienen excepciones y en algunos casos los fallos jurisprudenciales cambian su interpretación. Pero al mismo tiempo, en nuestros países tenemos la ventaja de que por cada ley expedida hay varios abogados dispuestos a explicar sus laberintos. Así que la mejor manera de ponerse al día es consultar a

un abogado especializado en el tema que usted investiga. En asuntos como los tributarios y financieros, no deje de hacerlo por más que usted crea que la legislación consultada es lo suficientemente clara.

- Debe tener conocimiento de los antecedentes históricos de los grandes escándalos de corrupción que han sacudido a su país.
- Debe conocer los estatutos sobre contratación de la nación con los particulares; cómo funciona una licitación pública y privada, y cómo se resuelven las disputas entre los particulares y el gobierno.
- Debe estar al tanto de los estudios hechos por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, conocidas también como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre derechos humanos, crisis y tendencias sociales.
- Es muy importante también tener idea de la legislación penal, especialmente en lo que se refiere a delitos contra la administración pública tales como peculado, cohecho (soborno), prevaricato, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Es indispensable, además, conocer las normas sobre tráfico de drogas y lavado de dinero.
- Debe tener una idea general de cómo funciona la economía de su país; los sectores informales, las economías subterráneas, la inversión extranjera.
- Debe dominar las normas de derecho de acceso a los documentos públicos y estar al día en la jurisprudencia y en los conceptos relacionados con el tema.
- Debe saber cómo funciona el Congreso, el trámite de las leyes y tener una comprensión general de las leyes del presupuesto.

Pero más allá de los conocimientos científicos o técnicos, el periodista debe tener una firme convicción de lo que es justo y honesto. Tan firme como su capacidad para indignarse por las cosas que no funcionan y que se aceptan con resignación por el resto de la gente como parte de su vida. Debe ser un profesional independiente de sus fuentes y de las personas que investiga, y no puede dejarse influir en su trabajo por el disgusto que producen quienes le mienten o tratan de ocultar la información que los compromete.

El periodista debe tener la suficiente madurez para suspender sus averiguaciones cuando los documentos o los testimonios no justifican su publicación. Debe aprender a escuchar y a ponerse en el lugar de quienes aparecen comprometidos en sus denuncias, “y preguntarse a sí mismo si ha sido justo en el trato con sus fuentes confidenciales, sus fuentes públicas, y con las personas que han sido objeto de su arriesgada investigación”, dice Mollenhoff. Pero sobre todo debe tener el coraje, agrega el periodista, de admitir que estuvo errado en hechos o perspectivas y dar los pasos necesarios para corregir el error.

CAMPOS MINADOS

La vida del periodista investigador corre un doble riesgo en nuestros países: los riesgos comunes del periodista y los que le depara su impertinencia. De allí la importancia de saber cuán minado está el campo de trabajo en donde usted está a punto de dar el primer paso. Como señalaba en otro capítulo, un informe periodístico de investigación se caracteriza porque tarde o temprano el periodista se entera de que hay alguien interesado en ocultar la verdad o en impedir que el asunto salga a la luz.

Esto supone que usted tiene que confrontar a las personas que tratan de esconder lo que está buscando, y después de publicada la información, encarar sus reacciones y pataleos. En un mundo ideal, la confrontación se produce en términos más o menos civilizados, que no están exentos de amenazas de pleitos legales y uno que otro insulto. Pero la realidad en nuestros países es diferente. Cada año la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas publican una larga lista de reporteros asesinados, torturados, golpeados o secuestrados, que ilustran esa cruel diferencia.

Aunque no existen estadísticas precisas por la falta de seguimiento en cada país, las organizaciones que registran los casos están de acuerdo en que la mayoría de las víctimas han sido reporteros que buscaban o habían publicado información “delicada”. Por “delicada” debe entenderse actividades ilegales del gobierno, de las fuerzas militares y de organizaciones delictivas como narcotraficantes, grupos paramilitares o alzados en armas.

¿Qué hacer cuando usted sabe de antemano que el campo que empieza a transitar está minado y que en cualquier momento las personas que se sienten acosadas por sus andanzas, resolverán activar las minas? Algunos periodistas sostienen que hay muchas cosas por hacer en su profesión sin correr riesgos de perder la vida, y hay otros que los asumen a sabiendas de que les pende de un hilo. En Colombia, el país que tiene el penoso récord en Latinoamérica del mayor número de atentados contra la prensa en los últimos cinco años, se han dado todas las alternativas: la de quienes no se han callado pese a las amenazas, la de quienes se han ido del país para no ser asesinados, y una tercera, de supervivencia gremial, que es la de haber encarado la intimidación de manera colectiva.

De 1981 a 1989, fueron asesinados en Colombia 33 periodistas. En las listas del Comité para la Protección de los Periodistas, las circunstancias más comunes registradas frente a los nombres de las víctimas son: "Muerto por un sicario. Investigaba narcotráfico" "Investigaba corrupción", "Se sospecha de la policía", "Ligaba a funcionarios con el negocio de la droga".⁷

En esta racha cayó asesinado el director de *El Espectador* Guillermo Cano Isaza, el 17 de diciembre de 1986; el periódico de propiedad de su familia fue blanco de un atentado dinamitero en septiembre de 1989, lo mismo que el diario *Vanguardia Liberal* de la ciudad de Bucaramanga, en octubre del mismo año. Convencidos de que las amenazas pasaban muy pronto del papel al gatillo, varios periodistas abandonaron el país. Por esta vía, los grandes diarios colombianos y la televisión vieron marchar a un prestigioso grupo de periodistas "cuya credibilidad permanecía intacta pese al creciente escepticismo del público con la prensa en general",⁸ entre ellos:

⁷ *Committee to Protect Journalist*, borrador de un informe consolidado de periodistas desaparecidos, asesinados y secuestrados en el mundo desde 1976 hasta 1991. El Comité para la Protección de los Periodistas es una organización sin ánimo de lucro no partidista, fundada en 1981 para investigar y protestar por ataques contra periodistas y restricciones de la libertad de prensa en el mundo. La organización publica el boletín bimestral *CPJ Update*. La dirección de la organización en Nueva York es 36 West 44th Street, New York 10036, Teléfono (212) 944-7216.

⁸ Merril Collett, "First, Drug Dealers; Now, Political Killers: Hazards Mount for Colombian Press", *CPJ Update, Committee to Protect Journalism*, enero-febrero de 1988, núm. 32, págs. 1 y 3.

- Antonio Caballero, el columnista más leído de *El Espectador*, abandonó el país en 1987 después de recibir varias amenazas de muerte. Los periodistas amenazados, dijo entonces, “somos los que criticamos los excesos del sistema, los excesos de las fuerzas militares, la no investigación de los asesinatos políticos y el crecimiento de la violencia ante la pasividad de las autoridades cívicas y eclesiásticas”.⁹
- Daniel Samper, el columnista más leído de *El Tiempo*, viajó a España en octubre de 1987. Había recibido varias llamadas y un telegrama intimidatorio luego de publicar una serie de columnas sobre un turbio negocio del entonces ministro de Justicia.
- Mauricio Gómez, director de un premiado noticiero de televisión que tenía los más altos índices de audiencia, salió hacia Estados Unidos a principios de 1988. Gómez mostró en el noticiero un facsímil que sus fuentes sostenían que era parte de la contabilidad secreta del narcotraficante Jorge Luis Ochoa.

Los tres periodistas permanecen en el exterior.

No todos dejaron el país. María Luisa Mejía, que aparecía en una de las listas negras que circuló en agosto de 1987 con nombres de personas que ya habían sido asesinadas, siguió cubriendo las noticias de los movimientos guerrilleros para un noticiero de televisión. Patricia Lara, columnista independiente y Edelmiro Franco, que también recibieron amenazas, continuaron en el país sin sufrir atentados.

“Si tiene que luchar toda su vida por un tipo de periodismo en el que usted cree, usted no puede irse”, dijo entonces María Luisa, quien había integrado el equipo de investigación de *El Tiempo*.¹⁰

María Jimena Duzán, periodista de *El Espectador*, también prefirió quedarse. Las experiencias que justificaron personal y profesionalmente su permanencia, están narradas en una vibrante autobiografía de la reportera que abarca su vida profesional durante la azarosa década de los ochenta, el asesinato de su herma-

⁹ Gerardo Reyes, “Traficantes hacen huir a periodistas”, *El Nuevo Herald*, 20 de marzo de 1988, págs. 1A y 2A.

¹⁰ Citada por el autor en “Traficantes hacen huir a periodistas”, *El Nuevo Herald*, 20 de marzo de 1988, págs. 1A y 2A. (María Luisa Mejía falleció en 1988 en un accidente aéreo).

na Silvia y de Guillermo Cano, y culmina con la muerte del narco-
traficante Pablo Escobar en 1993.¹¹

CERRAR FILAS

Después del asesinato de Guillermo Cano, los periodistas colombianos se unieron a fin de plantear una estrategia común para la publicación de informes relacionados con el narcotráfico. El asesinato, cometido por sicarios de narcotraficantes que estaban furiosos por la publicación de editoriales incómodos para su soberbia, había despertado entre los periodistas una mezcla de rabia, impotencia y solidaridad.

“Podrán seguir matando a periodistas y jueces, y sobornando autoridades civiles y de policía, y reclutando sus asesinos a sueldo entre las filas de una juventud sin horizontes ni trabajo”, escribió el editorialista de *El Tiempo*, Enrique Santos Calderón el 28 de diciembre de 1986. “Pero estos mercaderes de la muerte; esta mafia cobarde que se mueve en las tinieblas y mata sin dar la cara, tiene que saber que hay cientos y miles de Guillemos Canos dispuestos a seguir su ejemplo. Que hay una prensa que no se dejará intimidar. Y una comunidad de colombianos conscientes que librarán todas las batallas necesarias para liberar al país de la peor de las dictaduras: la del miedo, el silencio y la corrupción que pretenden imponer los narcotraficantes.”¹²

Los periodistas conformaron grupos de trabajo que se encargaron de coordinar la publicación conjunta y simultánea de reportajes especiales sobre el narcotráfico. Los autores no eran identificados. Del acuerdo gremial resultó un corto experimento sin antecedentes en el país. En total se publicaron cinco informes especiales, uno de los cuales fue una versión condensada de un extenso trabajo periodístico cedido por el diario *The Miami Herald*, días después de su publicación en Estados Unidos. El artículo contenía el organigrama del cartel de Medellín con un breve perfil de cada uno de los grandes capos y sus fotografías. Aunque en el país se

¹¹ El libro fue publicado en 1993 en español con el título *Crónicas que matan* y en 1994 en inglés, con el título *Death Beat*.

¹² Enrique Santos Calderón, *Fuegos cruzados; guerrilla, narcotráfico y paramilitares en Colombia en los años ochenta*. Columna “No Pasarán”, 28 de diciembre de 1986. Fondo Editorial Cerec, Bogotá, 1989, págs. 154, 155, 156.

sabía quién era quién en la cúpula del cartel, ésta era la primera vez que la información fragmentaria se integraba visualmente en una página entera donde figuraban los antecedentes criminales que tenía cada uno de los narcotraficantes en Estados Unidos y sus nexos entre sí.¹³

Otro de los artículos colectivos fue una detallada reseña del asesinato del coronel de la policía Jaime Ramírez, jefe de la Unidad Nacional Antinarcóticos. Ramírez fue asesinado por narcotraficantes en venganza por una operación que estuvo a su cargo y que culminó con el desmantelamiento de un gigantesco centro de procesamiento de cocaína conocido como *Tranquilandia*. Duzán afirma que los trabajos colectivos no continuaron debido al temor a las represalias y desacuerdos entre los periodistas. El entonces director del diario *El Colombiano* de Medellín, Juan Gómez Martínez, argumentó que los informes especiales representaban un riesgo mayor para las publicaciones de esa ciudad que para las de otras capitales del país, afirma Duzán.

“Mientras tanto, los participantes de la radio y la televisión tenían problemas para encontrar reporteros que estuvieran dispuestos a salir al aire y describir nuestros reportajes, por temor a ser identificados.”¹⁴

Aunque corta, la experiencia de los periodistas obtuvo un reconocimiento internacional ya que fue considerada como una respuesta oportuna y recursiva ante la capacidad intimidatoria de los narcotraficantes. “Es la prensa la que está escarbando la información criminalmente procesable de los traficantes de drogas, nadie más lo hace”, dijo entonces Bruce Bagley, un colombianólogo de la Universidad de Miami.¹⁵

Las circunstancias también han forzado a los periodistas del Perú a trabajar en un frente unido que renunció a competir por la primicia, para unir voces y capotear riesgos comunes. La matanza de la Cantuta es un ejemplo de cooperación gremial con resultados concretos. Las denuncias de las revistas *Sí*, *Caretas* y del diario *La República*, cuyos periodistas se unieron para seguir el caso y

¹³ María Jimena Duzán Sostiene en su libro *Death Beat* que fue un error táctico publicar la serie del periódico estadounidense porque en Colombia la información ya se conocía.

¹⁴ María Jimena Duzán, *Death Beat; A Colombian Journalist's War Inside the Cocaine Wars*, Harper Collins, Nueva York, 1994, pág. 55 (traducido y editado por Peter Eisner).

¹⁵ Newell Coke, *Dying Words; Colombian Journalists and the Cocaine Warlords* (For Collins, Colorado, Red Mesa, Publishing), 1991.

muchas veces intercambiar datos, despertaron interés nacional e internacional a tal punto que el escándalo pasó a ser tema de discusiones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos.

“Aunque ha habido grados de competencia”, señala el periodista peruano Gustavo Gorriti, “jamás pensé que en el ambiente terriblemente competitivo que había antes, se fuera a llegar a los niveles de cooperación que veo ahora entre las revistas”.¹⁶

A continuación presentamos una reseña histórica de otro interesante experimento de trabajo gremial que se llevó a cabo en Estados Unidos a raíz de la muerte de un periodista que investigaba un santuario de la corrupción en el estado de Arizona. El trabajo de los periodistas ayudó a consolidar la más grande organización de reporteros y editores de investigación de Estados Unidos.

APÉNDICE 2

La muerte de un periodista

El 2 de junio de 1976, Don Bolles, periodista del diario *Arizona Republic*, se disponía a salir en su automóvil del estacionamiento de un hotel de la ciudad de Phoenix, donde había obtenido información para continuar con una extensa investigación de fraudes y corrupción estatal. Cuando el reportero de 47 años giró la llave del encendido, el automóvil explotó. Segundos después, moribundo, alcanzó a musitar algunas palabras que se convirtieron en una pista para seguir a los autores del crimen:

“Por fin me consiguieron. La Mafia. La organización. Busquen a John Adamson”, dijo el reportero.

Bolles murió el 13 de junio. El asesinato produjo una masiva respuesta de solidaridad de sus colegas en todo el país, que no se quedó en las expresiones de condolencia gremial. Reporteros de varios estados viajaron a Arizona convocados por la recién creada organización Reporteros y Editores Investigativos Inc. (*Investigative Reporters and Editors*, IRE).

“Esperaban probar que aunque usted mate a un reportero, no puede matar su trabajo”, dice Steve Weinberg, ex director del IRE.

¹⁶ Entrevista con el autor, Miami, 3 de diciembre de 1993.

Los reporteros recabaron información sobre la investigación que había iniciado Bolles, y al año siguiente publicaron una detallada serie de 23 capítulos, conocida como “El Proyecto Arizona”, que examinó el papel de prominentes políticos y hombres de negocios de ese estado bajo el reino del fraude y el narcotráfico.

Cómo se hizo el trabajo

Conformado por 50 reporteros de prensa, radio y televisión de diferentes estados del país, el equipo estableció un centro de operaciones en un hotel de Phoenix, donde se trabajaba en largas jornadas. Bajo la dirección del periodista Bob Greene, editor investigativo del *Newsday*, organizaron un archivo de 40 000 nombres de individuos, instituciones y negocios en Arizona. Su objetivo no era buscar a los culpables del asesinato, sino terminar el trabajo de Bolles.

“Este no es un acto de venganza”, dijo Greene. “No vinimos a encontrar al asesino de Bolles. Es una respuesta razonable a la muerte de un reportero, continuar con su trabajo.”¹⁷

Luego de clasificar los frentes de trabajo, los reporteros se lanzaron a las calles de la ciudad a entrevistar políticos, maleantes, prostitutas, banqueros y hombres de negocios. Consultaron innumerables documentos públicos, escarbaron en la basura de las personas que estaban bajo investigación y rastrearon operaciones de tráfico de drogas en la frontera con México.

La labor no fue fácil. En una oportunidad un grupo de periodistas fueron atacados por un guardia que custodiaba una finca donde trabajaban inmigrantes ilegales, propiedad del senador de Estados Unidos, Barry Goldwater. El equipo de periodistas trabajó durante seis meses en el proyecto y llenó seis archivadores que contenían las evidencias del sombrío panorama de un estado bajo el dominio de las organizaciones criminales que actuaban con el patrocinio de una relajada clase política.

Los reporteros demostraron cómo Arizona se había convertido en el primer corredor del trasiego de narcóticos que ingresaban al país por la frontera con México. Con la ayuda de funcionarios

¹⁷ Tom Collins, *Reporters finish story Don Bolles died getting*, The Arizona Project, reimpresión de la serie de Investigative Reporters and Editors, 1977, pág. 2.

federales y locales, el equipo identificó a más de 200 personas en el estado que tenían nexos con reconocidas familias de delincuentes en el ámbito nacional; documentó los nexos del senador Goldwater con la mafia de los juegos de Las Vegas; en el séptimo informe vinculó, también con la mafia, a una conocida firma constructora de centros comerciales; descubrió trampas tributarias del gobernador del estado, que había anunciado una gran campaña anti-corrupción; publicó un perfil demoledor del zar de los fraudes con tierras en la región y otro de un magnate del estado acusado, en una declaración jurada, de pedir la muerte de Bolles.

Dos de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, *The New York Times* y *The Washington Post*, declinaron participar en el proyecto. El crítico de medios de comunicación del *Post*, Charles Seib, dijo entonces que el proyecto “parecía estar diciendo que el asesinato de un reportero es un superasesinato, que activa una superrespuesta”.¹⁸ A. M. Rosenthal, editor ejecutivo del *Times*, se negó a participar en el proyecto con el argumento de que este tipo de acciones colectivas podría generar un movimiento que convertiría al periodismo en una simple arma, en una profesión que exige devoción ciega, cuando en realidad su gran fortaleza radica en la competitividad y la independencia.

Los periodistas del proyecto fueron criticados por haber compartido sus archivos con algunos funcionarios que investigaban el asesinato de Bolles. En un país donde los reporteros prefieren ir a la cárcel antes de entregar a los jueces cuadernos de notas y grabaciones, la práctica fue mal vista. Greene explicó que la colaboración con las autoridades fue limitada.

El hombre que puso la bomba bajo el automóvil de Bolles fue arrestado y enviado a prisión, aunque no se pudo identificar de manera concluyente quién lo había contratado. Andy Scott, ex director ejecutivo del IRE, afirma que a raíz de “El Proyecto Arizona”, la organización ganó reconocimiento en Estados Unidos y el número de sus miembros ha ido en aumento desde entonces. Hoy, el IRE cuenta con alrededor de 3700 miembros de Estados Unidos y del resto del mundo, incluidos periodistas, editores, productores de televisión y educadores. La asociación organiza cada año seminarios regionales y nacionales que permiten a los periodistas ponerse al día en las rutas más cortas para obtener información y

¹⁸ *Op. cit.*, pág. 2.

APÉNDICE 2

en los avances de la informática. Expertos de todo el país compar-ten en estos foros sus experiencias en la investigación de temas especializados. También son invitados funcionarios públicos, para que hablen sobre la información que se encuentra disponible en sus oficinas.

“Estos seminarios no son para que los periodistas vayan a decir ‘esto es lo que yo hice’, sino ‘cómo es que lo hice’”, afirma Scott.¹⁹

La revista de la organización, *The IRE Journal*, publica artículos de periodistas que explican sus experiencias, comentarios sobre tendencias y problemas del periodismo de investigación, y reseñas de libros de interés. El IRE edita, además *The Reporter's Handbook*, un completo manual para el periodista investigador estadounidense sobre cómo obtener documentos y desarrollar nuevas técnicas de investigación en su país. Asimismo, la organización publica un compendio de las 100 mejores investigaciones de sus afiliados. En esta publicación los periodistas explican cómo hicieron sus trabajos, las fuentes que usaron y las dificultades que tuvieron. Este compendio es un extraordinario diccionario de ideas.

En su sede, una modesta oficina de la facultad de periodismo de la Universidad de Missouri en Columbia, Missouri, el IRE tiene a disposición de socios y no socios, un banco de datos con 9000 informes de investigación. Una buena parte de estos reportajes son trabajos que han sido premiados por la asociación en un concurso anual en el que se presenta un promedio de 500 informes de investigación.²⁰

¹⁹ Andy Scott, ¿Qué es el IRE? (Conferencia dictada en el Seminario de Periodismo de Investigación del Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación, Santiago, Chile, abril 1, 1994).

²⁰ La dirección de The Investigative Reporters and Editors: 100 Neff Hall, School of Journalism, University of Missouri, Columbia, MO 65211. El teléfono es (314) 882-2042. Periodistas y estudiantes extranjeros pueden ser miembros de la organización. IRE Publica anualmente una lista (International Journalists Network) con la dirección y el teléfono de sus miembros en el exterior.

La prueba de olfato 4

Cuando usted tiene la idea de un tema que puede convertirse en un informe de investigación, lo primero que debe determinar es si hay suficientes recursos para llevarlo a cabo. ¿Cuenta usted o su grupo con tiempo y dinero para emprender el trabajo que se proponen? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo por un resultado que no está garantizado? ¿Qué posibilidades hay de obtener los documentos que respaldarían su información?

Algunos periodistas de Estados Unidos someten esta incipiente información inicial a la “prueba de olfato”, un primer examen del material que sirve para prever los obstáculos que podrían encontrar en el camino y si realmente es factible demostrar lo que se sospecha. Si consideran que la denuncia inicial merece atención, presentan a sus editores un proyecto que lleva implícita una salvedad: no se garantizan resultados.

En otras palabras, si después de todo el esfuerzo, el periodista concluye que no hay suficientes pruebas para demostrar lo que se propone, la investigación se archiva. Esta salvedad es un lujo que pocos colegas pueden darse en Latinoamérica. Si obtener autorización para trabajar en un proyecto de investigación es de por sí una victoria laboral, publicarlo es casi una obligación indiscutible.

De allí la importancia de evaluar el nivel de dificultad que sugiere las primeras pistas.

¿Cómo saber qué denuncias tienen futuro?

Aunque en la Unidad Investigativa nunca llevamos la cuenta de proyectos que fracasaban en el camino, a ojo de buen cubero, diría que duplicaban el número de informes publicados. Es decir,

que de cada 10 denuncias que comenzábamos a indagar, sólo cinco llegaban a imprenta. La razón más común para archivar era la falta de pruebas.

Como en cualquier proceso penal, en el periodismo de investigación el grado de dificultad probatoria está determinado por las características del delito y por la disponibilidad de las evidencias. Y en todos los casos, la carga de la prueba recae sobre los hombros del periodista. A continuación haré un breve análisis de cómo husmear el potencial de aquellas denuncias que con más frecuencia llegan a conocimiento de los reporteros investigativos, de acuerdo con las entrevistas que he sostenido con muchos de ellos durante los seminarios organizados por el Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación en Perú (1992), Chile (1993) y México (1994).

SOBORNOS

Demostrar el pago de un favor es una labor casi imposible; probar el favor es más simple. El soborno no deja muchos rastros. Del caudal subterráneo de coimas que se desliza por el fondo de las oficinas públicas tras la adjudicación de un contrato o el cierre de una subasta, sólo quedan los rumores de los perdedores. El sistema de cuentas bancarias cifradas, el juego de los testaferros y los pagos en efectivo son algunas de las circunstancias que favorecen la impunidad de esta conducta. De allí nuestro escepticismo inicial cuando recibíamos denuncias de alguien que sostenía, que un funcionario había aceptado astronómicas prebendas.

En más de 10 años de labores, la Unidad Investigativa sólo pudo comprobar un importante caso de sobornos, y esto gracias a que la persona que los repartió tenía un meticuloso hábito de dejar constancia por escrito de casi todas sus actividades legales y subrepticias. En una serie de artículos publicados en 1986,¹ denunciemos que uno de los miembros directivos de la filial en Bogotá de la empresa sueca Ericsson, pagó miles de dólares a varios funcionarios del gobierno de Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú, que ocupaban cargos importantes en el sector de las telecomunicaciones tales como empresas de teléfonos y ministerios de comunicaciones.

¹ Gerardo Reyes, "Millonarios sobornos pagó la Ericsson", *El tiempo*, Bogotá, 1 de noviembre de 1986, págs. 1a y 8b.

Entre los comprometidos estaban funcionarios que habían participado en la evaluación de propuestas de la Ericsson o en juntas directivas que adjudicaron lucrativos contratos de líneas telefónicas a esa empresa. Esta información llegó a mi conocimiento luego de haber publicado los detalles de una batalla jurídica en el Consejo de Estado entre la firma sueca y su competencia en Colombia.

Una fuente que leyó el artículo me llamó a los pocos días de su publicación y con lujo de detalles me explicó el entramado del litigio administrativo que se había formado a raíz de la adjudicación de un contrato multimillonario de líneas telefónicas.

Después de muchos encuentros y largas conversaciones, la fuente resolvió entregarme, casi a cuentagotas, los documentos con los que sueña un reportero investigador cuando sigue el rastro de un soborno: comprobantes bancarios y copias de cheques a nombre de los funcionarios que de una u otra manera habían participado en las licitaciones. Para completar la dicha, en una entrevista previa a la publicación, el directivo de la Ericsson en Colombia, Hernando Pryor, admitió que la firma que aparecía en los documentos que autorizaban los pagos era la suya y que los había hecho por "órdenes superiores".

Algunos de los funcionarios implicados negaron la existencia de las cuentas bancarias y otros no supieron qué decir cuando me presenté en sus oficinas con la colección de cheques a su nombre. Uno de ellos me dijo que tenía que salir de inmediato a ver su dentista porque tenía un fuerte dolor de muela.

Un día, después de publicada la información, Pryor se fugó del país. Un juez de instrucción criminal, que lo declaró reo ausente, tomó declaraciones a los funcionarios implicados por cohecho y sustanció un expediente de cientos de páginas. Más de un año después, una jueza superior cerró el caso con el argumento de que la acción penal había prescrito y que los documentos publicados por *El Tiempo* no habían sido debidamente autenticados por funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que presentaron la denuncia penal.

Hay, sin embargo, algunos casos en que tal vez usted no cuente con la prueba definitiva de un pago indebido, pero sí puede investigar los efectos que éste produjo en las decisiones o en el entorno personal o familiar del funcionario que lo recibió. Los periodistas del diario argentino *Página 12* son expertos en ambientar estos cuadros. En 1990, la publicación se enteró de que el embajador de

Estados Unidos de América había protestado ante el presidente Carlos Menem porque funcionarios argentinos exigían una comisión para autorizar una inversión de la filial de una firma estadounidense.

Página 12 obtuvo una copia de una carta en la que el embajador Terence Todman informaba a Menem que el frigorífico Swift-Armour deseaba invertir \$ 115 millones en Rosario, “pero nos informan que funcionarios del gobierno argentino han pedido pagos sustanciales para emitir la documentación necesaria para importar maquinarias”. Tras comprobar la autenticidad de la carta, *Página 12* publicó un artículo donde contó el milagro pero no el santo. Del funcionario que había pedido la comisión decía, a manera de la adivinanza, “blanco es, gallina lo pone”: “es un empresario argentino de origen árabe que integró la comitiva presidencial durante la visita a Estados Unidos de octubre de 1990”.²

A partir de esta publicación, y tras un periodo de cautela de los diarios nacionales argentinos, los medios de comunicación se dedicaron a seguir la sinuosa ruta del expediente de Swift-Armour en el Ministerio de Economía. Asimismo, recogieron las reacciones de los diferentes funcionarios comprometidos. Al final, los caminos llevaron a la oficina de Emir Yoma, cuñado del presidente y asesor económico del gobierno, que fue acusado de exigir la comisión.

FAVORITISMO

El favoritismo, entendido como la preferencia que se da a alguien ignorando el mérito de otros y los principios de equidad, tiene mucho más potencial para ser probado periodísticamente que un soborno. Primero, porque la información disponible es relativamente pública, y segundo porque casi siempre hay por lo menos una persona que se siente marginada arbitrariamente y está dispuesta a convencer al periodista de que su propuesta era la mejor.

Los contratos que adjudica el gobierno por licitación o concesión, los bienes que entrega por subasta y los nombramientos de la burocracia nacional e internacional, son actos que están plagados de favoritismos que llegan a oídos del periodista.

²Horacio Verbitsky, *Robo para la Corona, los frutos prohibidos del árbol de la corrupción*, Espejo de la Argentina, Planeta, Argentina, 1991, pág. 20.

¿Cómo manejar denuncias de favoritismo?

Si se trata de contratos con el gobierno puede usted ponderar el valor de sus datos después de hacer unas cuantas diligencias preliminares. Estudie los criterios de selección aplicados (pliegos de condiciones); lea las normas que regularon el proceso de selección. En este punto es importante determinar si el contrato fue adjudicado de acuerdo con normas de contratación de emergencia o se rigió por la legislación ordinaria. La contratación de emergencia es una modalidad de la cual abusan a menudo las dependencias de los gobiernos para esquivar la licitación con el pretexto de que existe una necesidad imperiosa de realizar obras o adquirir bienes. Cuando se analizan estos contratos, es muy común encontrar que la razón de la urgencia no es otra que soslayar controles y agilizar la adjudicación al mejor postor de coimas.

Analice los antecedentes y la experiencia de la persona o la empresa favorecidas y trate de establecer sus conexiones con el gobierno. Marque todos los teléfonos que encuentre en los papeles membretados que la empresa aportó al proceso de licitación; identifique con sus fuentes y amistades a cada uno de los socios de la empresa, el tesorero, el revisor fiscal, el secretario. Y, por supuesto, hable con el mayor número de personas que resultaron vencidas en el proceso de adjudicación.

Varios informes de la Unidad Investigativa en torno a predilecciones gubernamentales, adjudicaciones entre amigos y nombramientos arbitrarios, surgían de la comprobación de anomalías protuberantes del proceso de licitación que no requerían análisis muy profundos.

María Elena Arellano, del diario *El Universo* de Guayaquil, Ecuador, dice que aprendió a no dejarse intimidar por los documentos técnicos de una licitación pública, revisando los aspectos básicos de un contrato suscrito por la municipalidad con el consorcio ecuatoriano-canadiense Vachgnon para la limpieza de la ciudad.³ Arellano verificó los resultados de las sumas, restas y multiplicaciones que contenían las propuestas, y en esas operaciones elementales, descubrió equivocaciones garrafales que favorecían al consorcio. Aunque el artículo no convenció a la Contraloría de revisar el proceso de adjudicación, Arellano sostiene que despertó

³ María Elena Arellano, "Limpieza de la ciudad: licitación polémica", *El Universo*, Guayaquil, Ecuador, 14 de marzo de 1994.

un gran interés entre la población, “que ahora va a estar más atenta a la clase de servicio que va a recibir”.⁴

El favoritismo va generalmente acompañado de nepotismo y tráfico de influencias, modalidades que ofrecen enormes posibilidades al periodista para investigar. En palabras de la Academia de la Lengua, el nepotismo es la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos”.

Esta desmedida preferencia es bien conocida por la opinión pública, y quizá por tal razón muy pocas veces los periodistas de investigación se animan a mostrar cómo funciona el fenómeno en la práctica y quiénes son sus protagonistas en las ciudades grandes y pequeñas. Pero esa prevención puede ser errónea. Para nosotros fue una gran sorpresa el interés que despertó la serie de informes especiales de la Unidad Investigativa que ilustraban los lazos familiares que unían entre sí a los principales funcionarios de las dependencias gubernamentales de varios departamentos de Colombia. La gente nos escribía para que sacáramos a la luz el enjambre de relaciones entre los caciques políticos de su región y los funcionarios públicos, y nos enviaban nuevos ejemplos de la hegemonía de las grandes familias en sus ciudades.

PECULADOS

Es importante que usted conozca la modalidades de peculado para comprender la dificultad de probarlo. En términos generales, el peculado es la malversación de fondos o el mal uso de bienes y propiedades del Estado. Formalmente, el autor de este delito es un empleado público, pero algunas legislaciones lo aplican también a particulares que manejan dinero o bienes del gobierno. Un empleado de una aerolínea que recauda la tasa aeroportuaria sería sujeto potencial de este delito, por ejemplo.

Comete peculado un funcionario público que cambie, sin autorización, el destino de una partida del presupuesto o comprometa sumas superiores a las fijadas. Lo mismo cuando desvía el dinero del erario público en gastos suntuarios o que no están previstos en la ley, o utiliza automóviles, equipos y otros bienes del Estado para su beneficio personal.

⁴ María Elena Arellano, *¿Cumple la prensa una tarea fiscalizadora?* exposición en el seminario de Periodismo de Investigación en México, 13, 14 y 15 de abril de 1994.

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Los informes de los organismos de derechos humanos están colmados de centenares de casos de matanzas, desapariciones y torturas ocurridas en el marco de las guerras sucias de toda índole que han azotado a América Latina. De alguna manera, los periodistas han sido víctimas y testigos de estas guerras, y quienes han sido testigos han demostrado que éste es un campo en el que el periodismo de investigación puede desempeñar un papel muy importante para el esclarecimiento de los hechos.

Una circunstancia favorece casi siempre el desarrollo de esta clase de averiguaciones sometidas al mutismo oficial, y es que en su paciente búsqueda, el periodista se encuentra con personas que por diferentes motivos –el remordimiento es el más común– están dispuestas a relatar los hechos que presenciaron. A juzgar por los artículos que conservo sobre el tema en el archivo del Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación, la labor de los periodistas en este campo no parece posible sin la colaboración de esas personas, generalmente vinculadas a las instituciones oficiales que están bajo escrutinio.

Cuando no es un militar arrepentido, entonces el periodista se topa con un testigo amedrentado o un juez corajudo, todos dispuestos a declarar lo que saben o a esclarecer lo que queda por saber. Los siguientes casos ilustran la forma como dos publicaciones sudamericanas encararon las dificultades probatorias de esta clase de denuncias.

A mediados de 1993, una persona no identificada entregó a los periodistas Edmundo Cruz y José Arrieta de la revista *Sí* del Perú, un sobre de papel manila que contenía un mapa y unos huesos calcinados. La persona aseguró que con esos elementos los periodistas podían resolver el enigma de la masacre de La Cantuta. El mapa conducía al lugar donde fueron sepultados los restos de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad, Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, después de ser ejecutados en julio de 1992, y los huesos pertenecían, según la fuente, a los cadáveres carbonizados.

La matanza de La Cantuta era un espinoso tema que había colocado al gobierno del presidente Fujimori bajo un constante escrutinio nacional e internacional. Dentro del mismo ejército peruano había malestar por la manera como los altos mandos estaban

afrontando el tema. En abril de 1993, un grupo disidente de militares llamado León Dormido, hizo pública una declaración que señalaba como responsables del asesinato colectivo a altos mandos militares del Perú, entre quienes se encontraban el general Nicolás de Barú Hermoza Ríos, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Vladimiro Montesinos, un misterioso capitán del ejército, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN.

Los periodistas llamaron al director de la revista Ricardo Uceda, que se encontraba en Miami, Florida. Tras escuchar la asombrosa versión y con el presentimiento de que la información también la tenía su competencia, la revista *Caretas*, Uceda pidió a los reporteros que verificaran algunos datos y escribieran, al menos, una parte del reportaje, para la edición que estaba a punto de cerrarse. Su idea era publicar los testimonios de la persona que había llevado el macabro paquete y las indicaciones del sitio donde ocurrieron los hechos.

No había tiempo que perder, pues la fuente de la información había advertido a los reporteros que si el artículo no se publicaba de inmediato, tendrían que devolverle los huesos y el mapa.

“Lo toman o lo dejan, nos dijo”,⁵ recuerda Uceda. Enterado de que *Caretas* no tenía la pista, Uceda resolvió esperar una semana más a fin de profundizar en el contenido de la denuncia y devolver las pruebas que la fuente había entregado a sus reporteros. A su regreso de Estados Unidos, el periodista dirigió una primera expedición a una escarpada zona camino a Huachipa, al este de Lima, donde el dibujo del informante indicaba que habían sido enterrados los restos de los estudiantes. Un arqueólogo que lo acompañó al lugar, localizó por lo menos una fosa común. Después de un segundo viaje en el que se tomaron algunas muestras de huesos, el director de la revista se asesoró de un equipo de abogados para conocer los riesgos que corría si continuaba con una excavación más amplia y profunda.

En la madrugada del jueves 4 de noviembre del mismo año, con un estricto sigilo, los periodistas y un grupo de arqueólogos, médicos y obreros se presentaron en el lugar. Tras localizar una de las fosas, Uceda llamó a los canales de televisión, a sus colegas de la prensa y a un directivo de *Americas Watch*, un grupo internacional de defensa de los derechos humanos, y en su presencia inicia-

⁵ Entrevista con el autor, ciudad de México, 15 de abril de 1994.

ron la excavación. Unos 50 periodistas fueron testigos de la exhumación de huesos calcinados y de algunas prendas de las víctimas. A las 11 de la mañana, llegó el último invitado de Uceda: el fiscal Víctor Cubas Villanueva, que ordenó acordonar el área para terminar la diligencia.

“El momento más importante de la diligencia del jueves pasado fue la exploración del campo”, decía en su informe exclusivo la revista *Sí*,⁶ “ya que dio lugar al hallazgo de objetos que podrían ser muy indicativos, concretamente prendas enterradas y deterioradas: una camisa azul con perforaciones aparentemente de balas; una chompa morada con huellas similares, y un pantalón negro”.

Los artículos de *Sí* y las imágenes de la televisión revivieron el debate de La Cantuta. A su arribo a Brasil para una reunión hemisférica, el presidente Fujimori fue abordado por los periodistas que querían conocer su opinión sobre los nuevos hallazgos. Las presiones ejercidas por organismos de derechos humanos y Estados Unidos forzaron al gobierno peruano a enjuiciar a varios militares en un proceso de jurisdicción castrense que, al decir de los abogados de los familiares de las víctimas, dejó impunes a los autores intelectuales de la matanza. Uceda fue acusado de obstruir a la justicia.

Un caso con menos publicidad internacional pero con sorprendentes similitudes periodísticas al de la masacre de La Cantuta, ocurrió en el departamento de Quillota, Chile, y fue publicado por el diario *El Observador*.

En 1991, se presentó en la sala de redacción del diario, el hijo de un abogado que había desaparecido en extrañas circunstancias en enero de 1974. En una entrevista publicada en el periódico, el hijo del desaparecido dijo que quería darle sepultura al cuerpo de su padre, que posiblemente estaba enterrado en la Escuela de Caballería de Quillota.

Un mes después de publicada la entrevista, relata el periodista Roberto Silva Bijit, director de *El Observador*, apareció una persona que quería hablar con él. “Y me dijo: señor, yo presencié el crimen de por lo menos tres personas que no murieron en un asalto a la patrulla, sino que fueron llevados a la unidad y fusilados ahí.”⁷

⁶ “Aquí murieron”, *Sí*, núm. 349, Lima, semana del 8 al 14 de noviembre, págs. 26-31.

⁷ Roberto Silva Bijit, exposición en el Seminario de Periodismo de Investigación del Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación en Santiago, Chile, 1 de abril de 1993.

El testigo acusó a un coronel que en el momento de la denuncia era director de la Caballería.

Después de cerciorarse de los antecedentes del testigo, Silva resolvió llevarlo ante un notario para que hiciera una declaración formal de lo que había narrado. El objetivo era, según el periodista, iniciar un proceso judicial para practicar una diligencia en los predios de la unidad militar. Para evitar filtraciones, el propio Silva hizo de amanuense en la notaría. Gracias a una rara coincidencia, un juez titular de un juzgado del crimen de la ciudad expresó su interés en indagar sobre los hechos; había sido compañero del desaparecido en la universidad.

Desde un helicóptero, los periodistas tomaron fotografías de los predios que rodean la unidad militar. Finalmente, una comisión presidida por el juez y el director nacional del Instituto Médico Legal, y compuesta por dos testigos encapuchados, seis policías de investigaciones y una cuadrilla de excavadores contratada por el periódico, se presentaron en la sede de la Caballería el 26 de diciembre de 1991. El director de la unidad militar salió sorprendido al encuentro de la comisión y prohibió al juez entrar en las instalaciones, no sin antes movilizar un tanque frente a la reja de la puerta. “El comandante dijo que el general [Augusto] Pinochet prohibía el ingreso a la Escuela de Caballería.”

Con titulares como el de “¿Qué esconden en la Escuela de Caballería?”, el diario captó la atención nacional sobre el caso. “Nadie puede entender la posición de los militares que se han enfrentado con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con los Partidos Políticos, con organizaciones que hacen manifestaciones en el frontis de la unidad, con un desprestigio cada vez más creciente, sobre una escuela que por decenas de años gozó de un merecido prestigio nacional e internacional”, decía el diario.⁸

Ante las negativas de dejar pasar una comitiva, el juez declaró al coronel reo ausente. En una decisión que fue interpretada como un castigo, meses después el presidente Patricio Aylwin negó al coronel la autorización para viajar a Inglaterra como agregado de la embajada de Chile en Londres.

⁸ ¿Qué esconden en la Escuela de Caballería? *El Observador*, provincias de Quillota y Petorca, Chile, 10 de enero de 1992, págs. 13 y 30.

EL DERECHO DE ACCESO

Casi todos los reporteros latinoamericanos que he entrevistado, sostienen que cuando analizan la factibilidad de un tema su primera preocupación son las vías de acceso a la información. En la encuesta realizada en Chile por el Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación entre más de 60 periodistas,⁹ una abrumadora mayoría respondió que el principal obstáculo para practicar el periodismo de investigación en sus países es la sistemática negativa de las oficinas públicas de entregar documentos o dar información.

“Los documentos están bajo llave”, “no hay autorización para entregarlos”, “estos papeles son reservados por cuestión de seguridad nacional”, “éste es un asunto que no le incumbe a la prensa”, son las disculpas que más se escuchan de los funcionarios para salir del paso.

Al conversar con algunos de los colegas me quedé, sin embargo, con la impresión de que son pocos los esfuerzos que se han hecho por combatir el problema por las vías legales, pese a que existen en sus países recursos jurídicos que ofrecen oportunidades para intentarlo.

Aparentemente, los reporteros se inclinan más por obtener la información por debajo de la mesa, a través de la persuasión de fuentes en las oficinas públicas y, en casos extremos, pagando ilegalmente por los documentos.

“Los periodistas han desarrollado métodos de picardía para obtener información pública cuando alguien la quiere negar”, dice Ricardo Trotti, coordinador de la oficina de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Al existir ese método, los periodistas no parecen interesados en corporativizarse para obtener acceso a la información. . . Y en los países en que existe la ley, el periodista pierde por cansancio y tienen que hacer un juicio que puede tardar hasta un año.”¹⁰

De acuerdo con un estudio hecho por Trotti sobre las leyes de acceso a las fuentes oficiales en 32 países de América, sólo en seis existen legislaciones que garantizan el acceso de los periodistas a

⁹ La encuesta fue hecha a los asistentes al seminario de Periodismo de Investigación y Corrupción en América Latina, Santiago, Chile, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1993.

¹⁰ Entrevista con el autor, en Miami, 25 de febrero de 1994.

las fuentes públicas. Éstos son: Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala y Honduras.¹¹

La experiencia de la Unidad Investigativa de *El Tiempo* me alienta a sugerir que vale la pena hacer el intento de obtener la información por las vías legales. Aprendimos que después de tanto insistir y batallar, los funcionarios públicos ceden un poco y algunos aprenden la lección de que el sigilo trae más problemas que la apertura. Para dar esta batalla, ante todo es importante tomarse el trabajo de conocer las normas que protegen el derecho de acceso a los documentos que reposan en las oficinas públicas.

La mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos consagran el derecho de los ciudadanos a pedir explicaciones respetuosas a los funcionarios públicos y la obligación de éstos a darlas. Esa prerrogativa se conoce como *el derecho de petición*, y se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 dice:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Así, cuando un funcionario público se niega a entregar información sin justificación alguna, no sólo quebranta una norma constitucional, sino que está violando los derechos humanos de quien hace la petición. El problema, en algunos países, es que la disposición constitucional no está reglamentada, esto es, no existe una ley que fije los alcances del mandato constitucional; una ley que señale, cuáles son los documentos reservados o confidenciales y por qué, cuántos días tiene el funcionario para responder y qué clase de sanciones se le aplicarían a quienes se nieguen a hacerlo.

La gran ventaja de que el de petición sea un derecho consagrado en la Constitución es que la ley que lo reglamenta no puede contrariar su espíritu ni estrechar su alcance; y si la ley no puede hacerlo, mucho menos un decreto o un acto de menor categoría como puede ser una circular de un ministro o el grito de un alcalde.

¹¹ Informe de la oficina de Coordinación de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miami, 1994.

Para los periodistas que no son abogados, debo aclarar que en derecho también existe una pirámide invertida que fue inventada por un jurista alemán para mostrar la jerarquía de las normas legales. En esa figura, la Constitución está por encima de las leyes, los decretos y las ordenanzas. A pesar del escepticismo general en torno a la utilización de herramientas legales, creo que los periodistas deben insistir más en allanar esta vía y pedir por escrito información a las dependencias del gobierno con base en el artículo constitucional que protege el derecho de petición, o respaldados en una acción de amparo o tutela.

El siguiente es un formato de una solicitud fundamentada en el derecho de petición:

Estimado señor:

En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo _____ de la Constitución Nacional, me dirijo a usted para que se sirva:

- a) Autorizarme el acceso a _____ , o
- b) Enviarme copias de _____ .

Atentamente,

Indique con claridad la dirección de su periódico, el teléfono y el fax, y si es posible, cite el artículo de la Constitución que respalda su petición. Deje transcurrir unas dos semanas. Si la legislación de su país contempla un plazo en el que los funcionarios públicos deben responder, invoque la disposición que lo consagra en una segunda carta y envíe copia de la primera. Recuerde que lo cortés no quita lo valiente. No utilice expresiones displicentes o desafiantes cuando reclame por la ausencia de una respuesta a su solicitud.

Con humildes peticiones como éstas empezó una larga y fructífera batalla la Unidad Legislativa de *El Tiempo*.

La batalla

En julio de 1977, Daniel Samper se presentó en la pagaduría del Senado y solicitó al pagador que le permitiera examinar la nómina de los empleados de esa corporación. El funcionario dio su autori-

zación, pero al día siguiente, cuando el periodista pretendía continuar su consulta, otro funcionario, en ausencia del pagador, se negó a entregar los documentos.

Samper se dirigió por escrito al presidente del Senado, Edmundo López Gómez, para que diera su autorización, a lo cual el senador respondió negativamente con el argumento de que las disposiciones invocadas por el periodista no se aplicaban a la rama legislativa. La respuesta fue enviada en un telegrama. La ley citada por Samper era un desconocido estatuto de 1913, que garantizaba a los ciudadanos el libre acceso a los documentos que reposaran en las oficinas públicas.

Asesorado por Donadío, Samper presentó una demanda de nulidad contra el telegrama ante el Consejo de Estado, la entidad que dirime los conflictos entre los particulares y el gobierno. En otros países latinoamericanos donde no existe Consejo de Estado, estas controversias son conocidas por cortes supremas o tribunales superiores.

“El ejercicio de los poderes públicos, en los términos de la Constitución, ‘sostuvieron los periodistas en sus alegatos’, significa que todas las autoridades están sometidas al escrutinio de los asociados, que todos los ciudadanos son procuradores permanentes encargados de vigilar la conducta de aquéllas, y que para no hacer nugatorios esos deberes, las actuaciones oficiales deben estar a la vista de todos. La ausencia de acceso a los papeles públicos es una patente de impunidad. . . y convierte a los habitantes en espectadores y víctimas de arbitrio de los gobernantes.”¹²

El Consejo de Estado falló en favor de los periodistas en 1978, al encontrar que el telegrama era un acto administrativo “viciado de nulidad”.

Ésta fue una de las primeras batallas libradas por el periodismo en Colombia para tener acceso a los archivos. Luego siguieron otras que abrieron las puertas de dependencias como la Procuraduría General, una oficina tradicionalmente reacia a mostrar expedientes de investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos.

A raíz de estas victorias, poco a poco los funcionarios fueron cediendo en su arrogancia y antes de negar de plano el acceso a los documentos, lo pensaban dos veces. No sólo porque sabían que

¹² Daniel Samper, demanda ante el Consejo de Estado.

no existía argumento para negarlo, sino porque al no entregarlos podría acarrearles una investigación disciplinaria.

El espíritu de las batallas legales por el derecho de acceso a los archivos oficiales fue magistralmente sintetizado por el Consejo de Estado de Colombia, en una sentencia que a continuación transcribo parcialmente, con la idea de que sirva de argumento a cualquier colega latinoamericano para dar la pelea con su gobierno por el respeto al derecho de petición:

“En un régimen de democracia representativa como el que nos rige, la participación ciudadana no se reduce al derecho de intervenir por medio del sufragio en la constitución de los poderes públicos; además de ello los ciudadanos tienen la facultad de ejercer una vigilancia sobre la conducta pública de los agentes del Estado y el derecho de controvertir o discutir privada o públicamente las actuaciones y las decisiones de los gobernantes y, en general, todos los órganos investidos de autoridad pública. El ejercicio de tales facultades y derechos requiere, como presupuesto básico, que la actividad pública no se desarrolle secretamente o bajo el sigilo, sino que como pública que es, así se ejercite y de esta forma quede constancia de ella.”¹³

Si usted no tiene acceso a un documento en una oficina, recuerde que en el mundo de la burocracia casi todo tiene fotocopia; contratos, órdenes de pago, actas, currículos, memorandos y expedientes administrativos, todos estos documentos pasan de mano en mano con una larga lista de los funcionarios que deben guardar una copia. Algunos de los papeles quedan archivados bajo un mismo cofre oficial, pero muchos tienen sus gemelos en otras dependencias del gobierno donde probablemente haya una fuente amistosa dispuesta a entregarlos.

Logística

Antes de emprender su jornada de recopilación de información es importante resolver varios aspectos prácticos. Algunos de ellos son los siguientes:

¹³ Sentencia del Consejo de Estado, Bogotá, 26 de mayo de 1976.

- Algunos editores exigen que en este punto el reportero presente un cronograma de su trabajo con una relación de gastos, fechas de cierre tentativas y un bosquejo general de la investigación.
- Si usted va a trabajar en grupo, defina desde ahora en la forma más concreta las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo.
- Defina los formatos en que va a registrar la información, especialmente si tiene que trabajar con diversas variantes. Hay varios programas de computadora que hacen este trabajo menos engorroso.
- Defina sistema de archivo. Trate de llevar un archivo físico y otro electrónico. (Nunca utilizo libretas de reportero para tomar información o apuntes de una entrevista porque me parecen muy pequeñas y con sistemas de encuadernamiento muy frágiles. Prefiero cuadernos académicos de varias materias, con anillos gruesos y suficiente papel.)
- Es muy importante también elaborar un formato en el que se pueda registrar cronológicamente los hechos bajo investigación.

Si usted ha resuelto que la idea de su investigación es factible, entonces manos a la obra. El siguiente paso es empezar a empaparse más del tema, a familiarizarse con la terminología del mundo donde se aventura, a entrar en contacto con sus primeras fuentes y a perseguir a sus informantes. Todo esto para preguntarse, al final, si tiene sentido seguir adelante.

A continuación explicaré cómo superamos esta primera etapa de factibilidad en las investigaciones que vamos a analizar a lo largo de este libro.

Auxilios parlamentarios

Steve Weinberg señala que cuando comienza un proyecto, siempre tiene en su mente dos reportajes: el máximo, que es el que cumple con las expectativas que se propone desde un principio, y el mínimo, que es el reportaje que se aleja de las metas originales, pero aún así conserva un interés para los lectores.

Con esta idea comenzamos el análisis de nuestro trabajo sobre el manejo de unas partidas presupuestales que recibían los congresistas colombianos para obras de fomento y desarrollo social en su región. Desenmascarar el mecanismo utilizado por los congresistas para meterse en sus bolsillos estos fondos, conocidos como *auxilios regionales*, era para nosotros la meta ideal de la que habla Weinberg; la historia mínima sería un informe general que explicaría el origen de los auxilios y cómo se distribuyen de acuerdo con la ley. Esta última hubiera sido una alternativa frustrante, pues los lectores estaban cansados de escuchar del despilfarro.

Nuestra primera inquietud fue conocer el marco legal de estas partidas presupuestales, pues para nosotros era muy importante saber si su repartición estaba sometida a los controles normales de cualquier gasto público. La legislación dejaba al criterio de la moral y las buenas costumbres, la forma como debían ser distribuidos estos auxilios, y fijaba el objeto de la inversión en una forma ambigua al señalar que debían ser destinados a “empresas útiles y benéficas de desarrollo regional”, según el estatuto orgánico del presupuesto.

Como la moral y las buenas costumbres no son conceptos homogéneos en el Congreso, era evidente que la ley había dejado abierto un enorme boquete en el presupuesto por el cual se desviaban millones de pesos en favor de los congresistas. La gente estaba enterada de que esto ocurría pero no conocía los atajos que los representantes a la cámara y los senadores utilizaban para quedarse con el dinero.

La mina de información sobre el tema estaba afortunadamente bajo un mismo techo: la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, a cuyos archivos se nos autorizó el acceso en ejercicio del derecho de petición.

El caso Samitier

Diez años antes de haber empezado a investigar la muerte del cantante Claudio Martell con mi compañera de trabajo Evelyn Larrubia, ya había comprobado en Colombia, que los casos de negligencia médica son muy complicados de manejar periodísticamente. Cuando se escucha por primera vez el drama de boca de la víctima o de un familiar, las acusaciones parecen irrefutables,

pero a medida que usted se interna en el embrollo de la historia clínica y las diferentes opiniones de los especialistas, descubre que el único que conoce toda la verdad es el médico cuestionado.

Mi primera experiencia con el seguimiento de bisturíes mal manejados la tuve cuando empecé a seguirle el rastro a un respetado neurocirujano de Bogotá, acusado de utilizar técnicas experimentales de cirugía en el cerebro con rayos láser y sin autorización de los enfermos. Al escuchar las opiniones de médicos que tenían motivaciones tanto profesionales como personales para poner en duda los procedimientos, pensaba que mi trabajo no sería muy dispendioso. Pero unas semanas después de empezar a consultar especialistas independientes, y tras escuchar las explicaciones del médico cuestionado, me di cuenta de que la cosa no era tan fácil.

En lo que parece un acuerdo tácito de no agresión, motivado tal vez por la probabilidad de que un día el acusador resulte acusado, a los médicos no les gusta hablar *on the record* de las equivocaciones de sus colegas. Cuando usted les advierte que no es para publicar, entonces sí dan rienda suelta a sus críticas. A esa dificultad debe agregarse que la medicina no es una ciencia exacta. Y mucho menos la neurocirugía, una especialidad, que si se compara con la historia de la civilización occidental, podría decirse que está en los albores del descubrimiento de América.

De una veintena de casos, sólo pude confirmar cinco con certeza, que fueron presentados en dos artículos seriados junto con algunos ejemplos de irregularidades administrativas atribuidas al médico en su calidad de director del Instituto Neurológico de Colombia.¹⁴

El médico negó todos los cargos con algunas explicaciones que fueron desvirtuadas por especialistas independientes. Su argumento más reiterado fue que las acusaciones estaban motivadas por celos y envidia de médicos frustrados que habían trabajado con él. Después de la publicación, el Instituto fue intervenido por el gobierno y, al año siguiente, el Tribunal de Ética Médica impuso al director la sanción de "censura privada". Dos años después, el médico renunció a su cargo.

Aunque los resultados fueron positivos, el largo proceso de investigación me sirvió para desarrollar una sana prevención hacia

¹⁴ Unidad Investigativa de *El Tiempo* "Prácticas cuestionables en el Instituto Neurológico", *El Tiempo*, 19 de junio de 1983, págs. 1A y 1B. "Tumores cerebrales y Administrativos", *El Tiempo*, 22 de junio, págs. 1A y 1B.

los temas de responsabilidad médica. Si usted recibe una denuncia de este tipo, no se deje llevar por la impresión de las secuelas que dejó en el paciente la supuesta negligencia del médico. Al ver fotografías de deformaciones o amputaciones o al escuchar el testimonio de una víctima o de sus familiares, es fácil quedar con una equívoca idea de que los médicos cometieron un grave error.

Trate de analizar en este punto si es posible obtener copias de las historias clínicas, pues seguramente sus fuentes y especialistas exigirán una copia. Averigüe si los casos denunciados se relacionan con procedimientos en experimentación y, lo más importante, cerciórese de que hay médicos dispuestos a dar declaraciones.

Antes de comentar la historia del cantante colombiano al editor, encontré varios artículos de periodistas estadounidenses que señalaban los mismos obstáculos que había tenido en Colombia cuando investigaba el Instituto Neurológico. Me desanimó, además, el enterarme de que la viuda del cantante estaba disgustada con el periódico por la manera como la reportera que publicó la noticia de la muerte de su marido, la había presionado para obtener información. Una persona que parecía tener conocimiento directo sobre el caso me animó nuevamente. Enterada de que estaba buscando antecedentes del médico, me llamó por teléfono y me dijo que si continuaba, me encontraría con muchas sorpresas.

Banco del Estado

A los periodistas colombianos los tomó fuera de base la crisis financiera que vivió el país a principio de los años ochenta. Ante sus ojos se desplomaron grandes corporaciones bancarias, y cuando llegaban a preguntar lo que había ocurrido, lo único que encontraban eran largas filas de clientes furiosos tratando de recuperar sus ahorros.

La historia se repitió en Venezuela una década después con la quiebra del Banco Latino y la intervención de 17 bancos privados. Algo parecido ocurrió con los periodistas de Estados Unidos, Centro y Sudamérica, cuando comenzaron a surgir los primeros informes oficiales de las actividades del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI).

“No fue que la prensa alejara conscientemente los ojos del foco del problema; es que miraba pero no veía”, explica Samper acerca

de la situación en Colombia. “La complejidad del mundo de los bancos, las corporaciones y demás ejemplares de la jungla del dinero, impedía a la prensa tener una idea clara sobre lo que allí sucedía.”¹⁵

Cuando Donadío se instaló durante algunos días, en julio de 1982, en la oficina de la Superintendencia Bancaria, su propósito inicial era conocer más a fondo lo que estaba ocurriendo en ese mundo. “Si los periodistas estábamos mal informados”, escribió Donadío, “era fácil suponer la ignorancia que logramos transmitir a los lectores. Fue esta reflexión la que nos llevó en la Unidad Investigativa a investigar el tema financiero”.¹⁶

El primer paso que dio Donadío fue solicitar a la Superintendencia que le permitiera examinar las resoluciones de sanciones impuestas a entidades financieras durante los últimos tres años.

La fiesta del alcalde

Después de enterarse del chisme de la fiesta del alcalde, Samper comenzó a averiguar la información básica: ¿cuándo ocurrió?, ¿quiénes eran los invitados? ¿qué ofrecieron durante la ceremonia? Eso le permitió entrevistarse con varios de los asistentes, que dijeron que la reunión había sido amenizada por dos orquestas. Pero, ¿cómo saber quien pagó a los músicos, la comida y el licor? Por lo menos los administradores del club no lo dirían, pues era un club privado que no tenía obligación de rendir cuentas a quienes no fueran sus socios.

APÉNDICE 4

Periodismo y narcotráfico

A finales de 1987, los colombianos se acostumbraron a ver en los semáforos de las intersecciones más congestionadas de sus ciudades, vendedores ambulantes ofreciendo cigarrillos Marlboro en

¹⁵ Daniel Samper, prólogo al libro de Alberto Donadío, *Banqueros en el banquillo*, El Áncora Editores, Bogotá, 1983, pág. 10.

¹⁶ Alberto Donadío, *Banqueros en el banquillo*, El Áncora Editores, Bogotá, 1983, pág. 68.

una mano y en la otra ediciones piratas del libro *Los Jinetes de la Cocaína*.

La imagen era una elocuente prueba de la popularidad que había ganado, en pocos meses, un trabajo periodístico sobre el poder corruptor del narcotráfico en todos los ámbitos de la sociedad colombiana, escrito por el periodista Fabio Castillo. Según el chiste de la época, eran tantas las personas mencionadas en el libro que muchos lo leyeron, no para conocer los tentáculos del narcotráfico, sino para saber si estaban citados.

Los Jinetes de la Cocaína fue el primer intento del periodismo colombiano de poner en un solo escenario la historia turbulenta del narcotráfico con sus protagonistas, testaferros, cómplices y consuetas. Pero para muchos fue un debut desesperado y mesiánico que destruyó sin pruebas la reputación de varias personas. Castillo, reportero del diario *El Espectador*, no tuvo tiempo de escuchar elogios ni críticas, pues pocos días después de ponerse en circulación el libro, recibió varias amenazas de muerte que lo obligaron a abandonar Colombia y vivir durante cinco años en diferentes países del mundo bajo nombres ficticios.

Castillo escribió su trabajo con la rabia y el dolor que le ocasionaron las muertes violentas del director de su periódico, Guillermo Cano Isaza, del ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del jurista Manuel Gaona Cruz y del coronel Jaime Ramírez, todos amigos suyos asesinados por narcotraficantes.

“Tras este libro no hay más que una diáfana intención: la de desnudar ante el país a quienes se pretende en ocasiones exhibir como modernos Robin Hoods”, escribió Castillo en una clara alusión a la revista *Semana* de Bogotá, que había comparado a Pablo Escobar con el legendario héroe inglés del siglo XII, que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Fue quizá el afán por señalar sin contemplaciones a los principales responsables de esta demencial ola de violencia que sufría el país, lo que no permitió profundizar al periodista y desenredar la madeja de rumores y sospechas con que comprometió a varios personajes que no tenían deudas con la justicia, en muchos casos porque la justicia también había sido tentada.

De allí que su libro esté plagado de expresiones como “se asegura”, “se afirma”, “se me informa”, que restaron credibilidad a los capítulos plenamente sustentados.

A Castillo no le preocupaba el hecho de que muchas de las

denuncias de su trabajo sólo se apoyaban en conjeturas, porque sabía que con el tiempo los personajes involucrados se verían enredados en algún lío, que pondría en evidencia sus nexos con los narcotraficantes. De hecho, fue lo que ocurrió con muchos de ellos, que se rasgaron las vestiduras y anunciaron demandas por difamación, y a los pocos años sus nombres figuraron en procesos por narcotráfico en Colombia y Estados Unidos o en las noticias de sangrientos episodios de ajustes de cuentas con la mafia.

Cuatro años después de que los *Jinetes de la Cocaína* se convirtiera en un éxito de librerías –y de paso en un manual de inducción para los agentes principiantes de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) estadounidense–, el periodista escribió un nuevo trabajo sobre el mismo tema, esta vez más sosegado y analítico que el anterior, titulado *La Coca Nostra*. El objetivo del primer libro se cumplió, sostiene Castillo en el prólogo del segundo, “aunque muchos se molestaron, otros me impusieron condenas de muerte, y no pocos buscaron los habituales –para ellos– canales de influencia para enterarse de las pruebas, con base en las cuales, se hizo alguna afirmación, que es lo único que les preocupa. Pero lo importante es que, creo, a partir de entonces ningún colombiano puede alegar válidamente que le restó importancia al tema del tráfico de drogas porque desconocía su verdadera dimensión”.¹⁷

El análisis de la experiencia de Castillo sirve como punto de partida para identificar las limitaciones que encara el periodista investigador cuando su campo de acción es el hostil y movedizo ámbito del narcotráfico. Una revisión general de las publicaciones que he reunido para este libro permite concluir que gran parte de los esfuerzos que han hecho hasta ahora los periodistas investigadores se han concentrado en documentar las diversas formas de complicidad de sectores de la sociedad con las organizaciones del narcotráfico. Los nexos entre el narcotráfico y los partidos políticos, el gobierno, las fuerzas militares y de policía, el sistema judicial, la Iglesia, la banca, la industria y el deporte, son temas reiterados en los últimos 10 años de periodismo en países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Panamá.

Demostrar estos vínculos es la tarea más delicada del periodismo de investigación, pues en materia de narcotráfico usted está

¹⁷ Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína*, Documentos Periodísticos, Bogotá, 1987, pág. 13.

casi siempre supeditado al testimonio de cualquiera de los involucrados en el problema. Unas veces es el narcotraficante arrepentido, otras un fiscal amedrentado, el informante con agenda propia, el sicario, el policía honesto que sabe la mitad de la verdad o un militar corrupto que sólo dice mentiras, y de vez en cuando el agente misterioso de la DEA, que escasamente entrega la información que le conviene. En los últimos años, en la misma mesa de jugadores se ha sentado además la CIA, que en su afán de sobrevivir en un mundo sin Guerra Fría, está tratando de ganar terreno en el campo de la inteligencia antinarcóticos sin olvidar sus siniestras prácticas de desinformación y chantaje.

A partir de la narración sesgada de cualquiera de esos personajes, los periodistas tienen dos caminos: uno, es publicar la versión tal y como llegó a sus manos, no sin antes entregársela a una autoridad de tal modo que puedan informar que el caso se encuentra bajo investigación oficial y así, no correr riesgos personales ni legales. El otro camino, el menos transitado, es el de empezar un proceso de verificación a lo largo de un estrecho callejón formado por los fortines secretos de las organizaciones delictivas, por un lado, y el muro de la reserva sumarial del sistema judicial de su país, por el otro. De cada lado, generalmente sale alguien y entrega un rumor. De manera que el reportaje, al menos en un comienzo, es una guerra de palabras: la palabra de las fuentes —el narcotraficante arrepentido, el investigador policiaco, etc.— contra la palabra de los involucrados.

El caligate

La situación que vive Colombia en 1995, es una coyuntura muy interesante para analizar el papel de los periodistas investigadores. El presidente Ernesto Samper afronta una andanada de acusaciones por la presencia de dinero del narcotráfico en su campaña que ha puesto en entredicho su cargo.

Los grandes hitos de este escándalo son los siguientes:

- Grabaciones de conversaciones telefónicas que sugieren la infiltración de dinero del narcotráfico en su campaña, la del candidato conservador Andrés Pastrana y la del general Mi-

guel Maza Márquez, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

- El relato de una informante de la DEA de nombre María, entrevistada por el autor de este libro en Miami, quien sostuvo que se reunió con Samper en 1989, en un apartamento de Cali donde estaban presentes varios jefes del cartel de Cali, con motivo de la entrega de 400 millones de pesos al precandidato liberal.
- La declaración bajo juramento del tesorero de la campaña de Samper, Santiago Medina, en la que asegura que Samper sabía que su movimiento recibió abultadas sumas de dinero de manos de los cabecillas del cartel de Cali.
- Una grabación revelada por la revista *Semana* en la que una mujer, identificada como esposa de un narcotraficante, insiste en una reunión con unos representantes de una compañía y un banco del exterior para entregar dinero para la campaña presidencial. La mujer le ofrece un diamante de regalo para su esposa.

Toda esta historia surgió a raíz de los narcocasets que, según Pastrana, recibió cuatro días antes de perder las elecciones que había ganado en las encuestas. Las voces de los jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y del periodista Alberto “El Loco” Giraldo, catalogadas como auténticas por expertos del gobierno, se escuchaban en las grabaciones discutiendo futuras y pasadas entregas de dinero a las campañas. En tono familiar —e incluso con apodos y diminutivos—, las grabaciones mencionaban al tesorero del movimiento de Samper, y a otros asesores y amigos tanto del presidente como del candidato perdedor.

Samper aseguró que su campaña no recibió dinero de “dudoso origen” y dijo que las cintas “fueron falsificadas” para incriminarlo. Pastrana no quiso utilizarlas electoralmente porque, según dijo, su función no es la de un juez, y prefirió llevárselas al presidente César Gaviria el día viernes 16 de junio de 1994 para que él, como primer magistrado de la nación, ordenara una investigación.

A menos de 24 horas de haber reconocido su derrota, y después de notificar al gobierno, el joven ex presentador de noticias de televisión citó a una rueda de prensa y puso a rodar la primera cinta ante decenas de reporteros nacionales e internacionales, que ya la habían escuchado en sus salas de redacción. Al final de su presen-

tación, Pastrana dijo: "Creo que lo que se va a poner en evidencia es el periodismo investigativo."

El joven político creía que había servido un gran banquete a los reporteros investigadores para aclarar el enredo a la opinión pública. Pero lo que se puso en evidencia fue contrario a lo que Pastrana esperaba. La prensa llegó con la soga a colgar al mensajero.

Motivados por una furiosa reacción nacionalista, los periodistas se dedicaron a amplificar los ataques contra el despedido candidato que había puesto en la picota internacional el nombre de Colombia, antes de irse a descansar a las playas de Key Biscayne en la Florida. Revanchista, apátrida, mal perdedor le dijeron a Pastrana, que viajó a Miami al día siguiente de soltar la bomba.

Era tal la confusión que provocaron las cintas que la prensa, la misma prensa que cinco meses después ganó por su propia iniciativa y tesón una batalla contra un proyecto de ley patrocinado por los narcotraficantes para abolir el enriquecimiento ilícito, prefirió esperar a que llegaran las autoridades a recoger los platos rotos. Las autoridades llegaron, y dejaron la impresión de que todo había sido un vulgar montaje, según palabras del entonces fiscal Gustavo de Greiff.

Después de varios meses de conjeturas, interrogantes y críticas a la decisión del fiscal y decenas de columnas de opinión, los lectores colombianos sabían tan poco de los narcocasetes como la semana siguiente al escándalo. En los archivos de la crisis no quedó registrado un seguimiento investigativo profundo y balanceado, que para bien de los lectores y de los comprometidos, trascendiera la etapa lógica de identificar a las personas mencionadas en las grabaciones, y diera a la gente alguna señal clara sobre la veracidad de las denuncias.

Si es cierto que los casetes que recibieron los medios de comunicación a cuentagotas eran una simple muestra de cortesía de 1600 horas de grabaciones al cartel de Cali, entonces, tanto la prensa como los investigadores le estaban debiendo una novela al público.

"Todo quedó difuso y confuso", dijo el periodista colombiano Ramón Jimeno. "Si se profundizaba mucho, se hurgaban heridas. Así que todo se fue disolviendo sin ninguna investigación."

No se trata, según Jimeno, de una situación extraña al periodismo de su país, pues en la prensa colombiana "se volvió costumbre" no darle seguimiento a ningún tema, y especialmente al nar-

cotráfico, “porque hay un hastío muy grande y es un tema que la gente quiere superar”.

Roberto Pombo, columnista de *Semana*, comentó que el caso de Pastrana tiene otras implicaciones, y es que sirve para ilustrar “un nuevo y singular deporte nacional, que consiste en convertir a los denunciantes en los trompos de poner”, y que demuestra “que en Colombia es mucho más grave denunciar que ser culpable”. Ingenuo o no, explicaba Pombo, lo que hizo Pastrana fue hacer público un hecho cuya investigación no le correspondía.

Aunque hay quienes sostienen que algunos medios sí escarbaron lo suficiente, la impresión general es que la gran mayoría de los periodistas —así como la gran mayoría de la opinión pública— invirtieron más energías en atacar a Pastrana que en seguir las pistas de los casetes.

“Es evidente que se pudo haber ido más lejos”, dijo Enrique Santos Calderón, subdirector de *El Tiempo* de Bogotá, el diario de mayor circulación en el país. Aunque “no hubo autocensura y a los casetes se les dio una difusión amplísima”, los medios colombianos cedieron “al ambiente de desestabilización y de vacío institucional” que produjo la revelación. Varios de los medios habían recibido copias de las cintas días antes de que Pastrana oprimiera el botón pero “ante las implicaciones del contenido”, sostuvo la revista *Semana*, “nadie se atrevía a publicar las conversaciones”.

De hecho, *El Tiempo* tenía una copia de las cintas antes de que Pastrana las entregara a la publicidad. Santos Calderón sostiene que después de que el reportero judicial Édgar Torres le entregó las grabaciones, como quien entrega un explosivo, en una reunión de los directivos del periódico consideraron las consecuencias que tendría su publicación.

“Tuvimos una enorme discusión para ver qué se hacía con esa papa caliente”, sostuvo Santos, “y la primera reacción fue no publicarla porque era confuso, de un origen raro y salía a brincar mucha gente con quien necesitábamos hablar”. Tras un segundo examen, el diario resolvió publicar sólo fragmentos de la conversación del primer casete y declaraciones de algunos de los citados en ellas.

Pero *La Prensa* y el noticiario de televisión *24 Horas* ya habían divulgado la versión completa de la primera grabación. Tras el estallido del escándalo, *Semana* y los diarios *El Tiempo* y *El Espectador*, los medios escritos más influyentes del país, publicaron los nombres de los personajes de la primera grabación y sus

desmentidos. Un segundo y un tercer casetes, que aparecieron las semanas siguientes, fueron mencionados con cautela, y el cuarto fue motivo de un artículo de *Semana* en el que se decía que el director de la Policía, Octavio Vargas Silva, era mencionado por Rodríguez Orejuela con el apodo de “Benitín”.

En una nota editorial, el noticiario de televisión QAP anunció a los televidentes que se negaba a difundir el contenido de la segunda tanda de casetes porque no quería prestarse a la manipulación de la información. *La Prensa*, el periódico propiedad de los Pastrana, fue tal vez el más prolífico sobre el escándalo, pero cojeaba de la misma pierna que el mensajero que lo explotó. El juicio que Pastrana no hizo en público, su hermano Juan Carlos lo abrió en su tabloide de Bogotá con un iracundo titular que decía: “Ernesto Rodríguez Orejuela”.

“La prensa no sólo ha sido benevolente sino corrupta”, dijo Gonzalo Guillén, editor del diario de los Pastrana. “No investigaron nada, se dedicaron a insistir y persistir en que lo que hizo Andrés fue una infamia y un montaje.” Guillén sostiene que aunque el silencio no fue comprado en efectivo por el gobierno, es el legado de un “contubernio” con el poder político que se afianzó durante la presidencia de César Gaviria, cuando la mayoría de las grandes empresas periodísticas del país bajaron el tono de sus críticas –o las suprimieron– para cuidar el futuro de grandes negocios con el Estado. (Guillén se refiere, especialmente, a la subasta del servicio de telefonía celular por más de 1000 millones de dólares en la que participaron los más influyentes conglomerados de la prensa, la radio y la televisión.)

María Jimena Duzán, columnista de *El Espectador*, sostiene que a pesar de que la prensa se dejó llevar por la ola de indignación nacionalista los días siguientes al escándalo, algunos medios de comunicación reaccionaron y mantuvieron una actitud vigilante en las semanas posteriores. Gracias a tres columnas suyas y a varias publicaciones de *Semana*, afirma Duzán, se produjo un remoción en la Policía Nacional, algunos de cuyos miembros habían sido mencionados en los narcocasetes. “Si la prensa no hubiera mantenido vivo el tema de los narcocasetes, hoy estarían en el olvido”, dijo la periodista.

¿Falló hasta aquí la prensa? ¿Qué aportes importantes hubieran podido hacer los periodistas investigadores al enredo de las cintas? ¿Qué cosas quedaron sin aclarar?

María Cristina Caballero, una periodista que practica la casi extinta disciplina de la reportería de investigación en Colombia, afirma que la actitud de los medios no se puede generalizar porque algunos fueron muy críticos y otros “trataron de tapar las cosas diciendo que era un montaje de Pastrana, sin ningún análisis”.

La periodista reconoce que “se dejó de hacer mucho porque todo quedó en el terreno de la especulación”, y de todos los rumores y las conjeturas, sólo se pudo llegar a dos conclusiones: Que las voces eran auténticas (el propio Giraldo reconoció la suya) y que los casetes habían sido editados. Al respecto, decía *Semana*: “El problema que tienen los narcocasetes no es su autenticidad, sino la discrecionalidad que tiene su interpretación.”

Hoy día nadie tiene claro de dónde salieron las cintas ni quién las grabó; si fue realmente una fuerza combinada de la policía colombiana, la Agencia de Lucha contra las Drogas, (DEA), y la CIA, como especularon algunos medios. Uno de los principales obstáculos que impidió despejar la confusión, explicó la periodista, es que algunos reporteros fueron amenazados cuando quisieron profundizar en las semblanzas de las personas mencionadas en los casetes.

Otro problema, agregó, fue que algunos medios no permitieron que sus reporteros continuaran con las pesquisas porque la información inicial (los casetes) había sido manipulada, y podían convertirse en “idiotas útiles” de un juego que a todas luces tenía por objeto desacreditar al país internacionalmente. La carrera que perdieron los periodistas, la ganó, según Caballero, la fiscalía con un fallo apresurado que no respondió a las expectativas que la opinión pública tenía. Mientras la prensa colombiana cerraba filas con Samper, la de Estados Unidos abría un enorme dique para dejar pasar un alud de sospechas represadas en oficinas importantes del Departamento de Estado, el Congreso y la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA).

The Miami Herald y *El Nuevo Herald* abrieron sus ediciones del 23 de junio con una información que comenzaba diciendo que el gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton “confirmó por su cuenta” los alegatos de que Samper recibió millones de dólares en donaciones de campaña de los traficantes de cocaína del cartel de Cali”. El reportaje iba acompañado de tres párrafos que explicaban en forma genérica el testimonio de la informante “María”.

Un editorial de *The Miami Herald*, que al día siguiente de la publicación del artículo pedía pruebas contundentes al gobierno de Estados Unidos, fue interpretado por *El Tiempo* de Colombia como una retractación del periódico estadounidense. Algunos editores colombianos sostienen que en medio de la confusión que habían provocado los casetes, lo mejor era esperar los resultados de investigaciones oficiales. Pero después se vio que éstas fueron tan pobres como las periodísticas.

En una decisión enérgicamente criticada por la prensa, el fiscal general de la nación, Gustavo de Greiff, cerró la pesquisa de los narcocasetes con el argumento de que no constituían prueba judicial porque habían sido manipulados y grabados ilegalmente. Todo fue producto de una “oscura conjura contra el país”, dijo de Greiff.

Antes de irse lanza en ristre contra de Greiff, fueron pocos los medios que denunciaron el hecho de que el fiscal afrontaba un claro conflicto de intereses. Y éste era que su hija, Mónica de Greiff, ex ministra de Justicia, había sido tesorera de la campaña de Samper. El fiscal renunció luego de ser notificado por la Corte Suprema de que había llegado a la edad límite –65 años– para ejercer el cargo. Su sucesor, Alfonso Valdivieso, reabrió la investigación.

Cuando el tema de los narcocasetes parecía rayado, alguien volvió a ponerlos y por ser quien era, estremeció al país y revolcó el sentimiento antiestadounidense que se había quedado dormido en las consignas comunistas de los descascarados muros de las universidades públicas. Un día después de renunciar, Joe Toft, director de la DEA en Colombia durante siete años, dijo en una entrevista al noticiario de Televisión QAP, que “no hay duda de que la campaña de Ernesto Samper recibió plata del narcotráfico”.

Toft acusó al ex presidente César Gaviria de haberse hecho de la vista gorda ante la denuncia de un vídeo en el que aparecía un miembro de la Asamblea Constituyente recibiendo dinero de un narcotraficante, para que la extradición quedara abolida en la nueva Constitución, como de hecho lo fue. En un arranque de ira y frustración por el fracaso de la guerra contra el narcotráfico, el funcionario estadounidense advirtió que el Congreso, la fiscalía y otras instituciones están infiltradas por el dinero del cartel de Cali.

La prensa colombiana volvió por Toft con la misma soga con la que colgó a Pastrana, y esta vez con un mayor respaldo de una opinión pública hastiada de que el gobierno de Estados Unidos,

cada vez que se le ocurre, salga a dictar lecciones de moral sobre un problema en el que tiene tanta responsabilidad como el país reprendido.

“En Estados Unidos los únicos muertos son por sobredosis”, escribió María Isabel Rueda, directora de QAP, en una columna dedicada a las cosas que Joe Toft calló. Rueda se preguntaba por qué después de siete años, el “francotirador” de la DEA “resuelve hablar el día antes de su partida, prender el ventilador, dejarnos a todos untados, e irse sin asumir las consecuencias de su destape”.

Aun así, comentaba la periodista, y ésta era la idea que retumbaba en la conciencia de muchos colombianos, pero no en las páginas editoriales ni noticiosas de los periódicos, “el problema es que aunque nos caiga gordísimo el gringo con cara de mandril, muchas cosas de las que dijo son ciertas”. Entre ellas, Rueda citó la penetración del narcotráfico en la campaña para alcaldías, gobernaciones y Congreso.

Lo más importante para Rueda y quizá para muchos periodistas colombianos, es que un país en el que los medios de comunicación se sienten en libertad de publicar “testimonios que podrían tumbar a un gobierno”, es un país que “ha comprado un seguro de vida”, pues son muy pocos, “los que pueden darse el lujo de tener problemas políticos graves y unos medios de comunicación libres”.

Durante la segunda mitad del año 1995 el periodista Giraldo, el tesorero Medina y el ex ministro de Defensa Fernando Botero, coordinador de la campaña presidencial, fueron arrestados por cargos de enriquecimiento ilícito. *El Tiempo* y *El Espectador* publicaron la declaración en la que Medina relató bajo juramento al fiscal Valdívieso, lo que ya le había contado al calor de un trago, en reuniones sociales, a varios periodistas y personajes del país. Antes de su arresto, en las salas de redacción bullían los rumores sobre la danza del narcodinero en la campaña de Samper. Sin embargo, nadie se atrevió a embarcarse en un proyecto de investigación que pusiera las piezas juntas a través de la confirmación de los múltiples indicios que surgieron desde que se desató el escándalo de los narcocasetes. Los medios prefirieron, una vez más, caminar al ritmo del fiscal y lo hicieron, según los comentarios de diferentes colegas, por el temor a caer en trampas mortales de documentos alterados o testimonios forzados.

Con todas estas sus limitaciones y los riesgos que esto implica, salen a la luz grandes escándalos de narcotráfico de América Latina.

El yomagate

Otro claro ejemplo de cómo se desencadena este proceso es el caso del narcotraficante arrepentido Indalecio Iglesias, cuyos testimonios generaron una enorme pesquisa periodística internacional en la que participaron reporteros de España, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Argentina y Uruguay.

Desde una celda en España donde se encontraba recluido, y a través de un teléfono celular autorizado por el juez Baltasar Garzón, Iglesias sostuvo largas conversaciones con periodistas de todos los países involucrados. De allí salieron minuciosos relatos de cómo funcionaba una próspera organización de trasiego de drogas y lavado de dinero de la cual era gestor y contador. En varias ocasiones hablé con Iglesias hasta que la batería del teléfono se le descargaba. Manolo Cerdán y Antonio Rubio, periodistas que trabajaban entonces para la revista *Cambio 16* de España, fueron los primeros en entrevistarlo y compartir con sus colegas en Estados Unidos y Sudamérica datos que comprobaron la veracidad de sus declaraciones.

La organización, conocida por sus miembros como “La Empresa”, trabajaba para el cartel de Medellín y funcionaba bajo las órdenes de Iglesias y Ramón Puentes “El Viejo”, un exiliado cubano vendedor de automóviles de lujo de Miami. El principal lugarteniente de Puentes era Mario Anello, un piloto de lanchas rápidas que transportaba droga desde Bimini a las costas de la Florida.

Considerada como la más ingeniosa banda de narcotraficantes de Miami, La Empresa fue la encargada de la “importación” a Estados Unidos de unas 30 toneladas de cocaína durante más de una década y de la creación de una red de empresas de fachada cuyo objetivo era obtener hipotecas de bancos de la Florida para lavar el millonario caudal de las ganancias de las drogas. Tras ser acusados en 1988 de confabulación para delinquir por la fiscalía del sur de la Florida, “los empresarios” huyeron de Estados Unidos y se instalaron en Argentina, donde se dedicaron a cultivar amistades influyentes dentro del partido peronista del presidente Carlos Menem. Allí se granjearon la amistad del hijo de Menem, entonces de 22 años, y cuando lo creyeron oportuno, corrompieron discretamente a varios parientes políticos del presidente, para llevar maletas colmadas de dinero del narcotráfico de Nueva York hasta Buenos Aires. En este negocio fueron inculpadados Amira Yoma, cuñada del

presidente, y Mario Caserta, ex jefe de campaña de Menem.

“Puentes y Anello actuaron en España, Uruguay, Cabo Verde y Estados Unidos, pero sólo en la Argentina obtuvieron el respaldo de influyentes miembros del gobierno. Acostumbrados a tratar con correos y distribuidores identificados por la DEA, para Panchito y ‘El Viejo’ era toda una novedad trabajar con “camellos” que eran familiares o amigos de un presidente. En la intimidad hacían votos por Menem y le auguraban un largo periodo en la Casa Rosada”, escribió el periodista argentino Román Lejtman.¹⁸

Cuando el negocio estaba en plena bonanza y las relaciones con la familia presidencial parecían garantizar un refugio seguro para la organización, Iglesias fue arrestado en Madrid. El arresto ocurrió el 26 de noviembre de 1990 durante una operación encubierta de la policía española. Aunque en la legislación de España no existía la figura jurídica de la colaboración, Iglesias se convirtió en el principal testigo contra La Empresa. Como resultado de su cooperación, Puentes fue arrestado en Uruguay y meses después extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 30 años de prisión.

Con las pistas dadas por el financista arrepentido, los periodistas de *Página 12* de Argentina iniciaron una exhaustiva búsqueda de información que confirmó las versiones de Iglesias y en muchos aspectos las superó. Al reconocer la gravedad de las acusaciones, los demás medios de comunicación se montaron en el tren del “Narcogate”, que fue el nombre con que fue bautizado el escándalo, y por lo menos durante un año no dejaron de publicarse los episodios de este caso que hizo tambalear al gobierno de Menem. Una detallada crónica del dúo gobierno-narcotraficantes fue publicada en Argentina en el libro *Narcogate*, de Lejtman, periodista de *Página 12*.

Entre tanto, en Estados Unidos seguí el rastro de las empresas creadas por la organización para lavar dólares y descubrí que Puentes era accionista minoritario del Republic Bank, el banco de confianza de la organización, según el fiscal del caso en el juicio contra Puentes en 1992. En Panamá, el reportero Tomás Cabal seguía las ramificaciones de la organización y sus conexiones con un empresario del Istmo que figuraba en el encausamiento. En Colombia, *El*

¹⁸ Román Lejtman, *Narcogate: historia inédita de las relaciones de la familia del Presidente y sus amigos con el lavado de dólares*, Suramericana, Buenos Aires, 1993, pág. 35.

Tiempo siguió la pista al pago de sobornos a funcionarios del puerto de Cartagena que autorizaron la salida de embarcaciones cargadas con cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, y los vínculos que tenía con la organización del Jairo Durán, un narcotraficante de la costa atlántica que había adquirido notoriedad por su fastuoso matrimonio con una reina nacional de belleza de Colombia.

Sin embargo, no todos los días aparecen arrepentidos y los periodistas tienen que resignarse a guardar la información en sus archivos, en espera de que se desenrede un poco más el ovillo. En casos en que el tema es arriesgado o toca fibras delicadas de la clase gobernante, algunos periódicos latinoamericanos esperan que el artículo sea publicado en el exterior, y luego se “cuelgan” de la nota para hacer su propia historia agregando los datos que los reporteros locales habían represado.

De cualquier manera, la dinámica del narcotráfico es tan vertiginosa que los reporteros no tienen tiempo para investigar y deben contentarse con los retazos de información que obtienen por debajo de la mesa de los organismos de seguridad, y con ellos entrelazar cautelosamente crónicas especulativas y saturadas de hipótesis que están lejos de ser artículos de investigación. En esta carrera por tener reportajes más amplios y novedosos sobre las crisis que provocan las incursiones del narcotráfico en la vida nacional, las publicaciones semanales y mensuales tienen una ligera ventaja. Esto explica en parte el éxito de la revista *Semana* de Colombia, una publicación que se especializó en rescatar la historia detrás de la noticia, y narrarla en un tono de novela policiaca como una refrescante alternativa a la versión oficial. Los artículos de la revista generalmente van acompañados de una nota que pone en contexto la noticia en un sutil lenguaje editorializante.

Para los reporteros de los diarios la labor es mucho más difícil porque no hay tiempo ni siquiera para hilvanar los hechos y mucho menos ponerlos en contexto. Ante esta cantidad de limitaciones, la única opción recomendable es retirarse del campo de batalla por un tiempo, procesar y verificar en frío la información y publicarla cuando otra crisis relacionada con el tema surja de nuevo. El diario *La Nación* de Costa Rica tiene varios ejemplos para mostrar cómo se puede trabajar a un ritmo pausado sin sacrificar la originalidad ni la actualidad de la información. Una serie publicada en 1984 sobre la invasión del narcotráfico a este país ofrece una clara idea de esta opción.

La fuente documental más pródiga del narcotráfico en América Latina creo que está en los archivos de la Corte Federal de Miami, donde más de 50 % de los casos criminales se relacionan con el trasiego de drogas. Allí reposan miles y miles de documentos que contienen la historia, en gran parte inédita, de las grandes y medianas organizaciones dedicadas al contrabando de marihuana, cocaína y heroína. Estos expedientes incluyen declaraciones de testigos en juicio, transcripciones de conversaciones telefónicas y de grabaciones de audio y vídeos ocultas, libros de contabilidad, fotografías y otras evidencias recaudadas por los fiscales. Los documentos son en principio públicos y pueden ser examinados en una sala de lectura de la Corte por cualquier persona.

En el mundo del narcotráfico usted tiene que lidiar con la hipersensibilidad de los amos del juego que están más atentos al lenguaje utilizado por su artículo que a la verdad que expone sobre sus crímenes. Cualquier frase o expresión que resulte para ellos desdeñosa puede disgustarlos más que la descripción fría de un asesinato de su autoría. En Colombia era sabido que por uno de esos caprichos patológicos del narcotraficante Pablo Escobar, la utilización de la palabra *capo* frente a su nombre podía significar una condena de muerte al reportero. De toda la avalancha de información contradictoria que surgió en ese país a causa de la fuga de Escobar de la cárcel La Catedral en 1993, el narcotraficante sólo corrigió un detalle que lo había enfurecido y fue que él jamás se escapó disfrazado de monja o de mujer, como se atrevieron a decir algunos medios.

La larga lista de periodistas asesinados demuestra, sin embargo, que los narcotraficantes casi nunca rectifican por teléfono ni por escrito.

Prueba de fuego

6

Muchas informaciones erradas que aparecen en los medios de comunicación de nuestros países son producto de no someter el material al más mínimo proceso de verificación. Sin la comprobación de la información, el papel de los periodistas se reduce al de simples traductores simultáneos de datos sobre los cuales no tienen absoluta certeza. El sentido del periodismo investigativo y, por supuesto, el de cualquier disciplina periodística responsable, va en dirección contraria a esa práctica. Usted debe confirmar la información no una, sino todas las veces posibles. Y la prueba de fuego de una investigación periodística, que es de por sí un proceso de continua verificación, es la entrevista con aquellas personas que tienen una cuota de responsabilidad en los hechos. Paul Williams la llama *entrevista clave*.

A esta altura del proceso, el entrevistado tal vez sea su más valiosa fuente de información; él puede confirmar todo lo que usted venía sospechando, incluso probablemente hable de cosas que usted no esperaba; pero también podrá desvirtuar sus acusaciones con argumentos sólidos o información desconocida por usted.

Por esa razón, usted debe llegar a la entrevista con la idea de que además de cumplir con un principio de equidad, como es el de escuchar a la contraparte, ésta es la gran oportunidad para probar la veracidad de sus fuentes y la autenticidad de sus documentos. Antes de poner el pie en la oficina del entrevistado, debe estar más dispuesto que nunca a sepultar su trabajo y tal vez una parte de su ego; resignarse a que la información recogida hasta entonces no

tiene utilidad, y que hay que comenzar de nuevo o, en el mejor de los casos, dar un giro de 180 grados y orientar las baterías hacia un nuevo objetivo. Pero no se decepcione, no todo está perdido. Si el entrevistado desvirtúa sus sospechas, la información obtenida hasta ese momento servirá algún día para otros casos. Lo que debe evitar a toda costa es tratar de publicar su trabajo sólo para justificar el tiempo invertido.

SALTO MORTAL

Al comentar por primera vez los detalles de su investigación con el entrevistado, existe el riesgo de que éste convoque de inmediato a una rueda de prensa para adelantarse a su publicación y desacreditarla de antemano. Algunos periodistas justifican la falta de entrevista clave en sus artículos con el argumento de que el entrevistado puede echar a perder su primicia de esa manera.

Nuestra experiencia en la Unidad Investigativa y *El Nuevo Herald* es que son muy pocos los que recurren a esa estrategia. Aún así, el material del reportero investigador conserva su originalidad, y en lugar de perder valor periodístico, gana el doble por cuenta de la expectativa creada por quien se atreve a desvirtuarlo cuando todavía es inédito. De cualquier manera, es preferible salir de último con una información equilibrada que de primero con una calumnia.

Gustavo Gorriti, periodista peruano del semanario *Caretas*, sostiene que en la mayoría de los trabajos, los periodistas de esa publicación, prefieren no consultar a los implicados para no perder un “elemento de sorpresa”, que es muy importante en el periodismo de revista. Por otro lado, explica Gorriti, en su país es casi imposible obtener declaraciones del gobierno sobre actividades cuestionadas por la prensa.

“Sí ha habido intentos de hacer entrevistas y como no funcionan, lo que se hace es tratar de investigar y de obtener la mejor versión posible, y obtener la respuesta del gobierno como reacción después de la publicación, es la mecánica a la que uno está obligado por las condiciones.”¹

¹ Entrevista con el autor.

Otros reporteros afirman que prefieren esquivar la entrevista porque temen que las personas enredadas en sus denuncias traten de impedir la publicación a través del editor o el dueño del periódico, citando lazos de amistad, compromisos políticos o económicos.

Un periodista colombiano me comentaba que esto ocurría con frecuencia en su periódico. A los pocos minutos de llamar a la persona comprometida, aparecía su editor pidiéndole que suspendiera sus averiguaciones porque la persona era “de la casa”.

EL ENTREVISTADO COMO FUENTE

Al tratar de contradecir los hechos, el entrevistado conduce al reportero a rincones insospechados de su investigación.

El día que llegamos con Evelyn Larrubia al consultorio del doctor Ricardo Samitier, pensábamos que tendríamos que conformarnos con escuchar una negativa general y reiterada a nuestro cuestionario en una entrevista que no demoraría más de 15 minutos. Pero no fue así. Samitier habló frente a nuestra grabadora durante casi dos horas, y en un lenguaje muy claro nos contó cosas que hasta entonces ignorábamos. Nos dijo, por ejemplo, que había descubierto que Claudio Martell tenía marcapasos cuando, en medio de la liposucción, sintió que la cánula con que se aspira el tejido graso había chocado con unos cables del aparato dentro del cuerpo del paciente. Pero lo más importante para nosotros fue haber escuchado de sus propios labios, no una sino varias veces, que para él no era un misterio que Martell estaba bajo tratamiento del anticoagulante Coumadín cuando se sometió a la operación. “A mí no me preocupaba nada el Coumadín”, dijo Samitier. “Es una cirugía muy sencilla donde se retira muy poca cantidad de grasa y las cantidades de sangre esperada, de pérdida de sangre esperada, era muy poca.”

Esta declaración era muy importante para nosotros porque los médicos que consultamos antes de la entrevista habían dicho que operar a una persona bajo tratamiento de ese anticoagulante ponía en riesgo su vida, aun en el caso de una operación ambulatoria. En esta misma entrevista nos enteramos de la exótica versión del médico sobre las causas de la muerte del cantante. Samitier decía que todo había sido producto de predisposición parapsicológica del paciente hacia la muerte.

“Todo el mundo conoce”, dijo, “y esto está establecido en la medicina, que están los casos de que el chamán le dice a la gente ‘Vas a morir’, ¿Ok?, y el tipo, porque cree en el poder del chamán ¿Ok?, muere y no tenía absolutamente nada. O sea que estamos hablando de algo neuropsicológico, ¿Ok?, combinado con el estado físico cardíaco que él tenía, que provocó su muerte”.

PREPARACIÓN

Hay grandes entrevistadores, como es el caso de Larry King, de la cadena CNN, que opinan que el periodista no debe preparar mucho su entrevista, sino que se debe presentar con un deliberado nivel de ignorancia para descubrir espontáneamente al personaje como si fuera el televidente. No es éste un buen consejo para los periodistas investigadores, puesto que aquí no se trata de agradar a nadie ni de ganar audiencia, sino de intentar conocer, en un siempre corto periodo de tiempo, la versión de la persona cuya reputación está en juego. Así que si no es por una circunstancia excepcional, no toque a la puerta de su entrevistado sin estar preparado para hablarle.

Una entrevista provechosa requiere un dominio razonable del tema y una actitud no beligerante, que demuestre al entrevistado que usted está ahí para escuchar y no para llevarse una cita de relleno. El reportero casi siempre tiene una idea general de las explicaciones que puede esperar del entrevistado, gracias a que a lo largo del proceso de investigación adquiere el hábito de intuir las o conoce las pistas para inducir las. A fuerza de preguntarse a sí mismo qué respondería el entrevistado, de consultar fuentes cercanas o de escuchar al compañero de trabajo imposter las posibles explicaciones que daría la persona, el reportero llega al momento de la entrevista con suficiente información como para no contentarse con la respuesta formal.

El contacto con fuentes y el estudio previo de documentos resultaron muy útiles para planificar la entrevista con un industrial colombiano, que había manejado a su antojo las finanzas de una empresa automotriz colombiana en la que tenía participación el gobierno nacional. Antes de la entrevista conocí por lo menos cinco documentos extensos en los que el sagaz empresario explica-

ba su gestión a organismos del Estado, que como bien se sabe, no están muy interesados en conocer los hechos en profundidad.

En los primeros minutos el entrevistado trató de repetir el guión exculpatorio con el que había convencido al gobierno para evitar una investigación criminal, pero no contaba con que mis fuentes ya me habían indicado las contradicciones que existían en esos argumentos. Esto lo forzó a dar respuestas más elaboradas y que no reflejaban la preparación que había exhibido en el primer nivel de preguntas.

Un cuestionario bien elaborado y revisado varias veces por usted y algún compañero de trabajo, garantiza el control de la entrevista. Recuerde que ésta puede ser su última oportunidad de verificar la información y que cualquier pregunta que quede sin hacer, dejará un vacío insalvable en su reportaje. Un cuestionario asegura que se acordará de todos los puntos que quiere tocar, facilita el mantener el curso correcto de la entrevista y demuestra a la persona a quien se entrevista que usted ha dedicado tiempo y esfuerzo en preparar el tema. "Si desea una razón más para preparar por anticipado la entrevista", agrega el periodista Hugh C. Sherwood, "recuerde que, si no sabe con toda precisión lo que debe preguntar, existe siempre el peligro de formular preguntas inadecuadas".²

He comprobado muchas veces que es muy útil que las primeras preguntas del cuestionario tengan como objetivo llevar al entrevistado a reconstruir cronológicamente los hechos con sus propias palabras. En este recorrido he descubierto detalles inéditos que sirven para agregar, sobre la marcha, nuevas preguntas. Agotada la narración cronológica, las siguientes preguntas deben estar orientadas a buscar un comentario del entrevistado. Es la clásica pregunta ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo describiría usted. . .? Por supuesto, el cuestionario debe tener las preguntas fácticas sobre tiempos y espacios que usted necesita precisar, y las preguntas obvias o tontas.

EN BUSCA DE LA ENTREVISTA

Son raros los casos en que los comprometidos en una investigación se niegan a conceder una entrevista. Cuando la persona no

² Hugh C. Sherwood, *La entrevista*, A. T. E., Barcelona, 1976, pág. 52.

quiere hablar, es muy importante que usted agote todos los recursos posibles para demostrar que no está tratando de cumplir con un requisito, sino que realmente la versión de la persona es fundamental para su artículo. Una simple negativa a tomar una llamada telefónica no es suficiente para decir a los lectores que la persona se negó a responder. Hay que intentarlo varias veces y, si es posible, enviar una nota por escrito.

En la Unidad Investigativa tratábamos por todos los medios de que la persona reticente se enterara de que su opinión era muy importante para el informe. Algunas veces enviábamos cuestionarios escritos por correo certificado. Nuestro procedimiento inicial consistía en llamar a la oficina de la persona, y si no la encontrábamos después de intentarlo dos o tres veces, le decíamos a quien respondiera que estábamos preparando un informe sobre un asunto que podría involucrar a la persona, y que por tal razón era decisivo para nosotros tener su opinión. Anotábamos la fecha y hora de la llamada y el nombre —muy importante— de la persona que respondió. Esto de tomar los nombres de quienes contestan no sólo compromete al intermediario —secretaria, asesores, familiar, etc.—, sino que además sirve para responder a reclamos del implicado en caso de que argumente que nunca se le llamó. Si la persona no responde, procure un encuentro personal, ir a su casa, hablar con su abogado, sus amigos más cercanos, sus compañeros miembros de la junta directiva, y hágales saber que usted quiere hablarle.

Al otro extremo de los entrevistados reticentes se encuentran aquellas personas que, al enterarse de que el periodista sigue sus pasos, insisten que se les conceda una cita para explicar sus actuaciones antes de que usted haya terminado su indagación. Lo más conveniente es informarles que en su oportunidad podrán exponer sus puntos de vista. Evite a toda costa esas entrevistas prematuras forzadas por los involucrados.

JUGAR DE LOCAL O VISITANTE

Dice Daniel Samper que hacer la entrevista en la oficina del periódico tiene para el reportero las ventajas del equipo de fútbol que juega de local.³ Una de esas ventajas es evitar que la persona

³Conferencias sobre Periodismo Investigativo, Universidad de La Sabana, Bogotá, 1985.

interrumpa la entrevista que había concedido, para atender actividades de su oficina o de su casa. Por ejemplo, hay funcionarios que después de una pregunta incómoda, resuelven llamar a un subalterno que “conoce mejor el asunto” o atender las llamadas pendientes. Estas interrupciones diluyen la responsabilidad del entrevistado y restan continuidad a la entrevista.

En agosto de 1986 trataba de establecer el origen de unos baños saunas y otras compras suntuarias para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, una institución del gobierno colombiano.⁴ En entrevista con una emisora de radio, el director de la entidad había negado que hubiera adquirido los equipos de baños saunas para la sede de la dirección. Pero nos habíamos enterado que los baños estaban instalados en el sótano del edificio del SENA. Para un instituto con escaso presupuesto que debía ceñirse a los programas de austeridad del gasto público que pregonaba el gobierno, la inversión era a todas luces innecesaria. Tuve una entrevista con el director. Después de tratar de reconstruir el proceso de adquisición y de preguntar varias veces por los funcionarios responsables de la compra e instalación de los baños, el director empezó una maratón de llamadas telefónicas a diferentes dependencias. En pocos minutos, la oficina estaba llena de funcionarios, todos hablando al mismo tiempo y practicando lo que en términos burocráticos se conoce como “el deslinde de responsabilidades”, y en lenguaje común, “lavarse las manos”. Al terminar la entrevista, y pese a que se trataba de un caso simple, no pude saber a ciencia cierta quién había ordenado la compra de los equipos.

Otra ventaja de jugar de local es que el entrevistado está desprovisto del escenario que enmarca su poder y autoridad. No es lo mismo estar frente a un funcionario, por ejemplo, en una simple y desmantelada sala de entrevistas de un periódico, que sentado frente a su imponente escritorio en una oficina custodiada por secretarías, asesores y probablemente guardaespaldas. Si el entrevistado se siente ofendido por las preguntas del periodista en la oficina del periódico, lo máximo que puede hacer es retirarse. Pero si está en su oficina, quizá no dudará en echar al reportero de mala manera y con la certeza de que podrá dar una versión a su acomodo del porqué se vio obligado a tomar esa decisión.

⁴ “El Sena adquirió equipos de sauna para empleados”, *El Tiempo*, Bogotá, 31 de agosto de 1986.

Cuando Alberto Donadío buscaba a los responsables del fraude en el Banco del Estado, se presentó en la oficina del gerente de una de las firmas de Jaime Mosquera, presidente del banco, para averiguar sobre los nombres ficticios que habían sido usados por algunos directivos para sacar dinero del banco.

“De entrada le dije que los ganaderos no existían y le propuse que contara cómo se los habían inventado. El veterinario se puso bastante molesto y me invitó a retirarme de su oficina, no sin antes sugerir que nos investigaría a Daniel Samper y a mí por evasión de impuestos.”⁵

ENTREVISTAS EN PAREJA

Después de una encuesta a varios periodistas investigadores de Estados Unidos de América, Paul Williams concluyó que la participación de un segundo reportero en la entrevista clave es recomendable. Además de ayudar a corroborar la información, la segunda persona ofrece a la sesión la posibilidad de un “cambio de velocidades” cuando el ambiente se pone tenso. Si uno de los reporteros juega de hombre duro y escéptico y el otro de tipo amistoso, “el entrevistado aprecia el cambio y tal vez le puede contar al segundo cuestionador cosas que no le diría al primero”, afirma Williams.⁶

Cuando el tema de la investigación es complicado, ya sea porque se relaciona con temas científicos, jurídicos o tecnológicos, la presencia de dos entrevistadores resulta de gran utilidad. En varias investigaciones de inseguridad aérea que hicimos en la Unidad Investigativa, preferíamos entrevistar en pareja a los técnicos y pilotos, pues la terminología especializada y algunos procedimientos hacían difícil a un solo reportero la labor de tomar apuntes y preguntar. Al final de la entrevista, comparábamos notas y discutíamos las conclusiones.

La idea es que mientras un reportero hace las preguntas, el otro analice las respuestas y trate de cubrir los temas que queden pendientes a raíz de las respuestas del entrevistado.

⁵ Alberto Donadío, *Banqueros en el banquillo*, El Áncora Editores, Bogotá, 1983, pág. 52.

⁶ Paul N. Williams, *Investigative Reporting and Editing*, Prentice-Hall, Engewood Cliffs, Nueva Jersey, 1978, pág. 82.

Ante un entrevistado problemático, que se ha quejado del periodista que maneja la investigación o ha tratado de desacreditarlo aduciendo que tiene intereses personales en la denuncia, es mejor llegar acompañado. No se trata de demostrar a la persona que sus sospechas han sido aceptadas, sino de restarle tensión a la entrevista. Al ver una cara nueva aparentemente ignorante del tema, el entrevistado se sentirá más tranquilo para hablar y las preguntas que no quiera responder al reportero de quien desconfía, podrá contestarlas a su compañero o compañera.

USAR O NO GRABADORA

Este es un dilema tan antiguo como la grabadora. Hay quienes no se sienten seguros de obtener conclusiones de una entrevista y seleccionar las citas más importantes, si no tienen una transcripción textual de la misma. Hay otros que confían más en su caligrafía y en su habilidad para escoger las citas interesantes durante la entrevista, y desconfían de la infalibilidad del aparato.

Estos son los argumentos en favor y en contra que con más frecuencia se debaten cuando se trata el tema de la grabadora:

En favor

- Se obtiene una versión más fiel.
- El entrevistador puede atender mejor al entrevistado y tener un mayor contacto visual.
- El entrevistado puede hacer más preguntas en menos tiempo que quien toma notas.
- Se dispone de todo el contenido de la entrevista.
- Sirve como elemento probatorio en caso de discrepancias.
- Las explicaciones complicadas que incluyan estadísticas, números, términos técnicos y científicos pueden ser transcritos textualmente y verificados por las fuentes.

John Brady señala que los testimonios recogidos en una grabadora dan “un fresco toque de verdad” a la información. En su libro *The Craft of Interviewing*, cita una opinión del reportero de *The Washington Post*, Haynes Johnson, que tiene gran actualidad en Latinoamérica: “La suspicacia en torno a la palabra escrita hoy en

día es inmensa; si usted escribe una serie larga sobre temas controversiales, encuentra una enorme cantidad de gente que no está de acuerdo con lo que usted dice y simplemente no cree que usted ha estado allí. Así que nosotros usamos estas transcripciones para darle al lector un sentido de 'Por Dios, me guste o no, eso fue lo que el hombre dijo'.⁷

En contra

- El entrevistado se cohibe y calcula cada respuesta.
- Entrevistador y entrevistado terminan comunicándose a través del aparato, ambos pendientes de si está funcionando o no.
- La entrevista pierde ritmo porque el entrevistado interrumpe cada vez que quiere hacer un comentario *off the record*.
- Pueden presentarse fallas técnicas: la cinta se atasca, las baterías se acaban o la voz queda asordada por interferencias de ruidos imprevistos o aparentemente insignificantes como el del aire acondicionado y la luces de neón. Estos riesgos técnicos se multiplican cuando la entrevista se hace por teléfono.
- La transcripción es una labor muy larga y engorrosa.

Uno de los mayores enemigos del uso de la grabadora es el periodista Gay Talese, que considera al aparato un "intruso" que no permite a las personas "ser francas y libres".⁸ Debido a la mutua desconfianza entre entrevistados y periodistas, en Latinoamérica el uso de la grabadora ha dejado de ser un dilema técnico y se ha convertido en una necesidad probatoria. Mucha gente no confía en que el reportero respete sus declaraciones, y los reporteros no quieren correr el riesgo de que los entrevistados aparezcan al día siguiente de la publicación diciendo que sus declaraciones fueron tergiversadas.

Aunque usar o no grabadora es una decisión que depende de cada circunstancia, lo ideal es grabar y tomar notas al mismo tiempo, no sólo de las declaraciones importantes, sino de las actitudes del entrevistado y de las ideas que se le ocurran al periodista para

⁷ John Brady, *The Craft of Interviewing* Writer's Digest, Cincinnati, Ohio, 1976, pág. 140.

⁸ Citado por John Brady, *The Craft of Interviewing*, Writer's Digest, Cincinnati, Ohio, 1976, pág. 138.

averiguar posteriormente. Bob Greene, sostiene que cuando su equipo del *Newsday* va a una entrevista clave, invariablemente solicita que sea grabada y le sugieren al entrevistado que haga lo mismo.

“Nosotros no nos basamos en la grabadora como el instrumento principal”, dice Greene. . . “la usamos sólo para clarificar notas y para la cita exacta.”⁹

EL DÍA DE LA ENTREVISTA

La entrevista clave es de por sí un encuentro incómodo. El entrevistado sabe que el periodista ha estado siguiendo sus pasos en los últimos días. El tema de la conversación no será agradable y girará en torno a preguntas que en cualquier momento pueden irritarlo. Una manera de hacer las cosas menos incómodas es advertir al entrevistado, desde un principio, que usted está dispuesto a archivar su investigación si encuentra explicaciones convincentes que desmientan los cargos.

Los primeros minutos de la entrevista son muy importantes. En ese lapso se puede prever la temperatura que tendrá el encuentro en la próxima hora y el grado de serenidad del entrevistado. Procure que el saludo inicial no sea efusivo y diríjase a la persona preferiblemente en términos de señor tal o señora tal. Evite el tuteo y llamarlo sólo por el primer nombre, para no dar una impresión de confianzudo.

En la conversación inicial usted podrá saber de inmediato si el entrevistado es directo o divagador. Los directos, que son escasos, lo reciben a usted muy seriamente y sin rodeos le preguntan: “¿Qué se le ofrece?”, “¿Qué está buscando?”, o se adelantan diciendo: “Yo sé lo que usted quiere, así que vamos al grano”.

Andrés Oppenheimer, autor del libro *La hora final de Castro*, tuvo que lidiar con muchos de estos entrevistados cuando trataba de reconstruir la historia del fusilamiento de varios militares cubanos por cargos de narcotráfico y traición a la patria. La técnica que mejores resultados le dio para franquear la barrera de silencio impuesta por los militares sobre el tema, no fue exactamente preguntar, sino afirmar. Explica Oppenheimer que después de dar al entre-

⁹Williams, *op. cit.*, pág. 83.

vistado una versión absurda o exagerada de los hechos que quería precisar, los entrevistados la negaban enfáticamente, diciendo: "No, jamás, ¿quién le dijo eso? Es una barbaridad". Entonces, corregían la versión del periodista y la reemplazaban por la de ellos, que era la que Oppenheimer realmente buscaba.¹⁰

Los entrevistados divagadores, una especie más abundante, inician la conversación con temas triviales. A veces tratan de averiguar detalles de la vida del periodista, y son muy inclinados a comenzar su conversación con alusiones a su carrera profesional, mostrando diplomas, condecoraciones y constancias, y evocando los momentos más importantes de sus vidas. No trate de apresurar el paso de estas entrevistas. Escuche con atención, que de esas autobiografías no solicitadas suelen salir detalles importantes. De esta manera nos enteramos que Samitier había sido rechazado de decenas de universidades de Estados Unidos donde había presentado exámenes para estudiar medicina. Él mismo nos contó, rabioso, cómo tuvo que soportar semejante humillación, que atribuyó al hecho de ser hispano y que lo forzó a estudiar en el exterior.

Cuando el periodista se presenta a la entrevista lleva tres clases de preguntas. Unas directas, que en definitiva procuran establecer en forma precisa el grado de responsabilidad del entrevistado; otras fácticas, que buscan aclaración de los hechos, y otras obvias. Para evitar que el entrevistado se sienta acorralado, no lance todas las preguntas espinosas en serie. Busque la forma de compensar una pregunta directa y franca con una neutral o incluso con una de esas preguntas tontas que, según Dick Gibson, reportero del periódico *Des Moines Register*, probablemente logra que el entrevistado le cuente más de lo que realmente quiere "según la teoría de que usted definitivamente no comprende".¹¹

Una de las técnicas de Jack Anderson, el prestigioso columnista investigador de Washington, es pedir primero al entrevistado que muestre sus cartas y después destapar las suyas. Anderson pregunta primero la versión de los hechos que ya conoce, y si encuentra una divergencia con la versión que él ya sabía, saca sus ases y le dice al entrevistado algo así como "Pero eso no es lo que dice este documento".

¹⁰ Andrés Oppenheimer, conferencia "Vicios y virtudes del periodismo de investigación en América Latina", Seminario de Periodismo de Investigación en América Latina, Santiago, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1993.

¹¹ Citado por Williams *op. cit.*, pág. 70.

El periodista podrá hacerse el tonto o el sesudo para obtener el mejor provecho de una entrevista, pero lo que no debe hacer en ningún caso es dejar que la arrogancia domine su manera de preguntar. "Al moverse en este mundo de titulares y hora de cierre, de teletipos y micrófonos, es bastante fácil perder la perspectiva", dice Sherwood. "Es incluso fácil convertirse en un engreído. Pero lo más fácil de todo es olvidar que, sin que importe lo bien que se escriba o se habla, se sigue siendo un canal de la información, un catalizador, un intermediario entre las fuentes de las noticias y el amplio público lector o espectador".¹²

Las siguientes son las recomendaciones más comunes para realizar una mejor entrevista, recopiladas a partir de las experiencias de la Unidad Investigativa y testimonios de periodistas de Estados Unidos y Latinoamérica:

- No interrumpa al entrevistado, salvo que usted quiera tocar un tema que considera muy importante para desarrollar antes de que continúe hablando o que se haya extendido exageradamente en su respuesta, y el rumbo de la entrevista se vuelva errático.
- No dé su opinión al entrevistado sobre el tema que investiga. Si éste insiste, explique que usted todavía no ha obtenido una conclusión de los hechos. Y si usted necesita expresar una opinión para tener la del entrevistado, trate de atribuírsela a alguien o utilice un lenguaje hipotético. Pero recuerde: "La peor cosa que puede hacer un entrevistador es hablar de sí mismo."¹³ "En una entrevista, uno mismo, su propio ego, sus opiniones y sentimientos, deben situarse en último lugar. En primer lugar debe situarse a la persona a la que se entrevista y el tema por el cual se le entrevista", dice Sherwood.¹⁴
- No se deje llevar por la emoción cuando obtenga una respuesta trascendental para su investigación. Antes de apuntarla en su libreta, espere unos instantes y trate de demostrar al interlocutor que fue una respuesta como cualquier otra. Muchas veces, cuando el entrevistado descubre en el rostro de periodista que éste ha obtenido la declaración o la pista

¹²Sherwood, *op. cit.*, pág. 22.

¹³Afirma el legendario columnista de New Yorker A. J. Liebling, Citado por John Brady, *The Craft of Interviewing*, Nueva York: Vintage Books, 1977, pág. 58.

¹⁴Sherwood, *op. cit.*, pág. 26.

- que buscaba, tiende a corregir o condicionar su respuesta.
- Sitúese en un lugar donde el entrevistado no pueda leer sus apuntes. Esas personas que buscan la proximidad para examinar la forma cómo usted toma sus notas e interrumpen lo que están diciendo para corregir lo que usted escribe, terminan por tomar el control de la entrevista. Si usted deja avanzar esta situación, en pocos minutos es posible que el entrevistado tome su propio bolígrafo y pida permiso para escribir nombres, direcciones o datos en su libreta de apuntes que considera que no han quedado bien escritos.
 - Es muy común encontrar entrevistados que dictan sus declaraciones, incluso indicando dónde poner los puntos y las comas. No permita que esto ocurra. Dígale que puede hablar de corrido y que si a usted no le queda algo claro por la velocidad de su discurso, se lo dirá de inmediato.
 - “El entrevistador sensato trabaja con un espíritu abierto y crítico”, opina Brady. “Nunca juzga a su entrevistado; él espera a que su entrevistado se juzgue a sí mismo.”¹⁵
 - A lo largo de la entrevista se producen silencios incómodos. El periodista no está obligado a romperlos. El entrevistado se ve presionado a hablar y tal vez se refiera a temas que no pensaba tocar.
 - No se deje abrumar por explicaciones jurídicas. En su carrera por obtener una cita, muchos reporteros se concentran en las palabras más que en el significado de esas palabras.¹⁶
 - “Trato de entrevistar a la persona sin ser crítico de su vida. Trato incluso de no pensar que es una entrevista, sino más bien una conversación. Lo veo como la versión de su vida, su ‘mito personal’. En pocas palabras, yo dejo que la gente hable y hable. Entonces comienzo lo que creo que es una ‘entrevista continuada’ con amigos, familiares y enemigos sobre todos los periodos importantes de su vida.”¹⁷
 - Si la entrevista sube de temperatura y usted nota que el entrevistado se pone agresivo, no se muestre afectado y diga-

¹⁵ Brady, *op. cit.*, pág. 71.

¹⁶ Mike Masterson y Martín Yant, “Presumed Guilty: How Negligent Contribute to Wrongful Convictions”, *The IRE Journal*, marzo-abril de 1993, pág. 6.

¹⁷ Afirma Walt Harrington, autor del libro *American Profiles: Somebodies and Nobodies. Who Matter* Walt Harrington. Citado por “The IRE Journal, A Magazine for Investigative Reporters and Editors” marzo-abril 1993, pág. 8. El Libro de Harrington fue publicado por University of Missouri Press en 1993.

le cortésmente que está dispuesto a regresar cuando esté más calmado.

SIMULACIÓN

No siempre una entrevista clave se inicia con la fórmula “Soy periodista y necesito hacerle algunas preguntas”. Hay casos en que el reportero no se identifica como tal o simula otra identidad para obtener la información. Para muchos es una práctica antiética que no la justifica ni siquiera el argumento más citado por quienes la aprueban: algunos temas sólo pueden conocerse si el periodista asume otra identidad. Después de todo, dicen los defensores, el método no es más ilegal que la conducta de quienes son investigados o quienes tratan de mantener las cosas ocultas. Antes de profundizar en el debate ético en torno a esta técnica, voy a reseñar algunos casos.

El intermediario

En una de las pocas oportunidades en que dimos una identificación diferente de la de reporteros de la Unidad Investigativa, logramos conocer el paradero de los auxilios regionales recibidos por algunos congresistas, caso que venimos analizando a lo largo de este libro. Pese a la voluminosa información que había conseguido María Cecilia Silva en los archivos del Congreso, nuestro plan de demostrar que los auxilios no llegaban al destino señalado por la ley se había estancado. La información nos indicaba la ruta de cada partida presupuestal, los nombres de los congresistas que las habían ordenado y las instituciones supuestamente beneficiadas. Pero ésa era una ruta que, por ser oficial, no mostraba los desvíos ilegales. La única información interesante que podría extraerse de los documentos era que muchos de los auxilios iban a parar a determinados colegios de la capital, pese a que los congresistas patrocinadores eran de otras regiones más necesitadas.

Las edificaciones donde funcionaban los colegios no reflejaban las millonarias donaciones que supuestamente recibían cada año. Pero no había facturas ni órdenes de pago que nos permitieran probar que el dinero no se había invertido.

En conclusión, con la documentación que teníamos hasta ese momento, el artículo no hubiera podido convertir en noticia el rumor que lo había generado.

Con esa información hubiéramos escrito lo que llamábamos “el artículo mínimo”. Algo así como: “Una decena de colegios de la capital figuran entre las instituciones más favorecidas por los auxilios regionales, pese a que los congresistas que los patrocinan son de otras regiones del país que claman por una mayor atención.”

Eso la gente ya lo sabía, y repetirlo con unos cuantos datos nuevos no tenía sentido. Fue entonces cuando nos planteamos la idea de presentarnos en los colegios con otra identidad. El plan era ponerse en contacto con rectores y propietarios de los colegios, para tratar de obtener detalles de cómo negociaban los auxilios con los congresistas. Eso se haría diciéndoles que yo era intermedio (no asistente ni asesor, un simple enlace) de un parlamentario –cuyo nombre no se revelaría hasta que no se perfeccionara el negocio– que estaba interesado en escuchar propuestas para adjudicar al colegio una partida del presupuesto nacional.

Si las personas preguntaban por qué no se revelaba el nombre del congresista, se le diría que para evitar que estuvieran llamándolo a molestarlo para saber cómo iba el negocio.

Samper aprobó el plan. María Cecilia no estaba convencida y prefirió marginarse de esta etapa. La época era de cosecha; en esos momentos los congresistas empezaban a “negociar” las partidas con los potenciales beneficiarios a través de asesores e intermediarios. El plan funcionó. Por lo menos en tres de los colegios sospechosos se logró que sus dueños discutieran conmigo el monto de la comisión y los detalles del intercambio de favores. El lavado de auxilio permitía a los congresistas recobrar una parte del dinero o conseguir a manera de contraprestación del colegio, camisetas de propaganda política, cuadernos para repartir en la campaña, servicio de buses para manifestaciones e incluso leche en polvo.

Me reuní en Bogotá con la rectora de uno de los colegios en medio de un desfile de todos sus alumnos que se dirigía a una iglesia cercana al colegio y estaba encabezado por una estruendosa banda de guerra. Ante la imposibilidad de conversar, le hice señas de que la llamaría por teléfono más tarde. En un memo que escribí para mi archivo, el 29 de octubre de 1985, después de hablar telefónicamente con la rectora, quedaron algunos de los detalles de la conversación:

"Me pregunta que por cuánto es el auxilio. Le digo que por cinco millones. Le explico que la política está muy cara y que si ella podría considerar la posibilidad de ayudarnos con un porcentaje del auxilio. Me pregunta cuánto sería y le digo que 30 %. . . Y me dice: 'dejémoslo en 20'. '¿Y sin adelantos?', le pregunto. Ella responde: 'no, no, sin ningún adelanto', y pregunta si el auxilio saldría este año. Le digo que sí. . ." En una conversación, una hora más tarde le propongo que subamos el porcentaje de la comisión a 25 % y que yo sé que ella trabaja con otros congresistas hasta con 30 %. Y en ese momento se produjo la respuesta que buscábamos: "lo que más he dado es el 22 o 23", dijo, "pongámosle 23".

Simular es una práctica más generalizada en Latinoamérica que en Estados Unidos. Miles de lectores paraguayos del diario *ABC Color* se enteraron en 1992 de cómo operaba una enorme red de tráfico de vehículos robados en la zona de Alto Paraná, gracias a que los periodistas Héctor Guerín, Hugo Ruiz Olazar y Andrés Cristaldo se infiltraron en el mundo de los traficantes de automóviles y publicaron, durante varios días, una serie de reportajes que describían las rutas, el monto de las coimas y quiénes estaban implicados. En la primera entrega de la serie relataron cómo los policías brasileños participaban activamente del lucrativo negocio. El primer contacto de los reporteros fue justamente con un policía de ese país.

"Como si estuviéramos tratando con un vendedor profesional en Puerto Indio", escribieron, "un sargento de la delegación de Gobierno de Alto Paraná se puso a nuestra disposición para lo que deseáramos. '¿Qué quieren. . . un tractor, camión o auto?', preguntó con toda la naturalidad".¹⁸

DEBATE

Obtener la información simulando otra identidad fue una decisión excepcional que justificamos con el argumento de que no existía otra forma para continuar con la investigación y que al ponerla en práctica no estábamos incurriendo en ninguna acción ilegal,

¹⁸ "Polibandis domina el tráfico de vehículos robados", *ABC Color*, Asunción, jueves 1 de octubre de 1992, págs. 1, 2 y 3. Walt Harrington, *American profiles: Somebodies and Nobodies Who Matters*, University of Missouri Press, Columbia, Misuri, 1993.

como es el simular una autoridad pública. En esa ocasión recordamos los trabajos del periodista alemán Gunter Wallraff, un experto en camuflajes que considera este método mucho menos ilegal que las maniobras y los subterfugios que ha denunciado.

Es una opinión con la que coincide Bob Greene, el legendario investigador de *Newsday* que se hizo pasar por abogado en Europa para seguir la ruta de la heroína desde Turquía y Francia hasta Estados Unidos.

Cuando investigaba la muerte de la secretaria de Edward Kennedy en la isla de Chappaquiddick en 1969, Greene obtuvo los registros de las llamadas de los familiares de la víctima a través de un método poco ortodoxo. El periodista no tuvo que identificarse como policía, pero hizo todo lo posible para parecerlo. Greene se presentó junto con algunos colaboradores en el hotel donde se alojaban los familiares de Mary Jo Kopechne, la secretaria del senador, vestido con una gabardina negra y a bordo de un automóvil al que le había puesto una antena especial que daba la impresión de ser un coche en misión oficial.

La caretas usadas por Greene para conseguir determinadas informaciones son casi siempre motivo de discusión en los frecuentes debates sobre esta práctica. Para Greene, por encima de la ética está el derecho del lector a conocer cómo funcionan ciertas cosas que de ninguna otra manera saldrían a flote.

Diez años después de haber publicado una serie de 32 artículos sobre el trasiego de la heroína, Greene comentó: "Mentí. Hice trampas. Casi robo. El resultado obviamente fue bueno. Lo haría de nuevo. Nuestro fino sentido de la ética se disminuye en proporción a la importancia de las noticias."

Ninguno de estos argumentos justifica la simulación para quienes sostienen que el periodista sólo puede obtener información identificándose como tal, sin necesidad de ocultar su oficio o de simular otro. "A la larga, el impostar hipoteca la credibilidad de la prensa", afirma Tom Goldstein, un crítico de esta práctica. "La noción de la veracidad es tan esencial al periodismo que no se puede jugar con ella. Es importante que la gente sepa con quién está hablando y la simulación mina una verdad implícita entre los periodistas y aquellos que entrevista."¹⁹

¹⁹ Tom Goldstein, *The News at Any Cost How Journalists Compromise Their Ethics to Shape the News*, Simon and Schuster, Nueva York, 1985, pág. 132.

Goldstein, quien fue periodista de *The Wall Street Journal* y de *The New York Times*, parece más preocupado por el abuso que por el uso de la simulación, al admitir que algunas informaciones son muy difíciles y otras imposibles de obtener, si el reportero no se hace pasar por otra persona. "Pero no son tantas como uno se imagina", advierte.

En su libro *News at Any Cost (Noticias a cualquier costo)*, Goldstein examina algunos casos en que la impostación no agregó al reportaje mayores novedades, comparado con las que se habían obtenido si los reporteros se hubieran identificado. Uno de esos casos tiene visos de pantomima, tal como lo presenta el autor. A finales de 1983, un reportero del *Boston Globe* se infiltró en una cárcel como preso. Después de estar recluso durante una semana escribió una serie que reveló, entre otros detalles fútiles, que la moneda corriente de las cárceles es el cigarrillo. La mejor parte de la experiencia, dice Goldstein, fue la participación del reportero en una sesión de terapia de grupo²⁰ donde conoció algunos aspectos íntimos y truculentos de la vida de los prisioneros. Después de terminar su misión, el reportero volvió a la cárcel para revelar su verdadera identidad y advirtió a los presos que no haría referencia a la sesión terapéutica. Pero los reclusos le respondieron que no les importaba que hablara de lo que había ocurrido en esa reunión, siempre que no citara sus nombres.

Siendo ésta la parte más importante del reportaje, sostiene Goldstein, no habría sido necesaria la simulación pues el periodista hubiera podido llegar a la reunión, presentarse como tal y después escribir lo que ocurrió, sin citar nombres.

La tendencia a la impostación ha disminuido en Estados Unidos de América no sólo por los riesgos legales que se corren, sino porque muchos editores no están convencidos de esta práctica. Desde que en 1978, dos miembros del jurado del premio Pulitzer votaron en contra de entregar el premio a los periodistas que participaron en la más grande serie de periodismo encubierto que se ha escrito en Estados Unidos, los editores han sido más cautelosos en autorizar excepciones a sus inmaculadas declaraciones de principios en materia de simulación.

Publicada en el *Chicago Sun Times* en 25 entregas, la serie

²⁰ Tom Goldstein, *The News at Any Cost How Journalists Compromise Their Ethics to Shape the New*, Simon and Schuster, Nueva York, 1985, pág. 129.

describía una operación camuflada de cuatro meses durante los cuales reporteros y fotógrafos se hicieron pasar por empleados de un bar que había sido montado por el periódico. El objetivo de la investigación era demostrar la complicidad entre autoridades y dueños de pequeños negocios de Chicago. Los reporteros pagaron sobornos de 10 a 100 dólares a los inspectores para que se hicieran los de la vista gorda cuando encontraban violaciones sanitarias y de seguridad o cuando se quebrantaban regulaciones relativas a bebidas alcohólicas.

Uno de los periodistas que se opuso al premio fue Benjamin Bradlee, editor ejecutivo de *The Washington Post*. Su argumento fue una pregunta: “¿Cómo pueden los periódicos propugnar por la honestidad e integridad, cuando ellos mismos son menos que honestos en obtener la historia?”²¹

Durante la investigación de Watergate, *The Washington Post* mantuvo con relativa firmeza la política de que sus reporteros jamás encubrieran su identidad. Aunque el principio sólo se violó una vez,²² el truco más efectivo de Carl Bernstein y Bob Woodward para ganarse la confianza de sus fuentes, estaba basado en una ingeniosa farsa. Cuando la pareja lograba entrar en la casa de sus entrevistados, le recitaban esta fórmula: “Un amigo del comité (para la reelección de Nixon) nos ha dicho que usted se encuentra un tanto molesto por algunas de las cosas que están sucediendo allí, que usted sería una persona absolutamente recta y honesta y que no sabe exactamente qué debe hacer; nosotros comprendemos su problema. . .”²³ La versión, que no era siempre cierta pues el amigo del comité no existía, daba muy buenos resultados ya que inspiraba confianza al entrevistado.

Como casi todos los asuntos en que las consideraciones éticas están en un primer plano, simular o no simular es una decisión que se debe estudiar en cada caso, ponderando sus consecuencias legales y evaluando si los resultados justifican el riesgo de un problema legal. En su trabajo de tesis *Máscaras del Periodismo*, la periodista colombiana Juanita Samper Ospina dice que la solución al dile-

²¹ Citado por Tom Goldstein, *The News at Any Cost*, Nueva York: Simon and Schuster, 1985, pág. 132.

²² Bernstein obtuvo el número del abogado Donald Segretti a través de la madre de éste, sin identificarse como periodista. Carl Bernstein y Bob Woodward *Todos los hombres del Presidente, el escándalo Watergate*, Argos, Barcelona, 1976, pág. 130.

²³ Carl Bernstein y Bob Woodward, *Todos los hombres del Presidente, el escándalo Watergate*, Argos, Barcelona, 1976, pág. 66.

ma debe ser “el resultado de discusiones, de reflexiones teóricas y prácticas, y de exposiciones de experiencia. Debe ser el resultado de la toma de conciencia del periodista de su actividad en la sociedad. Plantear la pregunta es el primer paso para que el periodista asuma su papel y deje de simular al periodista”.²⁴

APÉNDICE 6

La ruta del dinero

Seguir la ruta del dinero de una persona no es una tarea fácil para un periodista. Como ya se ha dicho, hay numerosas murallas que se interponen en esa labor tales como la reserva bancaria y la utilización de testaferros y sociedades de fachada. Sin embargo, hay compañías que se especializan en estudiar las huellas que dejan las fortunas de dudosa procedencia, en su deambular por el mundo subterráneo de las cuentas cifradas y los paraísos financieros. Aunque trabajan con el más absoluto sigilo, los resultados de sus investigaciones son de gran ayuda para el periodista.

En el décimo piso de la torre del First Union Bank de Miami funciona una de estas firmas, que gana millones de dólares basada en el simple adagio popular de que no hay nada oculto bajo el sol.

Con la aplicación sistematizada del popular dicho y un ejército de ex agentes del FBI, de la CIA, la DEA y abogados a granel, Kroll Associates, la compañía más grande de investigaciones privadas de Estados Unidos, obtiene ingresos anuales de por lo menos 50 millones de dólares.

Sus clientes favoritos son gobiernos que buscan los botines de funcionarios corruptos; familiares de millonarios secuestrados; firmas que desconfían de la solvencia de sus asociadas o acreedores o que no quieren correr el riesgo de que sus socios en América Latina sean narcotraficantes; compañías que quieren mandar a la cárcel a quienes se roban sus secretos industriales; gerentes que quieren saber quiénes son los empleados saboteadores; propietarios que quieren despedir a gerentes que hacen fraudes, y bancos que quieren cerciorarse de los antecedentes de sus empleados.

²⁴ Juanita Samper, *Máscaras del periodismo*, tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, septiembre de 1991, pág. 110.

Aunque la compañía tiene otros frentes de trabajo en la delincuencia de cuello blanco, el más publicitado ha sido el de la cacería de fortunas malhabidas. Una sesión de una hora frente a una computadora conectada a unas 1000 bases de datos, permite a los “cazadores” de la compañía conocer la información básica de la persona: el número de su licencia de conducir, las empresas registradas a su nombre, sus propiedades, demandas civiles –incluidos separaciones, juicios por alimentos, embargos, bancarrotas–, procesos criminales y las direcciones de sus domicilios durante los últimos cinco años.

Los pasos siguientes son secretos y prolongados, pero según los funcionarios de Kroll se desarrollan según el sentido común del detectivismo.

“La gente siempre quiere estar cerca de su fortuna y eso a veces los delata”, afirma el gerente general en Miami, Thomas J. Cowley. “Hacen un viaje a Islas Caimán o cualquier isla del Caribe para ‘visitar’ sus fortunas y eso nos dice algo.” Después de atar y desatar cabos, la compañía presenta un informe de su investigación que puede costar desde 5000 hasta más de 300 000 dólares, según el peso de la perdiz.

De esta manera, Kroll se ha anotado varios éxitos. En 1991 descubrió que Saddam Hussein había sacado de su país una fortuna personal de 10 000 millones de dólares esquilados de las ganancias del petróleo; meses antes había localizado los escondites financieros utilizados por la familia Marcos, de Filipinas, para ocultar más de 200 millones de dólares, y ubicó el dinero depositado en Estados Unidos por César Farías, el ex tesorero y amigo del ex presidente Fernando Collor de Mello. La cuenta por este concepto le salió al gobierno brasileño en 100 000 dólares.

La investigación sobre los presuntos vínculos del ex presidente peruano Alan García con el tristemente célebre Banco de Crédito y Comercio Internacional quedó a mitad de camino por falta de pago del congreso peruano.

“Desafortunadamente, no llegamos a conclusiones definitivas porque todo el proceso estuvo muy politizado”, dijo el fundador de la compañía, Jules Kroll. “Sólo una parte del congreso peruano contrató nuestros servicios y no tuvimos acceso a la información que necesitábamos.”

Cowley, ex agente del FBI, afirma que por lo menos 30 % de las actividades de su oficina se orientan al rastreo de fortunas. El suje-

to más común de las investigaciones patrimoniales, explicó Cowley, es el ciudadano común y corriente, cuyos bienes y dineros aparecen todos en la primera fase de la investigación con sólo oprimir unos cuantos botones de un computador. El otro es el empresario que ve que sus negocios se precipitan hacia la quiebra y decide esconder los fondos que aún le quedan, para evitar embargos y confiscaciones. El tercero, y el más complicado, según Cowley, es el tipo pícaro que sabe que todo su dinero es sucio y tiene que camuflarlo desde el primer día que lo obtiene. Para lograrlo utiliza el amplio mapa de refugios del sistema comercial y financiero mundial: sociedades de papel, testaferros, cuentas cifradas, transferencias cablegráficas. Pero el dinero deja otras huellas. Cowley sostiene que en el transcurso de la investigación siempre se encuentran con ex empleados que quedaron resentidos con la persona bajo investigación; secretarías y ex socios que tienen muchas cosas interesantes qué decir.

El derecho de la persona a acceder a la información en poder del gobierno

Roberto SABA*

Resumen

La trayectoria de legislar el derecho a la información en América Latina se ha visto obstaculizada por décadas en diferentes países de la región. En este artículo, Saba pone de relieve algunos puntos específicos que han causado reticencias ante la adopción de leyes de acceso a la información pública. Inicialmente, el autor ofrece una explicación amplia sobre el origen y los antecedentes de este derecho dentro la teoría democrática, para después identificar los principales obstáculos en América Latina. Finalmente, Saba propone una serie de elementos que debe contener una ley de acceso a la información contemporánea para ser eficiente.

Hace ya algunos años, no muchos, en América Latina y el Caribe comenzó a surgir cierto interés de la ciudadanía en reclamar el derecho por acceder a la información que sus gobiernos poseían. Este conocimiento era necesario tanto para lograr el desarrollo autónomo de la vida privada, como para tomar decisiones en el ámbito de lo público dirigidas a hacer posible el ejercicio de derechos políticos básicos como el del voto o el de controlar la administración de los fondos del Estado.

Los activistas organizados que se convirtieron en pioneros en la materia fueron los ambientalistas. Estos advirtieron rápidamente que el ejercicio del derecho a acceder a la información era de crucial importancia para poder llevar a cabo su labor de control de la actividad pública o privada que pudiera poner en riesgo la existencia de un medio ambiente sano. Es por ello que las primeras normas que reconocen el derecho de la persona a acceder a la información pública son en realidad legislaciones que establecen el derecho a acceder a la “información ambiental”.

En un sentido similar, más tarde fueron las organizaciones abocadas a la defensa de los derechos del consumidor las que pujaron por el derecho a contar con información útil para tomar decisiones en el mercado como usuarios y consumidores.

Más recientemente, quizá tan sólo en los últimos cinco o seis años, se ha alcanzado en diferentes países de América Latina y el Caribe la conciencia de que el derecho de acceso a la información no se circunscribe a ciertas materias ----medioambiente, consumidores, etcétera----, sino que la información en poder del Estado, cualquiera sea su contenido y sin importar el interés del requirente, debía ser de público acceso (casi) en su totalidad por los motivos y justificaciones a los que me referiré más adelante en este trabajo. Así, las normas que regulan el libre acceso a la información pública en general, sin hacer referencia a un contenido específico que esa información debía contener, son sumamente recientes. En la Argentina, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 104), probablemente la más completa y general del país en el orden local al momento de su sanción, es de 1998.

En América Latina, las pocas leyes sancionadas hasta el momento para el nivel nacional de la administración (que incluyen, a veces, a los tres poderes del Estado) no alcanzan, en el caso de las más antiguas, el lustro de vigencia: Chile (diciembre de 1999), México

(junio de 2002), Panamá (enero de 2002), Perú (2002), Guatemala (octubre de 2002), Jamaica (2002).

Es de destacar que el resto de los países de la región no tiene leyes orgánicas de acceso a la información, aunque a veces cuentan con una serie de regulaciones dispersas que estructuran en forma poco eficaz ese acceso, como es el caso de la norma en el Brasil.

Algunos de ellos se encuentran en distintos grados de avance de un debate público acerca de la sanción de esas legislaciones. En Argentina, por ejemplo, un proyecto de ley con dictámenes favorables de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Expresión, se encuentra en el orden del día de la Cámara de Diputados, aunque con inciertas posibilidades de ser aprobado por el pleno de la Cámara y luego por el Senado. En Paraguay, recientemente fracasó un intento del gobierno de sancionar una ley de este tipo por la oposición de organizaciones de la sociedad civil, principalmente de periodistas, que la consideraban altamente limitativa del acceso a la información. Ecuador se encuentra debatiendo proyectos de ley en su Parlamento, mientras que en Venezuela es muy incipiente la discusión pública respecto de este tipo de legislación.

En Bolivia, por su parte, en septiembre de 2002 el Congreso aprobó una ley de acceso a la información, pero el órgano Ejecutivo la devolvió con observaciones. Según un comunicado de prensa del diario *La Prensa* de Bolivia, en la actualidad, todos los proyectos tienen un futuro incierto porque el Poder Legislativo, por decisión del Ejecutivo tendrá que reiniciar el debate de esas normas dado que rechaza la “reposición” de proyectos de ley que fueron abordados en la anterior legislatura y gobierno.

No obstante el fuerte interés que el tema viene suscitando en los más variados actores nacionales e internacionales, desde el Banco Mundial hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la Relatoría Especial de la OEA para la Libertad de Expresión hasta el *British Council*, de organizaciones globales como *Article 19* o *Transparency International* a la más variada gama de organizaciones locales, la dificultad para terminar con estos procesos legislativos y la necesidad de superar enormes obstáculos políticos y culturales a fin de lograr el reconocimiento el acceso a la información como derecho, nos obliga a pensar en articular respuestas aún más contundentes que las esbozadas hasta el momento a preguntas que no parecen estar superadas.

En este trabajo me dedicaré a proponer respuestas posibles a aquellas preguntas que considero se relacionan con las principales resistencias a la sanción de leyes de acceso a la información y, por ende, a la imposibilidad de contar con instrumento necesario, mas no suficiente, para el ejercicio de este derecho básico de la persona en un régimen republicano y democrático de gobierno. Las tres preguntas que intentaré responder con la intención de proporcionar argumentos para oponer a posibles detractores de este tipo de legislación o ante aquellos que bajo la apariencia de legislar a favor de este derecho en realidad conspiran contra él, son las siguientes:

1. ¿Tenemos las personas un *derecho* a la información?
2. ¿Es necesario contar con una ley para lograr el ejercicio cierto de este derecho?

3. ¿Qué elementos básicos debe contener una ley de este tipo para convertirse en una herramienta necesaria, aunque no suficiente, a fin de lograr el eficaz ejercicio del derecho a la información pública?

Por supuesto, como dije anteriormente, las respuestas sugeridas a estas preguntas no intentan agotar los argumentos referidos a cada una de ellas ni configuran verdades absolutas. Ellas son sólo el resultado de las observaciones del autor frente a las experiencias exitosas, las no tan exitosas y los fracasos de la región. Este texto sólo intenta organizar y encuadrar un debate en torno a algunas cuestiones recurrentes y aún en discusión.

1. ¿Tienen las personas un “derecho” al acceso a la información pública?

Preguntarse si las personas tienen un derecho al acceso a la información que se encuentra en manos del Estado, no es irrelevante ni un mero ejercicio teórico. La respuesta afirmativa a ese interrogante tiene, al menos, dos consecuencias prácticas fundamentales. En primer lugar, ello justificaría exigir al Estado decisiones, políticas y prácticas que tornen efectivo el ejercicio de ese derecho. Brindar información desde la autoridad estatal no sería meramente una buena o mala política pública decidida por el gobierno de turno, sino una exigencia constitucional que, además, se desprende de los compromisos contraídos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

En segundo término, el reconocimiento de un derecho que requiere que el Estado tome medidas concretas para su real vigencia, lo coloca en situación de ser objeto de ataque jurídico cuando esas medidas no son instrumentadas. Esto puede ser así toda vez que se entienda que la inacción del estado es un modo de impedir o violar el derecho en cuestión. La negativa del Estado de dar información a los ciudadanos que la requieren no sería sólo una desgraciada iniciativa de un funcionario reticente. Las dificultades de la administración para proporcionar información no serían interpretadas sólo como una ineficaz política de atención al ciudadano. Ello implicaría, en su lugar, la violación de un derecho constitucional o de un derecho humano fundamental, cuyo respeto puede ser reclamado ante los tribunales nacionales o internacionales, y frente a cuya afectación el Estado puede ser obligado a realizar acciones o a dejar de realizarlas.

En consecuencia, cuanto mejor fundemos la existencia de este derecho, más difícil será para el Estado o para el juez negar su ejercicio o negarse a responder a las demandas de efectivo respeto del derecho. Por estos motivos, resulta imprescindible articular un argumento sólido y convincente que permita afirmar que en cabeza de toda persona se reconoce un derecho a acceder a la información que se encuentra en poder del Estado.

Existen varios argumentos que permiten justificar la existencia de un derecho al acceso a la información pública. Los siguientes son sólo algunos de los más habituales y contundentes.

A. El derecho a la información pública se encuentra comprendido en el derecho a la libre expresión de las ideas

Uno de los fundamentos más frecuentemente esgrimidos para justificar el derecho a la información es el que lo asocia con la protección de la libre expresión de las ideas. El derecho a la libertad de expresión puede ser entendido, al menos, de dos modos diferentes. Uno de ellos es el que ve a la libertad de expresión asociada al ejercicio de la autonomía personal. De acuerdo con este argumento, la posibilidad de expresar las ideas, perspectivas y puntos de vista del individuo, se entiende como constitutivo del desarrollo autónomo de la persona. El poeta lleva adelante su plan de vida por medio de la publicación y difusión de sus poemas. Impedir la exteriorización de sus sentimientos a través de la expresión, afecta su libertad individual. Para un artista plástico, la protección de su expresión es parte fundamental de su autorrealización personal como un ser libre que manifiesta sus visiones del mundo a través de sus cuadros. Entendida de este modo, la libertad de expresión coloca al sujeto que se expresa en el centro de la protección que ella establece. El resto de los ciudadanos, los que aprecian la expresión, sus receptores, no cuentan en este argumento jurídico demasiado espacio de protección. El eje del derecho es la persona autónoma que se expresa.

Una forma alternativa de entender la libertad de expresión es la que considera que la protección de este derecho implica no sólo la protección de quien se expresa, sino que también aspira a asegurar a los receptores la posibilidad de apreciar la más diversa variedad de puntos de vistas posibles en torno a un tema determinado, objetivo que se persigue a través de la protección de la expresión. Esta lectura del derecho a la libertad de expresión, a diferencia de la anterior, relativiza el valor que se le da a la autonomía personal para encontrar fundamental la relación existente entre la teoría democrática (de autogobierno ciudadano) y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Sintéticamente, el argumento sería que en un sistema democrático, la ciudadanía se autogobierna. A fin de poder tomar decisiones de autogobierno, la comunidad política debe poder contar con la mayor información que sea posible brindar, lo cual resulta asegurado por medio de la protección de la expresión. En suma, protegemos la expresión con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía la mayor cantidad de información posible para que tome mejores decisiones de autogobierno. Silenciar voces o limitar el acceso a la información brindada por el que se expresa, implica obligar a los ciudadanos a decidir cuestiones públicas luego de haber sido privados de evaluar alternativas que, quizá, pueden haber sido consideradas mejores u óptimas. Mientras la libertad de expresión como manifestación de la autonomía no parece prestar atención al derecho a la información, la libertad de expresión como precondition del proceso de toma de decisiones en un sistema democrático la asocia inescindiblemente con la libertad de acceso a la información. Sin libertad de expresión no hay información y sin información no hay democracia, entendida como sistema de autogobierno ciudadano.

Esta visión *democrática* de la libertad de expresión es lo que condujo a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a sostener que:

La libertad de expresión conlleva la libertad de escuchar... [y esto es debido a que] La Primera Enmienda va más allá de la protección de la prensa y de la autoexpresión de los individuos, prohibiendo al estado limitar la masa de información a la cual pueden recurrir los miembros del público.

Esta doctrina fue enfáticamente defendida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *New York Times v. Sullivan* al llamar la atención sobre el imperativo

democrático de contar con debate robusto, amplio e irrestricto (*robust, broad, and uninhibited*). Es por eso que autores como Owen Fiss consideran esta la doctrina que debería tomarse en cuenta para la correcta interpretación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos:

La sentencia del caso *New York Times v. Sullivan* aludió a un compromiso nacional a favor de un “debate desinhibido, vigoroso y abierto” sobre asuntos de importancia pública una frase utilizada muchas veces en este libro, y todavía más en los anales de la Corte Suprema.

En el mismo sentido de esta lectura de la libertad de expresión (y del acceso a la información) como derechos mutuamente dependientes y precondition del sistema democrático de gobierno, la propia Convención Americana de Derechos Humanos también establece en su artículo que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...”.

En referencia a esta última cláusula, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reforzado la idea de la existencia de una “ciudadanía informada” como precondition para el funcionamiento del régimen democrático.

No obstante el invalorable aporte que esta lectura del derecho a la libertad de expresión hace al reconocimiento del derecho de la persona a acceder a información, ella no resulta suficiente para justificar la existencia de un derecho de la ciudadanía a exigir información que se encuentra en manos del Estado. Esta “teoría democrática” de la libertad de expresión ha sido utilizada por los tribunales como una estrategia útil para evitar la censura o la limitación de la expresión de los medios de prensa, pero no parece ser suficiente para exigir al Estado que libere información que se encuentra en su poder.

De este modo, se podría decir que el derecho a la información, así entendido, abre las puertas de un desarrollo robusto del derecho ciudadano a exigir información en dominio del gobierno, pero no parece ser un argumento completamente autosuficiente para exigir que la administración o la justicia reconozcan un derecho al *acceso*.

De acuerdo con esta interpretación del derecho a la libertad de expresión, los ciudadanos tienen derecho a la información que brindan los medios de comunicación y por eso existe una fuerte protección de estos últimos, pero es dudoso que se les reconozca la posibilidad de exigir información al Estado sobre la base exclusiva de este argumento.

Si bien el principio de debate amplio y robusto subyace a ambas variantes del derecho a la información (la que proviene de los medios o la que está en poder del Estado), el derecho a la libertad de expresión, en su carácter de precondition de ese debate público, no necesariamente justifica la obligación del Estado de proveer información que esté en su poder. Algunos autores dirán que la teoría democrática de la libertad de expresión, que hace a este derecho inclusivo del derecho a la información, se refiere en realidad al “derecho a informarse” como consecuencia de la posibilidad de otros a expresarse que no es necesariamente lo mismo que el derecho a exigir que el Estado nos brinde información. En el primer caso, la censura de la expresión impide que la persona se informe, mientras que en el segundo caso la negativa del gobierno a dar información

que se encuentra en su poder frente al requerimiento de una persona, le niega a ésta su derecho a acceder a la información pública, necesaria para ejercer otros derechos o para controlar al gobierno.

B. El libre acceso a la información y la democracia participativa

Muchas Constituciones de América Latina han reconocido la existencia de formas de democracia semidirectas que aseguran a la ciudadanía mecanismos de participación en el proceso de toma de decisiones que complementan los ya existentes, de los cuales el más clásico es el derecho al voto. Estas estrategias participativas vienen a confirmar y profundizar el rasgo ya señalado de nuestras democracias como sistemas políticos que se fundan en el autogobierno de la ciudadanía.

Sin embargo, este autogobierno y participación resultan ilusorios si la ciudadanía no cuenta con un acceso asegurado a la información que obra en poder del Estado.

¿Qué sentido tiene invitar a la ciudadanía a participar de una audiencia pública para debatir acerca de las bondades de una determinada política si no se le brinda la posibilidad de contar con la información con que cuenta el gobierno para el diseño de esa política? ¿Qué objeto tendría convocar a plebiscitos y *referendo*, si para contestar a los interrogantes propuestos la ciudadanía necesita conocer datos a los que sólo el gobierno tiene acceso y no hace públicos? La proclamación e implementación de la democracia participativa resulta incompleta sin el reconocimiento del derecho de acceso a la información. Dar poder al pueblo para que decida cuestiones públicas directa o indirectamente sin darle la posibilidad de conocer toda la información necesaria para decidir, conduce a un proceso de toma de decisiones imperfectas que puede arrojar resultados fuertemente dañinos para la comunidad. Por supuesto, la solución a este problema no debe encontrarse en la imposición de límites a la participación, sino en el levantamiento de las barreras que obstaculizan el acceso a la información, a fin de que la participación política amplia sea llevada a cabo por una “ciudadanía informada”, tomando prestada la terminología acuñada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la información es, en consecuencia, una *precondición* del sistema democrático y del ejercicio de la participación política de la ciudadanía.

C. El libre acceso a la información como elemento necesario en un sistema republicano de gobierno

Mucho se habla en estos días del problema de la corrupción y de sus perniciosos efectos sobre el funcionamiento del gobierno. También se dice que una de las estrategias más efectivas dirigidas a luchar contra ese mal de los gobiernos es el de tornar sus actos más transparentes y a ellos más responsables (*accountable*) frente a la ciudadanía y a los organismos de control.

Sin embargo, este aparentemente nuevo mal de nuestras democracias no es novedoso. Aquellos que diseñaron hace más de doscientos años nuestras democracias occidentales se habían percatado de los posibles peligros que subyacían al ejercicio del poder en representación del pueblo. Por ese motivo, casi todas las Constituciones que siguieron el modelo de la de los Estados Unidos, como es el caso de la gran mayoría de las de América Latina, reconocieron como fundamental un principio republicano

básico: el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la gestión pública.

El derecho a acceder a la información que se encuentra en manos del gobierno es un corolario del principio republicano de la publicidad de sus actos. La tanpreciada y reclamada transparencia como arma de lucha contra la corrupción, encuentra su raíz y reconocimiento constitucional en este principio y el libre acceso a la información es la forma de instrumentarlo. Hacer pública la información en manos del Estado no es, entonces, una concesión graciosa de aquellos que se encuentran ocasionalmente ejerciendo el poder, sino una obligación exigida por toda Constitución que establezca un sistema republicano. Negar el acceso a la información implica una clara desobediencia del mandato del constituyente.

Por otro lado, la publicidad de los actos de gobierno, instrumentada por medio de la apertura del acceso a la información a toda persona que la requiera, opera como mecanismo de control de los funcionarios de ese gobierno.

No parece ser difícil justificar este principio constitucional en la intención del constituyente de depositar en manos del pueblo soberano y autogobernado, el control de aquellos en quienes delegó la representación de sus intereses para la administración del gobierno. El acceso a la información es, entonces, un mecanismo de control del gobierno que el constituyente puso en manos de la ciudadanía.

En consecuencia, podría asegurarse que este mecanismo de control no puede ser activado a instancia y arbitrio del controlado (en este caso el gobierno), razón por la cual no puede ser el gobierno el que, frente a cada requerimiento, decida cuándo y cómo la información que obra en su poder puede ser liberada o quién es el destinatario correcto de esa información. Si existiera una prerrogativa con estas características en manos del gobierno, el acceso a la información como mecanismo de control sólo se pondría en funcionamiento cuando el controlado, es decir, el gobierno, decida que así debe ser. Resulta claro que ello tornaría completamente inútil la herramienta de control.

En síntesis, el acceso a la información como mecanismo de control del gobierno, sólo será efectivo si se lo considera un derecho de toda persona y no como una posibilidad cuya efectiva realización depende de la discreción de la autoridad pública. Un derecho de acceso a la información (como mecanismo de control) cuyo ejercicio se encuentre sujeto al “permiso” que conceda el controlado es obviamente inefectivo respecto de la finalidad que persigue.

D. La información en manos del Estado es “propiedad” de la ciudadanía

La información que produce, obtiene, clasifica y almacena el Estado es producida, obtenida, clasificada y almacenada con recursos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Los bienes del Estado no son, de acuerdo a lo que usualmente se cree, “propiedad de nadie”. Todo lo que el Estado posee es, en verdad, propiedad de la comunidad política, de todos los que forman parte de ella y que contribuyen con el pago de los impuestos al funcionamiento del gobierno y del Estado.

La información que es obtenida, producida y clasificada por el Estado con dinero público es propiedad de la ciudadanía y, por ello, no puede negársele el acceso.

E. El acceso a la información y el derecho a peticionar a las autoridades públicas

Casi todas las Constituciones que establecen repúblicas democráticas prescriben el derecho a peticionar a las autoridades públicas. Este derecho, conjuntamente con el principio de autogobierno y el de publicidad de los actos de gobierno, constituyen la parte central del basamento constitucional del derecho a la información en poder del Estado. Los funcionarios encargados de administrar la cosa pública recibieron esa facultad por delegación y en representación del pueblo, único depositario del poder democrático de autogobierno. Como sucede con cualquier mandatario, los funcionarios de gobierno están obligados a rendir cuentas de sus actos frente a sus mandantes y brindar información es una de las obligaciones más básicas de una relación de este tipo.

En síntesis, de todo lo que hasta aquí se ha dicho, se deduce que el derecho de la persona a acceder a la información que se encuentra en poder del Estado y la obligación del funcionario a brindarla se fundamenta en que aquél es:

1. Un derecho individual de toda persona además de una precondition del gobierno democrático que presume la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones respecto de su propio destino colectivo.
2. Un derecho con reconocimiento constitucional (explícito o implícito) en tanto el constituyente haya establecido el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de peticionar ante las autoridades.
3. Un derecho que se relaciona con cierta idea de que la información es “propiedad” de la ciudadanía, en tanto que ella es obtenida, producida o almacenada con dineros públicos que provienen del pago de impuestos.

2. ¿Es necesaria una ley de acceso a la información para asegurar el derecho?

Una vez reconocida la existencia del derecho constitucional (y del derecho humano) al acceso a la información, la cuestión que debe atraer nuestra atención es la de su protección y ejercicio efectivos.

Por supuesto, este derecho, como muchos otros derechos denominados operativos, no requieren necesariamente de una ley que los ponga en práctica y asegure su vigencia. El reclamo por su respeto y la obligación del Estado de protegerlos no depende de la sanción de la ley que regule su ejercicio. Sin embargo, es posible sostener que sin la existencia de este tipo de legislación, el derecho se torna de difícil ejercicio y respeto en la práctica cotidiana. También es preciso resaltar, que, si bien es probable que estas leyes tornen más probable el ejercicio del derecho, ellas no lo aseguran por el solo hecho de ser sancionadas.

Muchos sostendrán que el reclamo por una legislación que regule el acceso a la información responde al típico “pensamiento mágico” de los abogados de tradición continental que creen que cuando un derecho se regula por una ley, éste pasa automáticamente a ser gozado por las personas. Otros sostendrán con tono crítico que los países de América Latina deberían dejar de sancionar “hermosas y apolíneas leyes” que nadie cumple y comenzar a respetar las que ya se tienen. Estos son todos

argumentos que, aunque pueden originarse en buenas intenciones, conspiran contra el real ejercicio del derecho a la información pública. Ellos encierran algunas falacias sobre las que es bueno llamar la atención:

Falacia 1: Es un derecho operativo y, por ello, no es necesaria su regulación legislativa.

Que un derecho sea operativo sólo implica que el reclamo por su efectivo reconocimiento y respeto generalmente planteado ante el juez, no está condicionado a la sanción de una ley. De ningún modo se deriva de ello que la operatividad del derecho implica que éste no necesite de una regulación que facilite su ejercicio.

Falacia 2: Como no es cierto que la sanción de la ley asegura de hecho el ejercicio del derecho, entonces no es necesaria esa legislación.

Nadie, ni siquiera el jurista más ingenuo, afirmaría que la sanción de una ley que regule el acceso a la información pública es condición necesaria y suficiente para el efectivo respeto del derecho en cuestión. Del mismo modo que las garantías del proceso penal no impiden que se realicen torturas en las reparticiones de policiales, una ley de acceso a la información no asegura que al minuto siguiente de su sanción el Estado empezará a proporcionar información a la ciudadanía en forma generosa y espontánea.

Nadie puede sostener esto seriamente y presumir que se sostiene es presumir demasiada ingenuidad. Una ley de acceso a la información sólo es una condición necesaria, pero no suficiente, para el ejercicio efectivo del derecho.

Sólo ----aunque no es poco---- proporciona un instrumento para el ejercicio y potencial reclamo judicial del derecho, así como las garantías del proceso penal no impiden que se apliquen torturas a los detenidos y “sólo” logran disuadir a algunos que así procedan y permite reclamar ante un juez el castigo correspondiente a quienes desobedecen la ley.

Falacia 3: Como ya tenemos demasiadas leyes, entonces sería mejor no sancionar nuevas.

Si bien es cierto que América Latina, por su fuerte tradición continental codificadora, no es mezquina en la producción legislativa ----lo digo con ironía, claro---- y aunque no son sus países ejemplos de *rule of law*, ello no implica que debamos dejar de sancionar normas necesarias. Más bien implica que nuestros esfuerzos deben dirigirse a contar con las normas que hacen falta para lograr el efectivo respeto de los derechos fundamentales.

Falacia 4: Como el Estado es débil e ineficiente en América Latina, deberíamos ser cuidadosos al momento de establecer en su cabeza obligaciones nuevas que probablemente no podrá cumplir.

Este argumento conservador conduce al inmovilismo y a la cristalización del *status quo*. Es verdad que dicho tipo de legislación pone en cabeza del Estado una responsabilidad muy grande que, incluso, puede ser costosa. Sin embargo, si acordamos que el acceso a la información es precondition del buen funcionamiento del sistema político

democrático, entonces el cumplimiento de tal obligación se equipara a otras “costosas” instituciones como las elecciones, el funcionamiento de estructuras burocráticas que permitan legislar, ejecutar las decisiones del pueblo o juzgar los casos concretos.

En suma, diversos desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales de nuestros derechos constitucional y administrativo, así como prácticas habituales de la burocracia estatal y la naturaleza misma del derecho en cuestión, nos conducen a afirmar enfáticamente que ----a pesar y además----del reconocimiento constitucional del derecho a la información,

es absolutamente necesario e imprescindible contar con una ley que establezca con claridad los requisitos que deben darse para brindar o negar la información solicitada por una persona al gobierno.

En la actualidad, el derecho administrativo argentino, por ejemplo, que es el que conozco más de cerca, es sumamente restrictivo al momento de reconocer la legitimación activa que le permite a una persona requerir información al gobierno.

Habitualmente se entiende en forma injustificada que, para solicitar información, el peticionante debe tener un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado a fin de que se haga lugar a su requerimiento.

Esta interpretación restrictiva de la legitimación activa bloquea la posibilidad de que cualquier ciudadano solicite información que se encuentre en manos del gobierno, a menos que esa información se vincule con la afectación de un derecho subjetivo o interés legítimo del solicitante. Sin embargo, como se señaló en el apartado anterior, la persona está habilitada a solicitar información a partir de su condición de tal en un sistema republicano donde la responsabilidad del gobierno obliga a este último a ser transparente y responsable (*accountable*) frente a la ciudadanía. Sólo a través de una ley podríamos revertir esta extendida interpretación acerca de la legitimación activa.

Por otro lado, la administración, al responder a una solicitud de información, o el juez, al atender el reclamo de un solicitante al que se le ha negado cierta información requerida, tienden a responder negativamente a los requerimientos presentados. La razón que se esgrime, generalmente, tiene mucho que ver con tendencias habituales de las burocracias a no brindar información que se encuentra en su poder por temor a poner en riesgo o peligro el cargo que se detenta cuando resulte escrutada la decisión por un superior, o a exponer conductas o prácticas acerca de cuya corrección se duda.

En general, la burocracia tiende a “cerrarse” y la persona carece de las herramientas legales para contrarrestar la resistencia encontrada.

El individuo solicitará información y el funcionario correspondiente buscará razones para negarla (como por ejemplo a través del cuestionamiento de la legitimación activa) a fin de evitarse problemas hacia dentro de su propia burocracia. Si nada obliga al funcionario a brindar la información solicitada y la negativa no acarrea prácticamente ninguna consecuencia negativa, el funcionario no cuenta con ningún incentivo para responder positivamente al requerimiento y, en cambio, cuenta con todos los incentivos

adecuados para negar la información. Una ley de acceso a la información correctamente diseñada invierte estos incentivos nocivos para lograr la transparencia en la administración del Estado.

En síntesis, pese al reconocimiento constitucional del derecho a solicitar información al gobierno, se vuelve imperiosamente necesario contar con una ley que altere los incentivos que parece tener hoy la administración para negar la información requerida por una persona. Partiendo del presupuesto de que la burocracia estatal buscará siempre el modo, la excusa o la razón para no dar la información que se le requiere a través del ejercicio de un derecho constitucional, una ley que reglamente adecuadamente este derecho puede remover los obstáculos que se podrían presentar de un modo persistente si ella no existiera. Cual en un laberinto de múltiples salidas, deben cerrársele a la administración todas las posibles vías alternativas de escape cuando se vea tentada de eludir su responsabilidad constitucional.

3. ¿Qué elementos debe tener una ley de acceso a la información para ser eficaz?

Como se dijo en el apartado anterior, una ley de acceso a la información es necesaria, pero no suficiente, para que el ejercicio del derecho constitucional a solicitar información no se vea vulnerado. Ahora bien, esta ley debe contar entonces con ciertos elementos mínimos que impidan a la administración o al Poder Judicial oponer argumentos infundados o razones insuficientes para negar la información solicitada. A continuación veremos cuáles son los obstáculos habituales que suelen presentarse al ejercicio de este derecho y de qué modo una ley de acceso a la información podría contribuir a removerlos y así elevar las posibilidades de tornar eficaz el ejercicio del derecho.

Lo que sigue no intenta ser un “modelo” de ley de acceso a la información.

Por lo general, los modelos intentan cubrir más aspectos que los aquí referidos (como la creación de comisionados de la información, o decisiones tendentes a facilitar el acceso a través de medidas “pro activas” por parte del Estado). El contenido de esta sección sólo intenta referirse a elementos mínimos sin los cuales la ley sería ineficaz en su objetivo de permitir el ejercicio del derecho.

A. ¿Quién puede pedir la información? La cuestión de la legitimación activa amplia

Como sostuve anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia son, en general, sumamente restrictivas al momento de reconocer quién puede realizar un requerimiento a la administración o a los poderes políticos en ejercicio de funciones administrativas. En el caso de la solicitud de información que se encuentra en poder del gobierno, lo habitual es que se requiera a la solicitante que explique y exponga las razones por las que requiere la información y que demuestre cuál es el interés legítimo o derecho subjetivo afectado que la habilitaría a pedir la información en cuestión. Este enfoque, basado en una interpretación restrictiva y estrecha de la legitimación activa, es no sólo incorrecto en el caso del derecho de acceso a la información, sino que conspira contra el ejercicio real del derecho.

La persona que solicita información a la administración (en cualquiera de los tres poderes del Estado) no lo hace necesariamente porque se encuentre afectado algún otro de sus derechos o un interés legítimo. La solicitud de información puede basarse en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, en el “derecho a saber” de la persona y, por esta razón, la sola condición de “persona integrante de la comunidad política” la habilita a solicitar información sin ser relevante los motivos del requerimiento.

Además, como se vio anteriormente en este ensayo, la decisión de brindar información, no puede quedar en manos de quien es precisamente controlado a través de la publicidad de la información requerida. Si la transparencia es una de las estrategias más eficaces de control del gobierno por parte de la ciudadanía, no puede ser el mismo gobierno el que decida si brinda la información evaluando en cada caso si existen buenas razones para que un ciudadano requiera información.

En síntesis, la información debe poder ser requerida por *cualquier persona* y no sólo por aquellas que la administración considere poseen la legitimación para ello fundando esa decisión en razones restrictivas del acceso a la información. Dado que, a pesar de ser este argumento aparentemente convincente, es sumamente conveniente que una ley de acceso a la información establezca claramente el modo amplio en que debe entenderse en este caso en particular la legitimación activa para solicitar información, invirtiendo, de algún modo, el principio que rige en el derecho administrativo para actuar frente a la administración.

El primer artículo de una ley de este tipo debería precisar que: “*Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información...*”. De modo semejante se manifiestan la Constitución y la ley de Perú en lo que se refiere a la legitimación activa para solicitar información, y las leyes respectivas de México, Panamá, Guatemala y Jamaica. La ley chilena de probidad también establece un principio similar.

B. No se debe expresar el motivo del requerimiento de la información

En el derecho comparado se percibe el rasgo común de establecer que el requerimiento de información no debe necesariamente consignar el motivo por el que esa información se solicita. Tal estándar se justifica, en primer lugar, en el hecho de que el pedido de información se presume motivado desde que la persona tiene siempre el derecho a controlar el accionar de su gobierno por medio de saber acerca de sus actos, decisiones, políticas, etcétera.

Por otro lado, al no exigirse la motivación del pedido más allá de la motivación presupuesta y justificada por el derecho mismo, se busca la protección de requirente. La *Freedom of Information Act* de los Estados Unidos, por ejemplo, requiere solamente una descripción razonable del registro donde el requirente entiende se encuentra la información que solicita, pero agrega que la administración no puede negarse a dar la información pedida fundando su decisión en que no se identificó el registro correctamente. Hay quienes sostienen que la ley de los Estados Unidos no requiere acreditar el motivo o interés específico debido a la dificultad para determinarlo.

Sin embargo, más allá de lo dicho hasta aquí, la expresión del motivo de la solicitud no debería estar prohibida.

Puede ser recomendable para el requirente precisar el motivo o el objeto del pedido a fin de facilitar y precisar la búsqueda por parte del funcionario. En suma, la expresión del motivo no puede exigirse, pero tampoco puede prohibirse. Quedará a criterio del solicitante realizar el cálculo acerca de cuanto pierde y cuanto gana manifestando las razones por las que solicita la información. Sí está claro, sin embargo, que nunca se podrá denegar la información por carecer el pedido de la motivación correspondiente o por entenderse que el requerimiento no se encuentra debidamente motivado.

C. ¿Qué tipo de información se puede solicitar?

Otro obstáculo recurrente a la posibilidad de que la ciudadanía acceda a la información que se encuentra en poder del gobierno se relaciona con el tipo de información solicitado. Por este motivo, la ley debe establecer con claridad qué tipo de información la administración se encuentra obligada a brindar cuando una persona realiza un requerimiento.

El principio general que en este sentido la ley debería presentar es el de que se trata de *toda la información que se encuentre en poder del gobierno*, con excepciones que deben enunciarse taxativamente y sobre las que me referiré luego. Al sostener que la administración se ve obligada a dar cualquier tipo de información que se halle en su poder, se excluye de la obligación a toda información que demandaría del Estado, no ya su búsqueda, sino su *producción*. El Estado no puede verse obligado a producir información por el mero requerimiento que le realice una persona. Sólo debe brindar aquella que se encuentre en su poder o que haya sido producida por el Estado u obtenida por éste utilizando recursos públicos.

La única excepción a este principio general podría ser la correspondiente a la obligación del Estado de brindar información *a cuya producción se obligó* por tratados internacionales o por leyes. Este es el caso de numerosos tratados referidos a derechos humanos que requieren que el Estado produzca información sobre la evolución y progresivo cumplimiento de sus compromisos internacionales y que el Estado habitualmente no realiza. Incluir este tipo de información dentro de aquella que puede ser requerida por la ciudadanía sería un modo interesante de incorporar un mecanismo que deposita en manos de la ciudadanía la posibilidad de monitorear el cumplimiento de los tratados internacionales cuando ellos obligan al Estado a producir información. Sin embargo, es necesario resaltar que esto sería algo sumamente novedoso.

El principio general que debería incorporar la ley respecto del tipo de información que el gobierno está obligado a brindar a la ciudadanía, se refiere a toda la información que se encuentre en poder del Estado o que se halle bajo su control y que hubiere sido producida con financiamiento público. De este modo, ello refuerza la expansión de la legitimación activa a *toda persona*, basada en el hecho de que esa información *pertenece* a la ciudadanía por haber sido producida con el dinero que proviniera del pago de los impuestos o en su interés por controlar la labor de sus representantes.

En los Estados federales, existe un límite jurisdiccional adicional a la obligación de brindar información, y éste se vincula con el nivel de gobierno (nacional, provincial o municipal) al que se le requiera información, dado que cada uno de ellos sólo podrá brindar la información que se encuentre bajo su exclusivo control.

Finalmente, como es posible que la negativa de brindar información se ampare en el hecho de que la forma en que esa información se encuentra almacenada hace imposible o dificultoso el acceso, la ley debería decir en forma explícita que se trata de *información en poder del Estado en cualquier formato*. Así, podrían presentarse algunos ejemplos de formatos posibles (escrita, grabada, fotografiada, etcétera), pero de ningún modo esas referencias deben ser taxativas o cerradas dado que los avances tecnológicos generarán seguramente formatos para almacenar información impensados por las legisladoras actuales.

Por último, algunos nuevos desarrollos respecto de este derecho han llevado su atención a la posibilidad de solicitar información que se encuentre en poder de personas privadas, generalmente jurídicas, y que pudieran tener un interés público. La Constitución de Sudáfrica, sancionada en 1996, por ejemplo, establece que se les garantiza “a todos... el derecho de tener acceso a cualquier información que esté en manos del Estado y a cualquier información que esté en manos de otra persona y que se necesite para el ejercicio o protección de cualquier derecho”. Este derecho a la información en poder de privados se vuelve de particular importancia en los casos de empresas que proveen servicios públicos, aunque no se circunscribe a ellas. En la Argentina, por ejemplo, existen algunos mecanismos de participación ciudadana de los usuarios de servicios públicos, como las audiencias públicas, por medio de los cuales aquéllos pueden tomar parte del proceso que conduce a la decisión de aumentar tarifas. Sin embargo, se ha argüido que este derecho a participar del proceso de regulación del servicio sería de ejercicio imposible si el usuario no contara con la información pertinente en poder de la empresa.

D. El derecho a solicitar información comprende el de recibir copias

Si bien parece una obviedad, es conveniente precisar en la ley que el derecho de acceso a la información supone también el derecho de realizar copias en el formato que sea técnicamente posible de la información que se encuentra en manos del Estado. Sabemos por experiencia que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, incluso contando con una ley relativamente completa de acceso a la información, una de las estrategias utilizadas para dificultar el ejercicio del derecho ha sido el de argüir, por parte de la administración, que el derecho sólo se refiere al “acceso” (en este caso “ver, leer”), pero no al “copiado” de la información. Personas que se han presentado a solicitar información han podido “tomar contacto” con la información requerida en el ámbito de la oficina pública, pero se le prohibió realizar duplicaciones. En algunos casos se le permitió a la solicitante incluso copiar a mano la información documental pero no fotocopiarla. En este sentido, el artículo 4 de la ley francesa establece el derecho de los administrados a “consultar y reproducir” la información solicitada.²⁶ También el artículo 8 de la ley española aclara que “el derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de la documentación cuyo examen sea autorizado por la administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.

E. El principio es la publicidad y el secreto es la excepción

Es muy importante que la ley haga explícito el principio de *publicidad* que articula y sobre el cual gira y se apoya el cuerpo de la norma. De este modo, y al contrario de

lo que sucede habitualmente cuando no se cuenta con una ley de este tipo, el argumento del secreto puede sólo sostenerse en forma excepcional. La interpretación de una ley de acceso a la información debe, en caso de duda, ser guiada por el principio de publicidad de la información en poder de gobierno que se encuentra explicitado en la misma norma. Como se sabe, la existencia de un principio de estas características implica una *presunción a favor del requirente* o un principio *in dubio pro acceso*, por llamarlo de un modo análogo a otros principios existentes en materia de derechos humanos. Este principio nos ayudará a determinar denegatorias implícitas que el legislador no hubiera establecido por no haberlas previsto. Por ejemplo, ninguna legislación establece cuál es el monto razonable que el Estado puede reclamar que pague el requirente de la información. Sin embargo, basado en el principio de publicidad, un juez podría interpretar que “costo razonable” es el que no impide o dificulta el acceso a la información, estableciendo que cualquier cargo que torne imposible el acceso por excesivamente oneroso se considerará denegatoria implícita infundada.

F. Plazos breves

Entre los modos habituales de negar el acceso a la información, se encuentra el de la denegación por omisión a través de la dilación o ausencia del acto de respuesta.

Por este motivo, y con la finalidad aludida que una ley como ésta persigue, me refiero al objetivo de cerrar todos los posibles caminos de evasión de la responsabilidad estatal, se deben establecer plazos breves para que la administración dé respuesta a los requerimientos de las personas.

Como el objetivo de esta ley es el de dar publicidad la información que se encuentra en poder del Estado, ella debe también reflejar aquellas situaciones en las que sea verdaderamente necesario para la administración contar con más tiempo que el establecido por la ley. Por ello, es recomendable que la ley incorpore la posibilidad de que el Estado solicite una prórroga del tiempo estipulado con la debida justificación de tal requerimiento.

G. Denegatoria

Dado que la denegatoria puede encontrar diferentes razones o manifestaciones, la ley debe referirse a las más habituales y establecer la forma en que trata a cada una de ellas. Por este motivo, parece importante la incorporación de un capítulo en la ley referido exclusivamente a este tema y que establezca, al menos, lo siguiente:

- a) Que la denegatoria no puede fundarse en la identidad del solicitante o sus propósitos, dado que, como ya vimos, la única razón válida para solicitar información al Estado y para que éste tenga la obligación de brindarla, reside en la calidad de “persona” que reviste la solicitante.
- b) Que la denegatoria no puede fundarse en el hecho de que la información requerida se encuentra también en poder de personas privadas.
- c) Que la denegatoria se presupone cuando la respuesta es ambigua. Como he sostenido previamente, esta ley debe operar de modo que altere los incentivos existentes para denegar información o brindar información poco clara. Al entender que la respuesta

ambigua se toma como una denegatoria tácita (con las consecuencias correspondientes para la administración y el funcionario ----que veremos más adelante----), el funcionario a cargo de proveer la información solicitada realizará los esfuerzos necesarios para brindar la información requerida del modo más claro y ajustado a la solicitud como sea posible.

d) Que la denegatoria también se presupondrá cuando exista silencio de la administración frente al requerimiento de una persona dentro de un plazo predeterminado. Esto tiene fundamento en las mismas razones que se señalaron para el caso de la respuesta ambigua.

e) Que la denegatoria *sólo* puede fundarse en una o más de las excepciones establecidas en forma clara y taxativa por la misma ley. Este es el aspecto más importante de la regulación del derecho de acceso a la información en cuanto a la denegatoria de una solicitud. La ley debe establecer en forma clara y taxativa aquellos casos en los que el Estado no sólo no está obligado a brindar información, sino que se encuentra impedido de hacerlo (protección de la privacidad, de la seguridad nacional, etcétera). Pese a la amplitud con que puedan interpretarse estas excepciones, que en definitiva y ante la duda serían consideradas por un juez, la cantidad de información que no encuadra de ningún modo en ellas y que habitualmente se niega es enorme. Basta con imaginar casos como los de contrataciones de servicios públicos, listados de personal en la administración pública, presupuestos de agencias gubernamentales, entre muchísimos otros que usualmente no logran hacerse públicos y que, bajo el régimen de una ley de acceso a la información, sería prácticamente imposible denegar el acceso sin asumir consecuencias negativas para el funcionario y para el Estado.

H. Recurso judicial (1): amparo por mora

Dado que se presume que el solicitante desea principalmente que le sea brindada la información solicitada, si el marco jurídico de la ley de procedimientos administrativos lo permitiese, cabría la posibilidad de que se interponga ante un juez lo que el artículo 28 de la Ley 19.549 de Argentina, por ejemplo, denomina *amparo por mora*.

Ello le da al solicitante la alternativa, antes de recurrir a la justicia interpretando la existencia de silencio de la administración frente a su requerimiento, de que el juez pida explicaciones al Estado por la demora y lo obligue a responder. Pese a que de existir una norma similar en el régimen de procedimientos administrativos éste no necesita ser repetido en la ley de acceso a la información, la inclusión del *amparo por mora* en el texto de la ley permite que las personas legas, de su mera lectura, conozcan las alternativas a las que puede recurrir en caso de silencio de la administración o incumplimiento de los plazos establecidos en la misma ley para responder al requerimiento.

I. Responsabilidades: falta grave y responsabilidad penal

La ley de acceso a la información debe invertir los incentivos habituales que un miembro de la administración tiene para negar información. Como se dijo anteriormente, el temor a la reacción del superior frente al hecho de haber brindado información, el riesgo de comprometer al Estado por liberar datos que podrían usarse en su contra, o la mera resistencia de toda burocracia a abrirse a aquellos que no forman

parte de ella, son razones que habitualmente un funcionario encuentra para negar la información solicitada.

Si a ello se le suma la inexistencia de sanción alguna frente a la negativa de dar información, el funcionario, al tener que optar por responder en forma afirmativa o negativa al requerimiento, muy probablemente se inclinará por esta última alternativa.

Por ello, una ley de acceso a la información deberá establecer responsabilidades claras en cabeza del funcionario que haya optado por negar la información de manera infundada y contrariamente a lo establecido por la ley. Esa responsabilidad podrá ser de carácter administrativo, calificando a la conducta como *falta grave* (esta calificación por supuesto varía en cada Estado).

Además, podrán sumárseles también las responsabilidades de tipo penal que se vinculan con el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En general, el régimen de sanciones penales prevé este tipo de conducta por lo que no parece ser necesario incluirla en la ley que regule el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, resulta de fundamental importancia un régimen de responsabilidades claras y severas dirigido a que el funcionario encargado de decidir acerca de liberar o no información en poder del Estado se vea incentivado a dar la información en lugar de recibir el estímulo opuesto.

Por último, resulta interesante resaltar que este tipo de sanciones y asignaciones de responsabilidad también operan como “ayuda” al funcionario que, teniendo disposición para dar información se siente constreñido por órdenes o instrucciones de superiores. De contar con una ley de este tipo, ese funcionario podría actuar contra la instrucción que obstaculiza el acceso a la información con la tranquilidad de que la ley respalda (y obliga) su decisión.

J. Recurso judicial (2): amparo

Otro elemento fundamental para lograr la mayor eficacia posible de la ley de acceso a la información y el consiguiente ejercicio de este derecho, es la posibilidad de recurrir a un juez cuando el gobierno niega infundadamente la información requerida. Esta intervención judicial implica el único remedio eficaz frente a la violación del derecho a la información, tal como se supone debe suceder con el resto de los derechos. Cuando la ley equivalente fue discutida en los Estados Unidos, la ya referida *Freedom of Information Act*, gran parte de la discusión entre el Poder Legislativo, que quería sancionar la ley, y el Ejecutivo, que la resistía, radicaba en el punto de hacer al Poder Judicial responsable de lograr su efectivo cumplimiento. Una ley de acceso a la información que no cuente con la posibilidad de que la persona que recibió por respuesta la negativa infundada recurra judicialmente la decisión, carece de eficacia respecto de los fines que persigue.

En Argentina, por ejemplo, la incorporación del amparo a través del nuevo artículo 43 a la Constitución Nacional, sumado al reconocimiento que la ley haría del derecho de *toda persona a toda la información que se encuentre bajo control del Estado*, brinda una magnífica posibilidad de hacer el ejercicio de este derecho una realidad cierta.

K. Excepciones

El derecho de toda persona a toda la información que se encuentre bajo control del Estado no es, por cierto, un derecho absoluto cuyo ejercicio no admite límite alguno.

El límite al ejercicio de este derecho radica en el ejercicio de otros derechos de las personas y razones de orden público que se relacionan con la seguridad nacional y la defensa social. Por ello, el principio de publicidad admite excepciones aunque, a fin de que ellas no queden libradas a la discreción del Estado (controlado por la posibilidad de exigir esa publicidad), deben establecerse en forma clara y taxativa en la ley de acceso a la información.

Si la administración considerara que el principio de publicidad no rige en un caso en particular por encuadrarse la situación en una de las excepciones de la ley, la funcionaria que deniegue la información deberá fundarla en la excepción específica que justifique la respuesta negativa y deberá señalarla en forma individualizada. Este requisito que acompaña la denegatoria debe ser establecido en la ley. Si no se cumple con él, la denegatoria será infundada y habilita al juez a exigir su provisión.

El capítulo referido a las excepciones, por supuesto, es el más complejo y debatible de este tipo de legislación. Es aquí donde todos los esfuerzos por concretar una buena regulación pueden frustrarse. En el caso de la ley que no llegó a sancionarse en Paraguay en 2002, por ejemplo, se establecía como excepción el hecho de que la información se refiera a “conductas de funcionarios o sobre hechos de corrupción hasta que concluya la investigación correspondiente” (cuando en realidad este derecho tiene por fundamento justamente el control de la corrupción en el gobierno).

Al momento de establecer las excepciones que justifican la denegatoria de la información, se observan diferentes estrategias posibles. La más habitual se vincula al listado detallado del tipo de información que se le autoriza al Estado a no brindar, de acuerdo a lo previsto, por ejemplo, en la pionera *Freedom of Information Act* de los Estados Unidos. Si bien esta estrategia es la más extendida, ella descansa casi totalmente en el grado de precisión con que se describa la información que puede denegarse.

Dado que es prácticamente imposible evitar una mediana indeterminación en esa descripción, es recomendable combinar el señalamiento de la información “denegable” con un “procedimiento” específico y exigente que conduzca a la determinación del secreto. Por ejemplo, es sabido que el establecimiento del secreto sobre materias tales como seguridad nacional o inteligencia, son habituales en este tipo de legislaciones, pero también sabemos que bajo estos rótulos ampliamente indeterminados, el Estado deniega una considerable cantidad de información que podría brindar sin poner en riesgo el interés público. Es debido a ello que, por ejemplo, podría establecerse un proceso especial, incluso a través de un órgano particular representativo de los integrantes del Congreso que, a través de una votación calificada, establezca el secreto.

En síntesis, parece que la estrategia que combina “materias” de secreto con “procedimientos” para establecerlo, sería lo más recomendable. Algunas excepciones recurrentemente referidas en leyes de este tipo y que incorporan esta combinación de “materias” y “procesos” consignan lo siguiente:

- a) Información clasificada como secreta por decreto o ley.
- b) Seguridad, defensa o política exterior (según lo establecido por ley).
- c) Riesgo para el sistema financiero o bancario.
- d) Información bancaria o financiera de terceros obtenida con carácter de confidencial.
- e) Información correspondiente a las deliberaciones internas de la administración.
- f) Asesoramiento legal al Estado en juicio (relacionado con el secreto profesional del abogado).
- g) Datos personales y privacidad.

Es importante que, al establecerse las excepciones, se tenga en cuenta el principio rector de la publicidad y ellas se reduzcan a su mínima e imprescindible expresión. De todos modos, será inevitable que el contenido preciso de estas excepciones se delimite a través de la jurisprudencia que irá construyendo, caso por caso, los contornos y el alcance del derecho. Los jueces, en ejercicio del control de constitucionalidad, podrán invalidar no sólo decisiones de la administración que contradigan la ley (al denegar información en forma infundada), sino que también podrán fulminar una excepción o una aplicación concreta de una excepción cuando se contradiga con el derecho constitucional de acceso a la información o el derecho humano respectivo reconocido en el derecho internacional.

Es por ello que la justificación constitucional del derecho, referida en la primera parte de este ensayo, es tan relevante, de modo de proveerle al juez de herramientas para ejercer el control. También se desprende de esto último la enorme relevancia de promover, desde la sociedad civil, pedidos de información que, en su caso, lleguen a los tribunales brindándole a los jueces la oportunidad de expedirse y así establecer el significado de la norma.

L. Información parcial: excepción no implica permiso para negar el resto

Es posible que dentro de un documento se hallen entremezcladas informaciones de acceso permitido y también prohibido. En estos casos, la existencia del segundo tipo de información no autoriza al Estado a denegar el resto, que debe ser brindado al requirente.

M. Costos de búsqueda y reproducción de información

Tanto la búsqueda como la reproducción de la información requerida puede implicar costos para el Estado. En este sentido, si bien hay quienes sostienen que el acceso a la información debe ser *siempre* gratuito, en el derecho comparado se reconoce la posibilidad de requerir un pago que contribuya a solventar los gastos correspondientes para la administración. La gratuidad en todos los casos, no sólo es estratégicamente muy poco recomendable (ningún Estado asumiría una obligación con semejante grado de indeterminación futura), sino que no ofrece ningún desincentivo a solicitar información en forma indiscriminada.

Sin embargo, es también común que estas leyes establezcan la gratuidad para los pedidos de información que persigan como objetivo satisfacer el interés público o que se trate de datos personales. Un modo de establecer un *proxy* para poder determinar si se trata del primer tipo de casos, los referidos al interés público, se relaciona con el señalamiento de determinado tipo de organizaciones, como las sin fines de lucro por ejemplo, a las cuales se les reconoce *a priori* el derecho de solicitar información en forma gratuita. Otra estrategia posible es la de dejar librado al funcionario, o en su caso al juez, la determinación del carácter de interés público del requerimiento, lo cual implicaría que el requirente explique el motivo del pedido.

Es muy claro, sin embargo, que el cargo que se establezca a la búsqueda y reproducción no puede exceder nunca los valores “razonables”, dado que ello podría ser interpretado como una denegatoria implícita. Por supuesto, existen diferentes modos de establecer el significado del requisito de razonabilidad al pautar el costo de la información, pero en última instancia será el Poder Judicial el que, a través de la jurisprudencia, determinará los límites de lo razonable.

Por supuesto, es imposible cubrir en un breve ensayo la totalidad de las múltiples opciones entre las que el legislador podría decidirse. Éstas son sólo algunas de las más habituales y sin las cuales, sin duda, una ley que regule el derecho de acceso a la información se tornaría ineficaz.

Los sujetos del derecho de acceso a la información pública

Ernesto Villanueva

En el derecho comparado existe cada vez más consenso en que el sujeto activo debe ser toda persona, sin importar si es ciudadano o no lo es, si es una persona jurídica o natural. No obstante, existen países y estados donde el sujeto activo se encuentra limitado. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública de Arkansas conforme a la cual únicamente “todo ciudadano del estado de Arkansas puede inspeccionar y copiar registros públicos”, según reza el artículo 25-19-105 (a) de la Ley en cuestión. En otros estados de la unión americana semejante restricción no se advierte.

En Iowa el artículo 22.2 (1) de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública dispone de manera taxativa que: “toda persona tendrá el derecho a examinar y copiar cualquier registro público”. En este mismo país, a nivel federal, la Ley de Acceso a la Información Pública prevé que “cualquier persona” puede consultar los registros públicos, según dispone el artículo 552 a) (3) de la citada Ley.

De la misma manera, se puede advertir una tendencia internacional a que el sujeto activo sea lo más amplio posible como lo demuestra, por ejemplo, la Ley Modelo preparada por la organización británica artículo 19 que establece en su artículo 3o.: “1) Cada uno tendrá el derecho a la libertad de información, incluyendo el derecho de acceso a la información en poder de las entidades públicas, sujeto solamente a las previsiones de esta Ley”.

La Ley Modelo preparada para la Organización de Estados Americanos por el doctor Alfredo Chirino Sánchez dispone, por su parte que:

Artículo 1o. Derecho de Información y de Acceso a los Expedientes y Actas de Carácter Administrativo. Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias; así como del Poder Legislativo y Judicial, salvo disposición en contrario, en cuanto a su actividad administrativa.

Este derecho de información también comprende el derecho a acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no lesione un interés público preponderante o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero.

Este derecho también incorpora la posibilidad de formular consultas sobre las competencias y atribuciones de las entidades y funcionarios públicos que en ella laboran y a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre sus actividades en la ejecución de las competencias a su cargo.

Como puede advertirse en el artículo transcrito líneas arriba, la tendencia por cuanto hace al sujeto pasivo también ha sufrido un cambio sustancial. En un primer momento algunas leyes limitaban el sujeto pasivo al Poder Ejecutivo, hoy en día las cosas han cambiado sobremanera.

En buena parte de las legislaciones de la región que aquí se compilan se suelen incluir como sujeto pasivo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y aquellas empresas privadas que ejercen gasto público. En algunos casos, incluso, están sujetas a la ley aquellas empresas privadas que cumplan funciones de autoridad. En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone de manera directa e indirecta un importante número de sujetos pasivos.

En efecto, si bien es cierto que la Ley Federal únicamente establece el procedimiento para el Poder Ejecutivo federal, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 3o., fracción IV de la citada Ley que define. Dependencias y entidades. Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República; también introduce las bases para que otras entidades se conviertan en sujetos obligados, como se deduce de lo previsto en el artículo 61, que a la letra dice:

Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley.

En el ámbito estatal, la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa va más allá de lo que garantiza su similar en el ámbito federal, al incluir como sujetos obligados a las empresas privadas que ejerzan gasto público y actúen en auxilio de la autoridad. En efecto, el artículo 5o., fracción IV, dispone que se entenderá por entidad pública y, por ende, sujeto obligado a informar a:

El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del Congreso del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, gobernador Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los ayuntamientos de los municipios, presidente municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.

4. *El objeto del derecho de acceso a la información pública*

Cuando se habla de objeto se quiere aludir a los bienes jurídicos protegidos, en este caso por el derecho de acceso a la información pública; es decir, el objeto se identifica al responder a las siguientes interrogantes:

¿qué derechos protege el derecho de acceso a la información pública? o bien ¿para qué debe existir el derecho de acceso a la información pública?

De cara a estas cuestiones, la primera respuesta que debe sostenerse es que el derecho de acceso a la información pública tiene como objeto primordial: el derecho de las personas a mejorar su calidad de vida. ¿Qué significa mejorar la calidad de vida de las personas?, ¿qué relación puede haber entre la información, su acceso y mejorar la calidad de vida de las personas? Existen distintos derechos subsidiarios cuya interrelación permite que los flujos de la información puedan convertirse en herramientas para una toma informada de decisiones.

De igual forma, cabe decir que primariamente se trata de información que le pertenece al público, la cual es administrada por el Estado. El derecho de acceso a la información pública viene a democratizar la vieja conseja, a veces ininteligible para la persona promedio, de que información es poder. Poder en dos vertientes, en el sentido weberiano de la expresión como la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la voluntad ajena, y como el acto de llevar a cabo algo, en este caso una decisión informada en los más distintos aspectos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo:

Las leyes de acceso a la información permiten que los individuos y grupos tengan acceso a las políticas mediante las cuales el gobierno toma decisiones respecto a proyectos de salud, educación, vivienda e infraestructura y las razones que sustentan tales decisiones. Armados de tales conocimientos, los ciudadanos alrededor del mundo estarán efectuando los cambios que les permita mejorar sus niveles de vida y llevar una mejor existencia.

De esta forma, el derecho de las personas a mejorar su calidad de vida tiene un conjunto de derechos subsidiarios. De una parte, se encuentran los derechos indirectos o difusos, que son aquellos que tienen como propósito optimizar la calidad de la convivencia democrática, pero sin que sus ventajas puedan ser inmediata y directamente asibles para la persona.

El principal valor en este caso es la calidad del flujo de relaciones que se establecen entre los actores sociales, políticos y económicos, del funcionamiento del principio de legalidad, del desarrollo y de la fortaleza de fórmulas jurídicas que mejoren la relación entre el Estado y la sociedad, lo que en suma genera un ambiente propicio para que todos puedan vivir mejor. De otra, los derechos directos, que son aquellos que impactan de manera singular y puntual en los distintos actos públicos de las personas observando al ser ejercidos un beneficio concreto en el titular del derecho. Véanse algunos ejemplos de ello.

Ejemplo 1. En cualquier ciudad de América Latina, los padres de familia preocupados por la calidad de la educación de sus hijos en el nivel primario o secundario, por citar tan sólo unos ejemplos, se ven hoy en día obligados a recurrir a métodos empíricos o intuitivos para decidir en qué escuela pública inscribir a sus hijos. Las recomendaciones

familiares, amistosas o la tradición sustituyen a instrumentos objetivables que un buen sistema de derecho de acceso a la información pública les podría proporcionar: *a)* datos sobre eficiencia terminal de las escuelas objetivo; *b)* datos sobre el ingreso al siguiente nivel educativo de los alumnos del último año de las escuelas objetivo; *c)* datos sobre la actualización y nivel profesional de los profesores de las escuelas objetivo. No hay duda de que con estos datos, los padres de familia pueden hacer de la información un poder para decidir de la mejor manera posible en beneficio inmediato y directo de su propia familia.

Ejemplo 2. Un estudiante se ve en la necesidad de adquirir un vehículo para su transporte por las distancias entre su escuela y los lugares de prácticas o de su hogar. Hoy en día debe pasar por todo un viacrucis para comprar un vehículo usado para reducir los riesgos que una compra de esa naturaleza pudiera tener para él. Se encuentra así frente a dos opciones. La primera, adquirir una unidad por los anuncios clasificados a menor precio, en principio, pero debiendo tener cuidado de tener un mecánico de confianza y un “contacto” en la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía del Estado para descartar que sea un vehículo reportado como robado. La segunda, comprar un vehículo en una agencia de autos seminuevos, a un costo mayor, pero con mayores probabilidades de que el automóvil se encuentre en mejores condiciones mecánicas y legales.

Estas prácticas sustituyen lo que un buen sistema de derecho de acceso a la información pública puede ofrecer: *a)* seguimiento de la vida funcional del vehículo con registros de servicios en tiempo, de si fue o no volcado en alguna ocasión, de cuántas veces ha sido ingresado al mecánico o al eléctrico; y *b)* registro de la situación legal del vehículo en cuestión. Se puede observar que con estas herramientas legales el estudiante podrá hacer de la información un poder para tomar una decisión informada que le reporte un ahorro económico y la adquisición de un vehículo de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas logrando obtener algo en una buena relación calidad-precio.

Ejemplo 3. Un empresario desea intervenir en una ciudad mediana o grande, pero quiere saber cuál es la situación del mercado, cuántas empresas como la que él quiere instalar se encuentran operando, desde hace cuánto tiempo y el número de personas que cada una de ellas tiene. Hoy en día, los municipios de la República mexicana carecen de bases de datos para concentrar este tipo de información, por lo que el empresario deberá hacer un costoso estudio de mercado, el cual podría amortizar, en gran medida, si tuviera esa información que, con un buen sistema de derecho de acceso a la información pública, pudiera ser de su conocimiento gratuitamente.

Ejemplo 4. Un campesino de escasos recursos que siembra tierras de temporal hoy en día acude también a métodos intuitivos, basados en habilidades personales para interpretar el estado del tiempo. Con esa pobre información decide si siembra o no, poniendo en esa decisión una cantidad de recursos económicos que para su circunstancia es significativa. Con un buen sistema de derecho de acceso a la información pública, el campesino puede acudir a la población más cercana y solicitar, por cualquier medio, al Sistema Meteorológico Nacional la predicción del tiempo en los próximos días y semanas en forma gratuita, circunstancia a través de la cual podría hacer de la información un poder para tomar una decisión informada en beneficio de su economía personal y de la de su familia.

A partir de estos ejemplos, puede observarse que el derecho de acceso a la información pública se convierte en requisito *sine qua non* para el ejercicio de otros derechos tutelados por la propia Constitución, particularmente aquellos definidos como programáticos, los cuales sin la información necesaria se convierten en letra muerta. Los ejemplos se encuentran en todas partes del mundo. A la misma conclusión llegó Richard Callan, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sudáfrica, quien afirma: “Tal vez no sea obvio de inmediato cómo y por qué el derecho de acceso a información es tan importante”. Pero el caso del Estado hindú de Rajasthán, donde se dice:

“El derecho a saber, el derecho a vivir” lo hace meridianamente claro. Desde la profundidad de las comunidades de este estado, un movimiento del pueblo —la organización Mazdoor Kisaan Shakti Sangathan— ha demostrado que la información puede servir para dar poder a la gente común y mejorar sus vidas. Históricamente, sólo con dificultad la gente de estas comunidades ha podido exigir el pago del salario mínimo. En tiempos de elecciones, los políticos prometían el salario mínimo a cambio de votos, pero sus promesas rara vez se tornaron realidad. Los activistas se dieron cuenta que únicamente al obtener la documentación relevante, en particular las planillas (listas de personas empleadas y salarios pagados) iban a tener éxito en sus campañas. De esta forma se unieron en la imaginación popular, el derecho a la información y el derecho de sobrevivir.

Para que ambos derechos, indirectos, difusos y directos, tengan un ambiente normativo propicio se requiere satisfacer, entre otros, los siguientes derechos subsidiarios como punto de partida:

Primero. Derecho a contar con entidades públicas que operen de manera transparente. La transparencia es un rasgo distintivo de un Estado democrático de derecho porque implica una mayor vinculación entre el Estado y la sociedad. La sociedad tiene con el principio de la transparencia el derecho a saber cómo se toman, por dentro de las entidades públicas sujetas a la ley respectiva, las decisiones que afectan de manera directa o indirecta los intereses de personas, de grupos sociales o de la sociedad en su conjunto. La transparencia, en suma, habilita a la persona a conocer cómo funcionan internamente las entidades públicas, circunstancia que favorece la eficacia y la eficiencia y, por el contrario, permite identificar aquellas áreas donde las cosas no operan de manera adecuada o al margen de la ley. Si la secrecía y la oscuridad son zonas donde florece la corrupción a través de sus múltiples manifestaciones, la transparencia, por el contrario, acota en gran medida esas expresiones y reduce de manera considerable los márgenes de maniobra de los servidores públicos proclives a incurrir en actos de corrupción.

Segundo. Derecho a contar con entidades públicas que rindan cuenta de sus actos ante la sociedad. Los gobernantes y los gobernados firman, de manera figurada, un contrato electoral cada determinado tiempo en las urnas, en el cual los gobernantes se comprometen a llevar a cabo una serie de acciones en sus planes de gobierno si el voto les es favorable.

¿Qué pasa, empero, cuando los candidatos se vuelven gobierno si no hay una normativa de acceso a la información pública preexistente?, ¿cómo poder identificar la congruencia entre lo que dijeron que habrían de llevar a cabo y lo que efectivamente

están haciendo en el gobierno?, ¿cómo evaluar a los representantes de la sociedad? Poco o nada se puede hacer si no se tiene herramientas jurídicas que permitan realizar un marcaje personal a la tarea de gobernar. Sin estas herramientas la impunidad y la ineficiencia se convierten en monedas de cambio, en perjuicio de la propia sociedad que se encontraría sin información adecuada para manifestar su respaldo al ejercicio de gobierno congruente y eficaz o su rechazo a aquél que no lo sea.

Tercero. Derecho al principio de apertura de las acciones de las entidades públicas. El principio de apertura implica que el derecho a saber de las cosas públicas constituye la regla general y, por el contrario, la información reservada, la excepción. Se trata de un punto de partida del derecho de acceso a la información pública que le imprime una entidad propia y es deudor para que las cosas públicas sean de conocimiento público. ¿Cómo podría explicarse, de otra forma que, paradójicamente, pudiera operar el principio contrario, donde la regla es la secrecía y la apertura la excepción? De ahí que sea primordial plasmar en la ley el principio de apertura informativa.

5. El derecho de acceso a la información pública en las convenciones internacionales

El derecho de acceso a la información pública se ha convertido de unos años a la fecha en una reivindicación compartida por declaraciones e instrumentos internacionales, constituciones en las más distintas regiones del mundo y seminarios organizados de manera recurrente en diversos foros nacionales e internacionales. Por cuanto se refiere a las convenciones internacionales, cabe decir que desde 1948, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sienta las bases implícitas del derecho de acceso a la información pública. Dice el texto referido:

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 29. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La Convención Americana de Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 ratifica el mismo principio, en los términos siguientes:

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El artículo 29 relativo a las normas de interpretación de la Convención constituye un argumento adicional en favor de la tesis de que el derecho de acceso a la información pública se subsume en el contenido del artículo 13 transcrito. En efecto, el artículo 29 dispone literalmente que:

Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

A) Permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

B) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados.

C) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

D) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

En los mismos términos que la Declaración Universal de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos retoma los principios genéricos de la libertad de expresión y de manera implícita el derecho de acceso a la información pública. Véase el texto que a la letra dice:

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

6. El derecho de acceso a la información pública en las Constituciones del mundo

Los principios enunciados en el apartado anterior se han plasmado también en distintas Constituciones, lo que revela un proceso de emergencia democrática que empieza a rodear el entorno mundial como regla de procedimiento al darle al individuo las posibilidades materiales para participar de forma más activa en la *res pública*. Esto es particularmente cierto si se considera que de los 35 países del mundo que han constitucionalizado el derecho de acceso a la información pública (18% del universo total), 20 de ellos lo han hecho entre 1990 y 1996 al adoptar nuevos textos constitucionales. Las recientes reformas constitucionales en Ecuador y Venezuela no han dejado de lado este derecho fundamental, circunstancia que genera condiciones adecuadas para que en la región las posibilidades de legislar sobre derecho de acceso a la información pública sean cada vez más amplias.

De diferentes formas y modos, según su propio desarrollo normativo y abrevando distintos sistemas de derecho, las Constituciones del mundo han ido plasmando en su articulado el espíritu del derecho de acceso a la información pública. Es verdad que la inclusión de normas sobre derecho de acceso a la información pública no constituye un puerto de llegada, pero sí un comprometido punto de partida para traducir en normas adjetivas e instrumentales los derechos sustantivos previstos en el texto constitucional.

A continuación se incluyen en texto completo las referencias constitucionales sobre derecho de acceso a la información pública en las constituciones del mundo:

Albania. Constitución.

Artículo 20. Libertad de expresión, de opinión.

4. A nadie se le podrá negar el derecho de estar informado.

5. El ejercicio de estos derechos y libertades no pueden ser restringidos, salvo en los casos previstos por la ley y sean considerados como necesarios para los intereses de la seguridad nacional, la protección de la seguridad pública y el orden, la prevención del crimen, la defensa de la salud, la moral o el honor y los derechos de terceros, la prevención de la información dada en confidencia, o para garantizar la autoridad e imparcialidad de la justicia.

Bélgica. Constitución.

Artículo 32. Toda persona tiene derecho a consultar documentos administrativos y a que se le suministre copia, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos por la ley, el decreto o la disposición prevista en el artículo 134.

Bielorrusia. Constitución.

Artículo 34. Los ciudadanos de la República de Bielorrusia tendrán el derecho a obtener, mantener y diseminar información completa, fidedigna y oportuna sobre las actividades de los órganos del Estado y las asociaciones públicas, sobre política, economía, aspectos internacionales y sobre ecología.

Los órganos estatales, las asociaciones públicas y oficiales estarán obligados a brindar a los ciudadanos libre acceso a la información que consideren pertinente para sus derechos e intereses legales.

Brasil. Constitución.

Artículo 5o. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes términos:

XIV. Queda garantizado a todos el acceso a la información y salvaguardado el secreto de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional.

XXXIII. Todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilidad, salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible para la seguridad de la sociedad y del Estado.

Colombia. Constitución.

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.

Costa Rica. Constitución.

Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.

Chechenia. Constitución.

Artículo 48. Todo ciudadano de la República de Chechenia tendrá el derecho a recibir información sobre asuntos del Estado en todas las esferas de la vida pública e internacional, y sobre los derechos, intereses legales y deberes de los ciudadanos.

La responsabilidad por obstruir la ejecución del derecho a la información será establecida por la ley. La difusión de información que contenga secretos de Estado o cualquier otro protegido por la ley estará prohibido.

Ecuador. Constitución.

Artículo 19. Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material.

Artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:

7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

Eritrea. Constitución.

Artículo 19. (3) Toda persona tendrá el derecho de acceso a la información.

Eslovaquia. Constitución.

Artículo 19. (5) Las autoridades del Estado central y las autoridades de las administraciones regionales deben proveer la información sobre sus actividades de una manera razonable y en lenguaje oficial. Las condiciones para la aplicación de este párrafo serán establecidas por la ley.

Eslovenia. Constitución.

Artículo 39. La libertad de pensamiento, palabra y apariencia pública, prensa y otras formas de información pública y de expresión queda garantizada. Cualquier persona puede libremente recoger, recibir y difundir noticias y opiniones.

Cada persona tiene el derecho de obtener información de carácter público por el cual tenga algún interés fundado en la ley, salvo en los casos previstos en la ley.

España. Constitución.

Artículo 105. La ley regulará:

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Estonia. Constitución.

Artículo 44. Todos tendrán derecho a recibir libremente información que esté en circulación para conocimiento de la gente en general. A solicitud de un súbdito estoniano, en la medida y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, todas las autoridades y funcionarios del gobierno central y de las corporaciones locales estarán obligados a facilitar información sobre sus funciones, con excepción de aquella

cuya divulgación esté legalmente prohibida, y la información cuya utilización sea únicamente de carácter interno.

Todo súbdito estoniano tendrá derecho a conseguir información sobre sí mismo que las autoridades del gobierno central o de las corporaciones locales guarden respectivamente en los archivos estatales y de las corporaciones locales, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Este derecho podrá, sin embargo, ser legalmente restringido con objeto de proteger los derechos y las libertades de terceros y la intimidad del origen familiar de un niño, así como para prevenir un acto criminal, capturar a un delincuente o investigar los hechos en un procedimiento criminal.

A menos que se disponga legalmente otra cosa, los derechos especificados en los párrafos segundo y tercero del presente artículo beneficiarán tanto a los súbditos estonianos y a los súbditos de Estados extranjeros, como a los apátridas que residan en Estonia.

Filipinas. Constitución.

Sección III. Artículo 7o. Se reconocerá el derecho del pueblo a la información sobre materias de interés público. Se permitirá al ciudadano el acceso a registros oficiales y a documentos y papeles relacionados con actos oficiales, transacciones o decisiones, así como a los datos de investigación del gobierno usados como base para el desarrollo de su política, salvo las limitaciones que disponga la ley.

Finlandia. Ley Fundamental sobre la Forma del Gobierno.

Artículo 10. Todos tendrán derecho a la libertad de expresión. A la libertad de expresión pertenece el derecho de manifestar, divulgar y recibir datos, opiniones y otros mensajes sin que se obstaculice de antemano. Mediante ley se establecerán disposiciones más precisas. Se podrán establecer por ley limitaciones en programas visuales, necesarias para la protección de los niños.

Los documentos y archivos que estén en posesión de una autoridad serán públicos, a no ser que se haya limitado la publicidad por razones necesarias, expresamente señaladas en la ley. Cada uno tendrá derecho a informarse por medio de documentos y archivos públicos.

Francia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Artículo 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, vigilar su empleo y determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración.

Guatemala. Constitución.

Artículo 30. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar,

salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Artículo 31. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.

Haití. Constitución.

Artículo 40. El Estado tiene la obligación de difundir en forma oral, escrita o por medio de la televisión en los idiomas criollo y francés todas las leyes, órdenes, decretos, tratados internacionales y convenciones que afecten la vida nacional, salvo la información concerniente a la seguridad nacional.

Kazakhstan. Constitución.

Artículo 18. 3. Los órganos del Estado, asociaciones públicas y personas que desempeñan funciones públicas proveerán a cada ciudadano la posibilidad de tener acceso a documentos, decisiones y otros materiales relativos a sus derechos e intereses.

Lituania. Constitución.

Artículo 25. Se reconoce el derecho a las propias ideas y a la libre expresión de las mismas. Nadie podrá ser obstaculizado en la búsqueda, obtención o difusión de información o ideas.

La libertad de expresión, así como la de intercambio de información, no podrá ser restringida de forma alguna, salvo lo establecido por la ley en caso de necesidad para la protección de la salud, honor y dignidad, intimidad o costumbres individuales, así como del orden constitucional.

La libertad de expresión y el intercambio de información serán incompatibles con las acciones delictivas, tales como el fomento al odio nacional, racial, religioso o social, la violencia o discriminación, la propagación de calumnias la información falsa.

Los ciudadanos gozarán del derecho a obtener por parte de las instituciones estatales toda la información disponible que pudiere afectarles, en la forma que la ley establezca.

Malawi. Constitución.

Artículo 37. Sujeto a cualquier ley, toda persona tendrá el derecho de acceso a toda la información en poder del Estado o de cualquiera de sus órganos a cualquier nivel de gobierno en la medida en que tal información sea requerida para el ejercicio de sus derechos.

México. Constitución.

Artículo 6o. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Mongolia. Constitución.

Artículo 16. Los ciudadanos de Mongolia disfrutarán de los siguientes derechos fundamentales y libertades:

17) El derecho de buscar y recibir información, salvo aquella que el Estado y sus órganos estén legalmente obligados a protegerla como secreto.

La información que no esté sujeta a revelación será clasificada y protegida por la ley en aras de proteger los derechos humanos, la dignidad y reputación de las personas y asegurar la defensa nacional, la seguridad y el orden público.

Paraguay. Constitución.

Artículo 22. De la publicación sobre procesos. La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no debe ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada.

Artículo 28. Del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.

Perú. Constitución

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho:

5) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado.

6) A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

República Checa. Carta de Derechos Fundamentales y Libertades

Artículo 17. (5) Los órganos del Estado y de los autogobiernos territoriales proveerán en forma apropiada información sobre sus actividades. Las condiciones y la forma de poner en práctica lo anterior será establecida por la ley.

Rumania. Constitución.

Artículo 31.

1. El derecho de toda persona a tener acceso a cualquier información de interés público no podrá ser restringido.
2. De acuerdo con su competencia, las autoridades públicas deberán asegurar que los ciudadanos reciban información correcta concerniente a los asuntos públicos y a las materias de interés personal.
3. El derecho a recibir información no será comprometido por establecer medidas a fin de proteger a la juventud y a la seguridad nacional.
4. Los órganos de comunicación masiva, públicos y privados, deberán asegurarse de que la opinión pública reciba información veraz.

Rusia. Constitución.

Artículo 24.

1. No está permitida la obtención, conservación, utilización y difusión de información sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento.
2. Los órganos del poder estatal y los órganos del autogobierno local y sus funcionarios están obligados a garantizar a todos la posibilidad de acceder a los documentos y materiales que afecten directamente sus derechos y libertades salvo que por ley se establezca otra cosa.

Sudáfrica. Constitución.

Artículo 32. Toda persona tiene el derecho de acceso a

- 1) Cualquier información en poder del Estado, y
- 2) Cualquier información en poder de otras personas y sea requerido para el ejercicio o la protección de cualquier derecho.
- 3) Se expedirá una ley nacional para hacer efectivo este derecho y poder tomar las medidas razonables para aliviar la carga administrativa y financiera del Estado.

Artículo 33.

- 1) Los derechos establecidos en este capítulo pueden ser limitados por una ley de aplicación general, previendo que tal limitación,
 - A) Será permisible solamente en tanto sea
 - a) razonable; y
 - b) justificable en una sociedad abierta y democrática basada en la libertad y la igualdad; y
 - B) no negará el contenido esencial del derecho en cuestión.

Suecia. Ley sobre la Forma de Gobierno.

Artículo 3o. La Ley sobre la Forma de Gobierno, la Ley de Sucesión, la Ley de Libertad de Prensa y la Ley sobre la Libertad de Expresión, serán leyes fundamentales del Reino.

CAPÍTULO PRIMERO LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 1o. En sus relaciones con la autoridad pública, se garantizará a todos los ciudadanos:

1. La libertad de expresión, es decir, de comunicar informaciones por la palabra, por la escritura o por la imagen o de cualquier otra manera y de expresar pensamientos, opiniones y sentimientos.
2. La libertad de información, es decir, de obtener y recibir información y por otra parte de informarse de los propósitos de otros.

En materia de libertad de prensa y la equivalente libertad de expresión en la radio, televisión y medios de comunicación semejantes, cine, video y otras grabaciones audiovisuales, se aplicarán las normas de la Ley de Libertad de Prensa y de la Ley de Libertad de Expresión.

La Ley de Libertad de Prensa contendrá normas sobre el derecho de acceso a los documentos públicos.

Artículo 3o. Ningún dato sobre un ciudadano recogido en registros públicos podrá basarse sin su consentimiento, exclusivamente en sus opiniones políticas.

Se protegerá a los ciudadanos en la medida precisada por la ley contra cualquier lesión de su integridad personal resultante del almacenamiento de datos que les afecten, mediante tratamiento informático.

Ley Fundamental de Libertad de Prensa CAPÍTULO SEGUNDO DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

Artículo 1o. Para que se fomente el libre intercambio de opiniones y la ilustración del público, todo súbdito sueco tendrá libre acceso a los documentos oficiales.

Artículo 2o. El derecho al acceso a documentos oficiales está restringido sólo si la restricción es necesario teniendo en cuenta:

1. La seguridad del Reino o de sus relaciones con un estado extranjero o una organización internacional.
2. La política central financiera, política monetaria o política cambiaria extranjera del Reino.
3. La inspección, control u otras actividades de supervisión de la autoridad pública.

4. El interés de impedir o perseguir el crimen.

5. El interés económico público.

6. La protección de la integridad personal o de las circunstancias económicas de un individuo; o

7. La preservación de animales y especies de plantas.

Cualquier restricción del derecho de acceso a documentos oficiales será especificada escrupulosamente en las disposiciones de una ley especial, o, si se juzga más apropiado en un caso particular, en otra ley la cual haga referencia al caso especial. Con la autoridad de dicha disposición el gobierno puede, sin embargo, dictar regulaciones más detalladas sobre la aplicación de la disposición por orden estatutaria.

No obstante las disposiciones del párrafo dos de este artículo, el Parlamento o el gobierno pueden ser autorizados, por medio de una disposición que se refiera a ello, para autorizar, habiendo considerado las circunstancias, que un documento oficial en particular será hecho accesible.

Artículo 3o. El término *documento* incluye cualquier asunto, fotografía o grabación que pueda ser leída, escuchada o de cualquier otra manera comprendida sólo por medio de ayuda técnica. Un documento es oficial si está custodiado por una autoridad pública, y si puede ser juzgado en los términos de los artículos 6o. y 7o. como de haber sido acogido o redactado por una autoridad.

Una grabación de la naturaleza referida en el párrafo anterior será considerada de ser custodiada por una autoridad pública, si la grabación está disponible por la autoridad para la comunicación, usando ayudas técnicas que emplee la autoridad por sí misma, de tal manera que sea leída, escuchada o hecha comprensible de cualquier otra forma. La anterior disposición no se podrá, sin embargo, aplicar a una grabación que forme parte de una relación de personas, si por ley, o por orden estatutaria, o por una decisión especial tomada en virtud de la ley, la autoridad no tiene derecho para preparar dicha transcripción. El registro de personas será entendido como cualquier registro, lista u otra relación conteniendo información que concierne a un individuo y la cual puede referirse a dicho individuo.

Artículo 4o. Una carta u otra comunicación que esté dirigida en persona al titular de una oficina en una autoridad pública, será considerado como un documento oficial si se refiere a un caso o a otro asunto que caiga dentro del alcance de esa autoridad, y si no está destinada solamente al destinatario en su capacidad como incumbente a otro puesto.

Artículo 5o. Para los propósitos del presente capítulo, el Parlamento, la Asamblea Eclesiástica General de Suecia, y cualquier asamblea de gobierno local investidos con poderes para la toma de decisiones serán equivalentes a una autoridad pública.

Artículo 6o. Un documento será considerado como recibido por una autoridad pública cuando haya llegado a dicha autoridad o esté en manos de un funcionario eficiente. Las grabaciones según el párrafo uno del artículo 3o, serán consideradas y recibidas por la

autoridad cuando estén disponibles para la autoridad de manera distinta a la iniciada en el párrafo dos del artículo 3o.

Entradas para competiciones, presentaciones y otros documentos que hayan sido anunciados deben ser entregados bajo sello y no serán consideradas por haber sido recibidas antes del tiempo citado para su apertura.

Las medidas tomadas solamente como parte de un proceso técnico o de un almacenaje técnico de un documento que una autoridad pública haya hecho disponible, no será interpretado para tener efecto ese documento que ha sido recibido por esa autoridad.

Intersticios del periodismo de investigación

Gerardo Reyes

El producto del trabajo de un periodista investigador es diferente del que publica un reportero que se dedica a buscar noticias del día o escribe crónicas y análisis de determinados acontecimientos bajo la presión de una hora de cierre. El mérito del reportero diario consiste en tener olfato para buscar un ángulo novedoso de la noticia; poner en contexto los hechos; contar con un buen directorio de fuentes; permanecer bien informado y actuar con prontitud. Por su parte, el reportero investigador trabaja en asuntos controvertidos, que no necesariamente tienen actualidad noticiosa y que casi siempre alguien no quiere que se ventilen. [...] Así, la diferencia entre ambos productos está determinada por dos factores: tiempo y profundidad.

Territorio y fronteras

Una caracterización más amplia del periodismo de investigación concibe al reportero investigador como un experto armador de rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo alguien trata de mantener ocultas. Su misión es poner las cosas juntas con el fin de mostrar cómo funcionan y cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis. Algunas veces todas las piezas son obtenidas por el periodista y otras llegan a sus manos porque alguien se entera de que las está buscando, pero en ambos casos, su perseverancia, el hecho de estar siempre ahí escuchando quejas y rumores, mirando documentos y siguiendo pistas, es la clave para obtener una información que quedaría oculta si no fuera por su olfato inquisitivo.

La gente busca información para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Una de ellas es la de conocer las acciones y omisiones de sus gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los comerciantes e industriales que dominan el sector económico de la nación, de los banqueros que tienen en sus manos el dinero de miles de familias y empresas y, en general, de las personas que participan de alguna manera en el manejo de los destinos de su ciudad o país.

¿Qué temas escoger en el reino gris que forman las sombras de la privativa y el brillo de la vida pública? Un primer paso para tomar decisiones éticas apropiadas es tener una partitura antes de sentarse a tocar, un código de ética gremial o de empresa que fije pautas para resolver los conflictos que surgen en torno al contenido del tema que se investiga y al método para investigarlo. Cuantos menos asuntos se toquen de oído o se dejen al arbitrio de la "relatividad", el periodismo de investigación podrá mostrar más altos niveles de coherencia.

"El tomar buenas decisiones éticas en periodismo es una destreza y un arte comparable al escribir bien, a las buenas fotografías y a la buena edición... y debe ser aprendido y

desarrollado", sostiene el manual de los profesores Gay Black, Bob Steele y Ralph Barney. *[Doing Ethics in Journalism. A handbook with Case Studies]*

Obstáculos y necesidades

La siguiente es una descripción más amplia de las dificultades mencionadas por los periodistas [...] en diversas entrevistas que he sostenido con muchos de ellos:

-El alto grado de compromiso de los medios de comunicación con grupos económicos o políticos dificulta el ejercicio del periodismo de investigación. [...]

--La situación económica de muchos periódicos no les permite darse el lujo de dedicar a un periodista, y menos a un grupo, a la tarea exclusiva de investigar para publicar sólo un artículo una o dos veces al mes. La falta de personal y el exceso de fuentes en manos de un reportero son las quejas más comunes de los editores. [...]

--Obtener acceso legalmente a los archivos del gobierno es casi siempre imposible. Una de las principales causas de este problema es que muchos gobiernos han desconocido la reglamentación del derecho de petición, consagrado en casi todas las constituciones de América Latina. [...] --Algunos periodistas latinoamericanos trabajan para la prensa y al mismo tiempo reciben honorarios o estipendios de una entidad del gobierno.

Estoy convencido de que los grupos de trabajo dedicados exclusivamente a la investigación, sin la premura de las horas de cierre, desarrollan su labor más profesionalmente que quienes trabajan en forma individual y bajo la presión de la entrega del material.

Organizar un equipo de investigación sólo requiere la voluntad de hacerlo. No se necesita, como piensan algunos periodistas, una "cultura de periodismo investigativo". Lo demás viene por añadidura.

La oficina de un periodista investigador debe contar con una biblioteca básica con las siguientes publicaciones:

Legislación: Constitución Política, código sustantivo y de procedimiento civil, penal, laboral y comercial; legislación sobre contratación pública (licitaciones, concesiones, subastas, etcétera); decretos de reglamentación de los actos de los funcionarios públicos, sus inhabilidades e impedimentos; fallos de la Corte y los tribunales administrativos, memorandos y circulares relacionados con la función pública; leyes sobre injuria y calumnia.

Directorios: además de las listas telefónicas comunes, es conveniente tener a mano directorios de despachos públicos y otros especializados por profesiones y ocupaciones. Si es posible, una buena colección de manuales de "¿Quién es quién?" en la política, en

la industria, en el comercio o en el deporte. Conserve los directorios viejos, porque resultan de gran ayuda.

Diccionarios: especialmente los de términos jurídicos y técnicos.

Suscripciones: diarios regionales, diarios oficiales, publicaciones periódicas del congreso, las fuerzas armadas y el poder judicial; publicaciones especializadas de gremios, asociaciones y fundaciones; libros y boletines de estadísticas.

Cualidades del periodista

Cualquiera que sea su situación, es muy importante que tenga muy en cuenta los siguientes aspectos de su preparación profesional:

--Usted debe estar familiarizado con la estructura del Estado y conocer la naturaleza jurídica de las diversas entidades del gobierno nacional, provincial o regional, así como la jerarquía de los actos de la administración (resoluciones, decretos, ordenanzas, etcétera). [...]

--Debe tener un conocimiento general de las normas que regulan los conflictos de intereses de los empleados públicos; los impedimentos legales, incompatibles e inhabilidades para ejercer sus cargos y para contratar con el Estado. Familiarizarse con el marco legal del tema que usted está trabajando toma su tiempo, pues existen muchas leyes que continuamente son reformadas o derogadas sin que trasciendan a la opinión pública. [...]

--Debe tener conocimiento de los antecedentes históricos de los grandes escándalos de corrupción que han sacudido a su país.

--Debe conocer los estatutos sobre contratación de la nación con los particulares; cómo funciona una licitación pública y privada, y cómo se resuelven las disputas entre los particulares y el gobierno.

--Debe estar al tanto de los estudios hechos por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, conocidas también como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre derechos humanos, crisis y tendencias sociales.

-Es muy importante también tener idea de la legislación penal, especialmente en lo que se refiere a delitos contra la administración pública tales como peculado, cohecho (soborno), prevaricato, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Es indispensable, además, conocer las normas sobre tráfico de drogas y lavado de dinero.

--Debe tener una idea general de cómo funciona la economía de su país; los sectores informales, las economías subterráneas, la inversión extranjera.

--Debe dominar las normas de derecho de acceso a los documentos públicos y estar al día en la jurisprudencia y en los conceptos relacionados con el tema.

--Debe saber cómo funciona el Congreso, el trámite de las leyes y tener una comprensión general de las leyes del presupuesto. Pero más allá de los conocimientos científicos o técnicos, el periodista debe tener una firme convicción de lo que es justo y honesto. Tan firme como su capacidad para indignarse por las cosas que no funcionan y que se aceptan con resignación por el resto de la gente como parte de su vida. Debe ser un profesional independiente de sus fuentes y de las personas que investiga, y no puede dejarse influir en su trabajo por el disgusto que producen quienes le mienten o tratan de ocultar la información que los compromete. El periodista debe tener la suficiente madurez para suspender sus averiguaciones cuando los documentos o los testimonios no justifican su publicación. Debe aprender a escuchar y a ponerse en el lugar de quienes aparecen comprometidos en sus denuncias, "y preguntarse a sí mismo si ha sido justo en el trato con sus fuentes confidenciales, sus fuentes públicas, y con las personas que han sido objeto de su arriesgada investigación", dice Mollenhoff. Pero sobre todo debe tener el coraje -agrega el periodista- de admitir que estuvo errado en hechos o perspectivas y dar los pasos necesarios para corregir el error.

Buscar los temas

Un proyecto de investigación nace básicamente de dos maneras: de la observación del periodista y de las pistas entregadas por quienes tienen un interés personal o cívico en revelar una información. Caminar por las calles de la ciudad, conversar con choferes de taxis, escuchar las quejas de los vecinos y hablar con amigos y familiares, son una forma cotidiana de ejercitar su curiosidad de reportero investigador. En esta atmósfera coloquial usted siempre encontrará víctimas y rumores; siempre habrá alguien que quiere denunciar una injusticia; alguien que conoce a otra persona que está dispuesta a desahogar sus resentimientos; alguien que pese a su modesta posición en una empresa o una oficina pública, ofrece acceso a información imposible de obtener por otras vías; alguien que se arriesga a revelar todo lo que sabe sin importarle mucho su vida o su trabajo, o alguien que involuntariamente deja escapar una infidencia o la relata sólo por alardear lo mucho que sabe. Ahí, en ese mundo desprevenido de las reuniones familiares, de los cocteles y las fiestas, el periodista desarrolla la fructífera manía de parar la oreja, de preguntar sistemáticamente, pedir teléfonos, direcciones y tarjetas de negocios para empezar a hilvanar una hipótesis.

Detrás de las noticias, de los comunicados de prensa, de la publicidad y los clasificados; en las cartas de los lectores al director, en los buzones de ayuda al ciudadano, en los obituarios y en las páginas de sociales, están a la vista miles de ideas para comenzar grandes proyectos. Lo mismo puede decirse de la información entre líneas que ofrecen las publicaciones especializadas y los periódicos tan densos y aburridos como los diarios oficiales, los anales del congreso y otras gacetas gubernamentales. En esos tediosos avisos de prensa pagados por ciudadanos solitarios, sindicatos o asociaciones que se dirigen al Presidente de la República o a la opinión pública en general para exponer sus quejas, hay también mucha tela de dónde cortar.

Hay una regla que el periodista investigador debe recordar cuando tiene en la mira un tema de investigación, y es que la popularidad, la filantropía y la tradición no son

garantías de honestidad y eficiencia. Lo digo porque en nuestras sociedades existen personajes que han sido elevados a la categoría de patrimonio moral del país gracias a sus grandes obras o a sus aportes a la historia del pensamiento nacional, pero no necesariamente por un currículum impecable. Algo parecido ocurre con algunas instituciones, cuyo grado de inmunidad se deriva, generalmente, de que siempre han estado presentes en la vida nacional y han hecho un gran esfuerzo por el desarrollo y el bienestar del país. El halo de respeto y celebridad que rodea a estas personas e instituciones hace que el reportero se sienta intimidado de cuestionar lo que siempre se ha tenido como una verdad incólume. Pero algunas veces estas cualidades son meros espejismos.

Acceso a información

Casi todos los reporteros latinoamericanos que he entrevistado, sostienen que cuando analizan la factibilidad de un tema su primera preocupación son las vías de acceso a la información. [...] La experiencia me alienta a sugerir que vale la pena hacer el intento de obtener la información por las vías legales. Aprendimos que después de tanto insistir y batallar, los funcionarios públicos ceden un poco y algunos aprenden la lección de que el sigilo trae más problemas que la apertura. Para dar esta batalla, ante todo es importante tomarse el trabajo de conocer las normas que protegen el derecho de acceso a los documentos que reposan en las oficinas públicas.

Si usted no tiene acceso a un documento en una oficina, recuerde que en el mundo de la burocracia casi todo tiene fotocopia; contratos, órdenes de pago, actas, currículos, memorandos y expedientes administrativos, todos estos documentos pasan de mano en mano con una larga lista de los funcionarios que deben guardar una copia. Algunos de los papeles quedan archivados bajo un mismo cofre oficial, pero muchos tienen sus gemelos en otras dependencias del gobierno donde probablemente haya una fuente amistosa dispuesta a entregarlos.

**

Gran parte de los esfuerzos que han hecho hasta ahora los periodistas investigadores se han concentrado en documentar las diversas formas de complicidad de sectores de la sociedad con las organizaciones del narcotráfico. Los nexos entre el narcotráfico y los partidos políticos, el gobierno, las fuerzas militares y de policía, el sistema judicial, la Iglesia, la banca, la industria y el deporte, son temas reiterados en los últimos 10 años de periodismo en países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Panamá. Demostrar estos vínculos es la tarea más delicada del periodismo de investigación, pues en materia de narcotráfico usted está casi siempre supeditado al testimonio de cualquiera de los involucrados en el problema.

Fuentes documentales

Una vez aprobado el proyecto de investigación por usted y sus editores, evaluados los riesgos y discutidas las probabilidades de que el esfuerzo no será en vano, el siguiente paso es la esencia de su trabajo: hay que empezar a indagar. [...] La meta de esta etapa del proceso investigativo es familiarizarse con el tema a través de la consulta de fuentes

y documentos. Es el momento de empezar a escuchar infidentes y expertos; de mirar archivos y sumergirse en el mundillo que está en su mira para aprender su jerga, sus normas y sus mañas. Después de varios días de buscar información que a primera vista parece muy confusa e infranqueable, usted comienza a dominar las reglas del juego y a perder el temor a las honduras. Este proceso se perfecciona a través de la consulta de fuentes documentales y personales.

La fuente primaria de documentación está a pocos pasos de su escritorio: es el archivo del periódico. [...] La tarea de desempolvar y abrir recortes amarillentos y cuarteados no debe hacerse con la idea de buscar exclusivamente aquello que puede servir para la publicación de su informe. El objetivo es, más bien, tener una perspectiva histórica del tema y conocer a sus protagonistas. En este sentido, los archivos físicos resultan más ilustrativos que los electrónicos.

Sostiene Don Ray, un periodista investigador de California premiado por su labor, que todas sus pesquisas de individuos empiezan por el directorio telefónico.

En casi todos los países latinoamericanos existe la posibilidad de establecer conexiones con las grandes redes de información electrónica (*networks*) que funcionan en el mundo.

Las redes disponibles contienen gigantescos bancos de datos con información especializada en todos los campos, así como el archivo electrónico de los periódicos más importantes de todo el mundo.

Los registros mercantiles tal vez sean los documentos más consultados por los periodistas de investigación. Cuando se trata de determinar la participación accionaria de una persona en una empresa, el capital de una sociedad, su fecha de creación o sus funciones, éstos son los archivos de consulta primaria.

En muchos de nuestros países, las escrituras notariales son públicas y pueden ser consultadas por cualquier persona. Resultan de gran utilidad para conocer aspectos concernientes a contratos o promesas de contratos de compraventa; actas de bautismo; arreglos arbitrales; registro de sociedades (especialmente familiares). Si aquí no tiene suerte, puede intentar en los registros catastrales, que son enormes listas que lleva el gobierno (casi siempre electrónicamente) de las propiedades urbanas y rurales y que contienen la siguiente información: identificación catastral, transacciones que se han hecho sobre la propiedad y gravámenes como hipotecas o embargos. Aunque el acceso a los archivos de las cédulas, tarjetas de identidad o de votación es cada vez más

restringido, trate de mantener un buen contacto en las registradurías, pues los datos que los ciudadanos consignán en estos documentos son fundamentales para conocer la información básica del individuo que usted busca.

Fuentes hemerográficas

Los diarios o gacetas oficiales publican el texto de las leyes, los decretos y diferentes actos administrativos. En algunos países es obligatoria la publicación en estos periódicos del texto completo de los contratos de la nación con los particulares, como condición para la validez de estos actos. Es la fuente más confiable para consultar el contenido exacto de disposiciones del gobierno.

Cada profesión y oficio tiene un órgano de difusión. Los médicos y los zapateros, los abogados y los estibadores, los economistas y los aviadores, todos publican boletines y periódicos que contienen gran cantidad de información práctica para el periodista que procura familiarizarse con un tema. Muchas de esas publicaciones terminan en el cesto de la basura sin ser leídas. Aunque la idea no es coleccionarlas, el reportero investigador debe ojearlas de vez en cuando, saber al menos que existen, y si es posible tener en su lista telefónica el nombre del editor y la dirección donde puede consultar la colección.

Los siguientes son ejemplos de algunas publicaciones de utilidad:

1. Folletos y boletines de los bancos que contienen el balance general de la institución, nuevas inversiones y transacciones, la lista de sus directivos, ascensos y retiros.
2. Publicaciones periódicas de las fuerzas militares, que son de gran ayuda para los reporteros interesados en investigar sus crisis internas, cambios en los mandos altos y medios, adquisiciones de armamento y municiones.
3. Por curiosidad, tome el directorio de su ciudad y vaya a la página de asociaciones y fundaciones. Con seguridad allí encontrará nombres de instituciones y centros de investigación que usted no sabía que existían. En los archivos de estas instituciones reposan numerosos estudios con valiosa información sobre los llamados *temas sociales*, como derechos humanos, medio ambiente, abuso de la niñez, prostitución, drogadicción, vivienda marginal, a reforma agraria, que resultan de gran utilidad para reforzar o contextualizar sus artículos de investigación. [...]
4. Periódicos parroquiales y boletines de grupos religiosos.
5. Anuarios escolares y universitarios. [...] Estos libros son de gran ayuda para preparar una semblanza investigativa de algún personaje.
6. Registros de importación y exportación. En la oficina del gobierno que maneja el comercio exterior, reposan unos cartapacios gigantescos que contienen exquisita información acerca de las exportaciones e importaciones del país.

Fuentes personales

En el origen de los grandes y pequeños escándalos, hay casi siempre personas malheridas y sectores en pugna que buscan desprestigiarse entre sí, pero, insisto, eso no debe ser un impedimento moral para el periodista. Generalmente el reportero tiene que lidiar con dos tipos de informantes: el que entrega la información básica desde un principio y se retira o el que la suelta poco a poco y a medida que el reportero investiga. [...] Pero hay otros informantes con quienes hay que tener más cuidado, que dosifican sus datos ya sea para mantener el interés del periodista o para tener el control de la investigación. Cualquiera que sea el estilo, especialmente si usted trabaja con informantes dosificadores, lo primero que debe averiguar es quién es, qué intereses tiene y cuáles son las probabilidades de que usted sea un instrumento de sus artimañas.

Es importante señalar las diferencias entre informantes y fuentes. Mientras un informante es alguien en quien usted confía con beneficio de inventario y quizá por una sola vez, la fuente es una persona independiente y confiable que está dispuesta a dar su opinión cada vez que usted entra en el campo que ella domina. Una buena fuente no habla de lo que no sabe ni toma partido; es discreta y mantiene en secreto sus conversaciones con el reportero.

Aparentemente, el público parece más inclinado a creer en los documentos que en los testimonios.

La prueba de fuego

Muchas informaciones erradas que aparecen en los medios de comunicación de nuestros países son producto de no someter el material al más mínimo proceso de verificación. Sin la comprobación de la información, el papel de los periodistas se reduce al de simples traductores simultáneos de datos sobre los cuales no tienen absoluta certeza. El sentido del periodismo investigativo y, por supuesto, el de cualquier disciplina periodística responsable, va en dirección contraria a esa práctica. Usted debe confirmar la información no una, sino todas las veces posibles. Y la prueba de fuego de una investigación periodística, que es de por sí un proceso de continua verificación, es la entrevista con aquellas personas que tienen una cuota de responsabilidad en los hechos. Paul Williams la llama *entrevista clave*.

Usted debe llegar a la entrevista con la idea de que además de cumplir con un principio de equidad, como es el de escuchar a la contraparte, ésta es la gran oportunidad para probar la veracidad de sus fuentes y la autenticidad de sus documentos. [...] Pero no se decepcione, no todo está perdido. Si el entrevistado desvirtúa sus sospechas, la información obtenida hasta ese momento servirá algún día para otros casos. Lo que debe evitar a toda costa es tratar de publicar su trabajo sólo para justificar el tiempo invertido.

La redacción

Redactar informes de investigación exige una mentalidad de destilador, la búsqueda de un método que permita al periodista prescindir de los elementos volátiles y quedarse con los hechos sólidos que sustentan sus hallazgos. [...] Antes de sentarse a escribir, el periodista debe tener en claro lo que quiere denunciar.

Jack Driscoll, periodista del *Boston Globe*, sugiere escribir esta primera versión del artículo sin tener en cuenta apuntes ni documentos de apoyo. "Ponga las notas en una gaveta", dice, "y trate de escribir la historia a partir de lo que tenga en su cabeza, como si estuviera tratando de contársela a su esposa o su esposo. Después, vuelva a los apuntes y escriba los detalles específicos". Este método, dice Driscoll, permite al periodista liberarse del complejo de ser una simple "correa de transmisión" entre sus fuentes y el lector, una falla muy común en los informes investigativos. [...]

No hay un método que me dé más seguridad para tener una visión íntegra del material, llegar a una conclusión final, y a partir de ella construir la estructura del informe, que elaborar una cronología definitiva, sobre todos los hechos motivos de la investigación.

En esta etapa de la investigación, cuando usted se siente confiado de sentarse a escribir, recomienda Williams, debe tener resueltas las siguientes preguntas: de qué trata la historia, a quién le importa y por qué le interesa a la audiencia. Las respuestas darán el tono a su redacción y le permitirán tener una idea del perfil de su lector mientras escribe.

En periodismo sólo hay dos maneras de empezar a contar una historia: directamente o en forma anecdótica, y la redacción de informes investigativos no escapa a esta realidad.

Apóyese en estadísticas y expertos, que le ayuden a delimitar con precisión el alcance del problema descrito y su marco histórico. Si no tiene una forma de calcular la periodicidad o extensión de las irregularidades, no se aventure a hacer proyecciones. Recuerde que el periodismo de investigación no sólo sirve para prender alarmas, sino también para declararlas falsas. Los lectores aprecian mucho esos artículos en que una crisis se pone en su justo contexto.

Seguimiento y realidades

Su trabajo no termina con el punto final del reportaje. A partir de ese momento empieza una labor tensa e incómoda que consiste en capotear la embestida de quienes aparecen comprometidos en sus artículos. Prepárese para afrontar diferentes reacciones. [...] Tenga calma. No responda de inmediato y trate de eludir entrevistas con los medios de comunicación.

Por lo regular los periodistas, fatigados con el trabajo monotemático de varios días o semanas, quieren empezar una nueva investigación y olvidarse de la anterior. Error grave. Para los lectores son tan importantes la primera información como las noticias sobre sus consecuencias. Ellos quieren saber si el gobierno tomó cartas en el asunto, si los involucrados fueron sancionados y, en general, si alguna autoridad avaló el trabajo periodístico. La falta de seguimiento crea una imagen a los periodistas de dinamiteros que explotan escándalos a granel y a la hora de medir los resultados, se retiran para detonar otra explosión.

El periodista colombiano Roberto Pombo sostenía que el periodismo de investigación sólo se justifica en una sociedad donde el sistema de justicia funcione, pues de nada vale poner en entredicho la conducta de alguien, si los juzgados están atiborrados con miles de procesos y no tienen tiempo para hacer justicia ni honestidad para aplicarla. El argumento puede servir, sin embargo, para probar lo contrario, y es que, en países donde la justicia cojea o en la práctica no existe, una de las pocas formas que tienen los ciudadanos de enterarse -y prevenirse- de muchas formas de la fraudulencia, es a través de los medios de comunicación. Diarios como *Página 12* de Argentina y *El Espectador* de Colombia y revistas como *Proceso* de México y *Caretas* de Perú, que han sacado a la superficie escandalosos fraudes que la justicia de esos países nunca hubiera tocado, pueden dar testimonio de que el periodismo de investigación tiene una sana utilidad en sociedades donde la impunidad es la regla y la ley es la excepción.

© *Sala de Prensa 1997 - 2008*

Diferencias en el periodismo de investigación en Estados Unidos y Latinoamérica

Gerardo Albarrán de Alba

I

El calor de la playa Coronado, en la costa occidental de Panamá, ayudó a encender la discusión. Gustavo Gorriti y Andrés Oppenheimer se habían estancado en la que parecía la mayor diferencia en el periodismo de investigación que ambos practican. El fondo de la discrepancia era la pertinencia de realizar la famosa entrevista a la contraparte, al objeto mismo de nuestra investigación, antes de publicar nuestro reportaje.

Oppenheimer, reportero argentino que trabaja para *The Miami Herald*, alegaba: "Yo duermo tranquilo todas las noches porque nunca dejo de entrevistar a la contraparte... y así evito cualquier posibilidad de pleito con sus abogados". Gorriti, periodista peruano que en ese entonces –1998– era director asociado de *La Prensa* de Panamá, gesticulaba en desaprobación. "No es cuestión de equilibrio informativo, es que simplemente eso puede conducir al fracaso de la investigación al poner en alerta al personaje o al grupo de interés investigado. Acá no conviene hacer eso".

Frente a ellos, escuchábamos periodistas de México, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El consenso entre ambos reporteros parecía imposible. Y de hecho, lo era.

No pude evitar intervenir en ese debate: "Andrés, ¿en verdad no distingues la diferencia que te plantea Gustavo? Tú duermes tranquilo al entrevistar a la contraparte porque no serás demandado. Gustavo suele evitar la entrevista con la contraparte para no sabotearse a sí mismo. La diferencia está en que, mientras tú, en Estados Unidos, vives bajo la mira de los abogados, el resto de nosotros, en Latinoamérica, vive bajo la mira de un AK-47".

Esto no zanjó del todo la discusión, pero al menos ayudó a centrarla en las diferencias de fondo, y ya no en las filigranas de forma, que distinguen al periodismo de investigación que se practica en Estados Unidos (o en casi todo Europa), con el que hacemos en cualquier país latinoamericano (o en buena parte de Asia y África).

La paradoja de la discrepancia entre Gorriti y Oppenheimer es que ambos tienen razón.

II

Práctica en la que los pocos textos que hay no se ponen de acuerdo en su fecha de nacimiento, pero al menos sí en el lugar donde se desarrolló, el periodismo de investigación encuentra antecedentes claros a finales del siglo pasado en el periodismo militante de Estados Unidos, ligados a movimientos laboristas y acunado entre escritores e intelectuales de izquierda radicados en ese país.

Pese a que lo mismo podríamos decir de ejemplos claros de una suerte de protoperiodismo de investigación en Europa, e incluso en varios países latinoamericanos (aunque mucho más recientes), es en Estados Unidos donde el periodismo de investigación ganó carta de naturalización, popularizado incluso por el cine.

Tratada como disciplina, desde hace décadas, en buena parte de las universidades estadounidenses donde se enseña periodismo, esta especialidad –si así quisiéramos llamarle– ha ganado presencia en los diarios y revistas latinoamericanos en los últimos 20 años, aunque ni de lejos es todavía una práctica constante y generalizada, por más que existan medios que desde hace lustros mantienen equipos "especiales" de reporteros para este fin. Ni qué decir de las universidades en nuestros países; son muy pocas las que han incorporado estas técnicas en la matrícula de las carreras de Periodismo y aun menos en las de Comunicación.

No extraña entonces que el periodismo de investigación estadounidense esté sólidamente acreditado y reúna a cientos de periodistas en asociaciones como Investigative Reporters and Editors (IRE).

Una primera diferencia es esa: La expansión del periodismo de investigación estadounidense, en las últimas tres décadas, surge de las aulas, donde reporteros como Philip Meyer y Steve Weinberg (por citar a los más conocidos) han contribuido a desarrollar metodologías bien acabadas desde su práctica académica. Libros en castellano que hagan un verdadero aporte (como el de José Luis Dader o el de Pepe Rodríguez, por seguir con nombres que nos son comunes), son más bien escasos. Y como son ediciones de autores españoles, tampoco corresponden a la realidad latinoamericana. Otros libros, como el del reportero colombiano Gerardo Reyes, aún no trascienden el mero enunciado de lo que se supone debería de ser el periodismo de investigación, y se mantienen más cercanos al anecdotario personal, si bien útil, también limitado y sin ninguna sistematización metodológica.

En tanto, el periodismo de investigación latinoamericano sigue nutriéndose del trabajo en solitario de reporteros ejemplares como los argentinos Rodolfo Walsh y Horacio Verbitsky, o el peruano Gustavo Gorriti, o el mexicano Manuel Buendía, por citar nuevamente ejemplos por todos conocidos.

Y en estos últimos nombres está la diferencia de fondo, planteada en aquella discusión escuchada en Panamá: Walsh fue desaparecido en 1977 por la dictadura militar argentina y Buendía fue asesinado en 1984 por un policía; Verbitsky y Gorriti debieron padecer el exilio para salvar la vida. Salvo el reportero Don Bolles (*The Arizona Republic*), asesinado en 1976 cuando investigaba nexos del gobierno local con el crimen organizado, no tengo noticia de otro reportero estadounidense que comparta la suerte de cualquiera de los 17 periodistas latinoamericanos asesinados solamente entre 1999 y mayo de 2001: nueve en Colombia, tres en México y uno: Argentina, Brasil, Guatemala, Haití y Uruguay.

Ahí, otra diferencia. Al menos el asesinato de Bolles en Estados Unidos sirvió para activar a IRE, una organización profesional ya desde entonces sólida, pero con modesta presencia incluso gremial. Una parte de los miembros de IRE decidió terminar el trabajo de

investigación que realizaba su colega muerto: periodistas voluntarios de 10 medios publicados en diversas regiones estadounidenses trabajaron durante cinco meses en Arizona y publicaron un reportaje en 23 partes. (Probablemente IRE sería ahora una organización mucho más consolidada si hubiera hecho lo mismo con los asesinatos de otros 10 periodistas ocurridos en Estados Unidos de 1976 a la fecha... pero ocurre que todos estos eran periodistas inmigrantes y la prensa estadounidense, en general, prestó poca o nula atención a estos casos.)

Al señalar esta diferencia no pretendo insinuar que la muerte de decenas de periodistas latinoamericanos haya sido en vano: en muchos casos sirvieron para sacudir conciencias sociales adormiladas ante regímenes autoritarios o de plano sometidas por las dictaduras militares. Y eso es mucho, considerando el costo. Lo que sí se ha desperdiciado es la posibilidad de desarrollar una conciencia gremial que nos solidarice no sólo en el discurso, sino que además aliente prácticas periodísticas mucho más profesionales, mucho más rigurosas, mucho más comprometidas con la sociedad y mucho menos dependientes de intereses extraperiodísticos.

III

El periodismo de investigación latinoamericano enfrenta obstáculos que nuestros colegas en democracias desarrolladas desconocen o superaron hace tiempo.

Sin leyes de acceso a la información que debería ser pública, el periodismo de investigación latinoamericano ha echado mano de recursos incluso heterodoxos para develar casos de corrupción y nexos ilegales o ilegítimos entre diversas esferas de poder político y económico. En regímenes donde el secreto es norma, incluso ante asuntos baladíos, el rumor y la filtración nutren buena parte del periodismo de la región. Esta práctica socava al buen periodismo, pues por cada rumor que se confirma (siempre en el futuro) y por cada filtración verificada (siempre por los afectados), abundan los desmentidos ante la imprecisión e incluso las falsedades que se difunden a través nuestro.

La víctima aparente es el eventual calumniado; la víctima inmediata es el periodismo, que sufre descrédito; la víctima real es la sociedad, que pierde un importante contrapeso de la democracia.

El periodista latinoamericano ni siquiera está exento de los mismos riesgos jurídicos que enfrentan sus colegas estadounidenses o europeos: nuestras legislaciones también sancionan calumnia y difamación por la vía civil, pero también por la vía penal. Peor aún, nuestras leyes, códigos, reglamentos y decretos incluyen figuras represivas como delitos de prensa, como la restricción profesional (mediante la colegiación obligatoria), la suspensión de licencia, el desacato, el arresto domiciliario y hasta la censura legal.

Esto sería suficiente motivo de preocupación, si nuestras cuitas profesionales se constriñeran al ámbito jurídico (las leyes siempre son perfectibles, que para ello la democracia política está dotada de mecanismos de autocorrección, sin contar con que la ética periodística nos previene contra nuestros propios excesos, mismos que eventualmente no deberían permanecer impunes). Lo grave es que, además, los periodistas

latinoamericanos estamos sometidos a las presiones de grupos de poder que suelen manifestarse de forma violenta mediante amenazas, secuestros, atentados y asesinatos.

La práctica de la autocensura entre los periodistas latinoamericanos, con más frecuencia de lo que se cree, es consecuencia directa de riesgos personales. En cambio, el periodista estadounidense, particularmente, practica la autocensura para no poner en riesgo su salario, sometido como está a los intereses extraperiodísticos de los corporativos transnacionales que han tomado el control de los medios para los cuales trabajan muchos de ellos, o para que el dueño no los despidan por perder un contrato publicitario a causa de una nota, o simplemente para no poner en riesgo de demanda civil a la empresa que le paga. A veces, la autocensura del periodista estadounidense también obedece a posturas ideológicas en las que son socialmente imbuidos, trampa cultural para reforzar los valores propios mediante la negación del otro.

La industria periodística estadounidense no es todo lo independiente que su propaganda nos quiere hacer creer. Ni de lejos. Simplemente tiene un margen de maniobra mucho más amplio.

La diferencia, en fin, entre el periodismo de investigación latinoamericano y el periodismo de investigación estadounidense son las realidades sociales, políticas y culturales de nuestra región, que distan mucho de los valores hegemónicos que pretende imponer Estados Unidos, embozados en un modelo de democracia occidental.

Del mismo modo en que nuestros países se ensayan variantes de democracia acordes con nuestras raíces culturales (eso que algunos llaman idiosincrasia), así también los periodistas latinoamericanos tendremos que elaborar nuestros propios modelos de periodismo de investigación, plenamente correspondientes con nuestras realidades particulares, de suyo dramáticas, y con nuestros obstáculos frecuentemente comunes.

De nada nos sirve importar metodologías que son exitosas en los países donde fueron diseñadas, pero que fracasan en nuestra región al no encontrar las condiciones jurídicas y políticas elementales sobre las que descansa su viabilidad.

La opción es adaptar lo mucho de eficaz que sí tienen aquellas metodologías, aunque para ello primero debemos transformar nuestra propia actitud frente a la información. Si las fuentes "oficiales" se cierran, hay que abrirlas con nuestro trabajo como reporteros.

Siempre será ideal obtener documentos que confirmen nuestra información, pero nuestro objeto de investigación no son los documentos, son las personas que los elaboran, son las personas a las que se refieren. Nuestro objeto de investigación es la realidad... y la realidad no es abstracta; tiene nombres, apellidos, direcciones, biografías... Pero, sobre todo, la realidad es medible. No es tarea fácil, por supuesto; requiere de conocimientos y habilidades que no se enseñan en las escuelas de periodismo de nuestros países, pero que se pueden adquirir de forma autodidacta, si se quiere, o, mejor aún, mediante la dirección de colegas que practican un periodismo mucho más riguroso, aplicando metodologías de investigación más cercanas a la sociología que al propio periodismo.

Algo de esto intentan aportar organizaciones profesionales como saladeprensa.org y el Centro de Periodistas de Investigación (México), el Centro Latinoamericano de Periodistas (Panamá) y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia). Lo mismo hacemos un grupo de reporteros mexicanos que impartimos el Curso de Posgrado en Periodismo de Investigación en la Universidad Iberoamericana, y por el cual ya han pasado más de 150 colegas de una decena de ciudades mexicanas, en los últimos dos años.

Capacitarse en el uso de nuevas herramientas, tecnologías y metodologías requiere disposición y esfuerzo, pero, en cualquier caso, es aún más difícil abrir fuentes a golpe de periodicazos.

Gerardo Albarrán de Alba es coordinador de Proyectos Especiales de la revista mexicana Proceso, director de Sala de Prensa y coordinador académico del Curso de Posgrado en Periodismo de Investigación y profesor de Taller de Periodismo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Dale vuelta a la cobertura

Por Diana K. Sugg

Reportera de salud del *The Baltimore Sun* y ganadora del Premio Pulitzer.

Si usted es un reportero con un área asignada, ya sabe lo que va a encontrar en su escritorio cada mañana: Su correo de voz se atora con 14 mensajes. El correo se apila. Los faxes cubren su silla. Y en media hora usted echará a un lado lo que había planeado para lidiar con la crisis del día.

En mi caso, ésa puede ser un estudio del Centro de Estados Unidos Para el Control y Prevención de Enfermedades que nombra a Baltimore como la ciudad No. 1 en la nación en casos de sífilis, o un estudio del hospital Hopkins sobre el asma publicado en un boletín de la Asociación Médica Americana, o el hombre en el vestíbulo del periódico que dice que en el hospicio de su madre le han quitado las campanillas a los pacientes, así que no pueden llamar por ayuda.

Para cuando llegue la hora de almuerzo, descubriré que mil pediatras vienen a Baltimore a una convención. Mi editor está agitado llamándome a su oficina. Y estoy tratando de oír a una mujer que susurra en el teléfono. Ella es una paciente en la unidad de SIDA de un hospital local y un enfermero acaba de violarla.

Usted es un reportero de cobertura asignada. Y usted es el equivalente periodístico del cuarto de emergencias. Tiene demasiados reportajes que hacer y muy poco tiempo. Yo no soy experta, sino un colega que ha cubierto fuentes asignadas por 13 años. Como usted, he tenido rachas de grandes reportajes, esos días cuando los artículos buenos vienen uno tras otro, maduritos y listos para la primera plana. Pero también he tenido días en que he escrito dos notas de rutina y tres breves, y llego a la casa con hambre y frustrada, quemada por los reportes, que acabé sintiéndome culpable por los que no logre acomodar en el día.

Como usted, tengo mi lista de reportajes grandes que me interesan de verdad, los que planeo hacer una vez que las cosas se calmen un poco. A veces veo señales tenues de que soy realmente buena. Pero también miro mis escritos a veces y pienso que son basura. Siento el agobio del material con el que estoy tratando, y me pregunto si estoy tratando a mi fuente con justicia.

Yo me convertí en una periodista de área asignada por accidente. Recién salida de la universidad, trabajé para la Associated Press en Philadelphia y después para el *Herald-Journal* de Spartanburg en Carolina del Sur. Cuando fui a California para trabajar como reportera general en *The Sacramento Bee*, me informaron mi primer día en el trabajo que más bien trabajaría cubriendo noticias policiales en la noche. Me desilusioné. No quería ser periodista con área asignada. Recuerdo pensar: No sé cómo hacer este trabajo.

No me tomó mucho tiempo aprenderme de memoria los números de la policía y convertirme en una máquina para producir artículos. Pero me ha tomado años ver las lecciones de esa experiencia. Y eso es lo que quiero discutir: cómo manejar un área.

Cuando se tiene una asignada, usted no es como otros reporteros, que se concentran en un reportaje a la vez. El reportero con fuentes es un chef creando una comida francesa de cinco platos. Usted es un campesino cultivando en varios campos. Usted es el director de orquesta conduciendo su propia sinfonía. Por cada artículo que escribe, hay otros cinco que está siguiendo, 10 llamadas interesantes y hasta 20 otras ideas que usted tuvo que dejar ir.

Una gran parte del trabajo del buen reportero no aparece en el periódico. El trabajo no es solo hacer los reportajes, sino todo lo que gira a su alrededor: cómo usted maneja su tiempo, desarrolla las fuentes, balancea notas de rutina y reportajes largos, y como lidia con sus editores, su propio perfeccionismo y algunos asuntos delicados con sus colegas, como la práctica de algunos de meterse en las fuentes de otros para robarse los reportajes más interesantes.

La manera en que usted logre manejar estos cinco elementos es un factor crucial en su éxito.

Número Uno: Tiempo

Este es quizás su reto más grande.

Usted nunca tiene suficiente tiempo. Siempre hay otra llamada, otro boletín médico, otra reunión del Consejo Municipal. Cuando uno comienza a cubrir un área, es bueno todo esto.

Vaya a tantas reuniones como pueda, lea tanto como pueda, y trate de conocer a cuanta gente pueda. Cada reportaje le conducirá a dos más y le ayudará a cultivar fuentes. Reporteando también le ayudará a construir su credibilidad y desarrollar la habilidad de escribir sobre su área. Incluso las notas de las que usted se queja, casi siempre le enseñarán algo nuevo.

En muchas formas, el gran volumen de trabajo es una bendición. Durante los días feriados o en esas semanas lentas, cuando otros reporteros están luchando por encontrar algo interesante, usted puede escoger entre muchos temas. De hecho, cuando usted es reportero con área asignada, el reino del periodismo está a sus pies: artículos investigativos, reportajes creativos, perfiles, notas de análisis. Usted puede escoger.

Pero trabajar duro por mucho tiempo también lo puede quemar. Cuando estaba en el *Sacramento Bee*, recuerdo sentirme tan ocupada que no podía salir de la redacción y subir un piso a la cafetería. Vivía a dieta de Coca Colas y Snickers. Cargaba el radio para escuchar las frecuencias de la policía hasta en el baño. Incluso me tuvieron que llevar a la unidad cardíaca dos veces.

Y si usted mantiene un ritmo frenético a toda hora, nunca se liberará para hacer los grandes reportajes que todo mundo recordará. Usted es un campesino, pero siempre es bueno dejar un campo sin cultivar. Lo que un editor suprime en un reportaje es a veces tan importante como lo que él o ella dejan intacto. Igual para usted: lo que usted decide ignorar es tan importante como las historias que cubre. Elegir entre una u otra son algunas de las decisiones más difíciles, pero ayuda tener una visión de su fuente. Como reportero de la

salud en Sacramento, yo me concentré en los cambios que estaban sacudiendo el sistema de atención médica del país, y dejé ir muchas de las ideas que no estaban relacionadas con ese tema.

En otras palabras, usted debe tomar decisiones. Organícese, y sea despiadado. Usted tiene que aprender a revisar ese correo de voz y todas las ideas en su escritorio rápidamente, si no todo su tiempo para reportear se lo gastará en otras cosas. Puede que esto lo preocupe, pero usted tiene que entender que no logrará escribir sobre muchas cosas en su área. Esto no es como en la universidad o en otros trabajos que usted ha tenido, donde siempre logró acabar todo su trabajo. Este es un mundo nuevo, donde el reloj está en su contra. Su tiempo es limitado.

Número Dos: Las Fuentes

Cuando el gobierno federal suspendió estudios en humanos en el hospital Johns Hopkins hace varias semanas y a los empleados les prohibieron hablar con los medios, al otro reportero de la salud en el *Baltimore Sun*, Jonatan Bor, y a mí nos ayudó tener los nombres y los números de teléfono de las casas de los doctores que darían comentarios. Esos momentos vienen para cada periodista, y ocurren a menudo después de horas de oficina. Pero tenemos que recordar que las fuentes no son sólo para emergencias, o para los grandes reportajes de investigación.

Cada persona en el área que usted cubre es una fuente. Desde el director de salud hasta las secretarías, esta gente le mantiene al tanto de lo qué está pasando. Ellos le ayudarán a entender un estudio complicado. Ellos contestarán el teléfono en un día ocupado para darle un comentario. Trátelos bien. Manténganse en contacto con ellos. Busque a la gente a la que le gusta el chisme y los periódicos, los que le advertirán cuando un tema puede ser sólo una pérdida de tiempo. Yo recuerdo a un oficial de policía en Sacramento que circulaba en varias secciones del departamento. Él me contó sobre mordidas, muertes interesantes, y otras historias.

Pero cuando llegué a Sacramento, la situación con la fuente policial estaba bien difícil. Muchos de los oficiales veían al periódico como un papelucho liberal. No nos querían, y pensaban que nuestros artículos tenían muchos errores. Algunos oficiales me dijeron con orgullo que no habían leído el periódico desde los años 50. Mientras tanto, en la redacción me dijeron que el reportero policial de la noche básicamente hacía llamadas desde la oficina y escribía notas breves nada más. En otras palabras, mi trabajo sería monitorear la ciudad en la noche hasta que me asignaran un trabajo “de verdad”.

¿Qué haría usted?

Yo toqué a la puerta. Le pregunté al capitán de turno si podía hablar con él. La policía no estaba acostumbrada a ver periodistas en la noche. Ellos tenían sospechas y se quejaron del periódico. Yo le saque ventaja a eso, presentándome como una nueva reportera. Yo no tuve nada que ver con la cobertura previa. Yo quería ser justa y objetiva. Yo quería familiarizarme con ellos. Les pregunté qué historias nos habíamos perdido.

Esa primera noche, terminé cenando con el capitán de turno. En un corto plazo, comencé a llegar a las estaciones de policía. Gradualmente, pasé más y más tiempo allí, hasta que pasaba casi turnos enteros allí. Tomó meses. A los pocos policías que me hablaban los miraban con recelo. Algunos pasaron junto a mí y nunca me dijeron una palabra. Algunas noches pasé parada fuera de la estación, timbrando el intercomunicador, esperando que alguien me dejara entrar. Estaba oscuro y frío, pero no me fui. Calculé que algún policía pasaría cerca, que yo le daría lastima y me dejaría entrar.

Gradualmente, los detectives comenzaron a hablar conmigo en escenas del crimen. Sus declaraciones aparecieron en reportajes a como me las habían dado. Vieron que yo estaba dispuesta a escribir sobre lo bueno y lo malo. Comenzaron a decirme cosas por adelantado. Pronto, estaba intercambiando información con ellos, y me tomaban dentro de la escena del crimen para ver un cuerpo en estado de descomposición.

El regalo de la fuente asignada: acceso

Una vez que usted obtenga esa credibilidad y respeto, usted puede empezar a trabajar en los temas más grandes, los que nadie ha cubierto, los que todo mundo recordará. Éste es el regalo de tener un área asignada. Trabajando en un área por un largo tiempo, usted puede desarrollar bastante confianza para conseguir acceso especial. Después de un año en la fuente policial, por ejemplo, conseguí permiso para patrullar con los oficiales de la sección de antinarcóticos por tres meses. Y cuando "Hopkins 24/7", un documental de la ABC, tenía cerca de 25 productores filmando en cada unidad del hospital, yo estaba en el único lugar donde no los dejaron entrar: la unidad de sicología infantil.

Esta es una posición maravillosa. El acceso especial es el lugar donde no hay otros reporteros. Usted está en otro país, en un territorio inexplorado. Y usted puede llegar allí, si tiene paciencia. Una noche, ya casi a la hora de cierre, mi editora estaba leyendo una oración de mi reportaje. Decía que centenares de personas en el estado de Maryland todavía cuidaban a sus hijos lisiados que ahora eran personas adultas. Mi editora señaló la oración en la pantalla y me dijo, "vaya a encontrar a una de esas familias y escriba la historia de ellos". Tomó cuatro meses y docenas de llamadas para localizar a una familia que me dejara entrar, pero una vez que lo hicieron, el reportaje fue hermoso.

La gran cosa sobre estas historias es que usted puede trabajarlas mientras hace sus cosas de rutina. La primera regla es nunca aceptar un "no". No me importa cuál sea la barrera de peligro, la privacidad de un paciente, o el hecho que nunca han tenido a un reportero allí antes. No importa lo que sea, usted casi siempre puede encontrar una forma de trabajar alrededor del obstáculo. Usted sólo tiene que estar dispuesto a trabajar con las fuentes y a intentar cada ángulo.

Tome por ejemplo el reportaje que hice el año pasado en la sala pediátrica de emergencia en Hopkins. Recibí una llamada diciendo que los niños con problemas siquiátricos estaban agobiando al departamento de emergencias. Los números se estaban duplicando en Hopkins, en el centro médico de la Universidad de Maryland, y, a como averigüé, en hospitales a través del país. Residentes siquiátricos jóvenes estaban de turno toda la noche, tratando de manejar estos niños problemáticos. Sabía que la única manera de escribir eso

era conseguir acceso a la sala de emergencias.

Pero tenía el obstáculo de una capa doble de privacidad: no sólo estaba lidiando con niños, sino que sus problemas eran siquiátricos. Así que comencé con una reunión con oficiales del hospital. Les dije que sólo quería hablar sobre hacer un reportaje. No esperé que ellos estuvieran de acuerdo inmediatamente. Primero pedí algo simple. Los dejé que me conocieran. Me reuní con todo aquel con quién ellos querían que me reuniera. Finalmente, accedieron a que yo siguiera a un residente por una noche. Sin fotógrafo, y sin identificar a los niños.

En el día designado, llegué a las 5 de la tarde para encontrarme con el residente siquiátrico. Para cuando llegaron las 6 de la mañana, ella vio qué tan interesada estaba yo en el tema, y ella preguntó si quería venir otra noche. Eso es lo que pasa una vez que estas adentro. Ven que usted no es Hard Copy (un programa como Primer Impacto). Ven que a usted le importa esto. Pronto, usted esta siguiéndolos varias noches, y ellos acceden a que lleve un fotógrafo. Ese trabajo resultó en un reportaje de dos páginas, con fotos, y con cada niño identificado, que ganó premios de periodismo.

Reportajes extraordinarios requieren métodos extraordinarios.

En temas sensibles, usted tiene que tener paciencia y estar dispuesto a calmar a la gente hasta el último momento. El viernes antes de que el reportaje sobre la sala de emergencias se publicara, uno de los oficiales de Hopkins me llamó varias veces, preocupado de cómo se iba a ver el hospital, e intentando conseguir que sus abogados bloquearan su publicación. También esa semana, visité a cada familia en su casa, leyéndoles los detalles que parecerían sobre su niño, en algunos casos mostrándoles una foto, explicando otra vez que esto saldría en la primera plana, incluso que tan grandes las fotos podían ser. Cuando la gente está en una situación vulnerable, y ellos han accedido a aparecer en su reportaje, cerciórese de que ellos entienden lo que eso implica. Compruebe los detalles con minuciosidad. No los traicione.

La forma en que usted se conduzca como persona y como profesional va al centro de que tan buena es la calidad de su trabajo. Dese cuenta que usted es su propio producto, su propia marca de fábrica. Cuando usted es periodista, su nombre es todo lo que usted tiene. ¿Usted desea ser como Southwest Airlines, la línea aérea que se conoce por su diversión y eficiencia, o como la línea aérea que todo mundo odia? ¿Es usted el reportero que piensa que conoce el tema por adelantado, que acomoda los detalles en un molde preconcebido, o usted escucha a la gente que está entrevistando? ¿Es usted el reportero que confirma todos los peores estereotipos sobre nuestra profesión, o es usted el que sorprende a la gente con su honradez, integridad, y pasión?

No piense por un minuto que el público no se da cuenta de que tipo es usted y que no lo tratan diferente dependiendo de en que categoría lo ponen. A nosotros nos gusta pensar que descubrimos cosas a través de documentos y bases de datos. Pero en realidad, en muchos reportajes, dependemos de la gente, la gente que nos ha tomado cariño, la gente que sabe que seremos precisos y justos y humanos.

Número tres: Balanceando reportajes largos y cortos

Es fácil perderse en la cobertura de un área asignada. Ya sea educación, crimen o medicina, cada fuente produce siempre una serie constante de artículos. Estas notas diarias y cortas cuentan: le ayudan a acumular sus fuentes, a desarrollar la habilidad de escribir sobre el tema que usted cubre, lo preparan para los reportajes grandes y le conducen a menudo a ellos. Pero usted tiene que tener cuidado: usted podría producir notas por siempre y no pensar mucho en los reportajes largos. A excepción de mi serie sobre los agentes antinarcóticos, yo no me detuve a ver que hacía mientras estaba cubriendo a la policía en el *Sacramento Bee*. Mi consejo para usted es que tiene que parar lo que está haciendo y ver a su alrededor de vez en cuando. ¿Dónde está usted? ¿Qué pista está siguiendo? ¿Que tiene en el horizonte?

La mayoría de nosotros sabemos cuál es ese reportaje especial que deseamos hacer. Estábamos trabajando en otra cosa cuando lo descubrimos. Regresamos a la redacción y alegres le dijimos nuestro editor. Quizás comenzamos un archivo. Hicimos algo de investigación. Entonces tomamos el paso fatal: pusimos esa idea en nuestra lista de reportajes pendientes. Muy a menudo, la historia muere allí.

Ésta es mi imagen de lo que sucede: Usted está conduciendo en un camino caliente en el desierto. Es casi mediodía y el termómetro está marcando casi 40 grados. Usted tiene hambre, sed, está casi sin gasolina. Usted es el reportero que ha estado escribiendo los artículos complicados que nadie quiere hacer, los temas que deben hacerse, pero usted presiente que esos no lo están llevando a ninguna parte. De pronto, usted ve una gran idea. Es como encontrar una gasolinera hermosa en ese camino del desierto. Está bien almacenada, con los baños limpios, incluso tiene una Pizza Hut. Usted desea reclinarse, comer, quedarse un rato.

Pero entonces aparece una nota en el diario. Su editor le pide que se regrese al camino un poco para hacerla. Son solamente un par de llamadas, algunas horas, algunos días. Usted puede ir de nuevo a la gasolinera pronto. Pero entonces aparece otra nota, y usted se aleja más. Entonces aparece otra nota. Pronto, usted está tan lejos que ya casi ni ve la gasolinera, esa gran idea. Entonces un día, algunos años más tarde, usted verá esa idea en la primera plana de un periódico importante. Y usted le dirá: ¡"Hola idea! ¡Adiós idea! Bueno verle!"

Es fácil decir que no es su culpa, que usted tiene demasiado trabajo, muy poco tiempo, que sus editores le están dando chance para proyectos a todo el mundo menos a usted. Yo solía hacer eso.

Mas o menos un año después de que llegar al *Baltimore Sun*, estaba molesta por no tener tiempo de hacer reportajes largos, y hablé con el jefe de redacción, Bill Marimow. Él me pidió propuestas. Le llevé tres. Su respuesta fue: "Estas son tremendas. En qué orden las quiere hacer?"

¿Usted sabe qué sucedió? Caminé de nuevo a mi escritorio y el teléfono sonó, y me quede atascada en otra cosa. Me vi de nuevo tragada, arrastrada hacia el fango de las notas diarias, la pesadilla del seguro médico, el estudio importante de Hopkins, todas esas historias que

usted tiene que hacer, o usted piensa que tiene que hacer. Me sentí demasiado responsable para abandonarlas. No paré para pensar: ¿Tengo que escribir esta cuestión hoy? ¿Podría esperar hasta que sepamos más? ¿Podría otro reportero cubrirla? ¿Podría escribir un resumen breve? No le di seguimiento a las otras tres ideas que había propuesto. Pensé, incorrectamente, que conseguiría entrarles la semana próxima, o el mes próximo.

Por mucho tiempo tuve la ilusión que apenas detrás de la colina siguiente, en algunas semanas, en algunos meses, alcanzaría un claro, una calma, un oasis sabroso donde ninguna nota diaria podría encontrarme. No sé cuántas veces le he dicho a mis fuentes o a la gente que me llama que después que acabe estas notas próximas tendría tiempo, que las cosas se calmarían un poco. Pero estoy aquí para decirle que usted nunca alcanza ese claro. Ni siquiera creo que existe.

Pero de vez en cuando hay una mañana calma, o algunas horas en que usted no puede hacer nada sobre el artículo en el que está trabajando, y puede tomar tiempo para hacer llamadas de su reportaje largo. Aproveche ese tiempo. Haga un poco aquí y un poco allá, hasta que usted haya acumulado suficiente información como para decirle a su editor "esto es lo que tengo. Deme dos semanas y le daré un gran reportaje de 60 pulgadas".

No se queje sobre los reportajes que nunca consigue hacer. Llégueles, al menos de poco a poco, así puede usted convencer a su editor para que le dé más tiempo. No sea como el resto de los reporteros, alineándose para quejarse de que nunca consiguen hacer un proyecto. Usted tiene su proyectito y ya ha hecho parte del trabajo. ¡Todo lo que tiene que hacer es terminarlo!

La otra cosa que debe hacer es ser despiadado. Revise su lista de ideas. ¿Cuáles son las mejores? ¿Por qué usted no está haciendo esas ahora? A menudo, cuando uno cubre un área, se familiariza con la gente y lo pueden hacer sentirse culpable y creer que usted debe escribir de esto o aquello. Pero usted no le debe un reportaje a ninguna agencia o ningún hospital o cualquier persona, incluso si es una buena idea que terminará en la primera plana.

Usted le debe los reportajes a sus lectores. Eso es.

Piense en las ropas en su ropero, o en sus amigos, o en la mayoría de las cosas en la vida: a menudo se resume a algunos pocos que usted quiere de verdad, sus favoritos. Cuando usted se sienta abrumado, piense qué artículos le gustaría hacer si sólo pudiera terminar tres más en su vida.

Yo hice eso recientemente. Había estado fuera del trabajo por problemas médicos, así que mi sentido de culpabilidad por los temas que había abandonado era enorme, unos que no había acabado antes de irme, más los que se apilaron mientras yo estuve fuera. Tenía esta lista de artículos que sentía el deber de hacer. Pero un día me detuve. Pensé en todas las ideas en mi escritorio. Después seleccioné los mejores y empecé a trabajar en ellas.

Capítulo Cuatro: La sala de redacción

Encontrando tiempo con su editor

Cada reportero necesita entender que este es un problema en casi cada periódico del país. Donde quiera que usted vaya, le hará frente a esta situación. Usted tiene que encontrar sus propias soluciones. Espere en línea para hablar con su editor. Interrúmpalo. Intente arreglar una reunión semanal. Aprenda los hábitos de su editor y descubra la mejor hora de acercársele. Cuando usted logre tener tiempo con ese editor, esté preparado, tenga una lista de todo lo que necesita decirle y sea eficiente. Pero no se autocensure tanto como para no hablar de los reportajes que usted quiere hacer.

Si usted no está recibiendo apoyo de su editor, busque a alguien más en la redacción. Vaya a un reportero o a otro editor. Yo descubrí una vez a un editor de cables de noticias que era excelente para analizar ideas y sugerir proyectos. Haga lo que haga, cerciórese de hablar con alguien. El proceso de edición más importante sucede en la fase de reporte, mucho antes que usted comience a escribir.

Tratando a otros periodistas

No se preocupe por lo que están haciendo otros reporteros.

Como reportero con área asignada, usted trabajará furiosamente, y verá en la redacción a otros periodistas que se tomar almuerzos largos. Usted verá que otros reciben semanas y meses para un proyecto largo, cuando usted no puede incluso conseguir tres semanas para una idea que usted cree es buena también. A usted le conviene no perder el sueño por eso, no pensar en eso, no compararse con otros. Su mejor defensa es una buena ofensiva: Haga sus propios reportajes buenos. Usted no puede preocuparse de lo que están haciendo los otros.

Pero cualquier persona que cubre un área descubrirá que otros periodistas van a meterse en su área y hacer algunos de los reportajes. Ellos van a escoger las mejores ideas a veces. La peor situación es un editor que dice: "Usted tiene que escribir 10 breves y tres notas diarias, así que usted no puede escribir esta gran idea para la edición del domingo. Se la daremos a este otro reportero". De nuevo, cerciórese de que usted está trabajando calladito en su propio reportaje de domingo. Si el tema que le están dando a otro reportero es uno que usted realmente desea, presente sus argumentos de porqué debe tomarlo, y pruebe que usted puede encontrar tiempo para ello. Haga un poco de reporte, para que parezca que usted ya estaba entrándole al tema.

Usted necesita tener presente, sin embargo, que nunca podrá hacer todos los reportajes que desea hacer. Piense en todas las ideas que nunca incluso comenzó. Pregúntese: ¿Qué es lo mejor para el periódico? Si una nota necesita publicarse y usted no puede hacerla, cerciórese de que algún otro la haga. No se ponga malo con el otro reportero. No sea uno de esos periodistas a los que se les marchita el corazón por los celos y la amargura.

Mi viejo editor, Gregory Favre, solía decirme: "usted no puede hacerlo todo, niña". Y él

tenía razón. Todo lo que usted puede hacer son sus propios artículos buenos, uno a la vez.

El perfeccionismo

La mayoría de nosotros somos concienzudos. Estamos acostumbrados a completar cada trabajo que nos asignan. Pero trabajando en la cobertura de un área, usted tiene que aprender que usted nunca lo acabará todo. En cierto punto en la cobertura de la salud, me di cuenta que podía estar en el trabajo 24 horas al día, y nunca acabaría todos los reportajes que quería hacer. También me di cuenta que el periódico no tendría lugar para publicarlos de todos modos. Pero es duro ignorarlos. Es difícil dejar ir toda esa carga y los sentimientos de culpa sobre todas esas ideas que no has logrado escribir. Pero usted tiene que hacerlo, por su cordura, por su vida. Si usted no puede hacerlo por esas razones, hágalo por su carrera. Cuando acabé el reportaje sobre los niños con problemas siquiátricos en la sala de emergencias, estaba tan preocupada por las ideas que se habían apilado, que me sentí obligada a entrarles a todas. Y no le di seguimiento al reportaje de la sala de emergencias.

No se queme

Muchos periodistas esperan hasta que están tan hastiados y fritos o que están al borde de renunciar. Le imploro que se detenga antes que usted llegue a ese punto. Piense que usted es una cuenta de ahorros. Tiene que pagarse a sí mismo a lo largo de su carrera. Cuídese. Si las cosas están algo lentas un día, tómelo al suave, limpie su escritorio, ponga al día sus números de teléfono, organice sus archivos y bote lo que nunca va a utilizar. Vaya a almorzar con colegas con los que no ha hablado en un tiempo. Cuando salí del *Bee*, un reportero me dijo "yo creo que usted es una de las personas más agradables de la redacción, y deseo que hubiéramos podido conocernos, pero usted siempre parecía tan ocupada, que yo no quise interrumpirle".

Tómese una vacación mental de vez en cuando. Vaya a un bar con otros reporteros. Acomode vacaciones en su horario. Busque una beca. Haga una maestría. Lea de nuevo algunos de sus reportajes viejos. Cerciórese de que haya algunas personas en su redacción con las que pueda hablar cuando se le baje la moral. De vez en cuando, usted necesita tirarse en una silla, contar sus problemas y recibir un poco de estímulo. Y cuando usted realmente se esté sintiendo mal sobre su trabajo, propongo esta solución: agarre su libreta, salga de la redacción y vaya a entrevistar a alguien. Le prometo que se sentirá mejor.

Los diamantes en su escritorio

Por último, deseo decir algo sobre la inspiración.

Incluso cuando usted está en lo fino, cuando está publicando grandes reportajes, esta es una profesión que lo quema a uno. Justo cuando usted está listo a salir del trabajo, un cuervo con el virus del West Nile cae muerto en el puerto. Justo cuando usted ha despejado un día para trabajar en su reportaje largo, Cal Ripken necesita cirugía de la médula. En el Día de Gracias, su familia está reunida en la casa y usted está enfrente de la máquina de meriendas en la oficina, tratando de escoger entre los chocolates de Snickers y de Reese. Muchas

veces, usted no le cae bien a otra gente. Usted se duda a sí mismo. Piensa que usted no está haciendo mucho. Piensa que no es buen escritor, eso ha ido cuesta abajo. Pero antes que se desmoralice tanto como para renunciar, antes que empiece a pensar en otro trabajo, reflexione un poco.

¿Puede recordar las entrevistas cuando, en un momento, usted comprendió todo? ¿Cuándo las conexiones le aparecieron claritas, y parece que la otra persona le está hablando en cámara lenta? ¿Cuándo usted sabe que esta idea es importante, y que usted va a escribirla derechito a la primera plana?

¿Alguna vez a usted regresado sudoroso en el verano a la redacción y abierto su libreta suavemente, como si estuviera llena de joyas que usted podrá arreglar en la página? ¿Ha estado alguna vez tan metido en su reportaje que no podía oír al editor de fotografía gritando a su lado?

¿Se acuerda usted del olor terrible de la mujer que estaba muriendo del cáncer de la piel y de su marido que la amaba tanto que todavía seguía durmiendo a su lado cada noche? ¿Puede usted todavía oír al paciente con el tumor cerebral, que era tan valiente que se estaba riendo en la máquina de MRI? ¿Usted recuerda a la mujer de 93 años que había sido golpeada brutalmente, y cómo ella pudo aun apretar su mano tan firmemente?

Esos momentos se le quedaron a usted pegados y a algún lector también. En alguna casa, su reportaje está pegado en un álbum, o enmarcado y colgado en la pared. Por años, ellos recordarán el día que usted vino a entrevistarlos.

Sus reportajes pueden no resultar cómo usted esperaba. Yo los veo siempre en mi mente, brillantes y enteros; pero una vez que aparecen, se parecen a menudo a un pedazo de cerámica cruda. Cada artículo no produce gran cambio, pero nosotros somos los que le estamos mostrando a la gente una parte del mundo que de otra manera nunca verían: que duro trabaja una maestra, porqué un adolescente se mete a una pandilla, o quizá algo tan simple como no asumir que entendemos porque un niño esta de malcriado en un restaurante.

Recordaré siempre la noche de invierno en que una madre me habló desde su puerta, con lágrimas en los ojos, diciéndome: "dígales. Dígale a la gente que no es culpa de Miguel. Que nosotros tratamos de disciplinarlo. Las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad. Talvez la gente entienda".

Talvez la gente entienda.

No ignore la energía de una idea. No deje que todas las cosas difíciles de su trabajo escondan los diamantes en su escritorio. Si usted ve ideas donde quiera que vaya, si usted se conecta con la gente, si a usted le importa, siga sus instintos.

Y cuando regrese a su escritorio mañana, después que oiga los mensajes telefónicos y revise los faxes, desentierre esa gran idea que usted siempre ha querido hacer y vaya por ella.

Diana Sugg ha trabajado como reportera de salud en The Sun en Baltimore, Estados Unidos, desde 1995. Ella ha trabajado también en The Sacramento Bee, el Herald-Journal en Spartanburg, Carolina del Sur y la Associated Press en Philadelphia. Ella es miembro del Consejo Nacional del Instituto Poynter'.

Diez consejos para tomar control de su cobertura.

1. Su escritorio: Manténgalo organizado. Revise sus mensajes de fax, sus notas de prensa y su correo y bote tanto como pueda. Los archivos verticales son la mejor apuesta para mantener docenas de artículos a plena vista.
2. Su especialidad: Manténgase al tanto de su área de cobertura, y no solo a nivel nacional. Únase a grupos de discusión en Internet de su área para estar al tanto de desarrollos locales e internacionales. Mantenga una lista de fuentes para todos los aspectos de su área.
3. Sus fuentes: Llame a gente cuando usted no necesite nada. Sea amistoso con las secretarías y asistentes. Cada semana, conozca a una persona nueva en su área de cobertura. Escriba o llame a la gente que trabajó extra para ayudarlo y dele las gracias.
4. Sus entrevistas: Termínelas siempre con tres preguntas. ¿Hay algo más que debí haber preguntado y se me olvidó? ¿Hay alguna otra cosa que usted quiere decir? ¿Con quién más debería hablar?
5. Sus emergencias: Al final de la entrevista, pida un número de teléfono celular o de la casa en caso que usted tenga una pregunta más luego. Dígale a la persona que usted usará el número solamente en casos de necesidad y cumpla con lo prometido. Guarde ese número en su agenda.
6. Su reporte: Pare y piense antes de comenzar. ¿Cuál es la esencia de esta historia? ¿Qué es lo que absolutamente debe tener? ¿Qué nuevos puntos de vista le darían algo extra a su reportaje? (No llame siempre a la misma gente.)
7. Sus reportajes: Tome distancia de vez en cuando y revise los temas que ha tratado. ¿Son los mejores en su área de cobertura? ¿Cuáles son las historias más interesantes, las que más sorprenden, las que la gente recordará?
8. Sus proyectos especiales: No los deje morir bajo el agobio de la rutina. Trabaje en ellos, poquito a poquito, cuando usted tenga un día lento. Cuando usted tenga un 25 por ciento del trabajo hecho, presente un plan a sus editores.
9. Sus emociones: No se preocupe de lo que están haciendo otros periodistas. Abandone sus sentimientos de culpa, su amargura y sus celos.
10. Su carrera: Encuentre sus propias historias buenas y escribálas, una a la vez.

Reporteando sobre gobierno y estadísticas

Por Carole Rich

Los artículos sobre el gobierno a menudo envuelven dinero y estadísticas. Aunque éstas notas son a veces difíciles de escribir, Robert Zausner, periodista gubernamental de *The Philadelphia Enquirer*, dice que él intenta hacerlas mas legibles usando vocabulario simple que la gente pueda entender. “Usted tiene que hacer que ellos la lean”, dice. “Déle las noticias en términos simples. Es fácil usar la lengua de los burócratas. Pero eso es ser perezoso. Alguien introduce una propuesta de ley, usted consigue tres citas, y ya tiene un artículo. Pero si usted nada más escupe la información en la lengua burocrática, usted pierde a cada lector”.

Otra forma de hacer que los reportajes sean más legibles y relevantes es enfocarlos en la gente más afectada, como en esta artículo sobre el impacto de una orden del Gobernador Roberto Casey de despedir a 2,450 empleados públicos:

Por 20 años, Mark Holmes ha trabajado para el estado. Como un experto en telecomunicaciones, él ha disfrutado de un salario de \$45,000 al año y de la seguridad laboral que representa trabajar para el gobierno.

Pero ahora Holmes se está preguntando cómo va a proveer para su esposa y sus nueve hijos, cómo mantendrá al mayor en la universidad. Él está considerando aplicar por cupones públicos de alimentación. Él piensa en el problema que enfrenta a la edad de 43. Y entonces, ofreciendo una disculpa, comienza a llorar.

Holmes está entre las 2,450 personas escondidas tras los números. Él quedará desempleado al final del mes gracias a un plan de despidos ejecutado para reducir un déficit que se acerca a los mil millones. Los despidos, ordenados por el Gobernador Casey, ahorrarán aproximadamente \$154 millones este año fiscal.

Robert Zausner, *The Philadelphia Inquirer*

Zausner también cree que es importante interpretar como una medida afectará a los lectores. Por ejemplo en este artículo sobre los cortes presupuestarios propuestos por el gobernador de Pennsylvania:

No es que el Gobernador Casey sea un gruñón, pero si él se sale con la suya costará más en Pennsylvania ir a un museo estatal o gozar de una comida campestre el domingo. Incluso el precio de las placas de auto personalizadas subirá.

Costará más nacer, y también morir.

Porque enterrado en el presupuesto propuesto por Casey, que ha llamado la atención con más impuestos para empresas y cigarrillos, está el plan del gobernador de recaudar \$80 millones adicionales a través de aranceles por casi todo.

Licencias para botes y anuncios, museos del estado y permisos de conducir, campamentos públicos y minas de carbón serían afectados. Incluso los empleados

públicos, que ya fueron golpeados con despidos y recortes salariales, tendrían que comenzar a pagar \$5 por quincena para tener parqueo en el Capitolio.

Funcionarios de la oficina del gobernador no dijeron mucho sobre estos aumentos arancelarios el miércoles, cuando presentaron el presupuesto para el año fiscal 1992, que comienza de 1 de julio

Roberto Zausner, The Philadelphia Inquirer

El periodista tiene la responsabilidad de interpretar las acciones del gobierno para el lector, dice Zausner. “Si un diputado o concejal anuncia que está introduciendo una iniciativa de ley, pero lo que intenta realmente es sólo atraer la atención pública y usted sabe que la propuesta no llegará a ningún lado, usted tiene que decir eso. Si usted escribe ese reportaje y no dice lo que el diputado realmente está haciendo, usted le está quedando mal a la gente. Sería mejor que no escribiera nada. No creo que eso es estar editorializando. Es más bien darle un buen servicio al lector”.

Aquí están algunos puntos básicos sobre como cubrir al gobierno local:

Interés humano: Explique al gobierno en términos de importancia para los lectores, encontrando a gente que es afectada por las acciones de las agencias estatales.

Murales en oficinas: Léalos para saber si hay ofertas de trabajo, quejas, u otros avisos que podrían resultar en reportajes.

Memorándums y cartas entre funcionarios públicos: Trate de tener acceso a documentos y archivos relacionados con el gasto de fondos públicos. (La mayoría de éstos - con excepción de asuntos personales y laborales -- son expedientes públicos en Estados Unidos).

Comisión de planeamiento y permisos: Revise agendas de las reuniones, y cultive fuentes en las oficinas de planeamiento y permisos. Busque información no sólo sobre proyectos futuros pero también sobre otros en el pasado. Buenos reportajes pueden escribirse sobre planes que salieron mal.

Consultorías: Revise quién recibe contratos para consultorías, e investigue estudios anteriores sobre el mismo tema. A veces agencias públicas contratan expertos para hacer estudios en temas que ya se han estudiado con frecuencia.

Reuniones en barrios: Están usualmente llenas de interés humano. A la gente le interesa lo que esté pasando en su barrio.

Avisos legales: Revíselos para saber si hay ofertas públicas y otros anuncios de importancia. Muchas agencias estatales deben anunciar ofertas de compras grandes. Llame a los contratistas que no recibieron contratos. Muchos reportajes buenos se descubren en estos temas aparentemente aburridos.

Auditorías: Léalas cuidadosamente. Pueden revelar el desperdicio de fondos públicos.

Líderes de sindicatos: Hable con los líderes sindicales en escuelas y sindicatos públicos. Ellos saben lo que sucede tras puertas cerradas.

Empleados públicos que no son funcionarios: Hable con la gente que de verdad hace el trabajo. En las escuelas, escriba sobre lo qué hacen los profesores y estudiantes. En las ciudades, hable con la gente en las oficinas. Invierta tiempo aprendiendo que es lo que hacen, cómo lo hacen y si lo hacen bien. Buenos reportajes salen cuando uno descubre cómo trabajan los empleados de los niveles bajos en el gobierno.

El sistema: Aprenda cómo trabaja. ¿Los funcionarios en su ciudad respetan las leyes? Si usted no sabe cómo debe funcionar el gobierno, no sabrá descubrir si está funcionando correctamente.

Expedientes: Revise las cuentas de gastos y otros registros de los funcionarios a los que usted cubre.

Oficinas: Conozca todas las oficinas en su edificio de gobierno, y aprenda qué trabajo hace la gente allí. ¿Por ejemplo, sabe la función de cada departamento en su gobierno local? Usted podría encontrar artículos creativos o reportajes viendo lo que la gente hace en estas oficinas.

Consejos para la redacción

Asumiendo que usted ha encontrado buenos temas, ¿cómo puede hacerlos legibles?

Una forma es evitar la jerga oficial, o las frases técnicas que los funcionarios usan pero que los lectores no entienden. Por ejemplo: *reestructurando* en vez de *cambiar*, *fondos* en vez de *dinero*. ¿Cuándo usted necesita un préstamo de un amigo, usted le pide que le preste *fondos*?

“Tratar de leer este libro es como tener una serie de pequeños infartos”, dice Jack Cappon, instructor de redacción para la Associated Press. “A menos que usted comience a escribir en la forma en que hablan sus vecinos, usted no va a llegar a ninguna parte”.

Los clichés son otro problema común en reportajes de gobierno. En este ejemplo, el periodista arruinó el lead escogiendo un día feriado que no tiene nada que ver con el tema, sólo para poder usar un cliché:

Faltan varios meses para el 4 de Julio, pero los insultos y las acusaciones estallaron como fuegos artificiales en una ofuscada reunión de los concejales municipales ayer.

El cohete más grande fue el concejal republicano John Hanson, quien atacó a sus colegas llamándolos “ladrones”.

Otros consejos:

Use oraciones breves y simples: Cuando la información es compleja, las oraciones deben

ser simples y cortas:

Versión compleja:

El Concejo aprobó ayer por la noche una resolución autorizando al personal de la alcaldía para que solicite financiamiento a través de un programa del Departamento Estatal de Transporte para un proyecto de \$3.6 millones para expandir la carretera 77 de dos a cuatro carriles, por una distancia de 5 kilómetros entre la estatal 70 y la carretera 18.

Versión simple:

El Concejo acordó anoche solicitar \$3.6 millones del Departamento Estatal de Transporte para ampliar una porción de la carretera 77 de dos a cuatro carriles. El proyecto ensancharía 5 kilómetros entre la estatal 70 y la carretera 18.

Evite oraciones dependientes en el lead: Use el orden de sujeto-verbo-objeto, que es la forma en que la gente habla normalmente. ¿Si usted le estuviera contando a un amigo sobre los esfuerzos del gobierno para mantener un programa de almuerzo gratis en las escuelas, usted diría: “Indicando que las compras gubernamentales de alimento ayudan a mantener buenos precios agrícolas a la vez que le dan de comer a miles de niños, el gobierno está intensificando una campaña para salvar el programa de almuerzos escolares?”.

Mantenga el sujeto y el verbo juntos: Frases largas antes del verbo hacen que el lector se olvide de cuál es el tema, o de quién dijo que:

Versión compleja:

En vez de mandar inspectores del gobierno a empresas privadas, buscando violaciones e imponiendo multas, funcionarios de la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional, en un esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo y reducir el gasto gubernamental, están ofreciendo incentivos a las empresas para que identifiquen problemas de salud y de seguridad laboral y que trabajen con la agencia para corregirlos.

Versión simple:

Una agencia federal está ofreciendo incentivos a empresas privadas que encuentren y resuelvan problemas de salud y de seguridad laboral en sus instalaciones, en vez de mandar a inspectores del gobierno a buscar violaciones e imponer multas.

El programa es un esfuerzo de la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional por mejorar las condiciones de trabajo y ahorrarle dinero al gobierno.

Busque una persona que pueda servir de ejemplo para explicar el impacto de una medida: La manera en que una medida gubernamental afecta a una persona lo clarifica

para los lectores. Ese es el concepto de la fórmula que usa el *Wall Street Journal*, y esa fórmula se pueden utilizar también en reportajes de gobierno. Comience con una anécdota sobre una persona, después vaya del ejemplo específico a lo general.

Linda Green pagó \$42,000 en 1982 por una casa en media manzana en Villa Fontana, apostando a que subiría de precio en los años siguientes.

Pero si un nuevo plan para expandir Villa Fontana es aprobado, Green teme que su propiedad no valdrá un centavo más de lo que costó el día que la compró.

El plan cambiaría la clasificación de su media manzana, prohibiendo la construcción de otras casas en ese terreno y reduciendo su atractivo para otros compradores.

Green no es la única persona preocupada. Ella estuvo entre varios dueños de propiedad que se quejaron el lunes de que el plan para el crecimiento de Villa Fontana pondrá sus lotes en áreas de menor valor.

“Yo compré esta propiedad como una inversión. Si la reclasifican voy a perder mi dinero, y yo trabajé duro para comprarla”, le dijo Green a la Comisión de Planeamiento Municipal durante la primera audiencia pública sobre el nuevo plan.

Más de 130 personas llegaron a la reunión.

Tony Saavedra, *The Sun*, San Bernardino, California.

Use un lead que explique el impacto del tema o explíquelo en el reportaje: Diga cómo una acción burocrática afectará al lector.

Un automóvil de \$10,000 costaría \$25 más en impuestos, una sierra eléctrica de \$40 costaría diez centavos más y un sixpack de cerveza valdría un centavo extra si el concejal Ernst Shafer, del tercer distrito, se queda con la suya.

Shafer quiere que la ciudad de Rockford se una a una propuesta de Springfield para aumentar por 0.25 por ciento el impuesto general al valor. El impuesto local subiría del 6.25 al 6.5 por ciento.

Brian Leaf, *Rockford Register Star*, Rockford, Illinois.

Evite citas aburridas: Usted no tiene que incluir una cita de un funcionario para demostrar que habló con él. Si puede expresar lo que él dijo usando sus propias palabras, mejor. Usted podría decir que las reparaciones del parque incluyen cortar árboles, remover arena, preparar el suelo para un semillero y reparar una caseta. Pero un periodista más bien citó a un funcionario:

“El proyecto incluye remover árboles, sacar un poco de arena y preparar el suelo para un semillero”, dijo él. “También vamos a tener que reparar una caseta.”

Use listas: Úselas en el centro o al final del reportaje para explicar los puntos importantes de un tema. Las listas son útiles sobretodo en reportajes con estadísticas o con varias propuestas.

Sea selectivo: Use solamente las citas y detalles que necesita. No descargue todas las notas de su libreta en el reportaje.

Reportajes sobre estadísticas

Cuando usted esté escribiendo sobre cifras, debe analizar lo que significan. Presupuestos y reportes usualmente comparan las cifras con el año anterior o con otro marco de tiempo. Ponga siempre los números en perspectiva de dos maneras:

1. Explique el cambio. ¿Muestran los números un aumento o una reducción con respecto al período anterior?
2. Indique la importancia. ¿Qué significan esos números, y porqué son importantes? Explique las estadísticas de una manera que haga que los lectores se interesen en el tema.

Todos los consejos anteriores sobre la redacción aplican también a los reportajes con cifras. Pero aquí están algunos que son particularmente importantes para cuando este escribiendo sobre estadísticas:

Utilice gráficos y tablas: Trate de poner los números aparte del reportaje. Usted necesita mencionar algunas cifras, pero siempre evalúe si una tabla o una gráfica podría presentar mejor la información.

Use analogías: Cuando esté refiriéndose a números grandes, las comparaciones con algo que los lectores entiendan son bien útiles. Esta es una analogía tomada de un reportaje sobre la contaminación en los ríos de Alabama:

Cada minuto, cerca de 30 millones de galones de agua proveniente de ríos en Alabama, o el equivalente de 60 piscinas olímpicas llenas, se desbordan en la Bahía de Mobile, lavando los campos de ostras cerrados al comercio.

Dan Morse, *The Alabama Journal*

En esta otra analogía, el redactor compara el déficit federal con el tipo de crédito que la mayoría de los lectores entienden:

Imagínese a una familia adicta a las tarjetas de crédito y viviendo por encima de su salario.

¿Ropas nuevas? A la tarjeta. ¿Más medicina? A la tarjeta. ¿Una noche de parranda? A la tarjeta.

Pronto la situación está fuera de control. Los padres tienen que pedir prestado para pagar apenas el interés mensual. El balance de la deuda en las tarjetas de crédito simplemente sigue subiendo rápidamente.

Ellos tratan de socarse la faja, pero no con muy buenos resultados. Los padres no pueden dejar de usar la tarjeta.

Ésa es la situación del gobierno federal ahora que terminan los años 80, una década de prestar y gastar. Tomó dos siglos para que la deuda del gobierno

alcanzara \$1 trillón, pero solamente cuatro años -- de 1982 a 1986 -- para que creciera a \$2 trillones.

Ahora el Departamento del Tesoro dice que el gobierno no puede funcionar más allá del 8 de noviembre a menos que el Congreso eleve el límite de la deuda gubernamental a \$3 trillones. O sea \$3,000,000,000,000.

Charles Green, *The Philadelphia Inquirer*

Redondee los números: En el ejemplo anterior, el redactor incluyó todos los ceros en \$3 trillones para darle énfasis a la cifra. Pero en la mayoría de los casos es mejor redondear los números, por ejemplo usando \$3 millones o \$3.5 millones en vez de \$3,499,590. No agobie al lector con números largos.

Evite agrupar muchos números en un párrafo: Distribuya las cifras en varios párrafos, en vez de aglutinarlas en una oración o párrafo. Por ejemplo:

Una encuesta de la Asociación Americana de Abogados ha descubierto un "aumento sorprendente" en el consumo de alcohol entre abogados, con 13 por ciento admitiendo que se toman seis o más tragos al día.

En comparación, menos de 0.5 por ciento de abogados dijeron que bebían esa cantidad cuando se condujo una encuesta similar en 1984.

Las abogadas indicaron más frustración laboral y más consumo de alcohol que los hombres. Un 20 por ciento de las abogadas entrevistadas dijeron beber seis tragos al día, comparadas con 11 por ciento de los hombres.

Los resultados indican una conexión entre el incremento del consumo de alcohol y el creciente descontento y tensión entre los abogados.

The Associated Press

Use anécdotas: Incluso los reportajes sobre estadísticas se prestan a usar anécdotas:

En la madrugada del 25 de enero, una mujer salió de una fiesta en la zona noroeste de Portland y comenzó a caminar hacia su casa. Cuando llegó a la esquina de la Calle Flanders y la Avenida 21, como a las 3:30 de la mañana, un hombre la agarró del brazo, forzándola al suelo y amenazándola con una pistola. Luego la violó.

Ella es una de 32 mujeres que han reportado violaciones a la Policía de Portland durante las primeras cuatro semanas de enero. Autoridades todavía no han acumulado reportes de los últimos cinco días del mes. Pero la cuenta actual ya excede las 20 violaciones reportadas en enero en 1990.

Ese aumento refleja una tendencia que las autoridades y los representantes de organizaciones de apoyo a las víctimas comenzaron a ver el año pasado. El número de asaltos sexuales reportados en Portland está subiendo. Estadísticas policiales registran 427 violaciones en 1990, comparadas con 412 en 1989, o un aumento del 4 por ciento, dijo Steve Beedle, analista de seguridad pública de la Policía de Portland.

Reportajes sobre el presupuesto

Los lectores quieren saber en que gasta el gobierno. Para decirles, primero usted necesita entender el proceso presupuestario de la agencia que cubre. Y después necesita presentarlo de forma que le interese a los lectores.

El planeamiento del presupuesto comienza varios meses antes de que este sea aprobado. Aprenda cómo interpretar la propuesta de presupuesto pidiéndole a un funcionario de la ciudad o de la agencia que se lo explique antes que sea propuesto. Si él no le puede hablar del plan propuesto para este año, pídale que use el del año pasado para aprender el proceso. En la mayoría de los casos, los funcionarios estarán dispuestos a cooperar, porque quieren que usted presente los datos correctamente.

Básicamente, los presupuestos tienen dos secciones:

Ingresos: La renta, derivada generalmente de los impuestos, incluyendo impuestos de ventas, impuestos a la propiedad e impuestos de ingresos. Busque pistas sobre de donde saldrán los ingresos. ¿Aumentarán los impuestos a la propiedad? ¿Si usted cubre a una universidad, subirá el costo de la matrícula? Descubra cómo la fuente de ingresos afectará a sus lectores.

Gastos: En qué se gastará la mayoría del dinero. ¿Algunos departamentos subirán sus gastos más que otros, como la policía o los bomberos? ¿Por qué? ¿Subirán los sueldos o contratarán más gente? ¿Cómo se comparan los gastos de este año con los de los años recientes?

Generalmente, los presupuestos incluyen cifras del año anterior o de varios años. Busque aumentos y reducciones importantes en ingresos y gastos.

Antes que una agencia estatal adopte su presupuesto, generalmente debe conducir audiencias públicas o aprobarlo en una reunión pública. Si el público tiene chance de revisar la propuesta de presupuesto, explique cómo y dónde en su reportaje.

Técnicas de redacción

El impacto del presupuesto es importante en sus reportajes. También lo son las gráficas. Una tabla o una lista con las cifras más importantes pueden hacer que un reportaje sea más presentable. También consiga declaraciones de los funcionarios de la ciudad, residentes que lleguen a las reuniones públicas o la gente más afectada por los cortes del presupuesto.

Estos son algunos puntos importantes que deben ser parte de un reportaje sobre el presupuesto, no necesariamente en este orden:

1. Suma total del presupuesto (redondeado cuando es posible: \$44.6 millones

en vez de \$44,552,379)

2. Cantidad de aumento o reducción, en porcentaje o cifras

3. Impuestos o aranceles, o de donde saldrán los ingresos (con énfasis en el impacto al lector, y una comparación con el impuesto actual)

4. Gastos más importantes (con los cortes o aumentos más grandes en los distintos departamentos)

5. Consecuencias (impacto en el gobierno o agencia, como por ejemplo recortes de personal, o de servicios, etcétera)

6. Comparación histórica (cómo es este presupuesto comparado con el año anterior o con los años recientes)

7. Reacción de los funcionarios y la gente afectada por aumentos o recortes

8. Explicaciones de cualquier lenguaje técnico

Este es un ejemplo del tipo de artículo presupuestario que usted deber evitar. Esta inundado de estadísticas, pero no explica cómo el presupuesto afectará a lector.

El presupuesto de 1997 recomendado para la ciudad de Rockville requerirá un aumento de los impuestos de propiedad de 2.56 millones.

El administrador general de la ciudad, Joan Weinman, recomendó al Concejo un presupuesto de \$55,672,309 que requerirá un nivel de recaudación local de 42.59 millones. El presupuesto del año pasado fue de \$50,322,409 y requirió una recaudación de 42.03 millones.

Un millón representa \$1 de impuesto por cada \$1,000 del valor de la propiedad.

Weinman está recomendando un aumento salarial del 3 por ciento para los empleados de la ciudad. Ella también está recomendando agregar cinco oficiales de policía al departamento de seguridad pública.

Este es el lead en otro reportaje sobre un presupuesto, pero este explica el impacto en los dueños de casas:

HACKENSACK, New Jersey -- Un presupuesto de \$39.2 millones que le dará a los dueños de casas su primera reducción de impuestos en 20 años fue adoptado por el Concejo.

El presupuesto, que incluye \$4 millones en ayuda de parte del gobierno estatal, fue aprobado el lunes con cuatro votos a favor y uno en contra, después de una audiencia pública. Ningún residente comentó durante la reunión.

A pesar de un aumento del 6 por ciento en gastos, la ayuda del estado significa que el impuesto de una casa valorada en \$180,000, el promedio en la ciudad, se reducirá por \$54 al año.

Tom Topousis, *The Record*, Hackensack, N.J.

Tomado de "Writing and Reporting News," editado por Carole Rich, 2da edición, Wadsworth Publishing Company, Universidad de Kansas, 1997.

Darrell Huff

INTRODUCCIÓN

Los promedios y las relaciones, las tendencias y los gráficos no son siempre lo que parecen. Puede haber más de lo que ven los ojos y puede haber mucho menos. El lenguaje secreto de las estadísticas, tan atrayente a una cultura que se apoya en los hechos, se emplea para causar sensación, deformar, confundir y simplificar en demasía. Los métodos y los términos estadísticos son necesarios para informar sobre los datos masivos de las tendencias sociales y económicas, las situaciones de los negocios, las encuestas de opinión, y los censos; pero sin escritores que utilicen las palabras con honradez y precisión y sin lectores que sepan lo que significan, el resultado no es más que pura semántica sin sentido alguno.

Este libro es una especie de rudimento sobre la manera de utilizar las estadísticas para engañar. En conjunto puede parecer un manual para desaprensivos. Quizá pueda justificarlo como aquel ladrón retirado que con la publicación de sus recuerdos ofrecía un curso para graduarse en el arte de tirar la piedra y esconder la mano: los desaprensivos ya conocen estos trucos; los hombres honrados deben aprenderlos en defensa propia.

CAPÍTULO 1: La muestra que presenta un factor de influencia en sí misma.

La técnica del muestreo es la espina dorsal de la mayor parte de las estadísticas que usted haya de encontrar en toda clase de temas. La base de esta técnica es simple, aunque en la práctica sus sutilezas han conducido a toda clase de caminos equívocos, algunos de los cuales distan de ser respetables.

Si la muestra es lo suficientemente extensa y bien seleccionada, representará al conjunto con bastante aproximación en la mayoría de los casos. Si no es así, puede ser menos precisa que una hipótesis sensata, y no tiene nada que la apoye, a no ser un aire de aparente precisión científica. Es una triste verdad el hecho de que detrás de lo que leemos o creemos saber están las conclusiones derivadas de muestras subjetivas o demasiado pequeñas, o ambas cosas a la vez.

Cuando lea otra vez que el americano medio (se habla mucho de él, y la mayoría de las veces lo que se dice está poco fundamentado) se cepilla los dientes 1,2 veces al día (cifra que se me acaba de ocurrir, pero que puede ser tan buena como la facilitada por cualquier otra persona), pregúntese ¿Cómo se ha podido averiguar tal cosa?

Cuando los datos han sido filtrado a través de distintas fases de manipulación estadística y reducidos a una media expresada en decimales, el resultado empieza a presentar una aureola de convicción que sólo se vería empañada por una revisión cuidadosa de la muestra.

Para que un informe basado en una muestra tenga valor, debe utilizar una muestra representativa, donde se hayan eliminado todos los posibles factores de influencia.

Examine dos veces lo que lea, y evitará creer una cantidad de cosas que no son verdad. Vale la pena tener en cuenta también, que la representatividad de una muestra puede ser destruida con la mayor facilidad, tanto por influencia de factores visibles como por la de los invisibles. Es decir, incluso en caso de que no pueda demostrarse que existe un factor de influencia apreciable, conserve cierto grado de escepticismo sobre los resultados, siempre que haya una posibilidad de influencia en alguna parte. Siempre la hay.

Para comprobar una muestra tomada al azar se procede según el criterio siguiente:
¿Tiene cada nombre o cosa del grupo total la misma posibilidad de formar parte de la muestra?

La labor de la encuesta de opinión se convierte en una batalla contra las distintas influencias, y libran esta batalla constantemente todas las organizaciones de encuestas con buena reputación. El lector de informes debe recordar que esta batalla nunca se gana. No se debe leer ninguna conclusión en el sentido de que "el 65% de la población es contrario a una u otra cosa, sin formularse la pregunta ¿el 65% de qué población?

Quizá sea más importante recordar que cualquier cuestionario no es sino una muestra (segundo factor) de las posibles preguntas, y que la contestación de la señora no es sino una muestra (tercer factor) de su actitud y su experiencia sobre cada una de las cuestiones.

Supongamos que usted es un entrevistador y le han asignado una esquina de una calle, con una entrevista a realizar. Usted localiza a dos hombres que parecen encajar en la categoría fijada: más de cuarenta años, negros, habitantes de la ciudad. Uno lleva un mono bien remendado y limpio. El otro va sucio y ofrece un aspecto poco amigable. Con intención de terminar pronto su trabajo, usted se acerca al individuo de aspecto más agradable, y todos sus colegas en todo el país toman la misma decisión.

CAPÍTULO 2: El promedio bien escogido.

No puede culparme // Esta es la ventaja esencial de mentir con estadísticas.

Es un truco utilizado con mucha frecuencia, a veces de forma inocente, otras con intención culpable, por individuos que desean influenciar la opinión pública o vender espacio publicitario. Cuando le dicen que algo es un promedio, usted no sabe todavía gran cosa del mismo, a menos de que pueda averiguar de qué promedio se trata: media, mediana o moda.

Otro factor de confusión es que el hecho de que, en algunos tipos de información, todos los promedios son tan semejantes entre sí, que para la información no resulta de vital importancia hacer distinciones entre ellos.

Por esto, cuando usted lea una declaración de un director de empresa o propietario, donde se diga que el salario medio de la gente que trabaja en su empresa es de tanto, la cifra puede significar algo y puede no significar nada.

Con gran facilidad esto puede convertirse en un sistema: cuanto peor es la historia real, mejor aspecto adquiere; vamos a ilustrarlo.

Usted es uno de los tres socios propietarios de una pequeña fábrica. Nos encontramos al final de un año muy bueno. Ustedes han pagado 198 mil dólares a los noventa empleados que cuidan de fabricar y distribuir las sillas o lo que fabriquen. Usted y sus socios se han pagado a sí mismos un sueldo de 11 mil dólares cada uno. Resulta además que hay unos beneficios de 45 mil dólares, a distribuir entre ustedes por partes iguales.

¿Cómo lo representarán? Para facilitar la comprensión, lo expresan en forma de promedios. Como sea que todos los empleados hacen la misma clase de trabajo y perciben un salario igual, no representará gran diferencia utilizar la media o la mediana. El resultado es el siguiente: sueldo medio de los empleados, 2.200; salario y beneficio medio de los propietarios, 26.000. Tiene un aspecto terrible ¿verdad? Probemos de otro modo. Coja 30 mil dólares de la cifra de beneficios y repártalos entre los tres socios y esta vez al promediar los sueldos inclúyase usted y sus socios, y asegúrese de que utiliza la media. Sueldo o salario medio: 2.806,45. Beneficio medio de los propietarios: 5.000. ¡Ah! Esto ya tiene mejor aspecto. Podría conseguirse más, pero no está mal.

Los del Censo tienen formación suficiente y el dinero necesario para conseguir un apreciable grado de precisión en sus encuestas. No todas las cifras que usted ve han nacido en tan felices circunstancias, ni se presentan todas acompañadas de información suficiente para examinar su precisión o imprecisión.

CAPÍTULO 3: Las pequeñas cifras que no aparecen.

Los titulares dicen que entre los usuarios de la pasta de dientes Doakes la frecuencia de caries dentales disminuye en un 23%, y continúan informando de que usted puede vivir con un 23% menos de dolores de muelas. Estos resultados, según podrá averiguar, proceden de un laboratorio "independiente" y prestigioso, y van acompañados de certificación expedida por un perito diplomado. ¿Qué más quiere? A pesar de ello, si usted no es excesivamente crédulo u optimista, recordará por experiencia que una pasta de dientes raras veces es mucho mejor que cualquier otra. Entonces ¿cómo consigue Doakes informar de tales resultados? ¿Puede contar mentiras de tal magnitud? No, ni hace falta que lo haga. Existen maneras más fáciles y efectivas de salirse con la suya.

Hagamos que cualquier pequeño grupo de personas controle sus caries durante seis meses, después sometámoslo al dentífrico de la Doakes. Pueden ocurrir tres cosas: que presente un número mayor de caries, que presente un número inferior o que presente el mismo número aproximadamente. Si se da la primera o la última de las posibilidades, la Doakes and Company archiva las cifras (fuera de todo alcance) y vuelve a probar. Tarde o temprano, por efecto del azar, un grupo experimental presentará una gran mejora, digna de un titular y quizá de toda una campaña publicitaria. Esto ocurrirá tanto si usan el dentífrico Doakes como si emplean perborato sódico o el mismo dentífrico que venían utilizando.

¿Cómo se puede evitar ser engañado por unos resultados inconclusos? ¿Debe cada uno convertirse en su propio especialista en estadísticas y estudiar todo el material en bruto por sí mismo? La cosa no está tan mal como parece, existe una prueba de significación fácil de comprender. Se trata simplemente de un modo de informar sobre las probabilidades de que la cifra del test represente un resultado real y no producido por casualidad. Es la pequeña cifra que no figura, bajo el supuesto de que usted, lector

profano, no la comprenderá, o que sí la comprenderá, en los casos en que fuera necesario ocultar algo.

Suele omitirse otra pequeña cifra cuya ausencia puede ser asimismo perjudicial. Es la que indica la clase a que pertenecen los casos o la desviación que presentan con respecto a la media. A menudo un promedio (tanto si se trata de una media o una mediana, con especificación o sin ella) es una simplificación tan grosera que resulta del todo inservible. No saber nada de una cosa es con frecuencia más saludable que poseer un conocimiento inexacto, pues saber poco de algo puede ser peligrosísimo.

El error está en el proceso de filtración de la información, que comienza en el investigador, pasando por el escritorio sensacionalista o mal informado, hasta llegar al lector, que no encuentra a faltar las cifras desaparecidas durante el proceso. Gran parte de la falsa interpretación puede evitarse si se añade a la "norma" o promedio el dato de la desviación.

Lo engañoso de la pequeña cifra que no aparece es que su ausencia a menudo pasa desapercibida. Esto, naturalmente, es el secreto del éxito.

Esto recuerda demasiado la vieja definición del método de conferencias en clase: proceso por el cual el contenido del libro de texto del instructor se transfiere a la libreta de apuntes del alumno, sin haber pasado por la cabeza de ninguno de los dos.

Dé poca fe a un promedio, un gráfico o tendencia en que falten estas cifras importantes. De lo contrario, estará tan a ciegas como el que escoge un lugar de veraneo partiendo del dato de la temperatura media.

CAPÍTULO 4: Mucho ruido y pocas nueces.

Se suele creer de tal forma en las cantidades concretas que no se cae en que una cantidad es aproximada y que, por tanto, la diferencia entre dos cantidades debe ser suficientemente grande como para concluir que realmente hay una diferencia.

Existen editores de revistas para quienes las encuestas de opinión son el evangelio, sobre todo porque no las comprenden. Cuando los resultados a su disposición indican que un 40% de lectores se interesan por un artículo y el 35% se interesan por otro, piden más artículos como el primero. La diferencia entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento de lectores puede ser importante para una revista, pero la diferencia de la encuesta posiblemente no sea real.

CAPÍTULO 5: El gráfico exclamativo.

Existe cierto temor ante los números. Quizá sufrimos un trauma originado por las matemáticas del bachillerato.

Cuando los números en forma tabular son tabú y las palabras no van bien, como ocurre a menudo, solamente queda una solución: dibujar un cuadro estadístico.

Para impresionar con un gráfico, mostrando una tendencia leve como algo muy importante, síganse estos pasos: (1) recorte la parte inferior de la gráfica y (2) estire el eje vertical para exagerar la diferencia.

Ahora que usted ya ha practicado en el engaño ¿Por qué limitarse a esa mutilación? Existe todavía un truco que vale lo que doce como éste. Con él podrá conseguir que el modesto aumento del 10% parezca mucho más deslumbrante de lo que habría de parecer un aumento real del 100%. Modifique simplemente la proporción entre las ordenadas y las abscisas. No existe ninguna regla que lo prohíba y proporciona mejor aspecto a su gráfico.

Las gráficas facilitan una ilusión de objetividad que es fácilmente explotable desde el engaño.

CAPÍTULO 6: El personaje de la gráfica.

El padre de todos los gráficos descriptivos es el gráfico normal de barras, método simple y bien conocido para representar cantidades cuando hay que comparar dos o más. El gráfico de barras puede ser un engaño también. Mire con recelo cualquier versión en donde las barras cambien de anchura, o de longitud, mientras continúan representando el mismo factor, así como cualquier gráfico que represente objetos de tres dimensiones cuyos volúmenes no puedan compararse con facilidad.

Los objetos gráficos se manipulan con frecuencia. A decir verdad (naturalmente, eso es lo que no deseo decir), quiero que usted infiera algo y se quede con una impresión exagerada, pero que no me coja en mis trucos. Existe un modo; es el utilizado a diario para enredarle.

En lugar de barras, ponga objetos tridimensionales, pero considere sólo la altura para representar la variable. Las tres dimensiones a un tiempo se expresan en unidades al cubo, lo que provoca una impresión visual muy exagerada.

Algunas de estas cosas pueden ser causadas por defectos del dibujo, pero es muy probable que haya gato encerrado. Cuando todos los errores son a favor del cajero, uno no puede dejar de extrañarse.

CAPÍTULO 7: La cifra indirectamente relacionada.

Si no puede probar lo que desea, demuestre otra cosa y haga ver que es lo mismo. En el deslumbramiento que sigue al choque de las estadísticas con el cerebro humano, casi nadie se dará cuenta de la diferencia. La cifra que se relaciona indirectamente es un truco garantizado que le será de utilidad. Siempre lo ha sido.

Usted no puede demostrar que su preparado cura los resfriados, pero puede publicar (en grandes letras de molde) un informe, con la garantía de un laboratorio, asegurando que una onza de este producto mata 31.108 gérmenes en un tubo de ensayo en once segundos. Si lo hace, asegúrese de que el laboratorio posea una fama reconocida o un nombre impresionante. Reproduzca el informe en su totalidad. Fotografíe a un doctor en bata blanca y coloque su fotografía al margen del informe. Pero no haga mención de los distintos trucos que ha empleado. No es asunto suyo (¿verdad?) hacer constar que un

antiséptico que da buenos resultados en el tubo de ensayo, tal vez no cause efecto alguno al hombre, después de haber sido diluido convenientemente para evitar que queme el tejido de la garganta. No comprometa el éxito diciendo qué clase de gérmenes destruyó ¿Quién sabe cuáles son los gérmenes causantes de los resfriados, sobre todo cuando cabe la posibilidad de que no sea ningún germen? En resumen, no se conoce ninguna relación entre los gérmenes introducidos en un tubo de ensayo y la causa de los resfriados, pero la gente no va a hilar tan fino cuando ha de sonarse.

O cojamos este ejemplo: el 27% de una extensa muestra de eminentes médicos fuma más Throaties que cualquier otra marca. La cifra puede estar falseada por muchas causas, pero esto no tiene ninguna importancia. La única contestación a una cifra que presenta tan poco fundamento es ¿Y qué? Con todos mis respetos hacia la clase médica, ¿acaso los médicos saben más que usted acerca de las marcas de cigarrillos? ¿Poseen alguna información privada que les permita escoger el cigarrillo menos nocivo entre todos? Claro que no la poseen, y su médico sería el primero en decírselo. A pesar de ello, este 27% se las arregla de un modo u otro para sonar como si significara algo (Yo: incluso, no sabemos nada del 73% restante. Imaginemos, por un momento, que el 73% de los médicos que fuman recurren a cualquier cosa que no sea Throaties, porque consideran que éste es especialmente nocivo para la salud).

Usted puede demostrar que el tiempo despejado es más peligroso que la niebla. Ocurren más accidentes cuando el tiempo está despejado, porque hay más días despejados que días de niebla. Con todo, conducir cuando hay niebla puede ser mucho más peligroso.

Si compro un artículo cada mañana por 99 centavos y lo vendo cada tarde por un dólar, habré conseguido solamente un 1% sobre el total de las ventas, pero el 365% sobre el dinero invertido al cabo de un año.

El porcentaje de mortalidad en la Marina durante la guerra entre Estados Unidos y España fue de 9%. El de la población civil de Nueva York durante el mismo periodo fue del 16%. La recluta de voluntarios para la Marina utilizó estas cifras para informar que era más seguro estar en la Marina que en tierra firme. Admitamos que las cifras son ciertas; seguramente lo son. Piense un momento y vea si puede hallar por qué no tienen sentido, al menos en cuanto a la conclusión deducida por los encargados del reclutamiento. Los grupos no son comparables.

CAPÍTULO 8: El post hoc aparece de nuevo.

Cuando existen varias explicaciones razonables para un mismo hecho, nada le autoriza a usted a escoger la que satisfaga a su gusto, e insistir sobre la misma, pero mucha gente lo hace. Así, puede que dos variables, A y B, estén relacionadas porque A causa B, porque B causa A, porque existe una cadena de causas y efectos entre ambas o porque las dos son consecuencia de otra variable.

Partiendo de una muestra reducida, existe probabilidad de hallar alguna correlación sustancial entre cualquier par de características o hechos cualesquiera.

Quizá el más engañoso es el caso tan corriente en que ninguna de las variables tiene efecto alguno sobre la otra, pero existe a pesar de todo una correlación real. Utilizando este medio se ha llevado a cabo mucho trabajo sucio. Como ejemplo de correlación

absurda o falseada sobre un hecho estadístico real, un gracioso señaló que existe una estrecha correlación entre los salarios de los ministros de la iglesia presbiteriana de Massachussets y el precio del ron en La Habana.

Otra cosa que debe vigilarse es la conclusión según la cual resulta que una correlación va más allá de los datos utilizados para demostrarla. Es fácil demostrar que cuando más llueve en una zona, más crece el trigo e incluso mayor es la cosecha. Pero una temporada de intensas lluvias puede dañarla e incluso destruirla.

El profesor Helen M. Walker ideó una divertida historia para probar el absurdo implicado en la afirmación de que debe existir causa y efecto cuando dos cosas varían al mismo tiempo. Al investigar la relación entre la edad y algunas características de las mujeres, empieza por medir el ángulo formado por sus pies al andar. Hallará que el ángulo tiene tendencia a ser mayor entre las mujeres de mayor edad. Al principio quizá se le ocurra pensar que las mujeres envejecen porque separan los pies.

CAPÍTULO 9: Cómo ‘estadistiquear’

El informar mal, utilizando material estadístico, podría llamarse manipulación estadística, y resumiéndolo en una sola palabra (aunque no sea muy buena), estadisticulación.

Sea quien sea el culpable en un caso determinado, se hace difícil achacarlo a su incapacidad inocente. Mientras los errores estén todos de una parte, no es fácil atribuirlos a falta de conocimiento o a la casualidad.

Para conseguir un aire de precisión científica que dará consistencia a la estadística más fraudulenta, emplee los decimales.

Los porcentajes son terreno fértil para la confusión y al igual que los decimales que siempre impresionan, pueden proporcionar una aureola de precisión a lo inexacto.

Cualquier cifra de porcentaje basada en un pequeño número de casos tiene muchas probabilidades de ser engañosa. Es más informativo dar la cifra misma. Y cuando el porcentaje llega a expresarse en decimales, empieza a recorrerse la escala que va de lo absurdo a lo fraudulento.

Al calcular el porcentaje de beneficios, se pueden elegir entre varios métodos (y se tiene la obligación de indicar qué método se utiliza).

Mucho ruido y trapacería resulta de añadir cosas que no son sumables pero simplemente lo parecen. Durante generaciones, los niños han venido utilizando un truco para demostrar que no van a la escuela. Quizá usted lo recuerde. Partiendo de 365 días al año, puede restarles 122 por el tercio del tiempo que pasa en la cama y otros 45 por las tres horas que emplea diariamente en comer. De los 198 días que quedan quite 90 para las vacaciones de verano y 21 para las vacaciones de Navidad y Pascua. Los días restantes no alcanzan ni a cubrir los sábados y domingos.

La grande y despreciable mentira aparece también en todas las huelgas. Cada vez que hay una huelga, la Cámara de Comercio anuncia que la huelga cuesta tantos millones de

dólares al día. Obtiene la cifra sumando todos los coches que se hubieran fabricado si los huelguistas hubiesen trabajado todo el tiempo. Se añaden las pérdidas de los proveedores. Se añaden todas las pérdidas posibles, incluyendo las tarifas de aparcamiento y las pérdidas de los vendedores.

Otro terreno fértil en engaños es la confusión entre porcentaje y puntos de porcentaje. Si sus beneficios ascienden al 3% sobre la inversión un año y 6% al año siguiente, hará que suene muy modesto llamándolo un aumento de tres puntos de porcentaje. Con la misma validez podía haberlo descrito como un aumento del cien por cien. Las encuestas de opinión pública juegan libremente con estos dos sistemas.

Este año la leche ha bajado 10 centavos y el pan ha subido 10 centavos. Ahora ¿qué desea probar? ¿Que el coste de la vida ha aumentado? ¿Que el coste de la vida ha bajado? ¿O que no ha habido cambio?

Considere el año pasado como el período base, haciendo que los precios de entonces representen el 100%. Como sea que el precio de la leche ha bajado a la mitad (50%) y el precio del pan se ha doblado (200%) y el promedio de 50 y 200 es 125, los precios han subido un 25%. Probemos ahora otra vez, tomando el año actual como período base. La leche costaba el 200% de lo que cuesta ahora y el pan se vendía al 50%. Promedio: 125%. Los precios eran un 25% más elevados de lo que son ahora.

El hecho es que, a pesar de su base matemática, las estadísticas son tanto un arte como una ciencia. Muchas manipulaciones e incluso tergiversaciones son posibles dentro de los límites de su jurisdicción. A menudo, el experto en estadísticas debe escoger entre distintos métodos, lo que no deja de ser un proceso subjetivo, y hallar el que debe utilizar para representar los hechos.

CAPÍTULO 10: Cómo enfrentarse con las estadísticas.

Hasta aquí, me he dirigido a usted como si yo fuera un pirata deseando instruirle en el manejo del trabuco. En el capítulo que cierra este libro, voy a prescindir de este truco literario. Voy a referirme al propósito serio que creo que puede entrever bajo la superficie de este libro; explicando cómo debe mirarse una estadística falseada, y desenmascararla; y aún más importante, cómo reconocer los datos útiles y ciertos entre la marejada de fraudes a los cuales he dedicado los capítulos anteriores.

¿Quién lo dice?

Lo primero que debe mirar es en qué sentido puede estar influida la información. Busque la influencia consciente. Busque con atención la influencia inconsciente. A menudo es más peligrosa.

Tal vez haga falta por lo menos una segunda inspección para enterarse de quién lo dice.

Cuando se cite un nombre O.K. (el nombre de una institución con prestigio, por ejemplo), asegúrese de que la autoridad está detrás de la información, no como algo presentado al lado de la misma.

¿Cómo lo sabe?

Usted como lector no puede aplicar test de significación o llegar a conclusiones exactas sobre la idoneidad de una muestra. Sin embargo, sobre muchísimas de las cosas aducidas en un informe, podrá decir con una mirada (quizá una mirada insistente) que no hubo suficientes casos para convencer a un individuo racional de nada en concreto.

No siempre le dirán el número de casos. La ausencia de esta cifra, en particular cuando la fuente de información es parte interesada, es suficiente para sospechar del conjunto.

Muchas cifras pierden significado al faltar el término de comparación.

A veces se mencionan los porcentajes, omitiendo el material numérico de base, lo cual también puede inducir a engaño.

Si le dan un índice, pregunte usted qué falta. Tal vez sea la base, escogida con objeto de tergiversar el resultado.

¿Dio alguien cierto giro a la información?

Cuando compruebe una estadística, busque la posible tendencia que alguien haya introducido en las cifras totales o en las conclusiones. Con frecuencia se da a conocer una cosa en lugar de la otra.

Pasan cosas raras cuando las cifras están basadas en lo que dice la gente... hasta cuando se trata de hecho objetivos al parecer. Los datos del Censo han demostrado que hay más personas de treinta y cinco años, por ejemplo, que de treinta y cuatro o treinta y seis. Esta falsa imagen se debe a que el miembro de la familia que informa de las edades de los demás tiende a redondearlas a múltiplos de cinco. El modo de contrarrestarlo es pedir que sean consignadas las fechas de nacimiento.

La modalidad post hoc es otro modo absurdo y pretencioso de cambiar la idea sin que lo parezca. El cambio de un hecho que se da justamente con otro, es presentado como si uno de ellos fuera causa del segundo.

A veces se emplea la semántica para cambiar la idea.

¿Tiene sentido?

Esta pregunta rebajará la importancia de la estadística cuando el galimatías se base en un supuesto no probado. La historia de siempre: las estadísticas se falsean en las propias narices del lector. Se publican solamente porque la magia de los números anula al sentido común.

Hallamos un ejemplo en el cálculo de un famoso urólogo según el cual hay en EEUU ocho millones de casos de cáncer de la próstata; lo que sería suficiente para pronosticar 1,1 glándulas carcinomatosas a cada uno de todos los varones que están en la edad susceptible de contraer esta enfermedad.

La cifra de impresionante precisión contradice a veces al sentido común.

Las extrapolaciones son útiles, particularmente para la forma de predicción llamada previsión de tendencias. Pero al examinar las cifras o los gráficos derivados de las mismas, debe tenerse presente una cosa: la tendencia actual tal vez sea un hecho, pero la tendencia futura sólo puede predecirse mediante una hipótesis razonable, llevando implícita que "siempre que lo demás siga igual" y que "las tendencias actuales continúen" De un modo u otro, sin embargo, todo se niega a permanecer igual; de lo contrario, la vida sería demasiado monótona.

© *Sala de Prensa 1997 - 2008*

Cuidado con las encuestas

Estos consejos son del Consejo Nacional de Encuestas Públicas de Estados Unidos.

1. **¿Quién hizo la encuesta y quién pagó por ella?** La gente no paga por encuestas solo porque son curiosos. Descubra si fue un partido político, talvez tratando de hacer quedar mal a la oposición. Examine si fue un grupo de interés público que trata de demostrar una posición u otra. Deje que su audiencia sepa lo que descubra.
2. **¿Cómo seleccionaron a los entrevistados?** Dígale al lector si el que hizo la encuesta uso una muestra escogida al azar, que se basa en una probabilidad, o una muestra científica. Las encuestas basadas en entrevistas en la calle, no importa cuanta gente sea entrevistada, no tienen validez científica; la muestra es demasiado pequeña y la oportunidad para errores es demasiado grande. Las muestras de la calle es una muestra escogida al azar solamente de un puñado de gente.
3. **¿Cómo fueron contactados los entrevistados?** ¿Pueden los encuestadores conseguir una buena representación si usaron el teléfono en las áreas donde solamente una casa en cada 15 tiene un teléfono? ¿Fueron al campo o solo estuvieron en la ciudad? ¿Fueron a los asentamientos?
4. **¿Cuándo fue hecha la encuesta?** Esto es importante porque las respuestas pudieron haber cambiado. Por ejemplo, la encuesta pudo haberse hecho antes de que el presidente diera un discurso importante que cambió la opinión pública.
5. **¿Cuál es el margen de error?** Esto debe ser proporcionado por la compañía encuestadora. El Consejo Nacional de Encuestas Públicas dice que un margen de error de 3 puntos en una encuesta nacional significa que si se hubiera entrevistado a cada adulto en la nación usando las mismas preguntas, las respuestas de la encuesta quedarían tres puntos más o tres puntos menos de donde están. Esto es importante para encuestas talladas cerca de las elecciones, donde un candidato aparece como favorito por solamente algunos puntos.

Tomado de: ICFJ Media Tips, Volumen I, segunda edición, 1996

Estrategias para una buena entrevista

Reporteros veteranos pueden recordar fácilmente esas primeras y difíciles ocasiones en su carrera, cuando sentían que habían sido engañados o manipulados por la gente a la que entrevistaron.

"Quisiera haber sido más vivo", es una reacción común entre periodistas experimentados que recuerdan sus etapas tiernas. Ahora admiten que sus primeros entrevistados "usaron trucos sucios" para conservar la ventaja durante la entrevista.

En algunas culturas, los reporteros tienden a ser muy dóciles con funcionarios públicos y la gente de edad, no conocen las técnicas modernas de la entrevista, o simplemente temen las consecuencias de hacer ciertas preguntas.

Aprovechándose de estos problemas, un político astuto, por ejemplo, tiene el lujo de moverse de un extremo (respondiendo con una larga declaración que no dice nada) al otro (dando sólo respuestas de sí o no).

¿Pero qué otros trucos debemos saber y cómo podemos contraatacar?

1. Cuando el entrevistado tome una postura agresiva, acusando a la prensa en general (por ejemplo, "Ustedes nunca lo pueden citar a uno de forma correcta" o "Ustedes solo están interesados en malas noticias y en joder a la gente"), intenta mantener la calma. Déjenlos expresar sus quejas y después continúen con la entrevista en una forma cordial.
2. Cuando un entrevistado le de vuelta a la pregunta tratando más bien de convertirse en quien hace las preguntas, (por ejemplo, preguntando "Y vos qué opinas?" o "Vos qué hubieras hecho?"), usted puede contestar, "Estoy seguro que a nuestros lectores les interesa mucho mas su opinión sobre eso".
3. Cuando un entrevistado intente hablar solo *off the record*, usted puede explicar la necesidad de atribuir las declaraciones y empujarlo a que el hable *on the record* para agregar a la credibilidad de la información. O sino, trate de regresar al tema más tarde preguntando de otra forma para conseguir la información. Usted también puede negarse a tomar la información *off the record*.
4. No te dejes intimidar por entrevistados malcriados que se echan a la ofensiva diciendo cosas como "Esa es una pregunta estúpida", o "No sabes nada de este tema", o "Esto no es asunto tuyo". Mantené la calma. Deciles las fuentes que has consultado antes de hacer esta pregunta. Explicá porqué la respuesta a la pregunta es necesaria.
5. Muchos entrevistados se salen del tema como una forma de esquivar una pregunta. Dejalos que hablen por un rato y buscá por cualquier información útil que pueden revelar inadvertidamente. Si no, intenta atraerlos suavemente de nuevo a la pregunta original diciendo, "Eso esta interesante, pero..."
6. Otros entrevistados se tratan de zafar dando respuestas de "sí" o "no". Para ponérselas difícil, hace preguntas que no se puedan contestar con una palabra, o podes decir "Podría explicarme más?" o "Porqué dice eso?"

7. Una de las táctica más populares para confundir a un reportero es usar jerga (política, económica, científica, etc.). Pero no dejes que te dejen perdido. Paralos y exijí una respuesta en lenguaje que tus lectores o televidentes pueda entender.

8. Indicando que están interesados en la exactitud de lo qué se va a decir sobre ellos, algunos entrevistados insisten en ver el reportaje antes de que se publique. Si la política de tu empleador lo permite, podes comprobar los puntos más importantes con ellos por teléfono.

9. Un entrevistado puede tener sospechas sobre cuanto sabes del tema en discusión, y por lo tanto puede ser que no te tome seriamente. Preparate. Averiguá lo más que podas antes de la entrevista. Pero compartí tu conocimiento con el entrevistado sin tampoco pasar como "sabihondo."

10. Tampoco te pases de tonto. Si lo haces, una de dos cosas puede suceder: la fuente te considerara poco profesional y rechazará perder su tiempo con vos; o puede ser que te utilicen como vehículo para publicar sus opiniones.

11. Finalmente, se puede ser provocativo sin ser pleitista. Decile al entrevistado lo que sus críticos dicen sobre él, pero no les des tu propia opinión. Recordá que estas allí para buscar información, no para pelearse con nadie.

Tomado de: ICFJ Media Tips, Volumen I, segunda edición, 1996

Los sitios web gubernamentales como herramientas del control social y del periodismo investigativo

Sandra Crucianelli

Introducción

La transparencia no se proclama. Se demuestra. Un monitoreo de 160 sitios Web gubernamentales en cuatro países centroamericanos relevó un mejor posicionamiento para Panamá, respecto de El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero al mismo tiempo, una tendencia al no cumplimiento de las metas y compromisos asumidos en materia de gobierno electrónico.

El caso de Nicaragua es particularmente grave, por cuanto pudo comprobarse que documentos públicos que se encontraban disponibles en línea hasta diciembre del 2006, a partir del 2007 han desaparecido.

En este país, al momento del monitoreo de la Iniciativa Voluntaria para la Transparencia (EVA) realizado en Managua durante el 2006, los seis sitios Web del gobierno que formaron parte de ese Proyecto, mostraban fortalezas que hoy desaparecieron. Donde se observa más drásticamente este hecho es en el sitio del FISE, Fondo de Inversión Social para la Emergencia, que reportaba en el 2006 un 75 % de funcionalidad, mientras que en la presente medición apenas alcanzó el 17 %, acaso uno de los porcentajes más bajos de los 160 sitios monitoreados en los 4 países centroamericanos.

Lo que se está diciendo aquí es que documentos virtuales, de interés para el reportero y por ende, el ciudadano, han desaparecido de estos sitios. Lamentablemente, analizados en su conjunto, los sitios Web de Nicaragua muestran sesgos cercanos a las herramientas virtuales de propaganda política y no a las vías modernas para acercar información valiosa al ciudadano responsable, el que ejerce el control social.

Esta investigación, realizada entre julio y septiembre de 2007, monitoreó 160 sitios Web gubernamentales a razón de 40 por país, por lo que previamente se diseñó un método de cuantificación de variables de calidad, funcionales a las tareas del reportero investigador y el control social, ya que hasta el momento no se contaba con esa herramienta.

La herramienta, no se basa en normas de calidad de referencia, desarrolladas como parte de las iniciativas de Gobierno Electrónico, ya que éstas no fueron diseñadas con las metas de satisfacer las necesidades informativas del ciudadano, promover el control social y brindar acceso pleno a información pública virtual de importancia para el reportero investigador.

Por eso, la mirada en el diseño de las variables, está enfocada en aquello que un periodista de investigación o un ciudadano, esperarían encontrar en sitios de esta naturaleza.

Ficha de medición

Región: Centroamérica

Cantidad de Países Relevados: 4

Países: El Salvador, Panamá, Honduras y Nicaragua

Fecha de la medición: 3 al 10 de septiembre de 2007

Cantidad de sitios Web gubernamentales totales: 160

Cantidad de sitios Web gubernamentales por país: 40

Lista de sitios por país: Se utilizó el Software Copernic para la recuperación electrónica de los dominios gubernamentales de cada país.

Metodología de Selección de Sitios: Aleatoria, por sorteo simple sin reposición, hasta completar la posición número 40.

Variables analizadas: 12, más el registro del año correspondiente a la última actualización, con relación a datos funcionales al control social o investigación periodística.

Metodología del análisis

Los sitios Web de los gobiernos, a través de iniciativas relacionadas con el gobierno electrónico, pueden constituirse en herramientas efectivas para:

1. Mejorar el acceso a la información.
2. Favorecer la obtención de documentos oficiales por parte de los periodistas.
3. Promover el control social y constituirse en herramienta practica para transparentar los actos de gobierno.

Para el caso de los cuatro países en estudio, las barreras para la obtención de documentos públicos usando la vía electrónica, evidenciaron al momento de realizar esta investigación, limitantes en materia de acceso.

Aunque Panamá muestra avances en esta materia y estando en vigencia su Ley de Acceso a la Información (Ley de Transparencia), no podemos obviar el hecho de que más de 100 reporteros, en los 4 países, que habían tomado capacitaciones durante el 2006 en torno a este tema, manifestaron no percibir interés político por entregar documentos públicos al ciudadano y por ende al periodista, sea por la vía física, sea por la vía virtual.

Así las cosas, la entrega de documentos públicos, como regla general, continúa dependiendo más de la voluntad de quien los entrega, que del apego a la norma jurídica.

Esta limitante se manifiesta en las insuficientes partidas presupuestarias asignadas para la atención de oficinas de acceso a la información en diferentes estamentos del gobierno. Esto alcanza también a las propuestas de gobierno electrónico, todavía en incipiente desarrollo

para Honduras, El Salvador y Nicaragua, no así Panamá, que, como ya se dijo, muestra un mayor grado de avance en este sentido, aunque tampoco es el ideal.

Esto quiere decir que, haciendo esta salvedad, el volumen de documentos públicos que un reportero panameño podía encontrar en sitios Web del Gobierno de ese país, a la fecha de este reporte, era mucho mayor que el volumen de documentos públicos en línea que podía encontrar un reportero de Honduras, El Salvador y mucho menos en Nicaragua, donde por el contrario, se observó un notorio deterioro en esta materia, desde 2006 a septiembre del 2007.

Variables Estudiadas

La fiscalización periodística mediante técnicas documentales es un eje vital para la promoción de la Transparencia y la Gobernabilidad, por cuanto promueve el control social.

En tiempos de la Internet, los sitios Web de los gobiernos intentan ser la réplica de las oficinas físicas del Estado, por lo que la documentación contenida en los mismos adquiere la característica de pública y oficial.

En aras de esta función propia del periodismo, la del perro guardián de la sociedad, se monitorearon 40 dominios gubernamentales en cuatro países centroamericanos: Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Para ello, fue necesario diseñar un modelo de cuantificación mediante el diseño de variables, funcionales a la labor periodística, y por ende al control social.

Hay que destacar que estos parámetros, si bien guardan estrecha relación, no son idénticos a los que frecuentemente se utilizan en el marco de los proyectos de Gobierno Electrónico. En esos casos hay otras normas de calidad, ya que el objetivo es diferente y tiende a la modernización del Estado, convirtiendo a estos dominios no en meramente informativos como lo son muchos al presente todavía, sino en transaccionales; es decir, en plataformas virtuales capaces de permitir el acceso a la información, pero también de facilitar las acciones que incentiven el comercio, la industria, el cumplimiento con el fisco, etc.

Pero la cuestión que nos ocupa es de otra naturaleza. Tiene como meta cuantificar la funcionalidad de estos sitios respecto de lo que un periodista espera encontrar en aquellos, del mismo modo que lo haría un ciudadano deseoso de ejercitar el control social de las acciones de gobierno.

Cuando la variable reunía las condiciones de funcionalidad requeridas se asignó un punto; caso contrario, cero.

Las variables diseñadas y bajo estudio posterior resultaron:

1. MS = Mapa del sitio: Es imprescindible para que el investigador no se pierda dentro de la página o del portal. Debe ofrecerse completo y de fácil localización visual en la página de inicio. El mapa de sitio es como una brújula en el mar y desde esta posición la

búsqueda de información se simplifica y por ende se aumenta el acceso a la misma.

2. FC = Fuente de contacto: Los nombres y apellidos completos de todos los funcionarios, con su cargo respectivo en la oficina relevada. Esta variable es muy importante, aunque generalmente pasa desapercibida. La tarea del periodista va mucho más allá de recuperar información por la vía electrónica y acercarle esos datos al público.

El periodista debe garantizarle a su audiencia la vigencia de los datos que maneja, apelando al chequeo correspondiente, así como garantizar una correcta interpretación que requiere una práctica cuidadosa en el entorno digital. En razón de esto, los sitios Web oficiales deben disponer de vías identificables para corroborar la vigencia de la documentación en línea. Los formularios electrónicos impersonales no son adecuados para tal fin y por ende es necesario que la oficina mantenga a la vista la nómina de funcionarios, que serán las personas -de carne y hueso- responsables por la información que se proporciona en línea al reportero. El no considerar este requisito ubicaría al periodista en el escenario de las fuentes “generales”, las cuales tienen el sesgo del anonimato, impropio para la documentación profesional.

3. ML = Marco legal: El reportero investigador tiene por misión ir detrás de verdades sociales importantes que están relacionadas con un asunto ilegítimamente secreto. Hay una vinculación directamente proporcional entre esa “ilegitimidad” y el incumplimiento de las leyes en vigencia. Por esta razón el investigador debe encontrar de manera rápida y sencilla, las leyes o decretos que regulan el funcionamiento de las tareas que cada oficina del Estado.

4. PS = Presupuesto de la oficina: Es una pauta de calidad directamente proporcional a la Transparencia en la gestión pública. Cada oficina del Estado debería mostrar su presupuesto, desglosado en partidas y sub-partidas, tanto el diseñado como el ejecutado. La condición de idealidad está dada por la presencia de aquel documento que reporte actualización al último semestre o trimestre, respecto de la fecha en la que se realiza la búsqueda.

5. SD = Sueldos de los funcionarios (documentados). Es otro parámetro de Transparencia. Las escalas salariales, así como datos de las plantillas de empleados públicos, permiten el control social tanto de la planta estable como de la contratada o temporal. Análisis de escalas salariales y plantel político designado pueden ayudar, en el marco de lo que se conoce como “tráfico de influencias”, tema de habitual abordaje en periodismo de investigación. Generalmente enlaces de “Transparencia” conducen a estas planillas; por eso es importante que los enlaces citados estén visibles y completos. Se asigna un punto a esta variable cuando se encuentran las direcciones de correo electrónico de los principales funcionarios de la oficina pública, de modo que quien consulta la información pueda ponerse en contacto directo con esa fuente.

6. CO = Consultas en línea: Cuando se pueden consultar bases de datos públicas conforme diferentes criterios; por ejemplo la consulta de expedientes administrativos.

7. TO = Trámites en línea: Para el ciudadano, cuanto menos burocracia, mejor. Por ejemplo, imprimir el comprobante de su deuda fiscal resulta importante, pero también lo es

que pueda imprimir el formulario de pago, solicitar un turno hospitalario, radicar una denuncia, inscribirse como proveedor, etc.

8. LP = Listado de Proveedores: Cada oficina debería proveer al ciudadano, y en este caso al reportero investigador, el listado completo de los proveedores a los cuales recurre el Estado a la hora de las compras oficiales. Este listado debe cumplir con ciertos requisitos, siendo indispensable que contenga la fecha de alta de cada integrante del registro, los montos abonados, el tipo de servicio o compra por el que se le pagó y el acumulativo por rango de fechas respecto de cada proveedor. No califican para la asignación del punto a esta variable, aquellos soportes que no permitan la exportación de los datos a Excel para su procesamiento, ni aquellos que no permitan la recuperación electrónica de la lista de proveedores completa.

9. CP = Compras y Licitaciones del Estado: El listado de proveedores es importante, pero estos datos no son suficientes. Es necesario que además se informe al ciudadano qué se compra, a qué precio y cuándo. La variable obtiene un punto cuando del mismo modo aparecen los pliegos de condiciones para las licitaciones de cada oficina, así como los resultados del proceso. En este último caso es importante que el pliego licitatorio sea público y por ende, de fácil acceso, sin necesidad de suscripción previa para la consulta. No califican para el puntaje las oficinas que muestran solo algunas compras (como papel para impresión) y dejan afuera otros insumos de consumo obligado para cualquier dependencia del Estado, como tinta, agua mineral o elementos de limpieza.

10. ES = Estadísticas: Las estadísticas de cada oficina, conforme sea la tarea que cumple, deben estar disponibles y actualizadas. El acceso a las mismas debe ser de fácil visualización. Los formatos para este tipo de consultas deben ser los adecuados y evitarse tanto en esta variable como en cualquiera que contenga datos numéricos, el uso del formato fotográfico o PDF. Los presupuestos, sueldos y compras deben reportarse en formato Excel, evitando el uso de documentos en otros formatos, a menos que sean simultáneos, ya que la información contenida en aquellos que no sean Hojas de Cálculo, no pueden ser exportados de manera sencilla, para un procesamiento propio posterior. Excel siempre debe estar como opción. Esta es una condición necesaria para que se le asigne un punto a la variable.

11. RF = Resoluciones y Fallos: Toda oficina del Estado está sujeta a controles o auditorías. Fallos y resoluciones deben estar en línea. Del mismo modo, si la oficina es autoridad de aplicación en algún área de la provisión de servicios públicos (transporte, agua, luz, gas) o de empresas que están bajo su órbita (como las que producen desechos industriales), los reportes de este tipo de gestión deben estar en línea, debidamente actualizados.

12. AC = Actualización: La funcionalidad de la información que es puesta en línea y por tanto ofrecida al ciudadano, debe estar actualizada, como mínimo, a un semestre de intervalo respecto del momento de la consulta.

Análisis comparativo

Un obstáculo repetido en los 4 países resultó el formato inadecuado en el que suelen presentarse las tablas con información numérica, como Estadísticas y Presupuestos.

A excepción de las fotografías, el formato de imagen GIF no es el adecuado para ofrecer información virtual como gráficos, tablas o resoluciones, a menos que la intención sea que el mismo no sea analizado o procesado a partir de sus datos primarios.

Lo mismo ocurre cuando se apela al formato de PDF. En general se considera a PDF como un formato seguro y adecuado para ofrecer información confiable. Sí lo es, siempre y cuando las estadísticas, tablas y gráficos se ofrezcan en simultáneo en Hojas de Cálculo de Excel o en tablas de Word de fácil procesamiento. El PDF opera como un condicionante del control social. Aunque hay programas informáticos que permiten trasladar los datos a hojas de cálculo, ello establece un escollo indudable en materia de acceso a la información virtual, que los sitios Web gubernamentales deberían evitar si su intención es demostrar acciones de gobierno transparentes.

Otras veces, se observó que la información no está completa: los Indicadores para la Contratación Pública, los Precios Unitarios, las Imputaciones, el Financiamiento Externo, las Transferencias Municipales, son parámetros que deben informarse en detalle, con desglose de partidas. La falta de acceso, por acción u omisión, conspira finalmente contra la Transparencia de toda gestión de gobierno, sea ésta ejecutiva, legislativa o judicial.

La voluntad política por transparentar acciones de gobiernos está directamente relacionada con la entrega de información relacionada con el manejo de los fondos públicos.

Y la conclusión de este estudio resultó que, justamente las 4 variables relacionadas con el manejo de fondos del Estado (Presupuesto, Compras, Proveedores y Sueldos), son las más deficientes en cantidad y calidad de la información proporcionada en línea.

De las mediciones de 40 sitios por país los resultados globales fueron:

	MS	FC	CO	ES	TO	PS	CP	RF	LP	SD	ML	AC	PPT	P %	F
PANAMA	11	25	25	26	19	9	17	28	11	26	38	25	6.5	54	
HONDURAS	13	31	24	21	9	12	14	21	7	7	32	23	5.8	48	
NICARAGUA	6	24	22	16	6	4	3	30	1	0	30	24	5	42	
EL SALVADOR	24	22	18	19	15	7	4	7	2	0	22	15	5	40	
TOTAL	54	102	89	82	49	32	38	86	21	33	122	87			

PPT = Es el Promedio de Puntos que alcanza cada país considerando los puntajes totales alcanzados por cada uno de los 40 sitios.

P % F = Es el Promedio del % de Funcionalidad que alcanza cada país considerando los % de Funcionalidad alcanzados por los 40 sitios.

Del monitoreo resultó que Panamá lideró en 8 de las 12 variables analizadas: Consultas on Line, Estadísticas, Trámites on line, Compras del Estado, Lista de

Proveedores, Sueldos de Funcionarios, Marco Legal y Actualización, que aparecen en la primera fila de la tabla, marcadas en color verde.

Para el Mapa de Sitio el país que mejor cumple es El Salvador (24 de 40 sitios); para el Presupuesto y las Fuentes de Consulta el país que mejor cumple es Honduras (12 de 40 sitios).

Nicaragua solamente lidera en la variable Resoluciones y Fallos.

En cuanto a las expectativas de operaciones transaccionales, exceptuando Panamá, -que viene desarrollando un programa de gobierno electrónico más acentuado-, merece destacarse el avance de El Salvador, con 15 de 40 sitios con puntaje para esta variable, máxime considerando que este recurso virtual hubiera resultado impensado unos años atrás.

Ningún país alcanza en promedio el 75 % de funcionalidad necesaria, básicamente por los bajos puntajes obtenidos en las siguientes variables: Presupuesto, Compras, Proveedores y Sueldos.

Estas cuatro variables están directamente relacionadas con el manejo de los fondos del Estado.

Control del Gasto Público: Con relación a los entes o instituciones encargados de supervisar o controlar el gasto público, los porcentajes de funcionalidad relacionados con las necesidades o expectativas del reportero investigador resultaron conforme ilustra el cuadro:

TABLA PORCENTAJE FUNCIONALIDAD ENTES DE CONTROL

Honduras: 67 % F (Tribunal Superior de Cuentas)

Panamá: 58 % F (Contraloría de la Nación)

Nicaragua: 58 % F (Contraloría de la República)

El Salvador: 50 % F (Corte de Cuentas)

TABLA PUNTAJE POR VARIABLE ENTES DE CONTROL

	MS	FC	CO	ES	TO	PS	CP	RF	LP	SD	ML	AC	PT	%
HONDURAS	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	8	67
PANAMA	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	7	58
NICARAGUA	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	7	58
EL SALV	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	50

De aquí se dedujo que para las 4 variables asociadas a fondos del Estado (PS, CP, LP y SD) el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras mostró 2 de 4 variables con puntaje: Compras y Proveedores, siendo por ello además, el país mejor posicionado; en cambio, Panamá no obtuvo puntaje en ninguna de estas 4 variables, pese a ser el país que globalmente mejores resultados evidenció.

Asimismo, la Contraloría de Nicaragua fue la única de estas 4 oficinas que exhibió los sueldos de sus funcionarios. La Corte de Cuentas de El Salvador fue la única de estas 4 oficinas que exhibió la ejecución de su propio presupuesto actualizado.

Recomendaciones

Con base al panorama observado en los cuatro países que fueron analizados en este monitoreo, se vislumbran como necesarias las siguientes acciones:

1. Difundir conocimientos respecto del uso de las nuevas tecnologías como herramientas para un mejor acceso a la información.
2. El acceso a la información electrónica es un eje esencial para el fortalecimiento de la gobernabilidad. En un mundo digitalizado como el que vivimos, resultarían positivas alianzas entre los grupos de trabajo que promueven el acceso a la información y los que trabajan en iniciativas de gobierno electrónico, a los fines de diseñar programas que se complementen, ya que ambos componentes tienen estrecha relación con la promoción de la Transparencia.
3. Se sugiere promover el control social utilizando Internet mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil, dispuestas a trabajar en este campo.
4. Diseñar modelos de capacitación para reporteros y ciudadanos, empleando los métodos de coaching personalizado, elaborando contenidos específicos por país no solamente teniendo en cuenta las herramientas informáticas en línea, sino además, los temas que son de interés social para cada comunidad. Dentro de este modelo se incluyen las mediciones de acceso a la información virtual y su correspondiente monitoreo.
5. Promover la cobertura del acceso a documentos públicos como tema noticiable, comunicable a las audiencias, mediante investigaciones periodísticas y trabajos de campo.
6. Impulsar investigaciones periodísticas basadas en rastreos documentales en línea y motorizadas por becas, premios o cualquier incentivo relacionado con la capacitación, capaz de atraer el interés de los periodistas.
7. Fomentar la asociación del tema de acceso a la documentación con el concepto de Transparencia y Gobernabilidad. Estas dos áreas aparecen desconectadas, en especial en el ámbito de la prensa y por ende, eso se traduce en el producto que los medios ofrecen a sus audiencias.
8. Mejorar las habilidades informáticas de ciudadanos y periodistas en materia de documentación virtual.
9. Establecer programas de monitoreo de los principales sitios Web de los gobiernos y publicación de los resultados, siendo necesaria en este campo una constante actualización, dada la dinámica que ofrecen los mismos.

10. Fomentar la creación y/o funcionamiento de centros con conectividad a Internet de rápido acceso en ciudades estratégicas fuera de las capitales.

11. Diseñar un proyecto a mediano plazo que permita la recuperación documental de los distintos reportes de interés para el ciudadano y el periodista investigador, que se encuentran dispersos y perdidos en una gran red de sitios gubernamentales. Esta situación suele desalentar las búsquedas y por ende, imposibilita hallazgos documentales relevantes. Podría resultar funcional a esta necesidad la creación de un centro de documentación virtual para cada país, con un motor de búsqueda interno que responda a varios parámetros en simultáneo. Ello podría constituir una herramienta valiosísima a la hora de favorecer el acceso a la información digital.

Sandra Crucianelli es periodista argentina, miembro de FOPEA, especializada en consultoría y profesionalización de periodistas. Actualmente imparte un curso en línea para el Knight Center for Journalism in the Americas. Este estudio fue realizado para Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, y se reproducen sus partes sustanciales.

© Sala de Prensa 1997 - 2008

Desidia detrás de explosión en Puerto Rico



VISTA DE la columna de humo que se levanta por el incendio de varios tanques de la refinería de petróleo de la empresa Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO).

Cortesía Policía de Puerto Rico

***Por Omayra Sosa Pascual y McNelly Torres / CPI
San Juan/ Puerto Rico***

Por más de dos décadas la Caribbean Petroleum Corporation ha sido señalada y multada por \$1.3 millones por las agencias reguladoras debido a serias violaciones ambientales, entre ellas descargas de desperdicios tóxicos al agua, aire y terrenos. Todo ello ha puesto en riesgo la salud y seguridad de los residentes.

Sin embargo, estas mismas agencias federales y estatales han permitido que la empresa continúe operando de manera ininterrumpida por más de 50 años y han incumplido con su responsabilidad de fiscalizar la operación, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La laxitud gubernamental incluye la no realización de inspecciones federales de seguridad ocupacional por casi una década y el no haber establecido el plan de respuesta a desastres que exige la ley federal para proteger a la comunidad.

Las instalaciones, ubicadas en el Parque Industrial Luchetti de Bayamón que explotaron hace 12 días provocando un fuego que duró dos días y medio y que causó descargas de contaminantes a las aguas cercanas, no habían sido inspeccionadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal desde el 2000. Esta es la segunda ocasión en la que las operaciones de CAPECO causan un fuego de grandes proporciones en el área.

“Eso era un desastre en espera de fecha”, aseguró una fuente interna que conoce de cerca la operación, pero que pidió permanecer en el anonimato debido a sus relaciones con la empresa. La fuente, quien visitó la instalación por última vez hace tres años, dijo que lucía deteriorada y que el mantenimiento era pobre.

La causa de la explosión que afectó a 21 de los 40 tanques de almacenaje de combustible aún está bajo investigación. La pesquisa está enfocada en determinar cómo

CAPECO operaba sus tanques, cómo manejaba sus operaciones, y el marco regulatorio vigente en Puerto Rico, reveló Jeffrey Wanko, investigador que lidera el esfuerzo. El análisis, que está a cargo de la Junta de Seguridad y Peligrosidad Química de los Estados Unidos (CSB, por sus siglas en inglés), tiene como principales teorías causales negligencia y error humano ya que la posibilidad de terrorismo fue descartada la semana pasada.

Una revisión de las inspecciones de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), del expediente de CAPECO en la Corte de Quiebras, y entrevistas tanto con expertos en seguridad química como con residentes pintan un cuadro de una empresa que ha estado bajo el escrutinio de la EPA por décadas, y que posteriormente buscó refugio en la protección del Capítulo 11 para aliviar presiones financieras.

A preguntas sobre por qué se le ha permitido continuar operaciones pese a las repetidas violaciones ambientales, José Font, subdirector de la EPA en el Caribe, dijo que la prioridad de la agencia es asegurar que las operaciones sean conducidas según las leyes aplicables.

“Nosotros lo que tenemos es que buscar cumplimiento con la ley”, insistió. Otros hallazgos del CPI incluyen:

- 1993-1997: una de las gasolineras de la empresa en Utuado contamina el río Grande de Arecibo con una descarga de entre 5,000 y 20,000 galones de combustible afectando la salud física y mental de 263 residentes del área, según una sentencia judicial.
- 1998: la EPA impone \$52,000 en multas y penalidades después de que la empresa fuese señalada por violaciones a la Ley de Agua Limpia después del Huracán Georges.
- 1999: la EPA impone \$1.3 millones en multas y penalidades por variadas violaciones. El caso es referido al Departamento de Justicia federal.
- 2001: La empresa y sus subsidiarias buscan refugio a sus problemas financieros en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
- 2008-2009: la Corte de Quiebras ordena el pago de \$1.3 millones en compensación a 30 de los residentes de afectados en el derrame de Utuado.

Expertos señalaron que una empresa con repetidas violaciones ambientales, asediada por problemas financieros y una gerencia que no apoya el mejoramiento de los procedimientos de seguridad crea un sistema frágil, propenso a accidentes que ponen en riesgo la vida de trabajadores y residentes que viven en las comunidades adyacentes.

“En mi opinión son delincuentes que no han sido rehabilitados”, afirmó Rosa Hilda Ramos, líder ambiental y comunitaria de Cataño por más de 20 años, sobre el caso de CAPECO. Agregó que hace años radicó una querrela en OSHA a nombre de un grupo de trabajadores que acudió a ella alegando condiciones inseguras de trabajo y temor a que explotara una caldera, que temían enfrentarse al patrono.

MUCHAS FALLAS

Pese a que los daños a la propiedad de la explosión el pasado 23 de octubre han sido estimados en \$6.4 millones, el daño ambiental aún no ha sido determinado y cuantificado.

Residentes de las comunidades cercanas a la instalación de 179 cuerdas de CAPECO han temido durante mucho tiempo el desenlace de un posible desastre y el impacto en la salud, seguridad y ambiente de dichas operaciones. ``Lo denunciarnos hace décadas, y decían que estábamos locos", aseguró el activista comunitario Pedro Carrión.

PELIGRO

Las refinerías son una de las industrias más peligrosas de Estados Unidos.

Según la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ningún otro sector industrial ha tenido tantos incidentes catastróficos y mortales relacionados a emanaciones de químicos peligrosos como la industria del petróleo. Sin embargo, esa misma agencia no ha inspeccionado a CAPECO desde el 2000, año en que sus inspectores encontraron violaciones relacionadas al manejo de químicos altamente peligrosos y en el mantenimiento de los registros que deben demostrar el entrenamiento adecuado de sus empleados.

Desde mayo de 1992, derrames y emanaciones de químicos peligrosos en refinerías han causado 52 muertes y 250 heridos en EEUU, según la OSHA.

En lo que está considerado como uno de los peores desastres de la industria petrolera, en el 2005 15 trabajadores murieron y 170 resultaron heridos en una explosión y fuego en la BP de la Ciudad de Texas. En el 2007 OSHA lanzó el Programa Nacional de Énfasis para fiscalizar a las refinerías a en EEUU, con inspecciones de todas las instalaciones para asegurar que cumplen con las regulaciones de manejo de seguridad en sus procesos.

Hasta entonces, la agencia, que está a cargo de regular la fuerza trabajadora de los Estados Unidos para prevenir lesiones, enfermedades y muertes relacionadas al trabajo, tenía pocos inspectores que se especializaran en seguridad de refinerías. OSHA no pudo determinar si las refinerías de Puerto Rico han sido inspeccionadas bajo este programa.

VIVEN EN PANICO

Por décadas los residentes de las comunidades pobres aledañas a CAPECO en Puerto Rico tales como Puente Blanco, Cucharillas, Villa Paraíso, Las Palmas, Las Vegas y Juana Matos, han temido un desastre. En el área inmediata, donde casitas de madera y cemento se apiñan entre callejuelas y caños contaminados, y Cataño, el pueblo más afectado, viven unas 30,000 personas, pero el estimado de personas impactadas por las distintas descargas de CAPECO ronda las 400,000 personas, según la líder comunitaria y ambiental Rosa Hilda Ramos. Pero históricamente y durante la reciente explosión estas últimas han mantenido silencio para no afectar el valor de sus propiedades, aseguró Ramos.

Los residentes de los barrios son los que están más cercanos al peligro ya que además están cercados por las tuberías que transportan el combustible desde los tanqueros hasta la CAPECO y las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Viven con miedo a que esta enorme tubería explote y se convierta en un ``aro de fuego''. ``Vivimos asustados. Aquí vivimos en una bomba de tiempo'', afirmó Bárbara Concepción, residente de Cucharillas por más de 20 años. ``Siempre hemos hablado de eso, siempre hemos dicho que va a explotar algún día'', agregó Frankie Olivo, residente de Puente Blanco.

De hecho, la mayoría de los residentes tiene problemas de insomnio desde la explosión del 23 de octubre, según dijeron una decena de entrevistados.

Esta no es la primera vez que las operaciones de CAPECO causan un fuego de grandes proporciones en el área que además contamina el aire y los cuerpos de agua. Hace unos 30 años el caño La Malaria se incendió luego de que un residente quemara un panal de abejas y una chispa cayera en el Caño la Malaria que estaba contaminado y que ubica a unos 10 pies de las casas de la calle Principal, relató el residente Samuel Sánchez Coreano. Según dijo, para la época el cuerpo de agua expedía fuerte olor a petróleo.

Pese a esto y a que desde 1986 existe una ley federal que exige el establecimiento y la divulgación de un plan de respuesta a emergencias que informe al público sobre descargas tóxicas y explosiones, la mayoría de los residentes de estas comunidades no tiene conocimiento sobre el mismo, ni sabe qué hacer en caso de desastre.

Bajo el estatuto, la denominada Ley de Planificación de Emergencia y de Derecho a saber de la Comunidad (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) las agencias locales y estatales tienen que desarrollar un plan de emergencias y proveer al público con un cuadro del posible peor escenario para que los residentes puedan prepararse en la eventualidad de una catástrofe. Ramos sostuvo que ni siquiera ella, quien ha estado al frente de la lucha ambiental en contra de CAPECO por dos décadas y quien formó parte de uno de los comités locales de emergencia, ha visto la versión final del plan.

``La gente no tiene idea'', apuntó y denunció que durante la reciente explosión el plan, que incluye el aviso inmediato a los líderes comunitarios durante emergencias, no fue activado.

Expertos entrevistados puntualizaron que el caso de Puerto Rico no es inusual. ``Apuesto a que los ciudadanos allá (en Puerto Rico) están totalmente ignorantes, y son mantenidos en la oscuridad en cuanto a los posibles riesgos'', señaló Fred Millar, un experto en desastres en plantas químicas y en la prevención de accidentes. Millar es consultor de Amigos de la Tierra, una organización ambiental sin fines de lucro con base en Washington D.C.

``En muchos casos, las comunidades locales no están preparadas para desastres como estos. Esto ocurre mucho más de lo que la gente se imagina'', dijo Miller. ``Nos gusta pensar que estamos seguros'', agregó.

Tomado de El Nuevo Herald /Jueves, 11.19.09

Choquecito puso a Demma en ruta hacia un volcán

Conspirador rumbo a prisión federal

Por Manuel Torres

Domingo 11 de Mayo, 2003

Fue solo un choquecito, uno de los más de 30 accidentes de tráfico rutinarios que las calles atestadas de Jefferson Parish arrojan en un día cualquiera.

En la mañana del 12 de octubre de 1998, Phil Demma conducía hacia el norte en Clearview Parkway, en Metairie, cuando un Cadillac rojo nuevecito no cedió en una esquina cerca de West Esplanade, impactando la camioneta de Demma. Un agente de tránsito investigó pero no multó a nadie. Ambos conductores se fueron en términos amigables.

Pero a pesar que no fue el tipo de incidente que llama la atención, la colisión desató una cadena de acontecimientos que ha puesto a Demma rumbo a una prisión federal, creando dudas sobre el testimonio de un dentista de Metairie, embarrando la reputación del ex juez Ronald Bodenheimer y atacando la ética de uno de los abogados de Demma y la juez Joan Benge, según documentos federales.

Las implicaciones completas del caso se conocieron apenas el mes pasado, cuando Demma confesó en la Corte Federal haber conspirado para influenciar la decisión de Benge en una demanda que Demma presentó después de su choque. En la Corte, Benge le concedió a Demma \$4,275 en daños y honorarios.

Los expedientes de la demanda de Demma, combinados con los de la Corte Federal, revelan detalles no sólo del choque rutinario pero también de cómo este calza en la investigación federal de corrupción en el palacio de justicia de Jefferson Parish. Hasta ahora, solamente Demma se ha declarado culpable de crímenes relacionados originados por el choque.

Benge dijo el mes pasado que su fallo en la demanda no fue el resultado de ninguna influencia inapropiada, sino de su análisis de los hechos y la ley. El abogado de Bodenheimer dijo que el ex juez no será acusado en este caso, como resultado de su acuerdo con el gobierno en la investigación federal. El abogado de Demma en la demanda, su primo Juan Venezia, ha negado conducta ilícita. Y el dentista, otro primo de Demma, de nombre Anthony Trentacoste, no ha comentado sobre el caso. Fiscales del gobierno también se han negado a discutir el tema.

Pero expertos en el palacio de justicia dicen que el interés del gobierno en una pequeña demanda civil muestra el alcance de la investigación del FBI y los extremos a los cuales el gobierno está dispuesto a llegar para examinar la conducta de funcionarios públicos.

"Han habido casos en los cuales gente es condenada en relación con cantidades de dinero muy pequeñas", dijo Shaun Clarke, ex fiscal federal. "La cuestión en la mente de los federales no es si ésta fue una demanda pequeña o grande, sino si hubo impropiedades".

La muela del juicio

Demma empezó su demanda en la Corte de Distrito 24 en Gretna un año después del choque, afirmando que la colisión dañó una de sus muelas derechas e hizo necesario un canal, según expedientes del caso.

Él demandó al conductor del Cadillac, Ray Grantz, y a su aseguradora State Farm, pidiendo \$20,000 en daños y más de \$1,300 para cubrir sus cuentas dentales. Según expedientes de tránsito y testimonios presentados durante el juicio en noviembre del 2001, Demma y un tío, Emile, iban en la camioneta Ford F-150 de Demma, cerca de las 11 de la mañana cuando el carro de Grantz impactó el lado trasero izquierdo de la camioneta. Ambos vehículos sufrieron daños menores en los parachoques, indican los expedientes.

"No fue ningún impacto fuerte ni nada de eso", dijo Grantz esta semana, recordando el caso.

Pero Demma testificó que su camioneta se levantó del pavimento, saltó sobre el frente del carro de Grantz y se viró violentamente hacia un lado antes de caer de nuevo. En la conmoción, dijo, se golpeó la cara en el hombro.

"Creo que me puse tenso y cerré los dientes cuando, vos sabes, me iba a dar", testificó Demma.

Demma al principio dijo que notó una "cierta sensación" de dolor en su muela dos semanas después del choque. Pero unos minutos más tarde testificó que había sentido dolor uno o dos días después del accidente.

Y ahí es donde el juicio se puso raro. Mientras el abogado Joe Messina, de la aseguradora State Farm, interrogaba a Demma, Trentacoste, el dentista, sentado en las bancas la corte de Benge, comenzó a hacer muecas, mordiendo de arriba a abajo, según expedientes de la corte y el recuento de Messina.

"¿Porqué usted está mordiendo y haciéndole gestos al testigo? Salga de mi corte", demandó Benge a Trentacoste, indican los documentos. Él "le estaba diciendo a este testigo cómo contestar la pregunta".

Más tarde, el mismo día, Trentacoste fue permitido nuevamente dentro en la corte para testificar en favor de Demma. Venezia le preguntó si el daño al diente de Demma fue causado por el choque.

"Basado en los elementos que yo -- mis expedientes demuestran, yo creo, que fue probablemente una de las causas de que eso pasara -- en realidad causó la fractura de ese diente", testificó Trentacoste.

El 7 de diciembre del 2001, Benge le concedió a Demma \$2,000 en daños, más \$2,275 para cubrir sus cuentas médicas y legales.

Un ex-abogado de State Farm, David Courcelle, dijo que Demma probablemente merecía más.

"Basado en los detalles del caso y el testimonio, ese fallo fue terrible. Fue bajo", dijo la semana pasada Courcelle, quién no estuvo implicado en la demanda de Demma.

Pero tan ínfimo como ese fallo parezca, \$4,275 es más de lo que Benge creyó que el caso merecía, indica el gobierno.

En un documento que detalla la evidencia del gobierno contra Demma, la Fiscalía dice que Bodenheimer, viejo amigo de Demma, urgió a Benge el 29 de noviembre del 2001 para que concediera daños en su fallo porque Demma y Venezia "estarán allí".

Benge le dijo a Bodenheimer que ella le daría "cero" a Demma, si no fuera por su relación con Venezia. El documento no da más detalles, pero las declaraciones financieras de Benge indican que Venezia contribuyó a una de sus campañas electorales.

Benge, el mes pasado emitió un comunicado negando actos ilícitos. Y su abogada, Pauline Hardin, dijo: "ustedes deberían tener cuidado sobre como describen esa conversación mencionada en los documentos" de la Fiscalía.

El documento también cita una conversación en la que Bodenheimer le dijo a Benge que Demma, debido a sus conexiones con "un hombre de negocios de Nueva Orleans" podía ayudarle a pagar la deuda de su campaña.

Los eventos descritos en el documento, combinados con entrevistas a fuentes cercanas a la investigación, sugieren que el hombre de negocios es el multimillonario restaurantero Al Copeland, un amigo de Demma, que en ese entonces tenía una demanda por custodia de un menor en la corte de Bodenheimer. Copeland ha negado haber violado la ley y su abogado dijo que Copeland contribuyó a la campaña de Benge antes de que ocurrieran las conversaciones entre Benge y Bodenheimer.

Mentiras nada más

Además de la información sobre Benge, las autoridades federales dijeron en el documento de evidencia contra Demma que Trentacoste estaba mintiendo cuando testificó en la corte.

Abogados de la Fiscalía indican que si Demma hubiera ido a juicio sobre las acusaciones federales que enfrenta ahora, Trentacoste estaba listo para testificar que él sabía que la historia de su primo, sobre cómo se dañó el diente, era falsa.

Él dijo a los investigadores que Demma no dijo que la lesión del diente estaba relacionada al choque hasta un año después que su carro se estrellara con el Cadillac.

La Fiscalía no ha acusado oficialmente a Trentacoste y declinó comentar si el dentista será acusado o si le prometieron inmunidad a cambio de su cooperación. El abogado de Trentacoste, Mike McCollister, declino comentarios. Y en cuanto a Venezia, la Fiscalía dice que él "preparó" a Trentacoste en al menos tres ocasiones para testificar que los problemas dentales de Demma fueron causados por el choque.

El abogado de Venezia, Rick Simmons, dijo la semana pasada que Venezia no hizo nada incorrecto y actuó en la corte como abogado de Demma, presentando una teoría basada en lo que su cliente le contó sobre el accidente. Simmons también dijo que Venezia no sostuvo ninguna comunicación privada con Benge respecto a la demanda.

"No van a encontrar nada de eso", dijo Simmons.

Messina dijo que Demma no ha cobrado su fallo. La aseguradora State Farm ahora se está moviendo para anular la decisión de Benge.

Apelación se cae

Insatisfecho con el fallo de Benge, a finales del 2001, Demma apeló a 5to Tribunal de Apelaciones. Pero después que la investigación federal de Bodenheimer y de otros en el palacio de justicia se hizo pública en junio del 2002, Venezia le dijo a Messina que Demma estaba bajo investigación y que planeaba abandonar su apelación.

Expedientes del tribunal quinto indican que la petición de Demma fue abandonada el pasado 16 de octubre. En febrero, los fiscales federales aceleraron su escrutinio de la demanda, requisando los expedientes del caso en el palacio de justicia de Jefferson.

Pero no fue hasta hace dos semanas, cuando Demma firmó acuerdo con la Fiscalía, que le agregaron acusaciones formales de fraude en relación a la demanda. Demma se declaró culpable el 24 de abril, admitiendo también que él conspiró con un abogado de Copeland y con Bodenheimer para manipular la disputa de Copeland en la corte de Bodenheimer. Bodenheimer y el abogado de Copeland, Bryan White, también se han declarado culpables.

Aún si la Fiscalía no agrega más cargos en relación con la demanda civil de Demma, observadores en el palacio de justicia y varias personas implicadas en la demanda, dijeron estar sorprendidas por las repercusiones de un choqucito que ocurrió hace cuatro años y medio.

"El accidente no fue gran cosa", dijo Grantz. "No tenía ninguna idea que todo esto sucedería".

© 2003, *The Times-Picayune*. Todos los derechos reservados.

Reforma al sistema de fianzas se queda corta

Por Manuel Torres
East Jefferson Bureau
Viernes, 20 de Junio, 2003

Con un juez declarándose culpable de corrupción, una compañía de fianzas bajo investigación y el FBI examinando las prácticas del palacio de justicia en Jefferson Parish, el clima parecía perfecto para reformas cuando la sesión legislativa comenzó el 31 de Marzo.

Así pensó el senador estatal Art Lentini, Republicano de Kenner, quien introdujo la mitad de las 22 propuestas de ley en esta sesión relacionadas con el sistema de fianzas, la mayoría diseñadas para limpiar la industria.

Pero con la sesión acercándose a su cierre el lunes, solamente cuatro de las propuestas se han convertido en ley o están cerca de ser aprobadas. Las otras 18, incluyendo una ley que autoriza a Jefferson para crear su propio sistema de fianzas, han sido rechazadas o están en un limbo legislativo, aplastadas bajo el intenso cabildeo de las compañías de fianza en Jefferson y Orleans, a pesar que varias de las propuestas fueron creadas con ayuda de la Asociación de Compañías de Fianza de Louisiana.

"Fue más una masacre que un asesinato", dijo Lentini el jueves. "El poder de los agentes de fianzas es muy fuerte aquí."

Cuando la sesión legislativa comenzó, Lentini y cuatro otros diputados sometieron propuestas para reducir prácticas abusivas y restringir licencias a agentes de fianzas. Sus esfuerzos comenzaron después de varios meses de revelaciones sobre los procedimientos de la compañía Bail Bonds Unlimited, la que hasta hace poco mantenía un monopolio en el negocio de fianzas en la cárcel de Jefferson en Gretna.

Como parte de una investigación revelada el 6 de junio del 2002, las autoridades federales han asegurado declaraciones culpables del juez Ronald Bodenheimer y cinco otras personas, y han dejado claro que la amplia investigación comenzó con el interés del gobierno en Bail Bonds Unlimited y su principal propietario, Louis Marcotte III. Marcotte no ha sido acusado y ha negado haber violado las leyes.

Tres leyes enviadas al gobernador

De todas las propuestas de ley, sólo tres han alcanzado el escritorio del Gobernador Mike Foster, incluyendo la propuesta 581 del senado, sometida por Lentini.

La ley prohíbe que agentes de fianzas hagan pagos, ofrezcan rebajas o prometan cualquier cosa de valor a carceleros, oficiales de la policía, abogados, empleados públicos u otros funcionarios relacionados con el proceso de fianzas. Quienes violen la ley enfrentaran sentencias de hasta cinco años en prisión y \$10,000 en multas.

Otra propuesta de Lentini, la SB 567, prevendría que agentes de fianzas regresen a la cárcel a clientes que no paguen el costo de su fianza. La ley probablemente será aprobada antes que la sesión termine, dijeron Lentini y David Tatman, representante de la asociación de agentes de fianzas.

"Pensamos que esas dos leyes son las más importantes de las que propusimos", dijo Tatman. Tatman dijo que las otras propuestas, que buscan resolver difíciles temas de como el estado regula a la industria, se perdieron entre las miles de propuestas de ley introducidas en esta sesión.

Pero Lentini dijo que varias propuestas encontraron enemigos entre las compañías de fianza de Jefferson y Orleans a pesar del apoyo de la asociación. Otras propuestas, como que dejaría a Jefferson crear su propio sistema de fianzas, recibieron ataques incluso de parte de la asociación.

Incluso agentes de fianzas que han atacado a Bail Bonds Unlimited se opusieron a muchas de las propuestas de ley. Stephen Donnes, ex ejecutivo de Bail Bonds Unlimited y ahora un crítico de Marcotte, dijo que una de las propuesta era tan obtusa que habría requerido licencias incluso para quienes simplemente contestan los teléfonos en las compañías en fianzas.

"Necesitamos cambios y esta legislación necesita ser trabajada, pero no de forma precipitada", dijo Donnes.

Más honorarios aprobados

En la inundación de propuestas relacionadas con las fianzas, una ley poco mencionada encontró suficiente viento para navegar a través de la legislatura. La propuesta de ley 1118, del representante Joé Toomy, Republicano de Gretna, fue aprobada con poca discusión, agregando un honorario administrativo de \$15 por cada fianza emitida en Louisiana.

La nueva tarifa, propuesta por la Asociación de Fiscales de Distrito de Louisiana, generará \$2.2 millones anualmente, la mayoría para las fiscalías, dijo Toomy. El honorario será rembolsado si un acusado es declarado inocente.

Tatman y Donnes atacaron la nueva tarifa. A través del estado, personas acusadas ya pagan \$15 por cada fianza a los sherifs, además del dos por ciento de la cantidad de la fianza a varias agencias de justicia. En Jefferson, el porcentaje es dos y medio por ciento. Para la gente con fianzas entre \$500 y \$1,000, los honorarios pagados a agencias públicas casi igualan el 10 por ciento que los acusados deben pagar a las compañías de fianza, dijo Donnes.

"Esta gente que es acusada de cometer crímenes ya está pagando en abundancia", dijo Tatman.

A pesar de las derrotas, los partidarios de las reformas en la industria están prometiendo que regresarán a la legislatura. Tatman dijo que el año próximo la asociación reintroducirá

propuestas que fallaron esta vez. Lentini es también optimista que a medida que la investigación federal en la industria exponga más defectos, los chances para aprobar reformas mejorarán.

"Va a tomar algunas sesiones legislativas y varios escándalos para que sea bastante incómodo votar contra estas reformas", dijo Lentini.

© 2003, *The Times-Picayune*. Todos los derechos reservados.



UCA
Universidad
Centroamericana



2012103172

Joaquín Tórrez A.
joaquin@ns.uca.edu.ni
Coordinador de Maestría

Facultad de Humanidades y Comunicación
Msc. Martha Violeta Trujillo Delgado
Coordinación de Posgrado y Formación Continua.
e-mail: mvioleta@ns.uca.edu.ni / Tel.: 2278 3923/5 Ext.: 1289- 1078